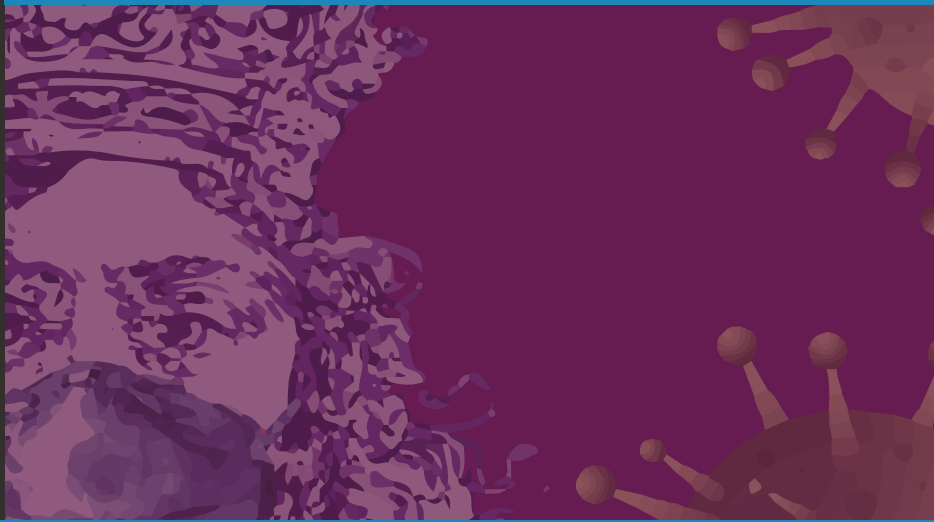




Serie Estado, políticas públicas y ciudadanía

ESTADOS ALTERADOS

RECONFIGURACIONES ESTATALES, LUCHAS POLÍTICAS Y CRISIS ORGÁNICA EN TIEMPOS DE PANDEMIA

Carolina Bautista
Anahí Durand
Hernán Ouviña
(Editorxs)

ESTADOS ALTERADOS

 Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe
Facultad de Ciencias Sociales | Universidad de Buenos Aires

IEALC



CLACSO

Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales
Conselho Latino-americano
de Ciências Sociais

MUCHOS **MUNDOS**
ediciones 

Bautista, Carolina

Estados Alterados : reconfiguraciones estatales, luchas políticas y crisis orgánica en tiempos de pandemia / Carolina Bautista ; Anahí Durand ; Hernán Darío Ouviaña ; compilado por Carolina Bautista ; Anahí Durand ; Hernán Darío Ouviaña. - 1a ed. - Lanús : Hernán Darío Ouviaña ; Ciudad Autónoma de Buenos Aires : CLACSO ; Muchos Mundos Ediciones ; Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe-IEALC, 2020.

Libro digital, PDF

Archivo Digital: descarga y online

ISBN 978-987-86-8011-8

1. Estado. 2. Lucha Política. 3. Lucha de Clases. I. Durand, Anahí.

II. Ouviaña, Hernán Darío. III. Título.

CDD 320.101

Imagen de arte de tapa: Esteban Calderón y Milton Piñeros



Copyleft



Esta edición se realiza bajo la licencia de uso compartido o Creative Commons.

Está permitida la copia, distribución, exhibición y utilización de la obra bajo las siguientes condiciones:



Atribución: se debe mencionar la fuente (títulos de la obra, autores, editorial y año)



No comercial: se permite la utilización de ésta obra con fines no comerciales.



Mantener estas condiciones para obras derivadas: sólo está autorizado el uso parcial o total de esta obra para la creación de obras derivadas siempre que éstas condiciones de licencia se mantengan para la obra resultante.

Colección Grupos de Trabajo

ESTADOS ALTERADOS

**Reconfiguraciones estatales,
luchas políticas y crisis orgánica
en tiempos de pandemia**

Grupo de Trabajo Estados en Disputa

**Carolina Bautista, Anahí Durand
y Hernán Ouviña**
(Editorxs)



CLACSO

Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales
Conselho Latino-americano
de Ciências Sociais

Colección Grupos de Trabajo

Director de la colección - Pablo Vommaro

CLACSO - Secretaría Ejecutiva

Karin Batthyány - Secretaria Ejecutiva

Nicolás Arata - Director de Formación y Producción Editorial

Equipo Editorial

María Fernanda Pampín - Directora Adjunta de Publicaciones

Lucas Sablich - Coordinador Editorial

María Leguizamón - Gestión Editorial

Nicolás Sticotti - Fondo Editorial

Equipo

Rodolfo Gómez, Giovanni Daza, Teresa Arteaga, Tomás Bontempo, Natalia Gianatelli y Cecilia Gofman



LIBRERÍA LATINOAMERICANA Y CARIBEÑA DE CIENCIAS SOCIALES
CONOCIMIENTO ABIERTO, CONOCIMIENTO LIBRE

Los libros de CLACSO pueden descargarse libremente en formato digital o adquirirse en versión impresa desde cualquier lugar del mundo ingresando a www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana

No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su almacenamiento en un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio electrónico, mecánico, fotocopia u otros métodos, sin el permiso previo del editor.

La responsabilidad por las opiniones expresadas en los libros, artículos, estudios y otras colaboraciones incumbe exclusivamente a los autores firmantes, y su publicación no necesariamente refleja los puntos de vista de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO.

CLACSO

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales - Conselho Latino-americano de Ciências Sociais

Estados Unidos 1168 | C1023AAB Ciudad de Buenos Aires | Argentina

Tel [54 11] 4304 9145 | Fax [54 11] 4305 0875 | clacso@clacsoinst.edu.ar | www.clacso.org

Muchos Mundos Ediciones.

Instagram: @Muchosmundos_ediciones | **FB:** Muchos Mundos | **Mail:** muchosmundos.ediciones@gmail.com

Web: <https://muchosmundosediciones.wordpress.com/>

IEALC

Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe

Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Sociales | Marcelo T. de Alvear 2230, C1122AAJ
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

www.iealc.sociales.uba.ar.org | iealc@sociales.uba.ar

Mabel Thwaites Rey Prólogo	9
Carolina Bautista, Anahí Durand y Hernán Ouviaña Presentación	17
Primera Parte-Casos Nacionales	
Henry Renna y Valentina Rossi Volcán Chile: rebelión de Octubre, Covid-19 y lucha popular	23
Anahí Durand Guevara ¿Cerrando un ciclo? Crisis del Estado neoliberal, pandemia y sociedad en Perú	33
Josefina Torres Jiménez Ecuador: el miedo y la represión como presente y futuro inmediato de nuestras convivencias sociales y políticas	47
Luisa Natalia Caruso y Miguel Ángel Beltrán Villegas Estado, violencia y protesta en Colombia en tiempos de pandemia: entre la profundización del modelo neoliberal y la disputa de la hegemonía política	61
Julieta Paula Mellano y Magdiel Sánchez Quiroz ¿México ante el fin del neoliberalismo? Crisis, tensiones y reformulaciones de la dominación en el escenario pandémico	83
Camilo Gauto Reforma del Estado y Nueva Gobernanza público-privada. Claves para pensar escenarios post-pandemia en Paraguay	99
Jorge Viaña Bolivia: la contrarrevolución de noviembre y la ineficacia de la revolución	115
Islanda Micherline Aduel Haití, frente a una decadencia que mata	135
Fabio Luis Barbosa dos Santos Bolsonaro en la pandemia: de la revolución al lulismo invertido	141
Maíra Machado Bichir y Victoria Darling Brasil en la era Bolsonaro: el desborde de la política	157

Rodolfo Gómez

Pandemia y Estados capitalistas latinoamericanos
“de nuevo tipo”.

Algunas reflexiones a partir del caso argentino |179

Mariana Giarretto

La criminalización como condición de la
desaparición forzada de personas en el
contexto de pandemia en la Argentina

|197

Segunda Parte - Tendencias regionales y análisis teóricos

Sandra Carolina Bautista, Milton Piñeros Fuentes y Franco Rossi

Tiempo de pandemia en América Latina:
crisis social y autoritarismo

|213

Hernán Ouviaña

El Estado y la reactivación del Ciclo de Impugnación
al Neoliberalismo en América Latina (2019-2020)

|261

Lucio Oliver

En tiempos de pandemia: la crisis actual del Estado
y la disputa por la hegemonía civil en América Latina

|287

José Francisco Puella Socarrás

Ni condena escatológica ni venganza panteísta.

El Estado capitalista al desnudo en los tiempos del coronavirus

|297

Dario Clemente y Marina Wertheimer

Entre la crisis y un nuevo inicio.

La lógica del mundo pandémico y las reconfiguraciones
del Estado neoliberal periférico en América Latina

|311

Javier Moreira Slepoy

El COVID-19 y un nuevo protagonismo estatal

|325

Jymy Forero Hidalgo

Capitalismo y pandemia: tendencias, características e impactos.

Entre la recomposición del capital y la reconfiguración
de los proyectos populares

|337

**Franklin Ramírez Gallegos, Daniel Vizuete Sandoval
y Alfonso Bermejo**

Pandemia y Estado de padecimiento en los Andes.

Ecuador-Perú: miradas cruzadas

|353

PRÓLOGO

Mabel Thwaites Rey¹

El *annus horribilis* 2020 deja un mundo arrasado por la pandemia del Covid-19 y, expuestas de modo descarnado, todas las fragilidades, miserias y profundas desigualdades acumuladas por un sistema socioeconómico que deteriora la naturaleza, corroe la salud y desprotege a los sectores más vulnerables de la población de todo el planeta, cuya pobreza se profundiza sin cesar. Aunque desde hace muchos años era previsible un cataclismo semejante como consecuencia del cambio climático y el calentamiento global, la catástrofe irrumpió a través de un virus que se expandió por el mundo a la velocidad de los aviones. Este peligro, sin embargo, ya había sido advertido por los científicos, porque durante los últimos cuarenta años se produjeron diversas enfermedades ocasionadas por la transmisión vírica de especies animales salvajes al ser humano, tales como el Sida, el Ebola, el SARS, el MERS y la gripe aviar.

Todos estos males no son producto del azar, sino que deben su expansión a las condiciones de producción impuestas por el capitalismo. La industrialización de las actividades agropecuarias a gran escala de las últimas décadas viene implicando la deforestación masiva –sobre todo en el sur global–, con su impacto negativo sobre el hábitat de las especies salvajes. Desplazadas de su medio natural, son empujadas a aproximarse a los asentamientos humanos para sobrevivir, irradiando bacterias a animales domésticos y personas, lo que provoca la expansión de las nuevas enfermedades derivadas del quiebre de la biodiversidad. A su vez, la densificación de las urbanizaciones y el aumento de las aglomeraciones insalubres, sumadas a la conectividad crecientemente veloz de la población mundial –posible por el desarrollo de la aviación comercial–, favorecen el debilitamiento de la respuesta inmunitaria de las poblaciones y la multiplicación de los contagios de enfermedades desconocidas.

La globalización acelerada de los últimos 40 años implicó una interconexión exponencial de la producción y el consumo, que se rea-

1 Profesora titular de las materias Sociología Política y Administración y Políticas Públicas y Directora del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe de la Universidad de Buenos Aires.

lizan según patrones mundiales y en función de nuevas estrategias de división internacional del trabajo. Insumos y mercancías viajan de un lado al otro del planeta en complejas cadenas productivas, que desconectan a los productores directos de los consumidores de cada territorio estatal nacional. Porque la globalización neoliberal, que domina el mundo desde los años ochenta, asentó las bases de acumulación del capital en localizar segmentos productivos en territorios con mayores ventajas en términos laborales, impositivos y medioambientales. China creció en este período como proveedor de numerosos bienes a costos imbatibles para las industrias del resto del mundo, por lo que al aparecer el Covid-19 en la ciudad industrial de Wuhan, el impacto internacional fue inmediato. El cierre de regiones enteras para evitar la propagación del virus trastocó las cadenas de suministros globalizadas y paralizó el comercio mundial, que se derrumbó en pocas semanas. Los esquemas pensados para la máxima rentabilidad se toparon con la imposibilidad de la conexión veloz en base a la cual se diseñaron y entraron en colapso.

Pero más aún. La pandemia dejó expuesta la fragilidad extrema de los sistemas sociales que deben garantizar alimento y salud a sus poblaciones. Precisamente, la falta de planificación y la subinversión en la sanidad pública se manifestó como un rasgo distintivo en la inmensa mayoría de los estados nacionales, incluidos los más desarrollados. El desborde de los hospitales en ciudades prósperas –como se vio en Europa y EEUU–, las feroces disputas al pie de aviones entre países –e incluso regiones de una misma nación– por el acceso a respiradores y material de protección sanitaria, la insuficiencia de medicinas e insumos básicos pusieron de manifiesto la total desconexión entre el mercado y las necesidades vitales de los pueblos.

El desconcierto ante el avance del virus y la necesidad de contenerlo para preservar vidas humanas chocaron de lleno con el imperativo sistémico de continuar con la generación de capital, que impone la disposición de los cuerpos en los lugares de trabajo. De inmediato se hizo evidente la contradicción entre disponer confinamientos para proteger la salud y permitir la circulación plena de bienes y servicios para sostener la acumulación. En cada país del mundo se debatieron y aplicaron estrategias diversas, sopesando tanto los recursos disponibles para enfrentar la pandemia, como los costos de detener total o parcialmente la maquinaria productiva. Las clases dominantes presionaron desde un inicio para no cerrar o reabrir la economía, desconsiderando las amenazas a la vida humana y al bienestar que esto representa. Y si bien todos los Estados tuvieron que adoptar medidas de contención del virus que afectaron la actividad económica, algunos gobiernos minimizaron los riesgos sanitarios para preservar la eco-

nomía, lo que, a la postre, les supuso mayores tasas de enfermedad y mortalidad sin por ello frenar la caída de su producto bruto interno. Solo algunos países se propusieron eliminar el virus, cerrando drásticamente fronteras y actividades con cuarentenas estrictas, mientras la mayoría optó por “aplanar la curva” de contagios para intentar que no se saturaran sus frágiles sistemas de salud. Hubo quienes hicieron la apuesta temeraria de permitir los contagios para lograr la inalcanzable inmunidad de rebaño, provocando millares de muertes evitables. Las derechas sociales y políticas, en todos los casos, fogonearon contra la restricción a las libertades individuales que suponen las cuarentenas, el distanciamiento social y el uso de elementos de protección en lugares públicos. Y en el magma de respuestas caóticas y argumentos exóticos, los grupos terraplanistas, anti-vacunas y conspiranoicos ganaron un espacio mediático inusitado, llamando a marchas y concentraciones de protesta y a desafiar las medidas sanitarias.

Lo cierto es que los Estados capitalistas se vieron enfrentados a su dilema constitutivo: preservar el funcionamiento del sistema al mismo tiempo que preservar a las personas para que la rueda del capital siga girando. Como lo explica la Teoría de la Reproducción Social, la producción de fuerza de trabajo es inseparable de la reproducción social de los seres humanos, que no solo implica costos para el capital, sino que en gran parte se realiza por fuera de su órbita directa. Es decir, se realiza en las casas, en las comunidades y en instituciones públicas, que se han visto especialmente demandadas y recargadas en las tareas de cuidado durante la pandemia. Alimentar, asistir y atender a niños y niñas, personas enfermas o ancianas se volvió particularmente exigente en tiempos de confinamiento total y parcial y fueron las mujeres las que, por regla, afrontaron la tarea. La pandemia, de este modo, reforzó los patrones patriarcales y agregó tensiones a las complejas convivencias preexistentes en muchos hogares, incluida la violencia intrafamiliar.

A su vez, las restricciones a la circulación marcaron diferencias notables entre trabajadoras y trabajadores que pudieron cumplir sus obligaciones a distancia y quedarse en sus casas –con mayor o menor confort- y los que tuvieron que salir a trabajar porque sus ocupaciones son consideradas esenciales. Al frente de este grupo están quienes limpian, cocinan y atienden las necesidades físicas y mentales de otras personas –dentro y fuera de las instituciones de salud-, seguidos por quienes trabajan en los sectores de alimentación, higiene urbana, transporte y seguridad pública. La pandemia puso en evidencia que estos trabajos son los que garantizan la vida y no pueden suspenderse, pero, paradójicamente, son los de menor prestigio social, peores pagos y más precarios. La mayoría de ellos son realizados por muje-

res, inmigrantes y personas racializadas, que en estos días asumieron grandes riesgos para su salud y la de sus familias para que el resto de la sociedad siguiera funcionando a resguardo. Estas personas esenciales no lo son por elección libre ni vocación heroica, sino porque sus condiciones de subsistencia precaria las obliga a salir a ganar el sustento diario en ocupaciones riesgosas, ya que carecen de una protección social que garantice su seguridad y las clases dominantes se encargaron expresamente de que así fuera y siguiera siendo.

Un aspecto destacable es la asombrosa velocidad en el desarrollo de las vacunas COVID-19, fruto de la ciencia, la cooperación humanista desinteresada de miles de investigadores en todo el mundo y de cierta planificación económica. En apenas nueve meses desde el descubrimiento de la enfermedad, son varias las vacunas candidatas a inocular exitosamente contra el virus. Todas ellas son el resultado de años de financiación del sector público y, en muchos casos, de la investigación realizada por laboratorios estatales o universidades públicas durante décadas, más los refuerzos económicos extraordinarios de los gobiernos para avanzar sin obstáculos en las costosas etapas necesarias para aprobar las vacunas. Pero más allá de lo satisfactorio de este logro -indudablemente colectivo como todo avance científico-, la irracionalidad, ineficiencia e injusticia del capitalismo aparece con toda crudeza en la disputa entre los laboratorios y su afán de lucro desmedido, y en la competencia feroz entre los Estados para hacerse de las dosis necesarias para su población. Los países y regiones internas más ricas ya se lanzaron a la frenética carrera de obtener todas las dosis posibles, a costa de los menos favorecidos, con independencia de la necesidad real y urgente de sus poblaciones. Sin embargo, como sostienen los expertos, para que el virus se controle es preciso que se vacune toda la población vulnerable del planeta lo más rápido posible, lo que supondría un reparto equitativo, racional y concertado de las dosis producidas. Pero el desajuste entre la necesidad y el suministro que se augura, por el hecho de distribuir las vacunas en función de la riqueza para adquirirlas y no de los riesgos efectivos, prolongará innecesaria e irracionalmente la duración de la pandemia que nos amenaza a todos.

A nuestra región, la pandemia la tomó en un momento de especial fragilidad estructural y convulsión política. Es un dato que América Latina obtuvo, durante la primera década del Siglo XXI, beneficios de la explotación de sus bienes naturales y que, sobre todo los gobiernos incluidos en el Ciclo de Impugnación al Neoliberalismo (CINAL) aprovecharon la circunstancia para apropiarse de una porción de la renta y destinarla a financiar políticas distributivas. Sin embargo, no quisieron, no supieron o no pudieron usar esa ventaja para desactivar

la matriz productiva neoliberal -dominante desde los años noventa-, entre cuyas características centrales están el predominio de la financiarización globalizada y la intensificación de la explotación de bienes naturales. Las políticas económicas aseguraron las ventajas de corto plazo del ciclo, lo que redundó en que se acentuaran las tendencias a la reprimarización y el extractivismo preexistentes. Esta bonanza brindó la posibilidad de eludir, por un tiempo, el conflicto abierto con las clases propietarias mientras se incluía, con políticas sociales, a los sectores más desfavorecidos. A la vez, sirvió para profundizar los rasgos estructurales y desplazó la posibilidad de encarar modelos alternativos.

La reversión del ciclo de auge económico, como consecuencia del impacto de la crisis de 2008 en la economía mundial, empezó a hacerse sentir en la región en la segunda década del Siglo XXI, generando desestabilización política y agitación social. A partir de 2015, las derechas sociales y políticas que habían resistido, con mayor o menor belicosidad, tanto las impugnaciones que les planteaban los movimientos sociales como el despliegue de medidas de carácter popular, lograron reagruparse y retomar la conducción estatal, en un clima de revancha social y regresividad económica y sociocultural muy acentuada. Se abrió así un período de confrontación y de disputa hegemónica en gran parte de los países de la región.

Si el CINAL tuvo desde 2015 un reflujo gubernamental en Brasil, Ecuador y Argentina, más el golpe en Bolivia en 2019, ese mismo año la región comenzó a sacudirse con nuevos alzamientos populares que la pandemia no logró desactivar y que muestran una renovada vitalidad impugnadora del credo neoliberal. En Haití, Colombia, Ecuador, Chile y Perú, las resistencias de los pueblos en lucha alcanzaron nuevos niveles de radicalidad y conciencia. Mientras en México (2018) y Argentina (2019) se lograba derrotar electoralmente a las derechas cerriles, la resistencia en Bolivia hizo posible el desalojo del gobierno usurpador en 2020 -mediante elecciones tan limpias como contundentes- y las protestas populares continuaron en el resto de los países durante este *annus horribilis*. La marea verde feminista, que empezó a crecer exponencialmente a partir de 2018, ocupó un lugar central en varios países de la región para empujar las luchas anti-patriarcales de corte anti-capitalista, especialmente en Argentina y Chile. Las campañas por el aborto legal, seguro y gratuito y contra todo tipo de violencia machista se fundieron con los reclamos por políticas de cuidado de los feminismos populares en expansión por toda la región. Los Estados se han visto así interpelados en múltiples frentes y con grados crecientes de organización, conciencia y radicalidad.

Como se puede leer en las páginas que siguen, la pandemia se

desplegó con toda su crudeza en la región, poniendo al rojo vivo las laceraciones de las sociedades más desiguales del planeta. Las respuestas de los gobiernos al desafío del Covid-19, variaron desde el negacionismo criminal de Bolsonaro en Brasil, la militarización del control en Perú, la ambigüedad de México, el titubeo zizaguante de Chile, el desmanejo y represión de Ecuador, el confinamiento temprano seguido de la claudicación ante la oposición derechista en Argentina, entre otras. Las ayudas económicas variaron de acuerdo a la capacidad de las arcas públicas de cada Estado para financiarlas y de los actores políticos y sociales para arrancarlas, pero resultaron insuficientes para detener la profundización de la pobreza y la desigualdad. La férrea oposición de las grandes fortunas a hacer contribuciones extraordinarias para paliar los estragos de la pandemia, habla no solo de la magnitud de la injusticia social de nuestras sociedades sino de la carencia de rumbo y cortedad de miras de las burguesías que en ellas se enseñorean. También la oposición a las medidas sanitarias por parte de segmentos belicosos de la población con gran amplificación en los grandes medios, encabezados por distintas variantes derechistas, libertarios, terraplanistas, anti-vacunas y conspiranoicos de distinta laya, completan un cuadro preocupante de confrontación.

Con claroscuros y matices diferenciados, América Latina sigue siendo un espacio abigarrado de experiencias y posibilidades en disputa, en el que no parece haber lugar para la rendición. Lo que vendrá tras esta crisis sanitaria, económica y social será el resultado, seguramente, de las contradicciones que se despliegan cada día, en cada lucha, en cada rebeldía, en cada decisión de resistir, en cada voluntad de avanzar y no dejarse vencer en un mundo en el que el destino anti-capitalista parece, cada vez más, el único posible y necesario de construir.

PRESENTACIÓN

Sandra Carolina Bautista,
Anahí Durand y Hernán Ouviaña

En lo que va del siglo XXI, nuestro continente ha sido territorio emblemático de importantes luchas y disputas en torno al Estado. Este escenario de enorme experimentación política ha implicado la irrupción y el fortalecimiento de una constelación de organizaciones populares y movimientos sociales que, con matices y contrastes, abarcaron distintos vaivenes y temporalidades, incluyendo apuestas gubernamentales que aspiraron -con diferentes niveles de radicalidad y vocación de ruptura- a tomar distancia del ideario clásico neoliberal. No obstante, a partir del 2015 se constata un agotamiento y reversión de estos procesos, en un escenario signado por los efectos de la crisis económica global de 2008, la baja en los precios de los commodities, el reflujo de ciertas luchas emblemáticas gestadas desde abajo y un declive del conjunto de gobiernos “progresistas”, producto de debilidades y limitaciones endógenas combinadas con los cambios y factores globales mencionados. Junto a ello, asistimos al crecimiento de opciones políticas de derecha con un claro corte autoritario y conservador, disputando el respaldo en los sectores populares de la región. Identificar si todo lo anterior remite al cierre definitivo o más bien una nueva fase de lo que desde el Grupo de Trabajo de CLACSO *Estados en disputa* hemos caracterizado como Ciclo de Impugnación al Neoliberalismo en América Latina (CINAL) es todavía un debate abierto.

En los países donde gobernaron los denominados “progresismos”, ya sea por su derrota en las urnas, la pérdida de legitimidad o producto de prácticas neogolpistas, gran parte de estos proyectos fueron desplazados del poder estatal los últimos años, al compás de la creciente gravitación de coaliciones y figuras de ultraderecha, que incluso lograron acceder al gobierno en varias latitudes de continente. Pero esta coyuntura tuvo también como uno de sus rasgos distintivos la reactivación de las luchas antineoliberales, con atisbos de resistencia anticapitalista, antipatriarcal y anticolonial, que adquirieron un punto álgido de confrontación durante 2019 y 2020, a través de rebeliones callejeras, huelgas de masas y levantamientos populares, que tienen a la estatalidad como un territorio privilegiado de disputa y

tensión, bajo un mismo horizonte emancipatorio y de democratización integral de las sociedades.

En un plano más general, estas experiencias se inscriben y pueden ser consideradas como parte de un ciclo de reanudamiento y disputa hegemónica frente a la contraofensiva de un neoliberalismo “tardío” y de coaliciones de corte conservador en América Latina, a la vez que delinean un posible momento transicional en la estatalidad latinoamericana, a raíz de la crisis orgánica, y la pérdida de legitimidad de los partidos tradicionales, que aún no logra ser suturada. En este marco, la creación de plataformas sociopolíticas amplias y el surgimiento de sujetos/as que trascienden la dimensión estrictamente sectorial o corporativa, cobran creciente importancia para la construcción de alternativas políticas de carácter posneoliberal que enfrentan también la constante precarización de la vida.

Antes de la pandemia la región se debatía entre el estancamiento económico, sendas crisis políticas en buena parte de los gobiernos y revueltas populares contra la profundización del neoliberalismo, lo extendido de la corrupción y por la ampliación de derechos desde las luchas feministas, indígenas, estudiantiles, populares y socioambientales. Con la llegada del Covid-19 el panorama se ha complejizado, pues la pandemia global ha visibilizado, entre otras cuestiones candentes de la realidad latinoamericana, la crudeza de la violencia de género, los altos niveles de pobreza y desigualdad, el avasallamiento de derechos elementales y el grado de vulnerabilidad extremo al que está siendo sometida la población, debido a la superexplotación y flexibilización laboral, la intensificación del extractivismo y la profunda endeblez de los sistemas de salud y seguridad social.

De ahí que resulte pertinente retomar uno de los lineamientos principales de nuestro Grupo de Trabajo: pensar al Estado latinoamericano en medio de una de las crisis capitalistas más profundas desde los años treinta del pasado siglo, colocando a prueba nuestras herramientas conceptuales para plantear inevitables preguntas sobre los límites y posibilidades de las transformaciones radicales en los distintos espacios y realidades de la región. Más aún, teniendo en cuenta que América Latina constituye hoy el epicentro de la pandemia a nivel global, lo que torna sumamente inestable y contradictoria a la coyuntura por la transita el continente. Si bien las cuarentenas impuestas en gran parte de los países para mitigar los efectos del coronavirus irrumpieron conteniendo las acciones de calle, no lograron detener las protestas ni las demandas levantadas previamente, tal como se ha evidenciado en Chile con la exigencia de cambio constitucional y la

desprivatización de bienes públicos, en Ecuador ante el avance de la crisis económica, en Colombia frente a la constante represión paramilitar y el autoritarismo estatal, y más recientemente en Perú contra la corrupción y desatención de la clase política gobernante.

Ante tales complejidades, a lo largo del 2020, desde el Grupo de Trabajo realizamos un conjunto de conversatorios y charlas abiertas que buscaron propiciar el debate colectivo y un espacio de diálogo e intercambio transfronterizo, sobre las posibilidades de reconfiguración de la estatalidad en este momento histórico tan incierto que vivimos en América Latina, en particular desde la irrupción de la pandemia a comienzos de año, atendiendo al mismo tiempo a los escenarios y tendencias que se avizoran como posibles salidas de esta crisis.

La presente compilación se propone sistematizar las discusiones generadas en este marco, así como relevar las diferentes lecturas e interpretaciones que son producto de estudios e investigaciones a las que nos abocamos durante 2020 de manera colaborativa quienes integramos el GT de CLACSO. En su primera parte, se analizan doce casos nacionales, desde Haití hasta Chile, poniendo el foco en la coyuntura reciente cimentada en las especificidades de las crisis locales de la última década y los principales nudos problemáticos que afectan y condicionan al Estado y a las luchas políticas al interior de cada sociedad, aunque sin desatender aquellas determinaciones de índole regional y global. A su vez, la segunda parte está abocada a brindar una mirada más amplia en ocho estudios que abarcan o bien la región como totalidad, desarrollan casos comparados o proponen reflexiones teórico-políticas inspiradas en la compleja realidad latinoamericana enmarcada en la crisis de orden civilizatorio por la que atravesamos en el planeta.

Con esta publicación buscamos realizar un aporte al rico debate que se desarrolla en América Latina sobre el devenir actual y las perspectivas de corto y mediano plazo, no sólo desde espacios académicos sino en la gran variedad de procesos sociopolíticos que continúan en el empeño de transformar las realidades desde la lucha colectiva en clave emancipatoria. Con sus luces y sus sombras, la crisis multidimensional que hemos vivido con fuerza a lo largo del 2020, nos ha mostrado que en Latinoamérica las diversas aristas del complejo panorama -sanitaria, social, económica, ambiental, psicoafectiva, de relaciones de clase, raza y género, entre otras-, continúan teniendo en lo estatal un eje estructurador y explicativo fundamental, evidenciando una vez más que habitamos una región en la que los Estados siguen siendo territorios en disputa.

PRIMERA PARTE

CASOS NACIONALES

VOLCÁN CHILE: REBELIÓN DE OCTUBRE, COVID-19 Y LUCHA POPULAR

Henry Renna¹ y Valentina Rossi²

INTRODUCCIÓN

Chile es un país volcánico. En las últimas décadas se ha registrado una creciente actividad en el corazón de sus principales cráteres, con un aumento en la temperatura y potencia, en todas sus regiones. A finales del año 2019 los distintos volcanes que atraviesan su territorio se activaron para dar vida a una de las erupciones más grandes de las últimas décadas: la Rebelión de Octubre.

A lo largo de toda la cordillera de los Andes, el frío de sus picos y paisajes transmutaron por lo caliente y volátil del magma en el volcán. Esa nieve por fuera que contiene, congela y solidifica el orden, comenzó a derretirse ante el calor interno: un corazón reprimido pero rebelde que estalló de forma imprevisible. Siguiendo las tesis de la Teoría Volcánica de John Holloway (2000), si lo que está afuera es el poder, lo que está adentro es anti-poder, un magma compuesto por las luchas de quienes están reprimidos-as y también por las peleas de lo que está oprimido.

Nos atrevemos a decir que lo que sucedió a partir del 18 de Octubre en Chile, puede clasificarse como una erupción volcánica, la ruptura completa y absoluta del pacto social dominante. A diferencia de otros momentos de rebelión, destacamos que en esta ocasión el *qué* y el *quiénes* se juntaron inorgánicamente, haciendo posible una erupción magmática de escala nacional y de una profundidad y densidad nunca registrada. Si bien en otros momentos recientes (1998, 2001, 2006, 2011, 2015, 2018) el territorio ha estado a punto de desbordar, no logró devenir en una explosión de estas dimensiones, ya sea por límites propios de la potencia volcánica o por la contención de los

1 Politólogo, Educador Popular, estudiante Doctorado en Ciencias Sociales, UBA.

2 Antropóloga, Mediadora Intercultural, estudiante Doctorado en Ciencias Sociales, UBA.

de arriba. No obstante, estos movimientos, sí generaron grietas en el territorio que horadaron a la erupción. La primera tesis del artículo es que *la rebelión de Octubre de 2019 es una erupción inédita en la geografía del poder en Chile, aunque responde a movimientos tectónicos de largo aliento*.

A principios del año 2020 y aún con la erupción en desarrollo, una ola de frío rodea al volcán y todo el planeta. Es la pandemia del COVID-19 que abrió una oportunidad a los gobernantes para confinar, vigilar y separar los elementos del magma (el *qué* del *quiénes*) buscando congelarlo nuevamente. La segunda tesis es que, *el COVID-19 es instrumentalizado por el poder para sofocar el volcán, para contener y suprimir el cuestionamiento al modelo*.

A pesar de ello, y nuevamente contra lo esperado, el volcán sigue activo. Innumerables fragmentos arrojados de su cráter comenzaron a producir nuevos fuegos en sus llanuras aledañas, y su lava creó rutas que abren otros caminos en la superficie. Si por fuera el poder está usando un innovador set de instrumentos de sometimiento y represión, por dentro, el anti-poder continúa impulsando un repertorio de acciones colectivas, de lucha, protesta y construcción popular. La tercera tesis, entonces, es que *la erupción de Octubre se mantiene viva, y el triunfo del Plebiscito de Octubre de 2020 reafirma la ruptura del pueblo con las elites*.

I

La evasión del Metro en Santiago de Chile a principios de Octubre de 2019, y la revuelta aparentemente generada por el aumento en la tarifa del transporte público bajo la consigna “¡Evadir, no pagar, otra forma de luchar!, en pocas horas, irradió e interpeló con una velocidad inusitada al grueso de las clases populares, mutando en una evasión del pacto social dominante instalado desde la Dictadura. Si bien inició como un grito de rechazo de las juventudes populares por el aumento de los treinta pesos, derivó en un *qué* más amplio y profundo: el desacato contra treinta años de neoliberalismo recargado.

Si en las movilizaciones estudiantiles de años anteriores el grito de protesta y exigencia popular era ¡Fuera el Mercado! y ¡Fin del lucro!, ahora se escuchó y leyó en cientos de calles del país ¡Abajo el Estado! y un estruendoso ¡Ya Basta!, poniendo en jaque el pacto estatal-mercantil que sostiene la hegemonía; una verdadera erupción en la geografía volcánica chilena. Aunque no podemos, y no debemos, encorsetarlo en una movilización de “izquierda”, el 18/O es claramente una muestra de cansancio, hartazgo y hostilidad de amplios sectores

de la sociedad chilena contra el orden capitalista, patriarcal y colonial impuesto por la fuerza.

Fue una insurgencia inorgánica que desbordó todas las formas de representación y mediación existentes, y que permitió que masividad y radicalidad corrieran juntas. Este carácter acéfalo y horizontal no significa que sea espontáneo, no es un evento disociado de las luchas de cientos, miles, millones de hombres y mujeres que se han comprometido en la construcción de un proyecto emancipatorio para las y los oprimidos³. La erupción, por tanto, es preciso leerla en tanto conjunción de acontecimiento y proceso, es decir, una coyuntura de rebelión total e inorgánica de la mano de tramas subterráneas y apuestas cotidianas impulsadas por diferentes actores/as que fueron ampliando el fuego interno del volcán hasta devenir, de forma inesperada y masiva, en esta erupción (Ouviaña y Renna, 2019).

Entre las luchas que confluyeron están la de las mujeres contra el sistema patriarcal, las resistencias contra el extractivismo, la privatización de los bienes comunes, la contaminación socio-ambiental y la acumulación por despojo en campos y ciudades; la histórica lucha de la nación-pueblo mapuche por territorio, autodeterminación y fin a la militarización del Wallmapu; las iniciativas y propuestas de vida digna basadas en la recuperación de derechos sociales como “NO+A-FP”; la lucha social mediante acciones callejeras, tomas de liceos, y las variadas expresiones de poder popular desarrolladas por el movimientos de pobladores/as. Estas luchas y *quienes* las alimentan son movimientos tectónicos de largo aliento, que en conjunto abonaron a la erupción de Octubre.

Por consiguiente, es en el encuentro y la interacción en la diversidad de miles de *que* (contra el neoliberalismo) y *quienes* (los múltiples rostros de sujetos/as oprimidos por este sistema de dominación) que se libera una energía revolucionaria, que da vida a un momento de destrucción-creativa: el quiebre definitivo de los subalternos con la élite nacional y, a la vez, el deseo y exigencia masiva de un proceso de refundación constituyente⁴.

3 El 18/O aunque es original, representó un encuentro histórico de un proceso de desacato de 500 años para las naciones pueblos originarios contra el genocidio colonial, de 200 años de la clase trabajadora mestiza en la búsqueda de una segunda independencia, y 50 años de lucha de los hijos e hijas rebeldes del neoliberalismo, que fueron horadando desde las periferias las bases del poder.

4 Esta lectura nos lleva a leer esta coyuntura, no como un hito, sino un proceso en tiempo largo, no es un acontecimiento limitado a una agenda propuesta desde el poder instituido sino agenda inconclusa de las clases trabajadoras, las ciudadanías y los pueblos por encontrar su libertad; ese proyecto truncado y silenciado que

II

La llegada del COVID-19, a principio de año, modificó la superficie alrededor del volcán, abriendo una oportunidad al poder para confinar, vigilar y separar los elementos del magma, buscando congelarlo. Ante el brote del contagio, registrado el 3 de marzo de 2020, las primeras medidas tomadas por el gobierno no fueron de orden sanitario sino securitario, simbolizando los fantasmas de la clase política nacional con el volcán.

Así fue como a través de la militarización, la violencia y el control sobre los territorios volcánicos se quiso controlar el *qué*, la idea-base del estallido⁵. Se observó una militarización territorial, que suspende los derechos civiles y políticos y reduce el espacio democrático de lucha y reivindicación (Galindo, 2020), la expansión de un sistema de vigilancia policial fundado sobre el temor al otro, a partir y justificado por un terror sanitario y el sueño de bio-seguridad (Agamben, 2020)⁶, y una estrategia de control cultural fundada en una pedagogía pandémica (Giroux, Rivera-Vargas y Passeron, 2020), a través de aparatos que diseminan miedo y noticias falsas. Ello fue usado para apagar el fuego de este “enemigo poderoso”⁷, que para el gobierno no es el virus, sino los pueblos con su energía volcánica.

persigue la máxima autonomía individual y social de cualquier poder, el bienestar colectivo basado en lo común y la armonía con la madre tierra. Estamos entonces no ante un hecho aislado, sino en un momento bisagra de un largo proceso de transformación socio-política, que no tuvo lugar en 1833, tampoco en 1925 y menos en 1980, y que hoy, nuevamente, encuentra espacio público y se enraíza en el sentir, hacer y pensar de las mayorías.

5 El 13 de marzo se elimina la posibilidad de reunión y de eventos públicos masivos de más de 500 personas, impidiendo marchas y concentraciones. El 19 del mismo mes se posterga el Plebiscito constituyente, planificado para el 26 de abril, al 25 de octubre. El 22 de marzo se decreta estado de excepción y toque de queda entre las 22:00 y las 05:00 de la mañana. El mismo día se despliegan 22.422 efectivos militares a la calle, para llegar, el 29 de marzo, a 74.458 entre militares, policías y agentes de investigaciones activos. El 25 de mayo se anuncia la llegada de 80 efectivos militares especializados a la macro zona sur y el refuerzo policial de toda las rutas hacia la Araucanía y el Bío-bío. El 15 de junio se extiende el estado de excepción por otros 90 días. El 2 de julio se ingresa un proyecto de ley, con suma urgencia, que amplía las facultades del Sistema Nacional de Inteligencia (acceso a datos personales, agentes encubiertos y contrainteligencia).

6 El mejor ejemplo de esto es lo que algunos han acusado como una “reconquista” o la “pacificación moderna de la Araucanía”.

7 El Presidente Sebastián Piñera ocupó la frase “Estamos en guerra contra un enemigo poderoso” el 20 de Octubre 2019, mientras Chile estaba bajo estado de excepción, toque de queda y con militares en la calle, para referirse a las movilizaciones.

A las medidas securitarias enfocadas en el *que*, se sumaron un conjunto de decisiones, aparentemente sanitarias, dirigidas a controlar el *quienes*. El gobierno tomó la decisión, el 26 de marzo, de llevar adelante una estrategia de “cuarentena selectiva y dinámica” que comenzó con el cierre de solo seis comunas, las más ricas de la Región Metropolitana, dejando expuestos al virus a la gran mayoría de los sectores populares⁸. Mas allá del evidente fracaso de esta política pública, que ha llevado a Chile a ser uno de los países con el más alto número de contagiados y muertes por millón de habitantes, se evidencia un perfeccionamiento de las tecnologías de control del Estado sobre las y los sujetos colectivos, que innova en una combinación de zonas (Lerner, 2010) y tecnologías de sacrificio de cuerpos (Federici, 2011), normalizando el hecho que amplios contingentes de la población, como migrantes, negros, indígenas, pobres, mujeres y disidencias sexuales, se vuelvan desechables-sacrificables. Las medidas ejemplifican la cultura de la muerte intrínseca al capitalismo patriarcal (Shiva, 2006), que opera por medio de una necropolítica (Mbembe, 2003) de base racista y aporofóbica que gestiona en la trama urbana la población a partir de la producción de vidas residuales (Butler, 2010).

La excepcionalidad del COVID-19 ha permitido a gobernantes neoconservadores, en Chile y toda la región, emprender una persecución contra las disidencias y el pensamiento contestatario. Esto, junto con la batería de medidas económicas propia de la ortodoxia financiera⁹, develan el neoliberalismo realmente existente: lejos de la utopía del libre mercado el Estado ha intensificado su intervención (Theodore, Peck y Brenner, 2009), pero no en su forma benefactora, sino de manera coercitiva y coactiva, funcional a las nuevas formas

8 El 16 de abril comienza la segunda ronda de cuarentena con ampliación a comunas populares y el 8 de mayo una tercera ronda con nuevas comunas, mientras otras salen o vuelven a entrar en cuarentena. Hasta reconocer su completo fracaso el 25 de mayo y el cierre de este ciclo el 16 de junio, con la renuncia del Ministro de salud Jaime Manalich, acusado de falsificación de datos de población contagiada de COVID-19.

9 El 19 marzo el Presidente Sebastián Piñera lanza el Plan Económico de Emergencia. El 24 se promulga ley de teletrabajo que establece relaciones de mutuo acuerdo. El 29 el gobierno anuncia el “bono COVID-19”, hiper focalizado en las familias vulnerables. En el mes de mayo, el día 22 se lanza una política de distribución de cajas de alimentos en alianza con las grandes cadenas de retail. El 30 el gobierno presenta el Plan de Rescate a Grandes Empresas, con referencia casi exclusiva a LATAM. El 17 de junio se conoció el intento de plan de venta del edificio corporativo de Televisión Nacional de Chile (TVN). El 5 de julio se lanza el Plan para la Clase Media, que considera créditos blandos, postergación de pago, ampliación de subsidio de arriendo y profundizado crédito bancario para educación superior.

de acumulación del capital global (Thwaites Rey, 2010). Las políticas públicas, para enfrentar tanto el 18/O como el Covid-19, demuestran que el Estado no desapareció, sino que reproduce y mantiene el orden social mediante un ataque sistemático al *que* y al *quienes* para impedir ese encuentro entre la idea y los cuerpos.

III

A pesar de todos los esfuerzos del gobierno para contener la actividad volcánica que despertó el 18/O, ésta no ha retrocedido ni social ni culturalmente; las movilizaciones masivas en plena cuarentena bajo la consigna ¡No es contra la cuarentena, es contra el hambre! y ¡Contra la Nueva Normalidad!, son ejemplos de ello¹⁰.

Se observa que innumerables fragmentos fueron arrojados desde el cráter, comenzando a producir nuevos fuegos, un insurgir colectivo que con extrema osadía hace de la conquista de las calles un laboratorio de experimentación política, que fue lentamente prefigurando modos de vida otros. La ocupación, primero de calles y andenes del metro por las juventudes del país, luego de plazas y parques por las asambleas populares, y hoy de calles y esquinas con ollas comunes, son una recreación de una territorialidad y temporalidad con sentido propio. En estos nuevos espacios se encendió una subjetivación no estatal, popular y comunitaria, que cortocircuita el orden sociopolítico asentado en la hegemonía neoliberal (Ouviaña y Renna, 2019).

A su vez, la lava creó nuevas rutas, abriendo caminos a nuevas posibilidades e impulsando una nueva cultura, hecha de relaciones más profundas, que apuntan a afirmar la importancia de una vida en dignidad que devuelva a las y los sujetos una existencia social y políticamente significativa (Agamben, 1995). Ello se hace visible en quienes ayer participaban en las Brigadas Médicas ayudando a compañeros/as de primera línea contra la violencia políticas y hoy componen las Brigadas Sanitarias Autogestionadas, que desinfectan barrios periféricos de la ciudad; los cordones territoriales de salud que ayer funcionaban

10 El lunes 9 de marzo, un día después de la masiva movilización por el Día Internacional de la Mujer, hay una Huelga General de mujeres y el 13 de marzo se concentran miles de personas en la re-bautizada Plaza Dignidad, como se hizo costumbre. El 27 de abril se desarrolla en plena pandemia una movilización contra la “nueva normalidad”, la cual proponía abrir las escuelas y los centros comerciales. Luego, el viernes 5 de mayo, en el contexto del Día Internacional del Trabajador, se lleva a cabo una nueva manifestación, y el 19 de mayo se convoca masivamente por redes sociales el “cacerolazo contra el hambre”.

para dar asistencia médica en las marchas y hoy pasan a Cordones de cuidado de vecinos y vecinas.

Estas experiencias, junto con la multiplicación de huertas urbanas, formas de consumo solidarias y la organización popular, son fuente tanto de cuidados como de alimentación social y política del pueblo. Las respuestas desde abajo a la pandemia y al capitalismo van más allá de una respuesta humanitaria, desde la filantropía o la caridad, para la supervivencia biológica y el deber moral de salvar la vida física de las personas para mantener, así, el orden existente (Fassin, 2010; Aedo, Murray y Bacchiddu, 2017). A éstas cabe leerlas como esfuerzos que reafirman colectivamente la esperanza que otro mundo es posible, operando desde la justicia social y la solidaridad de clase.

Fueron los vínculos invisibles que se tejieron en la rebelión, las complicidades y solidaridades que se reprodujeron durante la pandemia, y el diálogo de saberes en torno al Plebiscito, los que desafiaron nuevamente el poder. El triunfo del Apruebo y de la opción Convención Constituyente en el Plebiscito del 25 de Octubre, con un ochenta por ciento de votos a favor y la participación ciudadana más importante desde el fin de la dictadura, si bien está dentro de la agenda oficial, reafirman la ruptura del pueblo con las elites, una evasión de su contra-campaña del terror, maquinaria clientelar y la violencia y represión.

Con todo el peso de los poderes fácticos, en plena pandemia y con voto voluntario, cuatro millones de personas, a contracorriente de las indicaciones de las elites, especialmente en los sectores populares y las zonas más violentadas por el modelo, optaron por buscar algo distinto y fueron a votar para traducir lo que gritó la calle en el 18/O en una nueva Constitución.

NOTAS DE CIERRE

Estas reflexiones sobre la rebelión de Octubre y los efectos del Covid-19 en clave volcánica, muestran tanto la inestabilidad de la dominación como la potencialidad de la insubordinación, y nos ayuda a comprender lo sucedido en Chile, como proceso y acontecimiento, poniendo en evidencia tanto las erupciones más visibles como los movimientos subterráneos.

Se concluye que la rebelión de Octubre de 2019 fue una erupción inédita, aunque responde a movimientos tectónicos de largo aliento, y que, a pesar de la instrumentalización del virus por el poder para contener y suprimir este cuestionamiento al modelo, el volcán, el anti-poder dentro de él, se mantiene vivo y activo.

El 18/O es expresión de un deseo histórico de ampliar la autoterminación social desde los territorios, y recuperar y construir el poder popular constituyente originario sobre la vida y el cuerpo social. Es de esperar que la exigencia del anti-poder encontrará poco espacio en la agenda institucional para su despliegue. Quizás pueda ser una válvula de escape, pero será insuficiente para expresar eso “distinto” en constante creación. Por lo tanto, se sugiere que la actividad volcánica va a permanecer y hay altas probabilidades de que estalle nuevamente.

En este sentido, el triunfo del Plebiscito y la futura Convención Constituyente, no es ni principio ni final, sino parte de un proceso de largo aliento de reinvencción de la política, lo político y lo social, cuya principal tarea, sin perder de vista la necesidad de conquistar escaños constituyentes y refundaciones normativas en beneficio de las grandes mayorías, es fortalecer los embriones de poder popular, asociatividad comunal y solidaridad de base en los múltiples espacios de vida y existencia que nacieron antes, durante y después de la rebelión de Octubre.

BIBLIOGRAFÍA

Aedo, A., Murray, M., Bacchiddu, G. (2017). “Hacia una ciencia social crítica. Entrevista a Didier Fassin”, en *Revista Andamios*. 14. 351-364.

Agamben, G. (1995). *Homo sacer: il potere sovrano e la nuda vita*. Torino: Einaudi.

Agamben, G. (2020). *A che punto siamo? L'epidemia come politica*, Macerata: Quodlibet

Butler, J. (2006). *Vida precaria: el poder del duelo y la violencia*. Buenos Aires: Paidós.

Fassin, D. (2010). “El irresistible ascenso del derecho a la vida. Razón humanitaria y justicia social”, *Revista de Antropología Social*, 19, 191–204.

Federici, S. (2011). *Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación originaria*. Buenos Aires: Tinta Limón Ediciones.

Galindo, M. (2020) “Desobediencia, por tu culpa voy a sobrevivir”, en *Sopa de Wuhan*, ASPO (Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio).

Giroux, H., Rivera-Vargas, P., & Passeron, E. (2020). “Pedagogía Pandémica. Reproducción Funcional o Educación Antihegemónica”, *Revista Internacional De Educación Para La Justicia Social*, 9(3). Recuperado a partir de <https://revistas.uam.es/riejs/article/view/12199>

Holloway, J. (2000). "Teoría volcánica", en Revista Bajo el Volcán, nº1, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla/ICSH, Puebla

Lerner, E. (2010). *Sacrifice Zones: the front lines of toxic chemical exposure in the United States*. Cambridge, MIT Press

Mbembé, A. (2003). "Necropolitics. Public Culture", Volume 15, Number 1, Winter 2003, pp. 11-40 (Article), Duke University Press

Ouviña, H. y Renna, H. (2019). "El baile de lxs que sobran: Hipótesis y preguntas desde la rebelión popular en Chile", disponible en <https://contrahegemoniaweb.com.ar/2019/10/28/el-baile-de-lxs-que-sobran-hipotesis-y-preguntas-desde-la-rebelion-popular-en-chile/>

Shiva, V. (2006). *Manifiesto para una Democracia de la Tierra. Justicia, sostenibilidad y paz*, Barcelona, Paidós.

Theodore, N., Peck, J., Brenner, N. (2009). "Urbanismo neoliberal: la ciudad y el imperio de los mercados", en *Temas Sociales*: Ediciones SUR. Vol. 66.

Thwaites Rey, M. (2010). "Después de la globalización neoliberal. ¿Qué Estado en América Latina?", en Cuadernos del Pensamiento Crítico Latinoamericano No 32. CLACSO, julio de 2010.

¿CERRANDO UN CICLO? CRISIS DEL ESTADO NEOLIBERAL, PANDEMIA Y SOCIEDAD EN PERÚ

Anahí Durand Guevara¹

Cuando en marzo del 2020 se declaró el estado de emergencia nacional a causa de la pandemia del coronavirus, Perú atravesaba una grave crisis político institucional, gatillada por el escándalo Lavajato. La trama de corrupción instalada en el Estado llegó a involucrar al entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski quien se vio obligado a renunciar pues sus empresas resultaron comprometidas en malos manejos cuando fue ministro de economía. En ese momento, el régimen ensayó una apurada sucesión colocando a Martín Vizcarra en la presidencia, quien hábilmente asumió la bandera de la lucha contra la corrupción, enfrentando al fujimorismo enquistado en el Parlamento y reformando algunos ejes relacionados al sistema de justicia. El cierre constitucional del Congreso, la elección de uno transitorio y la alta aprobación popular de Vizcarra parecían asegurar la continuidad del modelo y una sucesión favorable al establishment las elecciones del 2021. Pero llegó la pandemia abonando a la descomposición del régimen en medio de una aguda crisis política que ha costado la vacancia del mismo Vizcarra, la imposición de un presidente ilegítimo que duró cuatro días y la designación de un frágil gobierno transitorio.

Con cifras que ubican a Perú como uno de los países con mayor letalidad por coronavirus en el mundo, una crisis económica de gran magnitud y una inestabilidad política latente; el régimen neoliberal se encuentra colapsado. Los grupos de poder instalados en el Estado desde 1992 demostraron su incapacidad de asegurar la vida de las personas, al tiempo que destinaron millonarios créditos y salvatajes para sus empresas y bancos. La clase política gobernante continúa

1 Licenciada en Sociología (UNMSM), Mgs. en Ciencias Sociales por la FLACSO México y candidata a doctora en Sociología por la UNAM. Docente e investigadora de la Escuela de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima.

utilizando las instituciones para favorecer intereses subalternos y las movilizaciones sociales activadas demuestran indignación y van abriendo un momento destituyente que cuestiona cada vez más el modelo y la Constitución. El presente artículo se propone analizar la crisis del Estado neoliberal golpeado por la corrupción, el impacto de la pandemia y los límites de su propia configuración. De otro lado, aborda las impugnaciones organizadas desde la sociedad, enfatizando en las respuestas comunitarias y los cambios en las subjetividades políticas, lentos pero persistentes, expresados en las últimas movilizaciones. Finalizamos con algunas reflexiones sobre el posible cierre del ciclo neoliberal y la apertura de uno nuevo cuya orientación hacia el progresismo o un renovado neoliberalismo, todavía se encuentra en disputa.

EL ESTADO NEOLIBERAL: PODER EMPRESARIAL, CRISIS Y PANDEMIA

Abordar la configuración del Estado neoliberal en Perú, requiere en primer lugar entender al neoliberalismo en sus tres acepciones principales. Primero; como *un programa intelectual* “Un conjunto de ideas cuya trama básica es compartida por economistas, filósofos, sociólogos, juristas entre los que destacan Friedrich Hayeck, Milton Friedman, entre otros que argumentan a favor de restaurar el liberalismo amenazado por las tendencias colectivistas del s. XX” (Escalante, 2017). Segundo, como un *programa político*; una serie de leyes, arreglos institucionales, criterios de política económica, fiscal derivados de aquellas ideas con el propósito de frenar y contrarrestar el colectivismo en aspectos concretos, tanto en la economía, la educación, la salud, etc. Finalmente, como un *modelo de sociedad*, un régimen de existencia que impone determinada racionalidad y formas de convivencia susceptibles de reproducirse también desde abajo, en las subjetividades y prácticas populares (Gago, 2014).

Tras la crisis del proyecto nacionalista industrializador impulsado por el régimen militar de Velasco Alvarado a fines de los ‘60, y su colapso total durante el primer gobierno de Alan García a finales de la década del 80, las ideas neoliberales ganaron terreno en el país. A inicios de los ‘90, en un país asediado por el conflicto armado, la hiperinflación y la debacle de los principales partidos políticos, los grupos de poder económico y la cúpula militar impusieron una salida autoritaria a la crisis avalando el autogolpe de Alberto Fujimori perpetrado el 5 de abril de 1992 y legitimado por la Constitución de 1993. El neoliberalismo peruano se instaló en lo ideológico, lo programático y lo societal, limitando al Estado a su función de promotor de la inversión privada, desarrollando una legislación y una arquitectura estatal

favorable al libre mercado y expandiendo una racionalidad individualista que, en nombre del emprendedurismo, alentaba la informalidad y justificaba la desprotección social.

Esta forma de organizar el Estado y la sociedad, sobrevivió la caída del fujimorismo y fue continuada por los sucesivos gobiernos democráticos. Del 2001 en adelante, los grupos de poder que se turnaron en el gobierno otorgaron un nuevo aire al modelo, aprovechando los altos precios de los commodities en el mercado internacional. Siguiendo lo anotado por economistas como Francisco Durand (2004), se produjo la captura del Estado como un proceso por el cual las grandes empresas y corporaciones transformaron el Estado a su medida, colocando a sus ejecutivos en puestos claves de gobierno e incluso captando a todos los presidentes. Tal situación erosionó la democracia pues, sin importar la opción por la que votaran los ciudadanos, la política económica y forma de gobierno fueron las mismas; así ocurrió con Ollanta Humala quien llegó al poder con un discurso crítico al modelo y a los pocos meses se alineó con el neoliberalismo. En similar sentido, para asegurar la continuidad de la política económica y tributaria, ha sido determinante la existencia de una tecnocracia que, matices más o menos, constituyó un cuerpo de profesionales asentados en los ministerios y especialmente en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) supuestamente apolíticos, pero ideológicamente comprometidos con la no intervención estatal y la promoción de la inversión privada.

Tal como los peruanos hemos constatado a lo largo de las últimas décadas, el poder económico ha tenido acceso preferencial al Estado y capacidad para ocuparlo usando la “puerta giratoria”, es decir mediante el paso de ejecutivos de las empresas a funciones de gobierno y viceversa. Asimismo, los conglomerados económicos han conseguido operar directamente desde el poder político concentrado en el Ejecutivo de modo que, de la década del ‘90 en adelante, el 65% de la legislación en temas económicos ha sido hecha por decreto legislativo o supremo y no por el Parlamento nacional². Conglomerados como el grupo Romero dueño de Credicorp con el Banco de Crédito o el Grupo Interbank de Rodríguez Pastor, se han enriquecido y consolidado su influencia siendo la CONFIEP, la Asociación de Banca (ASBANC) la Asociación de AFPs o la Sociedad Nacional de Minería (SNM) entre otros, interlocutores privilegiados de los gobernantes.

La crisis gatillada por Lavajato develó las limitaciones del Estado

2 Entrevista en https://larepublica.pe/politica/2020/05/16/francisco-durand-en-el-peru-hay-una-doble-concentracion-del-poder-en-lo-economico-y-en-lo-politico/?fbclid=IwAR3RrWiiNbBzOOZSZCdFVZBjh_Pv3qOYTTF-xFrzn7rAfSH6i672KS7q6Es

neoliberal y la gobernabilidad instalada, mostrando su cooptación en manos de intereses privados y su propensión a avalar esquemas de corrupción vinculados a “candados constitucionales” que complican la posibilidad de introducir reformas. Figuras como los denominados “Contratos Ley” fijados supuestamente para brindar seguridad jurídica a las empresas han terminado amparando acuerdos lesivos para los intereses públicos, siendo penalizada cualquier modificación con cuantiosas multas. Lo mismo ha ocurrido con figuras como las Asociaciones Público Privadas (APP) de la cual se valieron sucesivos gobiernos para contratar con el Estado favoreciendo empresas cercanas a sus intereses especialmente en el sector construcción e infraestructura.

Además, tal como evidenciaron las denuncias y testimonios del caso Odebrecht el poder empresarial usaba elementos legales como la financiación de partidos políticos, realizando donaciones millonarias a los partidos con más opciones de ganar las elecciones para que una vez gobierno, los favorecieran con contratos, legislaran a su favor y aseguraran la impunidad del aparato de justicia. Este mecanismo funcionó por décadas, beneficiando a grupos de poder político y económico al punto de involucrar a todos los ex presidentes, diversos gobernadores regionales, alcaldes, ex ministros y altos funcionarios que hoy enfrentan sendos juicios por corrupción. Conocer esta situación generó la indignación de la ciudadanía con la clase política, incrementando el malestar y la desafección, pero también poniendo en el debate la necesidad de cambios profundos, incluyendo la Constitución del '93.

En ese contexto de inestabilidad política, la pandemia del coronavirus agudizó la crisis del Estado neoliberal revelando su incapacidad de asegurar aspectos básicos como la salud o la alimentación de las mayorías. Las contundentes cifras exponen una verdadera catástrofe donde más de 80 mil personas murieron en ocho meses³, sumando millones de contagios y una realidad de enfermedad y muerte que pudo haberse evitado de no haberse abandonando la salud pública para favorecer esquemas de atención privada. Justamente, pese al crecimiento sostenido del PBI las últimas décadas, la inversión en salud se mantuvo estancada entre las más bajas en la región, limitando considerablemente la posibilidad de mejorar la infraestructura hospitalaria, desarrollar investigación médica o alentar la producción farmacéutica. El hecho de que al empezar la emergencia existieran 276 ventiladores mecánicos para una población de 32 millones de per-

3 Según datos de Jhon Honkins University, al mes de noviembre Perú encabezaba la lista de los 10 latinoamericanos países con más muertes por covid-19 cada 100.000 habitantes (muertes per cápita) en América Latina, seguido por Bolivia, Brasil, Chile y Ecuador <https://coronavirus.jhu.edu/map.html>

sonas y la ausencia de una red de atención primaria que permitiera la detección rápida y temprana del Covid-19 fue determinante en la magnitud de esta tragedia⁴. De otro lado, el impacto del virus reveló también la dramática desprotección social en que vive la gran mayoría de peruanos relacionada con la altísima tasa de empleo informal que agrupa a más de 12 millones de personas, equivalente al 71% de la población económicamente activa⁵, que trabajan por contrato temporal y/o se “recursean” al día sin ningún derecho laboral como seguridad social o vacaciones. Para esta mayoría de peruanos quedarse en casa significaba un día sin posibilidades de subsistencia, lo cual hizo imposible que funcionaran medidas de contención sanitaria como la cuarentena. Para paliar esta situación el gobierno dispuso el pago de un bono focalizado de aproximadamente 110 dólares a las familias identificadas como pobres. No obstante, estos bonos se entregaron desordenada y tardíamente a un grupo reducido, teniendo poco efecto en mitigar la situación de vulnerabilidad de las mayorías. Pese a que diversos economistas y grupos de izquierda como el Nuevo Perú advirtieron de la necesidad de entregar un ingreso básico universal, remarcando que el Estado poseía los recursos para hacerlo, Vizcarra y la tecnocracia del MEF se negaron a ello, abonando con esta decisión al fracaso de la cuarentena.

Pero al tiempo que se mezquinaban los recursos públicos para apoyar la situación de las familias, el gobierno implementaba un esquema de reactivación económica favorable a los grupos de poder económico. Se aprobó así el “Programa Reactiva Perú” que destinó el 12% del PBI a “asegurar la continuidad en la cadena de pagos ante el impacto del CODIV -19”⁶. En una primera fase, a través del Banco Central de Reserva, este Plan entregó a los bancos 30 000 millones de soles (8,500 millones de dólares) para financiar básicamente a las grandes empresas y a las transnacionales, apelando a la vieja fórmula de entregar dinero público a grandes grupos de poder financiero prácticamente sin condiciones. Junto a estas medidas, la desordenada reapertura económica presionada por los sectores empresariales agremiados en la CONFIEP, reafirmó la primacía a los grupos de poder, mostrando la sumisión del gobierno y su incapacidad de frenar el lucro del mercado de las clínicas privadas o el monopolio del oxígeno y las farmacéuticas.

4 <https://peru21.pe/peru/coronavirus-en-peru-minsa-compro-500-ventiladores-mecanicos-pero-recien-llegaran-en-mayo-noticia/>

5 Datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) www.inei.gob.pe

6 <https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-crea-el-programa-reactiva-peru-par-decreto-legislativo-no-1455-1865394-1/>

La pandemia expuso con contundencia los límites del modelo neoliberal y desgastó su hegemonía, evidenciando su orientación favorable a la acumulación y enriquecimiento de un pequeño grupo dominante y su imposibilidad de generar bienestar para las mayorías. Aspectos claves que garantizaron la reproducción, vigencia y legitimidad del modelo hoy son cuestionados con fuerza por sectores más amplios de la sociedad. Es el caso por ejemplo del rol del Estado, reducido por las élites a promotor de la inversión privada y mero garante del libre mercado. A un costo altísimo en términos de enfermedad y vidas humanas, los peruanos hemos comprobado que el mercado no garantiza la salud ni la vida y que es importante un Estado garante de derechos que asegure un piso básico de protección a sus ciudadanos. Asimismo, se discute la necesidad de generar empleo digno y lo insostenible de mantener altas tasas de empleo informal que abandonan las mayorías a los vaivenes del mercado y sin ninguna previsión social. En general, el Estado, la institucionalidad y la narrativa neoliberal instalada a inicios de los '90, se encuentran profundamente debilitadas y son cada vez más cuestionadas por una sociedad afectada por la crisis y menos resignada a la continuidad política y económica.

DEL DESCONCIERTO A LA INDIGNACIÓN: RESPUESTAS SOCIALES Y CRISIS POLÍTICA

Decía Marx en la *Contribución a la crítica de la Economía Política* que “el modo de producción de la vida material determina el proceso social, político e intelectual de la vida en general; no es la conciencia de los hombres lo que determina su ser, sino, por el contrario, es su existencia social lo que determina su conciencia”. En esta línea, podría afirmarse que en el Perú de hoy las condiciones materiales que imponen una vida de informalidad, precariedad e individualismo inciden decisivamente tanto en la conciencia de los peruanos sobre su propia situación, cuanto en las formas de organización y protesta que organizan para afrontar las múltiples crisis que los afectan. Cuenta también el impacto de situaciones históricas recientes que erosionaron el tejido social tales como el conflicto armado, la cooptación fujimorista y la profunda crisis de representación. Desde la década de los 90 la debacle de los partidos políticos, ha alentado el ascenso de figuras “independientes”, el surgimiento de partidos vinculados a negocios y el empobrecimiento del debate político dominado por la inmediatez, el clientelismo y el espectáculo.

En dichas condiciones históricas, materiales y subjetivas, frente a la pandemia la sociedad peruana y especialmente las clases populares, ha configurado respuestas que oscilan entre el malestar frente a la clase política, la renovación de lazos comunitarios y una reactivación

de la movilización popular especialmente intensa tras la vacancia al ex presidente Vizcarra y el rechazo al golpismo del Congreso que dio lugar a masivas protestas.

Respecto a lo primero, la desafección y el malestar frente a la clase política son una característica en la sociedad peruana que, junto al individualismo y la fragmentación, ha sido funcional a la hegemonía del régimen. Esto revela la necesidad de entender el neoliberalismo no sólo como un proyecto político al que es posible derrotar electoralmente, sino también como una compleja articulación entre acumulación de capital y modos de vida que opera sobre el deseo y las relaciones sociales configurando una sensibilidad emocional y política. (Sztulwark, 2019). En el Perú, esta sensibilidad, que afecta la capacidad de empatía exaltando modos de vivir orientados al éxito individual y el consumismo fácil, ha conseguido enraizarse transversalmente. La hegemonía del neoliberalismo, especialmente en el campo popular no sólo responde a medidas gubernamentales, también obedece a su capacidad de imponer y convencer sobre la idoneidad de modos de vidas y orientaciones aspiracionales, acompañados de una vocación sancionadora que liquida socialmente a quien no triunfa con sus propios medios o escapa a la disciplina del régimen; el ocioso, el cómplice, el rojo, el terruco. La crisis de las izquierdas, replegadas por años en ONGs o proyectos meramente electorales, contribuyeron en reforzar tal hegemonía, al tiempo que la desafección política y el malestar convivían funcionalmente a la reproducción del modelo. Por mucho tiempo las protestas contra distintos aspectos del sistema se caracterizaron por la dispersión territorial, la primacía de plataformas sectoriales y una precaria politización que limita sus posibilidades de disputar representación política.

No obstante, la grave situación generada por la pandemia ha permitido el desarrollo de iniciativas comunitarias articuladas por diferentes movimientos y organizaciones sociales que han sido y son claves para resistir la emergencia y revelan la persistencia de vínculos sociales arraigados en lo cultural y comunitario, contrarios al individualismo propugnado por el régimen. Es el caso por ejemplo de las organizaciones indígenas amazónicas que ante el abandono estatal organizaron redes de auto ayuda y control del territorio, convocando además diversas solidaridades para paliar la situación de los pueblos que sufren condiciones estructurales de empobrecimiento. También es el caso de las rondas campesinas en los andes que fueron fundamentales para frenar la expansión del virus, asumiendo labores de vigilancia y ordenamiento de las zonas de vivienda y producción. En las ciudades, destaca la organización de ollas comunes y comedores populares para enfrentar colectivamente el hambre que ha traído la

crisis y la acción de colectivos feministas, denunciando diversos casos de acoso, violencia y feminicidios. Estas y otras iniciativas que se articulan ponen en cuestión la forma de convivencia y sensibilidad neoliberal, demostrando la importancia de los vínculos comunitarios para asegurar la reproducción de la vida.

De otro lado, el desastre relacionado con el COVID 19 y la desatención estatal generó también protestas sectoriales en diversas regiones del país y que acumularon al malestar expresado posteriormente en las movilizaciones de noviembre. Justamente, frente al mal manejo de la pandemia se sucedieron protestas protagonizadas por los trabajadores considerados “esenciales” como médicos, enfermeras y trabajadoras de limpieza pública. Diversas federaciones y gremios del personal de salud en hospitales de Lima y regiones, especialmente trabajadores contratados o tercerizados, protestaron por sus condiciones laborales, sin seguridad social, beneficios y en pésimas condiciones por la deteriorada infraestructura hospitalaria. También las trabajadoras de limpieza pública, organizadas en el SITOBUR, realizaron protestas exigiendo condiciones dignas para un trabajo feminizado, considerado esencial, pero mal pagado y precarizado. Estos actores, junto a las centrales sindicales que se mantuvieron activos frente a los despidos amparados en figuras lesivas como la “suspensión temporal perfecta”, cuestionaron aspectos cruciales del régimen como la ausencia de estabilidad laboral y la necesidad de un margen de regulación estatal frente al lucro del mercado y los vaivenes de la crisis.

Junto a los golpes sanitarios, económicos y sociales de la pandemia, la crisis política vinculada a la corrupción y la latente inestabilidad institucional, han sido determinantes para resquebrajar la hegemonía neoliberal. No olvidemos que tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski el 2018, en medio de una sociedad hastiada de la clase política, Vizcarra consiguió salvar al régimen temporalmente, confrontando hábilmente con el legislativo copado por el fujimorismo y cerrando constitucionalmente el Congreso en octubre del 2019. Pero la permanencia de intereses subalternos en el nuevo Parlamento instalado en febrero del 2020 y su propia incompetencia -signada por un entorno mediocre y sus propias denuncias de corrupción- aceleraron su decadencia. Vizcarra se vio cercado por grupos de interés, mafias y viejos políticos tradicionales que desde el Congreso impulsaron dos procesos de vacancia presidencial; el primero debido a tráfico de favores en la contratación de un ex asesor, y el segundo ante acusaciones de testigos que comprometieron su gestión como gobernador regional de Moquegua con sobornos de la empresa Odebrecht.

El primer intento de vacancia presidencial contra Martín Vizcarra llevado a cabo en octubre, fue ampliamente desaprobado por la

ciudadanía pues pese a todo, consideraba a Vizcarra el “mal menor” y prefería que termine su mandato en julio del 2021. La inconsistencia de las denuncias, el rechazo de la población y la develación de conversaciones entre el ejército y un sector de parlamentarios restó respaldo al pedido y la moción fue finalmente archivada. Sin embargo, el presidente Vizcarra quedó debilitado y expuesto como uno más de los políticos que usaban el poder para favorecer a su entorno privado. Por su parte, el Congreso continuó en la cuesta de desprestigio, siendo visto por la población como un espacio político dominado por intereses subalternos, mafiosos y delictivos, con pequeñas bancadas vinculadas a grupos económicos corporativos y copado por congresistas abocados a legislar para proteger sus negocios. Se develó también la actividad de sectores de la ultra derecha con presencia en el Parlamento y las cámaras empresariales interesadas en vacar al presidente y hacerse del Estado para acomodar normas a su beneficio y conseguir dilatar el calendario electoral.

En ese contexto, la situación política lejos de estabilizarse empeoró y en el mes de noviembre, la bancada de Unión por el Perú presentó una segunda moción de vacancia presidencial. Este pedido también buscaba vacar al presidente bajo la ambigua figura de “incapacidad moral permanente” ahora por la presunta responsabilidad de Martín Vizcarra con malos manejos económicos cuando fue gobernador regional de Moquegua. Estas acusaciones resultaban más serias, pero se encontraban ya en manos de la fiscalía que podría avanzar las investigaciones una vez que dejara la investidura presidencial. En esta ocasión también la ciudadanía rechazaba ampliamente el impeachment prefiriendo que Vizcarra culminara su mandato y rechazando las artimañas del Congreso más ocupado en destituir al presidente que en atender la emergencia de la pandemia. No obstante, en un solo día el Congreso optó por vacar a Vizcarra y el diputado Manuel Merino fue proclamado presidente aupado por una coalición de derechas emergentes y tradicionales en una maniobra que generó un masivo y contundente rechazo popular.

Entre el 9 y el 15 de noviembre se sucedieron en Lima y las principales ciudades movilizaciones masivas protagonizadas especialmente por jóvenes y estudiantes en rechazo al golpismo parlamentario y exigiendo la renuncia de Merino al cargo de presidente. La indignación frente a una clase política imbuida en componendas para hacerse del poder pese a la peor crisis económica y social en décadas, incentivó y agudizó la indignación en las protestas.

La fuerte represión policial, que costó la vida a dos jóvenes en Lima, no pudo detener el despliegue de movilización ciudadana, siendo decisiva para la caída del efímero gobierno apenas a cuatro días

de instalado⁷. Asimismo, en estas jornadas de movilización popular estuvo muy presente la demanda de una nueva Constitución, planteándose este cambio como una posibilidad para cerrar el ciclo de crisis y abrir un momento de discusión hacia un nuevo pacto social que replantee el rol del Estado y el mercado en la sociedad.

Tras la pronta renuncia de Manuel Merino y luego de una accidentada negociación, el Parlamento designó como presidente transitorio a Francisco Sagasti; diputado por Lima del centrista Partido Morado que asumió el gobierno con un discurso conciliador. No obstante, la inestabilidad política se mantiene, pues el mismo presidente transitorio no cuenta con una correlación favorable en un Congreso que sigue siendo el mismo que vacó a Vizcarra y pareciera dispuesto a mantener la crisis con tal de imponer su propia agenda. Se ha abierto además una estructura de oportunidad política favorable a las protestas de diversos sectores afectados por décadas de neoliberalismo, como los trabajadores de la agro exportación que paralizaron las carreteras del país una semana en rechazo a un régimen laboral especial que permite figuras de grave explotación laboral. La paralización de los trabajadores de la agro exportación, de los trabajadores públicos temporales, de los trabajadores mineros entre otras que se han activado tras las movilizaciones de noviembre pese a la pandemia, configuran un escenario de impugnación al Estado y al modelo mucho más de fondo, enlazándose cada vez más con la crítica al orden constitucional.

El momento político pareciera propicio para salidas transformadoras incluyendo la posibilidad de concretar un proceso constituyente que culmine en una Nueva Constitución. En este ambiente de movilización, politización y expectativas democratizadoras se desarrollará el proceso de elecciones generales de abril del 2021, siendo decisivo las propuestas de los distintos actores políticos para avanzar o frenar estos cambios, sea renovando el modelo o clausurando definitivamente el ciclo neoliberal.

EPÍLOGO TEMPORAL: CRISIS POLÍTICA Y CIERRE DEL CICLO NEOLIBERAL

En medio del desgaste de las elites gobernantes y con una mayor reacción crítica de la población frente al impacto de la crisis, el agotamiento del ciclo neoliberal impuesto el 92 se muestra inminente; la pregunta es si abrirá uno distinto, qué procesos entran en disputa y qué características podría tener esta nueva etapa.

7 Mayor información en <https://www.nodal.am/2020/11/crisis-politica-en-peru-mueren-dos-personas-en-protestas-y-el-congreso-evalua-renuncia-de-manuel-merino/>

Partiendo de afirmar que es posible la apertura de un nuevo ciclo, un primer escenario a disputar tiene que ver con el impulso al proceso constituyente. Como confirman las últimas encuestas, la demanda de cambio constitucional es mayoritaria en los y los peruanos y lo que más bien se encuentra en disputa es la magnitud de este posible cambio constitucional; si se trata de hacer reformas puntuales o si corresponde elegir una Asamblea Constituyente encargada de formular una nueva⁸. Sin duda influye en Perú lo ocurrido en Chile tras el estallido del 2019 pues en ambos países las élites golpistas gobernantes optaron por «constitucionalizar» el modelo neoliberal, colocando *candados* que hicieran muy difícil introducir reformas. En Chile, luego de treinta años y en medio de una revuelta generalizada, los candados saltaron y el pueblo en un referéndum optó por instalar una Asamblea constituyente. En Perú, aunque el acumulado militante y organizativo no presente la densidad chilena, existe también un ánimo impugnador y destituyente que puede cerrar el ciclo neoliberal y acabar de abrir uno nuevo. La presencia de una nueva generación de jóvenes, reconocida como “la generación del bicentenario” ha tomado las calles y no parece estar dispuesta a conformarse con arreglos superficiales; sin duda su protagonismo será decisivo para dirimir la dimensión del proceso constituyente, sea un proceso de reformas o un cambio integral con participación popular.

De otro lado, las elecciones de abril del 2021 son otro proceso en disputa clave para definir el cierre del ciclo. Las fuerzas de derecha harán lo posible por oxigenar el sistema, aunque ello implique prometer “cambiar todo para que nada cambie” buscando colocar piezas de recambio como el ex arquero de Alianza Lima George Forsyth o el tecnócrata Julio Guzmán. Pero esta vez el descontento, la movilización y los cuestionamientos de fondo al modelo configuran un escenario favorable a políticas de izquierda y progresistas que podrían tener opción de ganar y llevar adelante un gobierno capaz de realizar cambios sustantivos en lo económico y político. Que la disputa electoral oriente la salida de la crisis a un giro progresista no es una posibilidad lejana o arriesgada. En los últimos veinte años un sector importante de la población ha votado consistentemente a favor de una propuesta de cambios o por lo menos crítica al modelo. Esto se evidenció en el 2011 cuando un 30% del electorado votó por Ollanta Humala, aunque luego de ganar la presidencia abandonara su plataforma progresista y

8 Según la encuesta CELAG de diciembre 2020, 9 de cada 10 peruanos y peruanas creen que es necesario cambiar la Constitución actual. Consultados sobre la problemática, un 42% sostiene que el país necesita una nueva Constitución, mientras que un 47% señala que es menester realizar algunas reformas a la actual Carta Magna. <https://www.celag.org/peru-mestizos-endeudados-constituyentes-y-populares/>

se alinea con la hegemonía neoliberal. Ocurrió también el 2016 con el 18% de la población que votó por Verónica Mendoza quedando a muy poco de pasar a la segunda vuelta. La dispersión en los partidos de derecha golpeados por los escándalos de corrupción y los costos de la pandemia, juega a favor del posible triunfo de una candidatura progresista de izquierda, siendo nuevamente Verónica Mendoza con la plataforma Juntos por el Perú la posibilidad más viable. Ello explica en buena cuenta el afán de los grupos políticos con presencia en el Congreso de bloquear la apertura del sistema a nuevos partidos y mantener la inestabilidad deslizándose una posible postergación de las elecciones con el pretexto del COVID19.

Vivimos una crisis de proporciones mundiales que ha puesto en cuestión la ideología, la gobernabilidad, el manejo económico y la forma de organizar la sociedad vinculada al neoliberalismo. Este modelo, que ya venía perdiendo hegemonía antes de la pandemia, ha sufrido golpes contundentes con el triunfo del MAS en Bolivia y la mayoritaria aprobación del cambio de Constitución en Chile, cuyas repercusiones se sienten especialmente en el área andina. En Perú, puede afirmarse un momento determinante para cerrar el ciclo y abrir uno distinto claramente transformador. Aunque en otras ocasiones el neoliberalismo haya mostrado su capacidad de renovarse, hoy existe espacio para levantar con fuerza argumentos en defensa de lo colectivo, que replanteen el rol del Estado y cuestionen radicalmente el lucro del mercado. Es un momento clave para disputar el relato de la pospandemia y articular un bloque histórico popular potente que impulse proceso constituyente y gane poder y gobierno en el campo electoral. Pero es un momento clave también para repensarnos como comunidad, proponiendo también un horizonte de futuro, ese “sentido de época” que reclamaba José Carlos Mariátegui, capaz de alimentar inquietudes, reorientar sentidos y modos de vida superando el individualismo exacerbado que nos aísla y el consumismo que deteriora el planeta. Se puede avanzar en cerrar el ciclo asegurándonos de no volver a lo mismo, ensanchando el espacio para garantizar lo público sobre la base de la solidaridad, la comunidad en torno al cuidado mutuo. Próximamente también a celebrar el bicentenario de la instalación de una república fundada sobre profundas continuidades coloniales, puede ser el momento de afirmar un nuevo camino de emancipación y esperanza.

BIBLIOGRAFÍA

Durand, F. (2004). “Neoliberalismo, empresarios y Estado”. *Debates en Sociología*, N°29. Lima, Perú. Departamento de Ciencias Socia-

les. Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

Escalante, F. (2016). *Historia mínima del neoliberalismo, orígenes intelectuales de una revolución cultural*. Lima: La Sinistra Ensayos.

Gago, V. (2014). *La razón neoliberal. Economías barrocas y pragmática popular*. Buenos Aires: Ediciones Tinta Limón.

Sztulwark, D (2019). *La ofensiva sensible; neoliberalismo, populismo y el reverso de lo político*. Buenos Aires: Colección Futuros Próximos.

ECUADOR: EL MIEDO Y LA REPRESIÓN COMO PRESENTE Y FUTURO INMEDIATO DE NUESTRAS CONVIVENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS

Josefina Torres Jiménez¹

El presente artículo plantea una inicial reflexión que parte de vincular miedo y represión en la manera en que el gobierno de Lenin Moreno ha liderado la respuesta estatal a la pandemia del Covid-19 en el Ecuador. Esta coincidencia perversa se ha constituido en la principal estrategia y recurso del gobierno para implementar la agenda neoliberal que estaba postergada luego del estallido de Octubre en el país, contando a su favor con la limitada expresión política del campo popular en condiciones de confinamiento. Sin embargo, plantearemos que el miedo -colectivo- y la represión en el manejo de la pandemia muestra, no solo una crítica a los gobiernos, sino la necesidad de retomar el debate sobre estado-gobierno, pues, por otro lado, el estado nuevamente ha mostrado su rostro sin máscaras, y ha vuelto a ponernos frente al miedo y la represión, como presente y futuro inmediato de nuestras convivencias sociales y políticas.

UNA CRÓNICA DE HORROR

El día viernes 13 de marzo del año 2020, Catalina Andramuño -ministra de salud de entonces- mediante rueda de prensa anunciaba que la paciente infectada con el nuevo coronavirus el pasado 22 de febrero, había fallecido. Era la primera muerte confirmada por COVID-19 -nombre que la Organización Mundial de la Salud (OMS) le otorgó al desconocido virus- en la ciudad de Guayaquil² y en el Ecuador. En la misma intervención, la ministra confirmó la existencia de 23 casos identificados en las provincias de Pichincha, Guayas y Los Ríos, con

1 Socióloga, docente de las carreras de Sociología y Política de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Central del Ecuador.

2 La ciudad, puerto y cantón de Guayaquil pertenecen a la provincia de Guayas, ubicada en la costa ecuatoriana.

distinto grado y estado de evolución, sin embargo, todos en aislamiento, bajo control y vigilancia médica-hospitalaria. (Ministerio de Salud Pública [MSP], 2020).

En el Ecuador escuchábamos con perplejidad y temor la información oficial. El Covid-19 había llegado y fuimos el tercer país de Nuestra América en contagiarse. Pero, parecía una cosa de viajeros, de contagio por contacto con extranjeros. Había miedo, pero aún no rondaba las calles, ni tocaba las puertas, ni asediaba a nuestros seres queridos. Eran tiempos de rostros, de abrazos, de reuniones...de salir a la calle.

Andramuño, acompañada de un médico intensivista del Ministerio de Salud Pública (MSP), ratificaba el compromiso del “Gobierno Nacional (...) con la protección de la población mediante una serie de acciones que podrán implementarse conforme las necesidades. Además, se solicita a la ciudadanía la observación de las normas de control y la práctica rigurosa de la prevención de la enfermedad” (MSP, 2020).

Desde aquel día, una serie de términos, unos conocidos y otros desconocidos para lxs comunes, acompañaban las declaraciones oficiales de funcionarios de gobierno y especialistas de la salud. Paciente cero, aislamiento, protocolos, bioseguridad, virus, cuidados, síntomas, confinamiento, cuarentena, infección, contagio, muerte, hospitales, medicamentos, ventiladores, cuidados intensivos, prevención, cerco, vigilancia epidemiológica. Todas ellas, palabras multiplicadas y amplificadas por los medios de comunicación, se articulaban al significado de pandemia³ “se llama pandemia a la propagación mundial de una nueva enfermedad (...) que surge de un nuevo virus gripal que se propaga por el mundo y la mayoría de las personas no tienen inmunidad contra él.” (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2010)

Frente a este escenario, las y los ecuatorianos esperábamos que el gobierno liderara una adecuada respuesta que protegiera a la población y controlara la curva de contagios, quizás más por esperanza, que por confianza en su gestión. La misma OMS planteaba la necesidad de la “adopción de decisiones de política en una situación que se caracterizará tanto por la urgencia como por la incertidumbre” (OMS, 2005)

Precisamente, urgencia e incertidumbre azoraban nuestros días, mientras las noticias sobre los vertiginosamente ascendentes conta-

3 La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció en marzo del 2020 que el COVID-19 puede ser caracterizado una pandemia. A inicios del mismo año consideraba al brote de la enfermedad por el nuevo coronavirus 2019 (COVID-19), como una emergencia de salud pública de importancia internacional. (OMS, 2020)

gios y muertes que acontecían en Italia y España se convertían en el espejo en que no queríamos reflejarnos. Había que evitar el contagio. Pero este nuevo virus tenía un comportamiento que aún no se lograba esquematizar. Era una gripe letal, altamente contagiosa que se transmitía “hasta por los ojos” y obstruía la respiración. No se podía tratar sino en la unidad de cuidados intensivos de un hospital.

Así, una de las primeras medidas y de las centrales -para efectos de la presente reflexión- que tomó el gobierno de Lenin Moreno⁴ fue decretar el “estado de excepción⁵ por calamidad pública en todo el territorio nacional” -durante 60 días a partir del 16 de marzo⁶- debido al “riesgo de contagio a toda la ciudadanía, [y] la afectación a los derechos a la salud y convivencia pacífica del Estado...”. Además, disponía la movilización en todo el territorio nacional de Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Ministerio de Salud Pública, Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencia. Desde entonces, el país entraba a cuarentena comunitaria obligatoria, mascarillas, ningún contacto físico, uso extremado de jabón, alcohol, desinfección, suspensión del ejercicio a la libertad de tránsito y el derecho a la libertad de asociación y reunión, toque de queda, confinamiento -privilegio de por medio para poder quedarse en casa. Así, se relacionaban institucionalmente, por un lado, Ministerio de Salud, Riesgos y Emergencia, Fuerzas Armadas y Policía Nacional y, por otro, ámbitos de salud pública, prácticas de desinfección, crisis y aislamiento, con las nociones de restablecimiento del orden público y el control de las limitaciones de derechos, partes fundamentales de la Seguridad Pública y del Estado.

Mientras el Director General de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, planteaba que “la mejor defensa contra cualquier brote es un sistema sanitario sólido” y recomendaba a los gobiernos trazar

4 El presidente Lenin Moreno estuvo ausente durante el manejo de pandemia. Él mismo lo reconoció en una rueda de prensa semanas después, y justificó su ausencia por pertenecer al grupo más vulnerable al Covid-19. Fue el ex vicepresidente Otto Sonnenholzner quien lideró en las primeras semanas las acciones gubernamentales. Luego asumió Alexandra Ocles, ex secretaria de Riesgos y Emergencia, quien lidera el Comité de Operaciones y Emergencia Nacional (COE), ente de coordinación y dirección de la gestión frente a la pandemia. Actualmente, es la ministra de Gobierno y Policía María Paula Romo quien está a cargo.

5 “Ecuador tiene una larga historia de declaraciones de estados de emergencia dictados para paliar tanto problemas sociales como económicos, así como la delincuencia” (Comisión Interamericana de DDHH, 1999), recuerda Christian Pino en su artículo “El estado de excepción de octubre: el retorno de la doctrina de seguridad nacional del Estado”, CLACSO, 2020.

6 Decreto Ejecutivo NO. 1017 del 16 de marzo del 2020. Decreto disponible en https://minka.presidencia.gob.ec/portal/usuarios_externos.jsf.

estrategias para “seguir prestando servicios sanitarios esenciales y mitigar el riesgo de colapso del sistema”⁷, debido a la gran presión que experimentaría a efectos del rápido aumento de la demanda; la situación en Guayaquil era pavorosa, tanto que fue calificada como “la Wuhan latinoamericana”. Guayaquil no solo era el “epicentro” de los contagios, era la representación del miedo en la imagen desgarradora del horror que ocasionaba la pandemia, el desatinado manejo gubernamental de la crisis⁸ y las precarias condiciones de vida de los sectores populares resultado del modelo

Cuerpos que desfallecían en las calles vacías y esperaban días para ser recogidos⁹. Hospitales desbordados, déficit de personal de salud, contagiados esperando por asistencia que nunca llegaba¹⁰. Especulación con el precio de medicinas, desabastecimiento, sobre precio y corrupción. Desesperación, tristeza, dolor y miedo obtuvieron como respuesta del gobierno establecer “zona especial de seguridad”¹¹ a la provincia del Guayas. Así, se procuraría “una gestión integral en el marco de la emergencia sanitaria y del estado de excepción” previamente decretados, al tiempo que disponía a las Fuerzas Armadas conformar una “Fuerza de Tarea Conjunta” que incluía a la Policía Nacional.

Sin embargo, la indolencia se volvió a expresar en las declaraciones del ex vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner¹², se buscaba “un espacio en el que se pueda construir una fosa común en donde se ubicaría a los fallecidos por coronavirus”. Otros agradecían la donación de ataúdes de cartón, por los que escurrían los líquidos

7 La OMS recomienda. Comunicado de prensa del 30 de marzo de 2020. Recuperado el 11 de septiembre del 2020 de <https://www.who.int/es/news-room/detail/30-03-2020-who-releases-guidelines-to-help-countries-maintain-essential-health-services-during-the-covid-19-pandemic>

8 La ministra Andramuño renunció el 21 de marzo, lo hizo a la vez que denunciaba la falta de recursos por parte del gobierno para enfrentar la crisis, así como “la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de salud pública y de la realidad frente a esta situación” (Carta de Renuncia Catalina Andramuño Oficio Nro. MSP-MSP-2020-0570-O, 21 de marzo de 2020). Y días después también lo hizo Andrés Madero, ministro de Trabajo.

9 Se llegó a recoger más de 700 cadáveres de domicilios y calles en Guayaquil entre la última semana de marzo y los diez primeros días de abril.

10 Situación similar acontece en Quito semanas después, pero parece haberse normalizado y es noticia poco recogida para la espectacularidad de los medios de comunicación privados.

11 Decreto Ejecutivo NO. 1019 del 22 de marzo del 2020. Decreto disponible en https://minka.presidencia.gob.ec/portal/usuarios_externos.jsf.

12 Renunció el 7 de julio con la intención, no declarada, de ser candidato a la Presidencia en las elecciones del 2021.

propios de los cuerpos en descomposición, mientras más cadáveres permanecían confundidos o perdidos en el suelo hospitalario. Todos ellos sin la posibilidad de ser velados y enterrados por sus seres queridos y transitar el duelo en acompañamiento.

LA DISCIPLINA DEL AUTO-CUIDADO Y LA SEGURIDAD NACIONAL

El discurso ante el incremento de la curva de contagios y muertes¹³ se explicaba gubernamentalmente desde la falta de disciplina por parte de la ciudadanía, que “irresponsablemente” no se quedó en casa o no acató las medidas de bioseguridad, fundamentada con el correspondiente correlato de epidemiólogos y expertos en salud. Encontraron explicación hasta en la conducta “culturalmente arraigada” en ciertas poblaciones como las indígenas, que “al vivir comunitariamente” no pueden mantener distanciamiento social. Los medios de comunicación buscaban imágenes de jóvenes enfiestados, reunidos tomando licor, o historias de hombres y mujeres que debían salir a ganarse el pan diario en la venta informal. Los unos irresponsables, los otros arriesgados por legítima necesidad, pero al final ambos irresponsables frente a la situación y posible fuente de contagio y transmisión del virus. Y, pues para eso estaba la fuerza pública, policía y fuerza armadas llamadas a garantizar la paz y seguridad del Estado, controlando -reprimiendo- el cumplimiento del confinamiento. El distanciamiento físico convertido en aislamiento social, profundizando las inequidades económicas y sociales. Violencias de todo tipo.

Sin embargo, el discurso se volvía comentario generalizado de la población, que clamaba por mayor seguridad y atención estatal al tiempo que encontraba en la indisciplina ciudadana la antítesis del auto-cuidado.

La pandemia se extendía por todos lados, hasta tomarse los territorios que parecían estar de cierto modo resguardados, los rurales, los amazónicos, los menos conectados con grandes centros poblados, constituyen de cierto modo los más vulnerables¹⁴ también, al margen de la red de infraestructura sanitaria, se extendía también el miedo

13 Varios especialistas han criticado las cifras oficiales pues tendrán un alto subregistro y otros señalan la intención política que tendría esconder o maquillar los datos reales. Ante esto el gobierno ha explicado su fórmula de registro, la misma que no ha convencido a los entendidos. Hay desconfianza sobre los datos oficiales, no son los reales -dicen.

14 Decimos de cierto modo porque en varios de esos territorios se han reeditado formas alternativas de cuidado colectivas, basados en medicina ancestral que se había utilizado en situaciones similares, frente a enfermedades por contagio viral, gripes, desconocidas hasta entonces. Son territorios y poblaciones que han perma-

-al contagio- en su máxima expresión. Parecía que la única estrategia para mitigar el riesgo era el “Quédate en casa”, que, si no la policía te controla, te sanciona y eso “es por tu bien”.

Esta tónica y las medidas eje del manejo de la pandemia: crisis sanitaria con confinamiento colectivo obligatorio y estado de excepción -renovado por tres ocasiones vía decreto- han acompañado la pandemia en el Ecuador. Muestra, por un lado, la fragilidad institucional y organizativa del sistema sanitario de salud pública ecuatoriano, fruto de las medidas de austeridad tomadas desde el inicio del gobierno de Moreno que, además, deterioraron la economía de la población, y evidencia, también, la perversa combinación de “crisis sanitaria”, más no de salud, con “estado de excepción”, como tiempo de guerra... nuevamente.

Y es que justamente, veníamos de otro “estado de excepción”, el de Octubre. Uno que se había plantado también, en el marco de la seguridad nacional para evitar la reacción popular. El gobierno de Lenin Moreno, que abiertamente se distanciaba del modelo estatal de su predecesor, al tenor de corrupción, estado ineficiente, injustificadamente grande y oneroso, implementó una política de ajuste fiscal a la vieja usanza de la agenda del Fondo Monetario Internacional (FMI) con quien había estrechado relaciones condicionadas¹⁵ a reducir el gasto público desvinculando trabajadores, disminuyendo presupuestos para la salud¹⁶ y educación, principalmente, implementar reformas normativas consecuentes, y la anhelada eliminación del subsidio al precio de los combustibles, gasolina y diésel. Esto último, atizó la protesta de varios sectores populares, transportistas, estudiantiles, ambientalistas, campesinos e indígenas, feministas, trabajadorxs no organizadxs, desocupados y migrantes que colmaron las calles de varias ciudades del país, durante 11 días del mes octubre¹⁷ combatiendo, además, el

necido al margen de las intervenciones sanitarias y públicas en general por parte del estado.

15 La agenda contenía medidas y reformas esenciales para la elaboración del informe que autorizaría un nuevo desembolso Ver <https://www.imf.org/es/News/Articles/2019/09/23/pr19347-ecuador-imfreaches-staff-level-agreement-on2nd-review-under-the-eff>.

16 “La inversión en el área de salud en Ecuador pasó de 306 millones de dólares en 2017 a 201 millones de dólares en 2018 y 110 millones de dólares en 2019, una reducción de 34% y 36%, respectivamente” Fernando Carrión, 10 de abril del 2020, citando al “Plan Anual de Inversiones Sector Salud en Ecuador 2017-2019”, <https://twitter.com/fcarrionn/status/1248629296056487937>.

17 Varias publicaciones examinan a detalle lo sucedido, por ejemplo, *Octubre y el derecho a la resistencia: Revuelta popular y neoliberalismo en Ecuador*, editado por Franklin Ramírez (marzo, 2020); *ECUADOR: La insurrección de octubre*, edición

despliegue represivo¹⁸ que activó el gobierno. Liderando la desbordante movilización la CONAIE puso en jaque al gobierno, obligándolo a recular.

Lo que había ocurrido en Octubre le planteaba al gobierno la dificultad social y política y con escasa legitimidad¹⁹, que tendría que sortear para implementar su pretendida agenda, la que ha debido aplazar. Sin embargo, como lo señala Santiago Ortiz (2020), Octubre “también reveló la nueva cohesión de la clase dominante, de los partidos cogobernantes con los empresarios, de los medios de comunicación privados.”, que sin duda esperarían el momento preciso para encaminar estrategias e imponer definitivamente esta segunda ola del modelo neoliberal. Pero, de momento, el gobierno de Moreno no abandonó la intención de “acelera[r] la implementación de su agresivo programa neoliberal e intensifica su tendencia autoritaria” (Chávez, 2020, 333). Aunque también Octubre actualizaba la esperanza de la lucha popular.

a cargo de Camila Parodi y Nicolás Sticotti (mayo, 2020), las dos publicadas por CLACSO. Y la más reciente *Estallido: la rebelión de octubre en Ecuador*, de Andrés Tapia, Leonidas Iza, Andrés Madrid, publicada por Red Kapari (agosto, 2020).

18 Según el Informe de la Defensoría del Pueblo, las jornadas de protesta dejó 12 muertos, 11 personas mutiladas (perdieron sus ojos por el impacto de bombas lacrimógenas y piedras), 1340 heridos durante las protestas por los incidentes con la fuerza pública, 1152 detenidos, el 80% de ellos ilegalmente detenidos. Ver <https://rebellion.org/docs/262149.pdf>

19 Sobre la baja legitimidad del gobierno de Moreno, David Chávez plantea que Octubre muestra tres novedades, la primera “un Gobierno con muy escaso respaldo social que logra sobreponerse a un poderoso levantamiento popular”, contrario a las caídas presidenciales como cultura política del Ecuador. La segunda, “las dimensiones y las características de la movilización social. Una movilización que desbordó o tomó por sorpresa a todos los actores políticos e inclusive a los propios movimientos sociales tradicionales” en las emergencias de nuevos movimientos: el indígena y el estudiantil en conjunción con otros que se fueron sumando. Y, la tercera, “otra novedad siniestra. Durante aquellos convulsionados días el Gobierno desató la más violenta represión que se recuerde en décadas”. (Chávez, 2020, 334)

MIEDO Y REPRESIÓN COMO RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO

“El miedo es fundamentalmente el miedo a la muerte”

Jean Delumeau,
Miedos de ayer y de hoy

El Covid-19 ha pasado de ser un hecho que reside en el mundo de la biología, para convertirse en una “creación atemorizadora”. La forma en que se manejó la pandemia, hizo del nuevo coronavirus una experiencia social dolorosa que configuró el miedo colectivo. Miedos²⁰ que, siguiendo a Pilar Gonzalbo (2009a), son miedos colectivos que se expresan de diversas formas, como sentimientos de angustia, miedo y temor “casi siempre mantenidos en periodos de tiempo prolongados y como consecuencia de particulares circunstancias mentales, sociales, políticas y económicas”. (Gonzalbo, 2009a, 9)

Las consecuencias de los miedos colectivos en las relaciones sociales entre individuos permiten reconocer cambios o reforzamientos en las conductas colectivas, pero sobre todo advertir una característica fundamental “con frecuencia redundaron en beneficio de ciertos grupos, y por ello hablamos de los usos: los miedos pudieron ser usados y resultaron útiles para alguien. En todo caso siempre han servido como argumento de quienes se sintieron amenazados para justificar el uso de la violencia” (Gonzalbo, 2009a, 10)

El miedo acuña violencia que se expresa en rechazo, represión o marginación, justificándose como reacciones justas y necesarias ante las amenazas; sin embargo, en “la conciencia colectiva (...) los prejuicios sociales, las creencias religiosas o los intereses de grupo procuraron agrandar[los]”. Sobre esta base, los usos políticos que de ella se hacen favorecen intereses particulares y van en beneficio de tendencias políticas.

El manejo que el gobierno de Moreno hizo de la pandemia no solo que rearticuló miedo y violencia, sobre la posibilidad cercana de la muerte, sino que desplazó el miedo al virus, al miedo al prójimo, al cercano, situando la mayor responsabilidad del contagio, como expresión del miedo-dolor²¹, en la población frente a la muerte. El

20 Miedos en plural, deja planteado que no hace relación a “la respuesta espontánea ante peligros inmediatos, como mecanismo de defensa propio de la naturaleza humana”. (Gonzalbo, 2009, 9)

21 “El miedo se relaciona con lo que deseamos y con lo que rechazamos, con lo

auto-cuidado del “Quédate en casa” era la consigna del privilegio y se convertía en conducta social individualizada como disciplina que convoca el miedo. Se hizo campaña mediática, explicación científica, política gubernamental y carne en el individuo social.

Una encuesta realizada en Quito y Guayaquil en el mes de abril del año en curso, revelaba que el 75% de la población tenía miedo, el 75% consideraba que el sistema de salud no tenía capacidad para enfrentar la crisis y el 60% tenía problemas económicos. Además, señalaba que el 83% creía que la realidad del coronavirus era más grave que lo se transmitía por los medios de comunicación²².

Así, el miedo-dolor se tomó las calles y el confinamiento al campo popular, en palabras de Hernán Ouviña, “pareció ‘poner en cuarentena’ también cierto estado de ánimo asentado en el descontento y la beligerancia en las calles, cultivado en particular durante el convulsionado mes de octubre que había logrado impugnar desde sus bases mismas al neoliberalismo, e incluso cuestionar el modo de vida impuesto por el capital, el patriarcado y la colonialidad del poder” (Ouviña, 2020).

Ahora, frente a la pandemia el miedo como riesgo de contagio, lleva en su el peligro “la proximidad de lo temible”²³, y el control del riesgo consolida “posiciones de dominio”, por lo tanto, deviene en recurso de quienes ostentan autoridad. En la deriva autoritaria del gobierno de Moreno el control del riesgo vincula la seguridad nacional y recurre a la violencia en el uso de la fuerza pública. Son la policía y las fuerzas armadas las encargadas de garantizar la paz y los derechos a razón de estado.

La seguridad para contrarrestar al miedo-dolor se asocia con el miedo al desorden, “históricamente asociado a los regímenes totalitarios”²⁴. Pero también, está asociada con la fuerza y la incertidumbre, pues en las sociedades contemporáneas profundamente individualizadas no se puede confiar en los otros, ni en predisposiciones para proteger los bienes privados y públicos. La seguridad, entonces, toma

probable y con lo dudoso; sólo la certeza o la ignorancia total nos liberan del miedo. De ahí que pueda establecerse una relación entre el miedo y el dolor, así como entre el miedo y la esperanza, que representa a su contrario, el placer”. (Gonzalbo, 2009b, 21)

22 “Encuesta de percepciones Covid-19”, 13/04/2020, <https://www.youtube.com/watch?v=A1kHr4SO380>.

23 Pilar Gonzalbo explícitamente menciona que toma esta reflexión de Aristóteles en Arte retórica, p. 111.

24 “El miedo a las dictaduras es inseparable de las democracias, como el miedo al comunismo fue bandera de los fascismos” (Gonzalbo, 2009b, 22)

la forma de protección y tranquilidad pública para la convivencia, y por tanto deber que el estado garantiza, incluso para generar libertad creadora. (Delumeau, 2002)

La doctrina de la seguridad nacional retorna en el acto político del “estado de emergencia”, pese a los intentos de enmarcarlo en la doctrina moderna “garantista de derechos”²⁵, fue utilizada -por sus efectos- a merced de la vieja conocida doctrina de la seguridad nacional y seguridad interna, retomando “la ‘tradición’ de declarar el estado de excepción para contener huelgas o protestas ciudadanas”. (Pino, 2020, 226)

Miedo colectivo y represión se presentan en coincidencia perversa que ha servido para implementar la agenda neoliberal. Al tenor de una economía colapsada²⁶ que, según Augusto de la Torre, economista ecuatoriano ex alto funcionario del Banco Mundial, debería ejecutar-se tres fases: “hibernación-reseteo-reforma radical”. Bajo esta premisa el gobierno pagó los intereses de la deuda externa mientras dejaba sin recursos al sistema sanitario y sin sueldos a los funcionarios públicos, excepto a la fuerza pública, mientras despedía, y continúa despidiendo, a cientos de trabajadores, y relaja las relaciones laborales para permitir despidos en el sector privado. Perdona las deudas impositivas al sector empresarial, exime a los bancos privados de su aporte para la crisis y reduce aún más el presupuesto a la educación, ahora virtualizada.

A más de seis meses de haber decretado el estado de emergencia y políticas gubernamentales que profundizan en el modelo neoliberal, este gobierno ha facilitado la acumulación de ciertos sectores,

25 Para Christian Pino La doctrina moderna denomina “régimenes de emergencia”, “estados de emergencia” o “estados de excepción constitucional” (Ríos Álvarez, 2002) y que en términos generales pueden definirse como el mecanismo de alteración del Estado de derecho(s) previsto en la Constitución, en virtud de la cual se amplían determinadas potestades del poder público y se admite la limitación de derechos específicos de los ciudadanos, con ocasión del acaecimiento de situaciones extraordinarias, expresamente contempladas en la Constitución, que impiden al Estado garantizar los derechos de sus ciudadanos. El estado de excepción tiene por finalidad resolver las afectaciones a los derechos derivadas de dichas situaciones extraordinarias y reestablecer el Estado de derecho(s) (Dávalos Muirragui, 2008)”. (Pino, 2020, 224)

26 De la Torres se refería a la crisis, animando y justificando las medidas bajo la premisa de “la realidad superó a la legalidad”. Ver “Esta es la crisis más virulenta en los últimos 100 años”, 13 de abril del 2020, <https://www.planv.com.ec/historias/economia/esta-la-crisis-mas-virulenta-ultimos-100-anos-vision-economica-augusto-la-torre>.

usufructuado y lucrado de la crisis²⁷, el miedo y el dolor. Signando el gobierno del estado, pero también develando las raíces mismas del estado capitalista. Ese estado como “lugar de concentración de poder, arena privilegiada de disputas y territorio de luchas y construcción de hegemonía y contra-hegemonía” (Ouviaña y Thwaites Rey, 2018) . El gobierno del estado, y el estado mismo ameritan reflexiones que los diferencien y relacionen. Que retomen la cuestión del poder “con respecto a la amplia significación económica y social que expresa, en tanto núcleo simbólico y material de condensación de relaciones de fuerzas” (Ouviaña y Thwaites Rey, 2018)

Miedo-dolor, represión-seguridad no son solo cuestiones de gobierno, y no reposan únicamente como gobierno del estado. Las reflexiones iniciales aquí esbozadas “a pretexto” de la pandemia señalan desde su práctica, la necesidad de volver sobre el Estado aquel que condensa temporalmente las relaciones sociales históricamente dispuestas en una formación económico social dada, materializadas y dirigidas a través de sus instituciones, políticas, procesos, y demás mecanismos de acción pública que no son un todo homogéneo. Esto, porque amerita cautela las duras críticas que se han hecho a los gobiernos, pero ninguna parece haber tocado al estado, a esta forma estatal, que sale incólume de la crisis.

ESTO NO CONCLUYE AQUÍ

“Mientras la esperanza es una alegría ‘nacida de la idea de una cosa futura o pretérita de cuyo suceso dudamos hasta cierto punto’, el miedo es, por contraste, la tristeza provocada por la misma duda en relación con algo que nos asusta. De donde se sigue que ‘no se da esperanza sin miedo ni miedo sin esperanza’”²⁸

Pilar Gonzalbo

Reflexiones sobre el miedo en la historia

Si bien el miedo y la represión ahora son presente y futuro inmediato de nuestras convivencias sociales y políticas, no es menos cierto que la historia social y política nos muestran su larga coexistencia con

27 Si bien no tenemos datos aún sobre los sectores que se han favorecido económicamente de la crisis, se puede colegir que los ricos ecuatorianos están considerados en la publicación de Oxfam “Aumentan los millonarios de América Latina a medida que la región más desigual del mundo se hunde bajo el impacto del coronavirus” del 27 de julio del 2020. Ver <https://www.oxfam.org/es/notas-prensa/aumentan-los-mil-millonarios-de-america-latina-medida-que-la-region-mas-desigual>

28 Spinoza, Ética, pp. 1 58-1 59, citado por Gonzalbo (2009b)

nuestras luchas cotidianas y en los estallidos y rebeliones populares. El miedo creado como dolor, va acompañado contradictoriamente de la esperanza colectiva, de lo que deseamos y construimos como experiencia liberadora.

Esos miedos colectivos que nos paralizan, confinan y postergan están basados en el individuo, individualizado. Pero los miedos también nos muestran los miedos propios del poder hegemónico, que activa su violencia y abuso como estrategia para “conjurar su propio miedo y comprar su seguridad amedrentando a los otros” (Gonzalbo, 2002b: 27)

Para nosotros la conjura de los miedos está en la estrategia de lo común, no de lo público y tal vez tampoco de lo colectivo en tanto consumación de lo social individual. Lo común radica en el cuidado mutuo que, por ejemplo, en esta pandemia se gesta en las iniciativas de ollas populares, redes de cuidados comunitarios de salud, trueques, activación de iniciativas de economías populares y solidarias, etc., que, dicho sea, han sostenido y abastecido el aprovisionamiento de gran parte de la población. Pero también en las manifestaciones, marchas y plantones que se han realizado y se siguen realizando por parte de docentes, estudiantes, trabajadores de la salud y trabajadores precarizados en las plataformas digitales de servicios. Aún no como Octubre, pero herederas de la esperanza, han comenzado a articularse bajo la consigna “todas las luchas se juntan”.

En todas ellas, quizás se están gestando experiencias, procesos que están produciéndose y produciendo lo común como principio político, aquel que es el fundamento de las luchas contra el orden capitalista, el estado liberal y la racionalidad neoliberal, como razón global que impera en el mundo (Gutiérrez, 2017; Laval y Dardot, 2015). Tal vez es ahí, y desde ahí que nos atrevemos a jugar con el miedo, pese al dolor, y a rebasarlo con la seguridad y la alegría del cuidado mutuo, hasta que las calles nos vuelvan a encontrar como sujetos de lucha.

BIBLIOGRAFÍA

Chavéz, D. (2020). “El “nuevo Estado” y el levantamiento popular de octubre”. En Ramírez, F. (Ed.) *Octubre y el derecho a la resistencia: Revuelta popular y neoliberalismo en Ecuador* (pp.333-350). Buenos Aires: CLACSO.

Delumeau, J. (2002a). “Miedos de ayer y de hoy”. En J. Delumeau, *El miedo: reflexiones sobre su dimensión social y cultural* (pp. 9-21), Medellín: Corporación Región.

____ (2002b). “Seguridad”: historia de una palabra y un concepto” En J. Delumeau, *El miedo: reflexiones sobre su dimensión social y cultural* (pp. 9-82), Medellín: Corporación Región.

Gonzalbo, P. (2009a). "Introducción". En P. Gonzalbo., A. Staples., V. Torres. (Eds) Una historia de los usos del miedo (pp. 9-20). México, D.F.: El Colegio de México, Centro de Estudios Históricos, Universidad Iberoamericana.

____ (2009b). "Reflexiones sobre el miedo en la historia". En P. Gonzalbo., A. Staples., V. Torres. (Eds) Una historia de los usos del miedo (pp. 21-36). México, D.F.: El Colegio de México, Centro de Estudios Históricos, Universidad Iberoamericana.

Gutiérrez, R. (2017). "Políticas en femenino: transformaciones y subversiones no centradas en el estado". En R. Gutiérrez, Horizontes comunitario-populares: Producción de lo común más allá de las políticas estado-céntricas (pp. 67-84). Madrid: Traficantes de Sueños.

Laval, Ch. y Dardot, P. (2015). Común: Ensayo sobre la revolución en el siglo XXI. España: Gedisa.

Nieto, S. (13 de abril del 2020). "Encuesta de percepciones Covid-19", entrevista al director de la encuestadora Informe Confidencial. Recuperado el 11 de septiembre del 2020 de <https://www.youtube.com/watch?v=AikHr4SO380>.

Ministerio de Salud Pública (13 de marzo del 2020). "Ministra de Salud confirma muerte de paciente por COVID-19". Boletín de prensa, Situación Ecuador coronavirus Covid-19.

Organización Mundial de la Salud, (2005) "Respuesta a la amenaza de una pandemia de gripe aviar: medidas estratégicas recomendadas. Enfermedades Transmisibles Vigilancia y Respuesta". Programa Mundial de la Gripe.

____ 29/02/19 "¿Qué es una pandemia?" Recuperado el 13 de septiembre de 2020 de https://www.who.int/csr/disease/swineflu/frequently_asked_questions/pandemic/es/

____ 30/03/20 "La OMS publica directrices para ayudar a los países a mantener los servicios sanitarios esenciales durante la pandemia de COVID-19". Comunicado de prensa. Recuperado el 11 de septiembre de 2020 de <https://www.who.int/es/news-room/detail/30-03-2020-who-releases-guidelines-to-help-countries-maintain-essential-health-services-during-the-covid-19-pandemic>

Ortiz, S. (2020). "COVID19 Ecuador: shock neoliberal y cuarentena perpetua. Apuntes de la coyuntura correspondientes al primer semestre de 2020". En CLACSO, Cuadernos del Pensamiento Crítico Latinoamericano, Número 76 Julio de 2020, Segunda época. Buenos Aires: CLACSO.

Ouviña, H. y Thwaites Rey, M. (2018). (Edit.) Estados en disputa: auge y fractura del ciclo de impugnación al neoliberalismo en América Latina. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO/El Colectivo.

Ouviña, H. (24 de agosto del 2020). "Estallido: La Rebelión de Octubre en Ecuador". Recuperado de <https://redkapari.org/2020/08/24/estallido-la-rebelion-de-octubre-en-ecuador/>

Pino, Ch. (2020). "El estado de excepción de octubre: el retorno de la doctrina de seguridad nacional del Estado". En Ramírez, F. (Ed.) Octubre y el derecho a la resistencia: Revuelta popular y neoliberalismo en Ecuador (pp.221-). Buenos Aires: CLACSO.

ESTADO, VIOLENCIA Y PROTESTA EN COLOMBIA EN TIEMPOS DE PANDEMIA: ENTRE LA PROFUNDIZACIÓN DEL MODELO NEOLIBERAL Y LA DISPUTA DE LA HEGEMONÍA POLÍTICA

Luisa Natalia Caruso y Miguel Angel Beltrán¹

Las decisiones del actual presidente de Colombia, Iván Duque, se han caracterizado, en medio de la pandemia del Covid 19, por una profundización de la agenda neoliberal que ya traía antes de la misma. Meses antes de que declarara ‘la emergencia económica, social y ecológica’, el afianzamiento de estas medidas trajo consigo el creciente inconformismo de una gran parte de la población, que tuvo su mejor expresión en las masivas acciones de protesta de múltiples sectores sociales y políticos, en las ciudades y en zonas rurales, que protagonizaron el Paro nacional del 21 noviembre de 2019. Si bien la cuarentena forzada por los riesgos de contagio del virus, trajo un inicial congelamiento de estas movilizaciones, muy rápidamente dichos sectores se reactivaron y nuevamente salieron a las calles para reclamar salidas a la crisis ahondada por el Covid 19.

Estas protestas, aunque no logran una completa articulación, cuentan con un potencial importante de incidencia para futuros cambios. Las jornadas del pasado 9 y 10 de septiembre en rechazo a la brutalidad policial, así como la movilización de la “Minga por la vida, el territorio y la Paz” de los pueblos indígenas, afros y campesinos hacia la capital, sumado a la realización de un paro nacional el pasado 21 de octubre, hacen parte de estas iniciativas. En este sentido,

1 Natalia Caruso es Docente del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional. lncaruso@pedagógica.edu.co; Miguel Angel Beltrán es Profesor Asociado, Departamento de Sociología, Universidad Nacional de Colombia. mabeltranvi@unal.edu.co

nuestro objetivo en este ensayo es analizar tanto los procesos de profundización del modelo neoliberal como las propuestas alternativas a este Estado excluyente, que han tomado curso en los últimos años.

Para cumplir con este propósito, iniciaremos nuestro artículo presentando algunos elementos histórico-estructurales que caracterizan el ejercicio del poder por parte de las élites políticas y económicas; luego examinaremos los alcances y limitaciones de los Acuerdos de Paz firmado en 2016, entre la ex guerrilla de las FARC, y el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos y su incidencia en el momento actual, para finalmente señalar algunos elementos de coyuntura que den cuenta tanto del rumbo que ha tomado el gobierno del presidente Iván Duque durante este período de Pandemia, como las articulaciones, agendas y reivindicaciones, que sujetos políticos diversos vienen liderando, ya sea desde la perspectiva electoral para ser gobierno, o desde miradas más autonómicas frente al Estado.

COLOMBIA: UN ESTADO QUE SIEMBRA EL TERROR Y EL MIEDO

El Estado colombiano que ha representado históricamente los intereses de una clase dirigente, subordinada a las políticas intervencionistas de los Estados Unidos y al modelo desarrollista extractivista, pese a tener una escasa legitimidad y legalidad, ha logrado proyectar ante la comunidad internacional una imagen de cierta “institucionalidad democrática”, que se alimenta de mitos como el ser una de las naciones del continente que cuenta con la democracia más antigua y sostenida en la región. De acuerdo con esta narrativa oficial mientras en otros países de América Latina y el Caribe se generalizaron las dictaduras militares, en Colombia se sentaron las bases para consolidar la paz a través de un acuerdo bipartidista que garantizó la permanencia de las instituciones democráticas (Giraldo; 2015).

Según este relato, dicha vocación democrática en Colombia se afianzó en los decenios siguientes con la continuidad de los procesos electorales y por el hecho que en 1991, -a través de un proceso constituyente- se logró aprobar una Carta política avanzada que consagró una serie de mecanismos para la protección de los Derechos Humanos y la participación popular; reconoció los derechos culturales y territoriales de los grupos étnico y abrió la puerta para la promoción e impulso de procesos de negociación con movimientos armados insurgentes que lograron su conversión en organizaciones políticas legales, permitiendo que antiguos guerrilleros se integraran al aparato gubernamental.

En años recientes, la elección popular para la Alcaldía de Bogotá

de un ex guerrillero; junto con el nombramiento de un vicepresidente que durante años estuvo comprometido con las luchas obreras y sindicales; así como la exitosa materialización de un nuevo proceso de negociación entre el gobierno y la guerrilla -para 2016- más antigua de continente, que posibilitó el tránsito de ésta última a la vida política, sobre la base de un “*Acuerdo para la terminación del Conflicto y la Construcción de una paz estable y duradera*”, reforzarían este imaginario democrático de un país que -recurriendo a las vías del diálogo y priorizando los intereses de las víctimas- ha logrado poner fin a un conflicto interno con ribetes políticos, pero degradado por sus vínculos con las mafias del narcotráfico y su afectación creciente a la población civil (Pecaut; 2001).

En contraste con estas falaces imágenes y discursos -creados por las élites colombianas y alimentados por académicos y medios de comunicación hegemónicos- lo que se observa es un país al borde de un estallido social, con crudas cifras de desigualdad, pobreza, desempleo, asesinatos y genocidio de poblaciones campesinas, indígenas, afrodescendientes y partidos políticos de oposición; una participación altamente restringida de los sectores populares; un régimen neofascista, cada vez menos preocupado por mantener los mecanismos de la democracia formal; unos acuerdos de paz con las antiguas FARC totalmente incumplidos, unas medidas económicas que beneficia los grandes capitales transnacionales y deprime aún más a las clases menos favorecidas y una escala de destrucción de la naturaleza incalculable que consolida un despojo territorial creciente.

Colombia vive hoy un exterminio de lideresas y líderes sociales, que en el sólo período que va de la firma de los acuerdos de paz el 26 de noviembre de 2016 alcanza ya la dolorosa cifra de 1039 muertos; a lo cual se suma el asesinato de 234 ex combatientes asesinados (51 de los cuales se cometieron en los 10 primeros meses del presente año). Se está cometiendo así un genocidio contra los firmantes del Acuerdo de Paz y contra un colectivo de personas que ejercen un liderazgo social como reclamantes de tierras, defensores del territorio, de los derechos ambientales y humanos, que luchan contra las fumigaciones y los planes desarrollistas, con proyectos autónomos sustentados en la ancestralidad y el equilibrio con la naturaleza; y que integran Juntas de acción comunal, comunidades étnicas o sindicatos agrarios. Éstos son vistos como un obstáculo para los proyectos extractivistas.

Estamos entonces ante un Estado que a través de un conjunto de prácticas, instituciones y estructuras -que incluso niegan ese mismo ordenamiento jurídico legal-sigue ejerciendo la violencia para

sembrar el miedo y el terror entre la población civil, recurriendo a la construcción de un gigantesco aparato militar que combina doctrinas confeccionadas por la misma élites en su accionar contrainsurgente con teorías foráneas como la Doctrina de la Seguridad Nacional, para enfrentar la supuesta infiltración de un “enemigo interno” llámese éste comunismo o terrorismo, pero que en realidad busca exterminar cualquier expresión de protesta popular que confronte el *Stablishment* (Vega Cantor; 2016).

Aunado a ello está el uso arbitrario del sistema jurídico que judicializa temerariamente a los líderes y lideresas sociales, sin tener pruebas o recurriendo a pruebas ilícitas e ilegales y falsos testigos, que, con la intervención directa de los organismos de seguridad del Estado, configuran los llamados “montajes judiciales”. Práctica que se ha llevado a cabo a lo largo y ancho del país, siendo la cárcel un instrumento de silenciamiento del pensamiento crítico y de desarticulación de las organizaciones sociales que, a su vez, son criminalizadas al amparo de la tipificación de “conductas delictivas” donde sólo existen expresiones legítimas de protesta o a lo sumo comportamientos beligerantes en el marco de la misma. Los sectores más afectados por esta persecución jurídica han sido los integrantes de la oposición política y social, así como estudiantes y egresados de las universidades públicas del país, a quienes se les ha pretendido vincular con organizaciones armadas como el Ejército de Liberación (ELN) o las disidencias de las FARC, con el recurrente y desgastado discurso de una “infiltración armada” en las protestas pacíficas. En ese mismo sentido, se ha pretendido estigmatizar y penalizar con el calificativo de “vándalo” a quienes ejercen ciertas modalidades de protesta que “alteran el orden público” o por el sólo hecho de utilizar elementos que, como la capucha, impiden identificar su rostro.

Paralelo a este andamiaje jurídico, militar y mediático, y en estrecha relación con el Estado, siguen actuando las estructuras paramilitares producto de una compleja alianza de grupos de narcotraficantes, ganaderos, élites políticas nacionales y regionales, así como integrantes de las Fuerzas Armadas, orientadas al cumplimiento de labores contrainsurgentes, y fundamentalmente a ampliar la riqueza de empresarios y terratenientes a través del despojo a los campesinos de sus bienes y tierras. Este proceso de larga duración, nos remite a los tiempos de la mal llamada “violencia bipartidista”, donde actuaron -guardando sus particularidades- bajo la denominación de “pájaros”, “aplanchadores” o “guerrillas de paz”. Un dato que corrobora este des-

pojo es el desplazamiento forzado de 16190 personas de su territorio, en el primer semestre de 2020.²

EL ETERNO RETORNO: NI PAZ NI POSCONFLICTO, INCUMPLIMIENTO ESTATAL DE LOS ACUERDOS

En medio de la pandemia, los incumplimientos del *Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradero* -suscrito por el gobierno de Juan Manuel Santos y la Guerrilla de las FARC, luego de un largo y accidentado proceso de negociación que se prolongó por más de cuatro años (2012-2016)- fueron más evidentes. El acuerdo se constituyó en una importante apuesta por la superación definitiva del conflicto social y armado, partiendo de su reconocimiento y de la necesidad de erradicar las causas que dieron origen al mismo. En esa perspectiva, permitió colocar sobre la arena pública temas como la reforma rural integral, la participación y la apertura democrática para construir la paz, la solución al problema de los cultivos de uso ilícito, al tiempo que lo que logró activar la movilización social.

Pero si bien desde sus inicios las FARC manifestaron su compromiso con los acuerdos pactados, haciendo dejación de armas y avanzando hacia la conformación de un nuevo partido político legal, muy pronto los sistemáticos incumplimientos del Estado empujaron el proceso de paz hacia situaciones que recordaban hechos históricos pasados, como la ausencia de garantías reales y efectivas para la reincorporación a la vida social, política y económica del país de los ex guerrilleros, derivando en el exterminio sistemático de los firmantes del Acuerdo de Paz.

Estamos entonces ante un Estado que históricamente ha incumplido con los acuerdos que firma, no sólo con las organizaciones insurgentes sino con los diferentes sectores sociales, al punto que éstos permanentemente tienen que movilizarse para exigir al Estado sus compromisos con lo suscrito. En el caso específico de los Acuerdos de La Habana, tras el triunfo del “no”, en el plebiscito de octubre de 2016, el cual se había convocado para refrendar los acuerdos de paz, condujo a una modificación de los mismos, restringiendo aspectos relacionados con los escenarios de participación democrática que se pretendía abrir. Ciertamente es que disminuyeron los enfrentamientos ar-

2 “El desplazamiento aumentó un 96,8 % este año, según informe”. El Tiempo, agosto 20 de 2020, en <https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/informe-sobre-desplazamiento-e-implementacion-del-acuerdo-de-paz-en-2020-530232>

mados con la fuerza pública y se redujo la muerte de jóvenes soldados, en su mayor parte provenientes de los sectores populares. No obstante, la apuesta por erradicar la violencia como método de acción política, se redujo al desarme de la insurgencia armada, sin que el Estado colombiano asumiera el desmonte de sus estructuras paramilitares, cuya actividad ha persistido bajo nuevas denominaciones, copando antiguos territorios que hicieron parte del control de las FARC y estableciendo nuevas alianzas estratégicas con el fin de adelantar su labor delincriminal bajo la protección tácita o activa de empresarios, del poder político y del Estado³.

Como parte de sus estrategias desinformativas, en el discurso oficial del gobierno estos grupos han sido presentados como expresiones aisladas o “remanentes” del conflicto, acuñando la difusa sigla de GAO (Grupos Armados Organizados) para difuminar su naturaleza contrainsurgente y diluir la responsabilidad estatal en los crecientes hechos de violencia que han estremecido al país⁴. Al mismo tiempo se pretende desvirtuar el carácter político de organizaciones insurgentes, las cuales configuran un amplio y complejo espectro que va desde el Ejército de Liberación Nacional (ELN), convertido hoy en la guerrilla más antigua del país y el continente, hasta algunas disidencias armadas que asumen el legado de los fundadores de las FARC, pasando por las autodenominadas FARC-EP segunda Marquetalia, lideradas por quienes en su momento estuvieron representando a esta guerrilla en la mesa de negociaciones.

3 Sobre el llamado neoparamilitarismo ver: Silvia Juliana Becerra Ostos. Lecciones para aprender del eterno retorno de la guerra. Bogotá: Comisión Colombiana de Juristas. 2018; y Teófilo Vásquez Delgado (Coord.) Grupos Armados Posdesmovilización (2006-2015) Trayectorias, rupturas y continuidades. Bogotá: Centro Nacional de Memoria Histórica, 2016.

4 De acuerdo con los lineamientos del Ministerio de Defensa Nacional los grupos Armados Organizados, se definen como aquellos “que bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre una parte del territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas” (Ministerio de Defensa Nacional, Directiva Permanente, abril 22 de 2016, p. 5), teniendo como característica el uso de “la violencia armada contra la Fuerza Pública u otras instituciones del Estado, la población civil, bienes civiles o contra otros grupos armados. b. Que tenga la capacidad de generar un nivel de violencia armada que supere la de los disturbios y tensiones internas. c. Que tenga una organización y un mando que ejerce liderazgo o dirección sobre sus miembros, que le permitan usar la violencia contra la población civil, bienes civiles o la Fuerza Pública, en áreas del territorio nacional (Ibid., p. 5)

DUQUE: CRISIS DE LEGITIMIDAD AGRAVADA POR LA PANDEMIA

El 17 de junio de 2018, tras llevarse a cabo la segunda vuelta presidencial, los colombianos eligieron a Iván Duque, del partido Centro Democrático, como primer mandatario de la nación. Con 10.373.080 votos (según los reportes de la Registraduría General de la Nación)⁵. El nuevo titular del ejecutivo contó con el respaldo mayoritario de la clase dirigente, incluyendo el apoyo de sectores que se proyectaban como independientes, teniendo como contradictor al candidato de la “Colombia Humana”, Gustavo Petro, que con 8.034.189 votos logró recoger la inconformidad de amplias franjas sociales, que aunque no necesariamente se identificaban con sus propuestas de gobierno ni su talante político, vieron en él una intención de cambio, asociada a la idea de mantener los ya deteriorados acuerdos de paz.

Como ha sido reiterado en los procesos electorales colombianos, los fantasmas del fraude y la corrupción estuvieron presentes, esta vez por cuenta de las acusaciones de la ex congresista Aída Merlano, detenida hoy en Venezuela, quien afirmó que la campaña del presidente Duque habría incurrido en compra de votos en la región Caribe. El escándalo conocido como la “Ñeñe política”, puso de presente el ingreso de dineros del narcotraficante José Guillermo Hernández Aponte (asesinado recientemente en Brasil) y más conocido como “El Ñeñe”, quien estuvo al frente de la organización de la campaña presidencial en los departamentos de Guajira y Cesar. Numerosas fotos de Duque abrazado con el mafioso y un expediente abierto por el Tribunal electoral colombiano al primer mandatario, dan cuerpo a esta acusación⁶. No menos impacto ha tenido la revelación sobre la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, en el sentido de que su hermano había sido condenado en 1997 a cerca de cinco años de prisión en los Estados Unidos por traficar heroína desde Aruba a ese país. La fianza para su libertad fue pagada por la ahora vicepresidente y su esposo Álvaro Rincón, quienes a su vez han sido señalados de tener relaciones comerciales con el narcotraficante colombiano Guillermo León Acevedo Giraldo, conocido como “Memo Fantasma”.

Desde los tiempos de la presidencia de Julio César Turbay Ayala (1978-1982), no se había visto la figura del ejecutivo expuesta a tantas burlas públicas. La utilización del avión presidencial para llevar a niños y sus madres a una fiesta infantil de su hija; la exhibición ante

5 “Iván Duque es el nuevo presidente con más de diez millones de votos”. Bogotá: El Tiempo, junio 17 de 2018.

6 “El Fantasma del Ñeñe” en Revista Semana, 3 de julio de 2020

la Asamblea General de las Naciones Unidas de fotos que buscaban demostrar la participación del gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en el entrenamiento de grupos armados y narcotraficantes y que resultaron ser imágenes tomadas años atrás en territorio colombiano. Todo lo anterior, sumado a su aparición pública con un chaleco de la policía, expresando su solidaridad con los ataques de que fueron objetos los Centros de Atención Inmediata (CAI) de esta institución, en protesta por el asesinato del ciudadano Javier Ordoñez, llevaron a que fuera aún mayor la ilegitimidad del gobierno.

Colombia, a partir de 1991 -cuando consagró una nueva Constitución-, abrió las puertas a las políticas de apertura económica y la implementación del modelo neoliberal, con todos sus devastadores efectos en lo social y ambiental. Con el COVID-19, estas problemáticas se han profundizado, al tiempo que se han visibilizado de manera cruda y descarnada las agudas desigualdades del actual régimen. Según el Índice Global de los Derechos de la Confederación Sindical Internacional (CSI) de 2019, Colombia es de los países del mundo con las condiciones más indignas para trabajar⁷. Lo que se expresa también en que una gran parte de la población tiene un trabajo informal, sin ningún tipo de garantía laboral, y que vive del ‘rebusque’ diario. Según el DANE entre diciembre de 2019 y febrero de 2020, la población trabajadora informal correspondía al 47,8% de la población ‘ocupada’, en las 23 ciudades y zonas metropolitanas⁸. A esto se suma que las tasas de desempleo -que históricamente han sido una de las más altas de la región- se incrementaron aún más con la pandemia, según el DANE, perdieron su empleo 4,902.000 personas, en mayo de este año, que correspondería a 21,4% de desempleo a nivel nacional.

Frente a la desigualdad estructural, Colombia es el segundo país más desigual después de Brasil⁹, a lo que se suma las amplias brechas entre el medio urbano y rural; la desigualdad regional; y las inequidades de género, entre otras. Según las estimaciones de Fedesarrollo, la pobreza aumentará hasta en un 38% en el 2020; según el informe del

7 Ver: Índice Global de los Derechos de la CSI, 2019. Violaciones de los derechos de los trabajadores. En: <https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/2019-06-ituc-global-rights-index-2019-infographic-violation-workers-rights-es.pdf> y Índice Global de los Derechos de la CSI, 2019. Los peores países del mundo para los trabajadores. En: <https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/2019-06-ituc-global-rights-index-2019-report-es.pdf>

8 “La realidad de los trabajadores informales durante la crisis”. El Tiempo. Bogotá: 10 de junio 2020. En: <https://www.eltiempo.com/economia/sectores/trabajo-en-colombia-las-cifras-del-empleo-informal-durante-la-cuarentena-por-covid-19-487578>

9 Ver: Panorama Social de América Latina CEPAL, Santiago: 2019, p. 42. En: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44969/5/S1901133_es.pdf

CEDE de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, en el actual escenario de crisis del Covid-19, “7,3 millones de personas” ingresan a la condición de pobreza, con una “caída de ingresos mensuales que ronda los \$4,8 billones”¹⁰.

En este panorama de desigualdad y exclusión, en octubre las personas contagiadas del virus del COVID -19 superaron el millón de personas con más de 31.515 mil muertos. La velocidad del contagio aumentó, por las recientes medidas del gobierno en septiembre que -atendiendo las demandas de los sectores empresariales y comerciales del país- decidió levantar la cuarentena sin acompañar estas decisiones con garantías para los sectores menos favorecidos, ni mucho menos realizar cambios en el precario sistema de salud, privatizado desde 1993¹¹. Esto derivará en un incremento en las curvas de contagio y mortalidad en los próximos meses.

DECRETOS DE PANDEMIA: MÁS PARA LOS RICOS Y MENOS PARA LOS POBRES

En el contexto (y con el pretexto) de tomar medidas para atender la emergencia generada por la llegada del Covid-19, el presidente Duque declaró el Estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional, al amparo del cual se creó el Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), administrado por el Ministerio de Hacienda, seguido de un Decreto que autorizaba al ejecutivo manejar los recursos del Fondo de Ahorro y Estabilización (unos 14 billones de pesos)¹², constituido como la principal fuente de financiamiento

10 “¿El país retrocedería 20 años en la reducción de pobreza?” en Portafolio, Mayo 20 de 2020.

11 A partir de la Ley 100 de 1993, cuyo ponente fue el entonces senador y hoy expresidente Álvaro Uribe Vélez, se da la privatización plena de salud en Colombia, el médico Floro Hermes Gómez plantea que fue “un diseño político institucional hecho por la élite política nacional colombiana para enriquecerse y enriquecer a los intermediarios financieros del sector” Ver: <https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13617257>. El doctor José Ricardo Navarro, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), planteó que “Ley 100 es otra pandemia para el país” Ver: <https://unperiodico.unal.edu.co/pages/detail/ley-100-es-otra-pandemia-para-el-pais/>. A pesar del desastroso balance, en medio de la pandemia se presentaron proyectos de ley para aumentar aún más los recursos hacia las aseguradoras de salud privadas, tal como lo denuncia el doctor Mario Hernández. Ver: <https://sxxi.net/2020/08/02/la-salud-publica-y-el-sistema-de-salud-en-colombia-entrevista-a-mario-hernandez/>.

12 A la fecha el presupuesto del FOME remonta la cifra de los 30 billones de pesos, lo cual equivale a la cifra propuesta bajo la figura de “Renta Básica de Emergencia”, por algunos congresistas de la oposición que busca beneficiar 9 millones de hogares colombianos, a través de un auxilio, equivalente a un salario mínimo vigente, duran-

del mencionado organismo, permitiendo que éstos facilitaran liquidez al sector financiero, a través de la adquisición de bonos de deuda y acciones, y la concesión de créditos a empresas privadas, mixtas y públicas perjudicadas por la emergencia y que sean consideradas como de interés nacional.

Por esta vía se ha beneficiado al Grupo Aval, que controla más de las dos terceras partes del sistema financiero privado y que ha estado vinculado al escándalo de corrupción de Odebrecht. Así, se profundiza el Estado clientelista y corrupto, que guarda estos recursos para el salvamento de empresas privadas -y algunas que tienen un porcentaje público-, para lanzar un salvavidas a los más ricos. Un informe presentado por la Procuraduría General de la Nación, a finales de agosto, llama la atención que de los \$8.2 billones destinados para la atención de la emergencia sanitaria y para el aseguramiento en salud de los colombianos, el Ministerio de Salud sólo ha hecho efectivo cerca de medio billón de pesos, a la vez que advierte que “no se han ejecutado los rubros correspondientes al aseguramiento, ampliación de la oferta de servicios y el fortalecimiento de la salud pública, para garantizar la prestación de servicios a la ciudadanía”¹³. Entre tanto, se incrementa la deuda con el Fondo Monetario Internacional a través de la línea de Crédito Flexible supuestamente para gestionar los riesgos generados por la pandemia.

Siguiendo estos mismos lineamientos, el gobierno de Duque otorgó un gigantesco préstamo de USD 370 millones a la compañía aérea Avianca declarada en quiebra, que tiene un porcentaje mayoritario de capital privado extranjero, particularmente de Panamá. Una empresa que no sólo ha desarrollado una política de persecución laboral contra sus trabajadores, sino que además cuenta entre sus altos ejecutivos con la ex viceministra de Comunicaciones del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, y con la hermana del presidente, María Paula Duque, quien se desempeña como vicepresidenta senior de Relaciones Estratégicas y Experiencia al Cliente de dicha compañía aérea. Las protestas desde varios sectores sociales y políticos, así como las demandas jurídicas, llevaron a que en este momento el crédito se encuentre suspendido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca¹⁴.

te tres meses, y medio salario mínimo durante el cuarto y quinto mes.

13 Procuraduría General de la Nación “Deuda con IPS privadas, públicas y mixtas del país asciende a más de 40.1 billones de pesos” en Procuraduría, Boletín 585, https://www.procuraduria.gov.co/portal/Deuda-con-IPS-privadas-publicas-y-mixtas-del-pais-asciende-a-mas-de-40.1-billones-de-pesos_-Procuraduria.news

14 “La Justicia colombiana frena el salvataje estatal a Avianca” en hosteltur. Edi-

Sumado a este Decreto se han expedido otros 160 que poco o nada tienen que ver con la búsqueda de soluciones a la pandemia y que sí revelan claras intenciones de profundizar el modelo neoliberal, el expolio de los recursos y la violencia contra la oposición. Otro de estos controvertidos decretos fue el Decreto 811 de 2020 que le permitía al Estado comprar acciones en cualquier empresa en riesgo en el marco del Estado de Emergencia y luego venderlas. Con esto se buscaba enajenar las empresas públicas, entre ellas ECOPETROL, medida que ya venía planteando el gobierno antes de la pandemia, y que ahora pretendía hacerse efectiva con el argumento de que era necesaria su venta para solventar la crisis del Covid-19. En medio de las protestas de la Unión Sindical Obrera, a finales de septiembre el Decreto fue declarado inexecutable por la Corte Constitucional.

La nueva reforma pensional, que estaba en proyecto el año pasado -y que fue una de las razones del paro del 21 N en el 2019- ha seguido su curso, y con ella toda la propuesta de mayor flexibilización laboral, dejando en claro que los billones de pesos del fondo, lejos de ser convertidos en ayudas a la población, para mitigar y soportar la crisis económica y darle un mayor soporte financiero a la salud pública y a la educación pública, lo que hasta ahora hemos visto es que todos los gastos generados a partir de ese dinero han sido insuficientes, mal invertidos o inexistentes. El Estado, a través de sus bancadas en el Congreso, se ha negado tajantemente a otorgar la renta básica pedida por un número significativo de parlamentarios y organizaciones sociales, para paliar la miseria de nueve millones de personas.

Paralelo a ello, se profundiza el modelo extractivista, minero-energético. Así, desde la firma del acuerdo con las FARC ha aumentado, sin ningún tipo de control, la deforestación en todos los territorios de colonización, y de frontera, aunado a la vulneración de las comunidades rurales que están en estos territorios de disputa de los grandes intereses extractivos. Se pretende responsabilizar de esta deforestación a las disidencias y a los grupos armados organizados (GAO), eludiendo de esta manera la responsabilidad del Estado, que en medio de la pandemia ha expedido una serie de decretos para continuar explotando la Amazonía. Asimismo, ha reactivado la fumigación de cultivos de uso ilícito e intentado dar vía libre a la implementación del Fracking, presionando, a su vez, una nueva normatividad que flexibilice la consulta previa, como mecanismo para entrar a los territorios de pueblos

indígenas y afrodescendientes.

De este modo, intentó formular una consulta previa virtual, cuando la mayoría de estos pueblos carecen de conectividad. Por otro lado, en medio del incumplimiento de la ley de tierras, que buscaba devolver las tierras usurpadas en medio del conflicto armado, el gobierno pretende reglamentar las Zonas de Desarrollo Empresarial que “abriría paso a la entrega de baldíos a empresas nacionales o extranjeras, y a la violación de los derechos territoriales de los pueblos indígenas, si se destinan las tierras a privados en vez de priorizar la formalización de sus territorios”¹⁵.

En el caso de los pueblos indígenas y afrodescendientes, la pandemia ha sido utilizada por el gobierno para acelerar la entrada de megaproyectos extractivos a sus territorios. El interés por ‘regular’ la consulta previa venía desde el gobierno de Santos, pero con la nueva contingencia sanitaria, el Ministerio del Interior llegó al absurdo de expedir una circular¹⁶ que autorizaba la realización virtual de consultas previas. Ante las protestas de las organizaciones étnicas, derogó la normativa, pero dejó abierta la posibilidad de realizar estas consultas virtuales si se tenían los accesos de conectividad virtual, lo que para el Proceso de Comunidades Negras (PCN) significa una estrategia “de aprovechamiento circunstancial a causa de la pandemia, toda vez que las poblaciones se encuentran más vulnerables”¹⁷. A esto se suma las propuestas de los sectores empresariales, aliados con el actual gobierno Duque y su bancada en el Congreso, encaminadas en flexibilizar los criterios para la expedición de licencias ambientales, que permitan agilizar los proyectos extractivos, con el argumento de ser el mejor camino para la reactivación económica en medio de la pandemia, lo cual constituye una nueva amenaza de despojo territorial, cultural y ambiental para estos pueblos y comunidades¹⁸.

15 Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI). “Las Zonas de Desarrollo Empresarial y los pueblos indígenas: ¿por qué violan la ley y la Constitución?” 23 de septiembre 2020, en <http://cntiindigena.org/las-zonas-de-desarrollo-empresarial-y-los-pueblos-indigenas-por-que-violan-la-ley-y-la-constitucion/>

16 Ministerio del Interior. Circular Externa del 27 de marzo de 2020. Bogotá: CIR2020-29-DMI-1000.

17 Ver: <https://renacientes.net/blog/2020/10/22/lo-continuo-y-lo-discontinuo-de-la-pandemia-en-las-poblaciones-negras-afrocolombianas-raizales-y-palenqueras-narp/>

18 Ver: Carta al presidente Duque de 130 organizaciones sociales y ONGs. 15 de abril 2020. https://colectivodeabogados.org/IMG/pdf/carta_abierta_enviada_presidente_colombia_-_derechos_comunidades_etnicas.pdf

VIOLENCIA POLICIAL EN EL MARCO DE LA PANDEMIA

La profundización de la agenda neoliberal en el contexto de la pandemia ha venido de la mano con el incremento de la violencia estatal contra grupos, comunidades y organizaciones sociales con el propósito de desarticularlas y reducir su capacidad de movilización; para ello ha intensificado estrategias represivas como la generalización de los montajes judiciales y el uso de los organismos armados del Estado. Así, casi simultáneamente con el inicio de la cuarentena obligatoria en todo el territorio nacional, para controlar los riesgos generados por el Covid 19, la legítima exigencia de los presos de las cárceles colombianas fue respondida con el uso desproporcionado de la violencia, por parte del personal de vigilancia y custodia del INPEC (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario) asesinando a 23 internos y dejando a 83 más con graves lesiones y heridas.

Este uso explícito, directo y sistemático de la represión por parte del Estado ha sido la constante en el tratamiento dado a las protestas de sectores populares, estudiantes y otros que se han movilizado para expresar su rechazo a un paquete de medidas neoliberales que favorecen a los grupos financieros y empresariales y vulnera a amplios sectores de la población. Un punto de inflexión en esta estrategia represiva se alcanzó el 9 y 10 de septiembre, cuando en Bogotá y la localidad de Soacha fueron asesinados 14 personas, la mayoría de ellos jóvenes, que salieron a las calles a protestar en repudio al accionar violento de la policía en contra del ciudadano Javier Ordoñez. Hecho que quedó registrado en un video que se difundió ampliamente en las redes sociales.

Al amparo de la pandemia, la fuerza pública y particularmente el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), han cometido graves violaciones a los derechos humanos que apenas si son registrados por los medios de comunicación oficiales. Es el caso del asesinato de una mujer adulta mayor y un bebé en un operativo de desalojo de comunidades indígenas desarrollado por dicho escuadrón el pasado mes de Octubre (2020) en un lote ubicado en la ciudad de Leticia (Amazonas). Cuatro meses atrás fue asesinado de un tiro en el cuello el joven de 15 años, Duván Mateo Aldana, en otro operativo de desalojo en la ciudadela Sucre del municipio de Soacha, donde igualmente participó este organismo represivo. Simultáneamente a estos hechos se han incrementado las masacres contra la población civil, cometidas por grupos paramilitares en complicidad -ya sea por acción u omisión- de las autoridades estatales. En lo que va corrido del año (2020) se registran 68 masacres, 58 de las cuales se efectuaron en el marco de

la pandemia¹⁹, siendo el mes de septiembre -con 16 masacres- uno de los más críticos. El discurso oficial, publicitado por los medios de comunicación, suele culpar de estos crímenes a los difusos Grupos Armados Organizados (GAO) ocultando quienes han sido los verdaderos responsables de estas masacres.

MAYOR PRESENCIA IMPERIAL

El Estado colombiano desde finales del siglo XIX, se ha caracterizado por una total subordinación a los lineamientos ordenados por Estados Unidos. Así, no hemos tenido ningún gobierno, que haya planteado una agenda autónoma, o se haya opuesto abiertamente a alguna de sus políticas, con esto el espíritu antimperialista ha sido prácticamente inexistente (Vega Cantor; 2014). No obstante, el actual gobierno de Duque, ha superado con creces su arrodillamiento, plegándose a la agenda del gobierno Trump en medio del declive hegemónico de Estados Unidos.

Así, el gobierno del presidente Duque se ha convertido en una pieza clave en las acciones de agresión contra la República Bolivariana de Venezuela. Las reiteradas visitas del ex director de la Central de Inteligencia Americana (CIA) y ahora Secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, así como la vergonzosa admisión de tropas estadounidenses a territorio colombiano sin la aprobación del Congreso de República (en un episodio que fue informado directamente por la embajada de los EU), han reafirmado estos propósitos, que tuvo un nuevo capítulo en la frustrada incursión de paramilitares y mercenarios venezolanos que pretendían atacar contra el primer mandatario venezolano, Nicolás Maduro y altos funcionarios de su gobierno. En esta fallida operación militar se comprobó la participación de dos ex miembros de las Fuerzas Especiales estadounidenses, que fueron detenidos en costas venezolanas, que actuaban desde campos de entrenamiento localizados en el norte de Colombia.

Toda esta estrategia intervencionista se complementa con el llamado acuerdo “Colombia crece” dado a conocer el pasado 17 de agosto por el presidente Iván Duque, luego de una reunión con una misión estadounidense en la que participaron el asesor de seguridad nacional de los EU, el consultor para asuntos latinoamericanos de ese país, y el director de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional. El mencionado acuerdo binacional se trata de un “nuevo Plan

19 Observatorio de Conflictos, Paz y Derechos Humanos de Indepaz. Informe de masacres en Colombia durante el 2020. Con corte 20 de Octubre de 2020.

Colombia para concentrarnos en el desarrollo económico y seguridad de Colombia”²⁰, lo que deja entrever los propósitos contrainsurgentes del mismo. En dicha reunión participó también el almirante Craig Faller, jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, organismo que ha venido desplegando su fuerza en la región con el pretexto de enfrentar el narcotráfico, y apuntalando su potencial destructivo contra el gobierno de Nicolás Maduro de Venezuela a quien considera “una amenaza para la libertad democrática en las naciones vecinas de América del Sur”²¹.

LAS POSIBILIDADES Y LIMITACIONES DE LAS CONSTRUCCIONES CONTRAHEGEMÓNICAS RECIENTES

Las resistencias y protestas de los sectores populares y políticos alternativos, en el contexto de la Pandemia no obedece a elementos puramente coyunturales, sino que proyecta elementos de continuidad y ruptura con las dinámicas contrahegemónicas acaecidas el último decenio. En este período podemos identificar confluencias nuevas, de sujetos diversos, en lo étnico y político, siendo significativos entre otros: la creación de importantes plataformas de carácter nacional e intersectorial como la Marcha Patriótica y el Congreso de los Pueblos (2010); la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, MANE (2011); el paro nacional agrario (2013) en el que se conforma la Cumbre Agraria, Étnica y Popular; las movilizaciones del 2016 en defensa del Acuerdo de Paz; los paros de maestros y paros cívico en Chocó y Buenaventura (2017); las movilizaciones estudiantiles y el paro nacional universitario (2018).

Pese a que el proceso de paz del gobierno Santos con las FARC (2011-2016) se desarrolló en medio de una cruenta guerra, algunas organizaciones sociales y políticas vieron en él un momento de cierta apertura democrática, que abría un mayor margen de acción para las movilizaciones, y así lo parecen indicar las cifras: En el 2016 (año en el que se suscribe el Acuerdo Final), las protestas superan en un 91% los de 2013, y en 132% las de 2014. En el 2016 hubo en promedio de

20 Presidencia de la República. Colombia y EE.UU. lanzan la iniciativa ‘Colombia Crece’ para combatir el delito y, al mismo tiempo, llevar inversión, desarrollo y obras a zonas rurales y comunidades vulnerables” en <https://idm.presidencia.gov.co/prensa/colombia-y-eeuu-lanzan-la-iniciativa-colombia-crece-para-combatir-el-delito-y-al-mismo-tiempo-llevar-inversion-200817>

21 Antonio de la Cruz. “El régimen de Maduro: ‘centro de amenaza y ataques a la región’”, El Nacional, en <https://www.elnacional.com/opinion/el-regimen-de-maduro-centro-de-amenaza-y-ataques-a-la-region/>

1,5 eventos por día y ya para 2017 aumenta a 1,9 por día²². Pero más allá de estos datos, está el hecho de que la negociación y el acuerdo de paz, permitió demandas renovadas por la paz, incorporándose otras reivindicaciones como los temas ambientales, territoriales, de derechos humanos, de género, étnicos, entre otros. Lo anterior no obstó para que desde el discurso oficial se pretendiera limitar la movilización social con el sofisma de que cualquier expresión de protesta fortalecía a los enemigos de la paz. De este modo se trataba de contener el creciente inconformismo popular frente a los problemas estructurales que el modelo neoliberal había generado y que no fueron incorporados en la agenda de los Acuerdos. Desde los inicios de los diálogos gobierno-guerrilla en Oslo Noruega (2012), en sus declaraciones públicas el presidente Juan Manuel Santos reiteró una y otra vez que no entraría “a negociar ni a conversar sobre aspectos fundamentales de la vida nacional, como la propia Constitución, el modelo de desarrollo, el concepto de propiedad privada”²³.

Después de suscrito el Acuerdo de Paz (2016), el sentimiento de esperanza que muchas poblaciones urbanas y rurales vivieron -sobre todo en las zonas donde se había sentido más crudamente el conflicto social y armado- se mantuvo mientras hubo programas del gobierno -con recursos de los países garantes de la implementación- para la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito. Sin embargo, una gran parte de las comunidades campesinas, y fundamentalmente afrodescendientes e indígenas, que no fueron beneficiadas por estos programas, se vieron forzadas a sembrar nuevamente coca. Esta tendencia se vino a reforzar con las modificaciones que recibió el Acuerdo, luego de la pérdida del Plebiscito por la Paz (2 de octubre de 2016) y que terminó por priorizar la perspectiva de seguridad y la consolidación territorial, por encima de los reclamos de los pobladores rurales²⁴.

22 ¿Dónde, cómo y porqué se movilizan los colombianos? Fundación Ideas para la Paz, Bogotá: octubre 2017. En: <https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgxwK-jBTWLFnqJwdGhpZSdgCzJWQf?projector=1&messagePartId=0.1>

23 “Santos: ‘El modelo económico y político no está en discusión con las FARC’ en Semana 16 de noviembre de 2012. <https://www.semana.com/nacion/articulo/santos-el-modelo-economico-politico-no-esta-discusion-farc/267919-3/>

24 Para un balance de los Acuerdos de paz, y específicamente en lo referente a la sustitución de cultivos de uso ilícito ver: Yenly Angélica Méndez Blanco, Johana Silva Aldana and Ana María González Suárez. “El Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS): balance, retrocesos y desfiguraciones”. En: El Acuerdo de paz en Colombia: Entre la perfidia y la potencia transformadora. Coordinador: Jairo Estrada Álvarez. CLACSO, 2019, p. 115. En: https://www.jstor.org/stable/j.ctvt6rknnp.8?seq=25#metadata_info_tab_contents

Con la llegada del nuevo gobierno del presidente Iván Duque (2018), no se logró por completo “hacer trizas el Acuerdo”, como era el propósito de su partido, el Centro Democrático, pero sí derivó en un total incumplimiento en los procesos de implementación del mismo, bajo la divisa de una “Paz con legalidad”, en tanto imponía un conjunto de medidas en materia laboral, pensional, manejo fiscal, entre otras, conocidas popularmente como “el paquetazo”. Es así como, de la mano con los ecos de las protestas de octubre en Chile y Ecuador, y la consigna “A parar para avanzar”, el primer año del gobierno de Duque enfrentó una masiva protesta en las calles, que incorpora nuevas modalidades de acción como los cacerolazos, iniciativas artísticas de distinto tipo, formas novedosas de organización territorial, entre las que se destacan las asambleas barriales, en diferentes ciudades del país.

Al mismo tiempo, el recorrido de la Minga interétnica e intercultural del Cauca -la cual se lanza en el 2004, como una propuesta política y de acción indígena²⁵, en perspectiva de aliarse con otros sectores sociales y otros territorios- ha sido fundamental para las confluencias diversas -de sujetos y reivindicaciones- que se manifestarán en el Paro Nacional del 21 de noviembre (2019). Este último tomó impulso bajo el Comité Nacional de Paro, compuesto por las centrales obreras, organizaciones sociales y políticas, que logró armar un pliego de exigencias de 104 puntos²⁶. No obstante, la represión no se hizo esperar, el 25 de noviembre, en medio de una de las jornadas de paro, el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), asesinó por la espalda, al joven Dylan Cruz, y dejando heridos de gravedad a otros jóvenes. En medio de un pueblo que parecía haber naturalizado el conflicto social y armado, hubo un estallido generalizado de indignación que prolongó el paro durante varias semanas más.

25 La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), el 26 de agosto del 2004 lanza la propuesta a través de un comunicado: “Propuesta política y de acción de los pueblos indígenas”, en la que se plasman los ejes principales de la convocatoria de la Minga por la Vida, la Justicia, la Autonomía y la Libertad, que se realizó en septiembre del mismo año. En medio de esta Minga se hizo una asamblea en la ciudad de Cali (18 de septiembre), con participación de indígenas, afrodescendientes, campesinos y estudiantes, que presentarán el Mandato, Indígena y Popular (El desafío nos convoca), en la que se llama a la unión de los distintos sectores sociales y políticos para resistir y construir un “Proyecto de Vida Tejido por nosotros desde los Pueblos”.

26 Agenda del Comité Nacional de Paro para la negociación con el gobierno nacional. Bogotá: 19 de diciembre de 2019. Ver en: http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2019/12/NuevoDocumento-2019-12-17-17.37.50_compressed.pdf

Mientras el gobierno del presidente Duque ofrecía “conversar” y no “negociar”, al tiempo que trataba de sacar adelante su “paquetazo”, un sector significativo de los y las jóvenes -que habían mantenido el paro en las calles-, principalmente los organizados, se distanciaban de los voceros del Comité Nacional de Paro, planteándole críticas a su burocratismo o su interés de consolidar algunas agendas sobre las otras. Al mismo tiempo, desde sectores del Comité Nacional de Paro, se percibía a estos y estas jóvenes, dispersos, con formas organizativas poco estructuradas, lo cual les impedía comprender los alcances de estas nuevas formas de indignación e inconformismo. Se expresa entonces, una fuerte tensión, que ha venido profundizándose en el polo popular, entre las estructuras ‘tradicionales’ organizadas (sindicatos y partidos políticos alternativos), y los sectores sociales (estudiantes, organizaciones indígenas, campesinas y afrodescendientes, espacios barriales, entre otros) que demandan nuevas formas de representación, organización y vocería. Entre enero y marzo de 2020, varios procesos estudiantiles y comunitarios, a nivel urbano y rural, intentan reorganizarse para que el paro renazca. En este escenario llega la pandemia del COVID 19.

PROTESTAS Y PROPUESTAS EN PANDEMIA

Desde el inicio y durante la pandemia las protestas sociales han estado presentes. En medio del desconcierto inicial, las organizaciones comunitarias étnicas y campesinas, se replegaron en sus territorios, por un lado, por el confinamiento estricto que se impuso y por otro, por la certeza que la precaria situación de la salud en Colombia, no les garantizaba ninguna protección. Con esto, las agendas locales de movilización, formación y reflexión que se tenían planeadas, se aplazaron.

Las comunidades reclamaron mayor presencia del Estado para enfrentar la contingencia sanitaria, ya que su intervención se limitaba a lo militar. lo cual no garantizó que los grupos armados paramilitares y de narcotráfico siguieran moviéndose y amedrentándolos en sus territorios. Ante una ‘ayuda’ que nunca llegó, muchas comunidades y organizaciones rurales llevaron a cabo sus propios protocolos de seguimiento y protección. En este sentido, aumentaron su trabajo territorial, tal como lo comentan las lideresas y líderes afrodescendientes: “la pandemia nos llevó a retomar nuestras prácticas productivas para el autoconsumo, no sólo para la comercialización”²⁷.

27 Ver: Testimonio de Everlidys Córdoba, miembro del Consejo Comunitario COMASUR, Acandí (Chocó), <https://semanarural.com/web/articulo/volver-a-lo-an->

Esta articulación organizativa, fortaleció sus procesos de autonomía alimentaria, y evitó que muchas comunidades rurales se desplazaran a los centros urbanos, y estuvieran más protegidas frente al virus, pero al mismo tiempo, esto no significó que las problemáticas estructurales que vivían desde antes de la pandemia cesaran. Así lo denuncia el Proceso de Comunidades Negras (PCN): “La nueva fase de aislamiento selectivo iniciada este mes de septiembre, en muy poco cambia el curso de las acciones negativas en los pueblos Negros, Afrodescendientes, Raizales y Palenqueros (NARP) en todo el país. Las comunidades aún siguen en el infortunio, las deudas históricas del Estado se mantienen más que vigentes, la pandemia causada por el virus del COVID-19, profundizó las angustias estructurales vivenciadas a través de los años” (Renacientes; 2020).

En el caso de las comunidades campesinas, la desigualdad estructural que ya existía se profundizó en pandemia: la escasez de productos sanitarios y/o de consumo básico, además de los problemas que generó la educación virtual en un país, con un 74% de población rural sin acceso a conectividad; un sistema de salud precario; comunidades sin acceso a agua potable; sin protección a sus vidas, ya que en confinamiento han sido más vulnerables a la intimidación y al asesinato por parte de los grupos armados paramilitares, entre otros. Las organizaciones campesinas nacionales y locales presentaron sus propuestas, exigiendo una urgente atención del Estado²⁸, la cual hasta el momento ha sido totalmente desatendida.

En los sectores urbanos populares de ciudades como Bogotá, Medellín y Cali -que en su mayoría son trabajadores(as) informales- la presión inicial del confinamiento estricto que inició a nivel nacional el 25 de marzo, llevó a que se dieran protestas por ayudas alimentarias y económicas desde los inicios de abril. Los ‘trapos rojos’ colgados en las ventanas, que eran un grito de auxilio desesperado, por hambre, aumentaron. En varios barrios y localidades hubo protestas, que aparte de ser fuertemente reprimidas, fueron desvirtuadas en medios de comunicación, como sucedió en Bogotá, en que la Alcaldesa Claudia López, manifestó que eran protestas manejadas por clientelas políticas corruptas y malintencionadas.

Frente a esto varias redes de organizaciones populares que proponen la creación de una renta básica universal surgieron y desde dife-

[cestral-la-apuesta-de-las-comunidades-afro-en-la-pandemia/1518](#)

28 Carta al Presidente Iván Duque, ¡Proteger al campesinado para proteger la vida!. Bogotá, 20 de abril 2020. En: <https://www.dejusticia.org/wp-content/uploads/2020/04/PROTEGER-AL-CAMPESINADO-PARA-PROTEGER-LA-VIDA.pdf>

rentes espacios -entre ellos los proyectos de ley que se han presentado en el Congreso desde la bancada alternativa- han seguido trabajando, incorporando la propuesta en el *Pliego de peticiones de emergencia* del Comité Nacional de Paro²⁹. El sector estudiantil universitario, un actor central de las movilizaciones por la financiación la educación de superior en 2018 y el paro nacional de 2019, logró estar por encima de los debates internos que estas luchas dejaron, y reactivarse en medio de la pandemia, jalonando la iniciativa de ‘Matrícula Cero’, la cual se implementó parcialmente en algunas universidades públicas y permitió pensar en una propuesta más allá, como es la de gratuidad en la educación.

Así, actualmente, en Colombia, el movimiento social y político, se prepara para continuar el paro del 21 de noviembre, después de superar el temor inicial de convocar a las calles en medio de la pandemia. El ejemplo de movilización de la “Minga por la vida, el territorio y la Paz” ha marcado una pauta importante: al no ser recibida por el gobierno de Duque, demostrando todo su desprecio por los sectores sociales, la Minga ha salido fortalecida y legitimada, convirtiéndose en un referente ético político, para nuevos sectores urbanos y rurales en el país.

En medio de un creciente empobrecimiento de la población, la izquierda y los sectores sociales alternativos, tienen el reto de: fortalecer los procesos de convergencia organizativa, con reivindicaciones y sujetos diversos e inconformes con el modelo neoliberal; superar las mezquindades y protagonismos individuales o sectoriales; no limitar la agenda a la disputa electoral de ser gobierno; aprovechar el componente pedagógico-político que la pandemia posibilita, para evidenciar el carácter excluyente del Estado colombiano y construir procesos contrahegemónicos.

BIBLIOGRAFÍA

Giraldo J. (2015). “Política y Guerra sin compasión” en Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas. *Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia*, Bogotá: Ediciones desde Abajo.

Pecaut, D. (2001). *Guerra contra la sociedad*. Bogotá: Espasa

Vega Cantor, R. (2016). *Injerencia de los Estados Unidos, contra-insurgencia y terrorismo de Estado en Colombia*. Informe presentado

29 Pliego de peticiones de emergencia. Comité Nacional de Paro. Bogotá: 19 de junio 2020. En: <https://ail.ens.org.co/wp-content/uploads/sites/3/2020/06/19-06-20-FINAL-PLIEGO-DE-EMERGENCIA.pdf>

a la Comisión Histórica del Conflicto Armado y sus Víctimas. Ocean Sur, 2016

Vega Cantor, R. y Martín Novoa, F. (2014). *Colombia y el imperialismo contemporáneo*, Bogotá. Ocean Sur.

¿MÉXICO ANTE EL FIN DEL NEOLIBERALISMO? CRISIS, TENSIONES Y REFORMULACIONES DE LA DOMINACIÓN EN EL ESCENARIO PANDÉMICO

Julieta Paula Mellano y Magdiel Sánchez Quiroz¹

El caso mexicano siempre despierta curiosidades: la radicalidad de sus movimientos sociales, la ambigüedad del poder estatal, el paradójico y problemático equilibrio entre la falta de legitimidad de las instituciones y el fuerte consenso entorno a la autonomía de los pueblos. Cuesta pensar esta multiplicidad de elementos en el contexto latinoamericano. Sin embargo, el triunfo de López Obrador en julio de 2018 -un momento de abrumador retroceso de los procesos “progresistas” en el Cono Sur- pareció volver a ubicar México en el mapa de América Latina, presentándose como una “esperanza”, tanto a nivel nacional (representó la posibilidad -por primera vez- de que una fuerza de oposición, ubicada a la izquierda de las demás oponentes, ganara la presidencia sin que un fraude electoral lo impidiese) como regional (y con la llegada a la presidencia en Argentina de Alberto Fernández, esta *idea de esperanza* se vio reforzada).

Lo cierto es que tras la pandemia de la COVID-19 la estrategia del Estado dio como resultado que para septiembre de 2020 México se encuentre entre los primeros diez países en el mundo con los índices más altos de letalidad y de número de muertos por millón de habitantes. Hasta el día primero de junio (día en que se anunció la vuelta a la “nueva normalidad”) sólo habían poco más de 93 mil contagios y poco más de 10 mil muertes. Las cifras se sextuplicaron en 3 meses. Aquel

1 Doctorantxs del Programa de Posgrado en Estudios Latinoamericanos (UNAM) y parte del colectivo Incendiar el Océano. julieta.mellano@gmail.com / magdielsq@gmail.com

ingreso a la “nueva normalidad” respondió a la demanda norteamericana de retomar el funcionamiento industrial, de reactivar los sectores de consumo masivo y de la economía informal como uno de los pilares del sostén familiar. En ese sentido, aunque sin la extravagancia de aquellos mandatarios, los discursos negacionistas de López Obrador² se asemejaron problemáticamente a los de Trump y Bolsonaro. En relación con las directivas de la Casa Blanca -que marcaron el pulso y la táctica del gobierno mexicano en este contexto-, es significativa la firma del TMEC y la visita de López Obrador a Estados Unidos en pleno pico de desarrollo de la enfermedad en ambos países.

Es cierto que los primeros meses de gobierno estuvieron marcados por una mezcla de triunfo popular, toques de optimismo y de un genuino y sincero deseo -muchas veces dicho en silencio por parte de la izquierda o de sectores intelectuales críticos- de que “la situación mejore un poco” o al menos “la cosa no se ponga peor”. Bajo una estrategia simbólica muy sofisticada, la presidencia fue colocando uno a uno diversos elementos que mostraban el “cambio histórico”: una ceremonia afro-indígena en la que le entregaron el bastón de mando; el acto de rematar varios bienes suntuosos y abrir al público la residencia presidencial de “Los Pinos”, mientras él -como lo había hecho en su momento Benito Juárez- regresaba a vivir al Palacio Nacional. También eliminó el cuerpo de escoltas, viajando con un mínimo personal de apoyo y usando las líneas comerciales. Desde el primer día mantuvo sus conferencias de prensa diarias como símbolos de transparencia, pero lo más importante, sin duda, es que con base exclusiva en sus propias declaraciones decretó a partir de este momento el fin de la corrupción y el neoliberalismo en México: ¿gesto político, toque de gracia o disputa interna? Algunos elementos concretos de las prácticas políticas, económicas y sociales del actual gobierno (a dos años de su asunción) nos darán argumentos para encontrar la respuesta.

¿LA CUARTA TRANSFORMACIÓN O EL TRANSFORMAR CONSERVANDO?

Sin lugar a dudas, el acontecimiento más relevante de esa primera etapa fue la autodefinición del nuevo gobierno como aquel que repre-

2 Cfr. <https://www.nytimes.com/es/2020/03/22/espanol/opinion/coronavirus-amlo.html>
<https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/estampitas-de-amlo-version-20>
<https://aristeginoticias.com/1506/mexico/tenemos-que-salir-de-nuevo-vamos-a-enfrentar-la-realidad-amlo/>

sentaba y llevaría a cabo una Cuarta Transformación (4T). Un suceso histórico continuador y sólo comparable con la revolución de Independencia (1810-21), las guerras de Reforma (1857-61) y con el proceso revolucionario de comienzos del siglo xx (1910-19).

Lo central en la 4T se basa en un discurso de combate a la corrupción, en recortes presupuestarios a salarios de la alta y media burocracia, en reducción de funciones estatales -en la línea de la austeridad impulsada por Washington (Ortiz, Cummins, 2019)- y en una amplia gama de programas sociales para los más pobres. Sin embargo, las cuestiones que más han deteriorado a la población en México permanecen intactas:

1. *La subordinación estratégica a Estados Unidos.* Desde el despojo histórico de la mitad del territorio por el naciente imperio norteamericano, la relación de México con su vecino ha estado determinada por la tensión entre desarrollarse como nación soberana -con enormes dificultades y acoso permanente- o, sin más, renunciar a la posibilidad de desarrollo soberano, cediendo en lo esencial a los designios del vecino del norte. La justificación de enfrentarse en una pelea desigual no ha sido suficiente para lograr el consenso al interior de México. Por ende, con base en las experiencias y en los sentimientos patrióticos y antiimperialistas de las y los mexicanos, ambos Estados han construido una subordinación total en materia de bienes y recursos estratégicos, del territorio como plataforma productiva-consuntiva y comercial, de seguridad nacional, de los pilares fundamentales de la economía y la injerencia velada en asuntos políticos, pero con una aparente independencia y autonomía en cuestiones secundarias. El gobierno de AMLO continúa en el camino de la subordinación.

En materia de bienes continúan las enormes ventajas económicas extractivas para las empresas extranjeras y con la reciente firma del TMEC se abren nuevos caminos en privatización de semillas, conocimientos y bienes intangibles. En materia energética se sostiene la extracción de crudo por encima de un desarrollo petroquímico avanzado. En cuestiones territoriales, México continúa siendo la plataforma de articulación comercial de EE.UU. para las conexiones Pacífico-Atlántico y la apuesta de zonas francas se sostiene con su apuesta de corredor Transistmico y Tren Maya. Ligado a lo anterior y articulado con la seguridad nacional está la militarización de las fronteras para regular la mano de obra indocumentada proveniente de México, Centroamérica y Caribe³. Y frente a la competencia China-EE.UU.,

3 José Luis Ceceña fue el primer investigador en analizar muy tempranamente esa

el actual gobierno ha optado por priorizar los negocios con EE.UU., atrayendo negocios de maquila automotriz y aeroespaciales que se encontraban en China, ofertando mano de obra más barata que la China y con recursos minerales a bajo precio, sin importar siquiera en buscar una diversificación mínima de socios comerciales⁴.

2. *El papel de las Fuerzas Armadas y la militarización del país.* Desde el levantamiento zapatista de 1994, y sobre todo con el inicio de la guerra contra las drogas en 2006, el poder de las Fuerzas Armadas y su injerencia en la vida política nacional ha cobrado mayor fuerza. Pero la escalada de violencia en el país y la responsabilidad del propio cuerpo castrense en miles de crímenes en contra de la población socavaron la legitimidad ganada a lo largo de varias décadas como fuerzas nacionales, defensoras de la soberanía y de no cometer golpes de Estado desde 1913. La política de la 4T ha ido encaminada a fortalecer a las FF.AA. y de reconstruir su imagen lacerada por tantos años de operación irregular contra la población⁵. La creación de la Guardia Nacional con mando militar legalizó la operación castrense en tareas policiacas y aunque lo acotó al 2023, no hay garantía de que no pueda extenderse. Vendido como prueba de la humildad y austeridad del presidente desapareció el Estado Mayor Presidencial.⁶

subordinación en términos económicos, aún bajo una careta nacionalista México en la órbita imperial. México: editorial El caballito, 1970. De modo más reciente a través de una permanente investigación recuperada en diversos libros y artículos periodísticos John Saxe-Fernández ha profundizado esa línea. Véase en especial de este último autor: *La compra-venta de México*. México Plaza&Janes, 2002. *Petróleo y estrategia*. México y Estados Unidos en el contexto de la política global. México: Siglo XXI Editores, 1980 y *Crisis e Imperialismo*. México: CEIICH, UNAM, 2012.

4 Cfr. “Estas son las razones por las cuáles es más barato invertir en México que en China” en *El Financiero*. 28/08/2020. Entre otras cosas destaca el artículo: “Para las empresas estadounidenses, movilizar a México la producción que actualmente tienen en China significaría un ahorro de 23 por ciento en sus costos de suministros, si se toman en cuenta variables como el costo del destino, los tiempos de entrega o el factor riesgo” y “La mano de obra mexicana es 33.5% más baja que la asiática”.

5 En la retórica de AMLO, son innumerables las ocasiones en que insiste que el Ejército ya no comete crímenes y al caracterizarlo como “pueblo” trata de construir una condición de igualdad entre las FF.AA. y las mayorías del país (pueblo). Como ejemplo resaltamos dos declaraciones recientes. Una en el marco de su informe de dos años de gobierno: “Los militares son pueblo uniformado y ya no violan DH: AMLO” y otro en el contexto de la pandemia: “Ejército va a curar al pueblo, asegura AMLO” 3 de abril de 2020 <https://www.cronica.com.mx/notas-ejercito-va-a-curar-al-pueblo-asegura-amlo-1150078-2020> Al respecto Jorge Zeppeda Patterson hace un crítica puntual “AMLO y Ejército: un romance peligroso” en Sin embargo.19 julio 2020. <https://www.sinembargo.mx/19-07-2020/3825864>

6 Según Pablo González Casanova este fue uno de los elementos de contrapeso más relevantes en el siglo XX en las fuerzas armadas: El Estado Mexicano era un

Y en materia económica le ha entregado negocios en la distribución de gasolina, construcción de bancos del bienestar, el control de las aduanas, construcción del Aeropuerto Alterno a la Ciudad de México “Felipe Ángeles” y de un tramo del Tren Maya, lo que le da a las FF.AA. un amplísimo margen para generar sus propios recursos sin pasar por las negociaciones y acuerdos con los poderes de la unión.

3. *El incremento sin control de la violencia y el papel de las fuerzas de seguridad.* A pesar del discurso “abrazos no balazos”, en dos años de gobierno la cifra de asesinatos asciende a más de 50 mil -cifras oficiales- y resulta evidente que más que una falta de estrategia para frenar el espiral de violencia, lo que se sostiene son las mismas recetas de las pasadas administraciones (golpear a un cártel -que se construye como el “cártel malo”-, frente a otro que se tolera por ser menos violento). Sin dejar de reconocer que realizó un acto inédito de congelamiento de cuentas al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) -algo que no se había hecho antes- las tácticas siguen siendo las mismas y la militarización del país avanza. Las masacres, las desapariciones forzadas, los estados de sitio en algunos municipios continúan, así como el auge sospechoso de grandes desarrollos industriales en zonas altamente violentas. La inauguración de la planta de Toyota en Apaseo el Grande, Guanajuato, en días de fuertes enfrentamientos entre el crimen organizado y las FF.AA., lleva a inferir que la violencia del “narco” sigue siendo complementaria -cuando no vital- para que los grandes negocios legales prosperen en tanto extracción de recursos y disciplinamiento de la mano de obra.⁷

4. *Se sostiene el Pacto de Impunidad y se obstruye la verdadera*

Estado antigolpe, y si desde Guadalupe Victoria el Presidente disponía de una Guardia Presidencial, que más tarde se convirtió en Estado Mayor Presidencial bajo las órdenes directas del Presidente, en tiempos del general Ávila Camacho, el Estado Mayor Presidencial llegó a tener la misma capacidad de fuego que el Ejército nacional. La estabilidad del gobierno no sólo dependía de la lealtad de las fuerzas armadas sino, también, de la estructuración para el control de sus fuerzas. Ahora y en el futuro sólo dependerá de la lealtad de los militares, como en todos los estados de América del Sur, lo que por la experiencia histórica hasta hoy da a la política del imperio mucho mayor posibilidad de intervención abierta o encubierta en “A dónde va México”, La Jornada, 07/04/2019, <https://jornada.com.mx/2019/04/07/politica/006a1pol>.

7 Cfr. Alejandro Hope: <https://www.eluniversal.com.mx/opinion/alejandro-hope/dos-anos-de-muy-poco> Sobre las masacres: <https://www.eluniversal.com.mx/opinion/alejandro-hope/ya-no-hay-masacres> y <https://www.eluniversal.com.mx/columna/alejandro-hope/nacion/guanajuato-y-la-espiral-de-violencia> También: <https://elpais.com/mexico/2020-07-15/la-ola-de-violencia-en-guanajuato-retrata-la-ineficacia-de-la-guardia-nacional.html>

construcción de procesos de paz. De la mano del fin del neoliberalismo y del fin de la corrupción AMLO insiste que en México ya no hay impunidad. Así como Salinas de Gortari encarceló a Joaquín Hernández Galicia y destituyó a Jongitud Barrios; y Zedillo encarceló Raúl Salinas, hermano de su predecesor y Peña Nieto a Elba Esther Gordillo y a los gobernadores Javier Duarte y Guillermo Padrés, AMLO detiene a Emilio Lozoya (ex presidente de Petróleos Mexicanos) y franquea un ataque a Luis Videgaray (ex Secretario de Hacienda de Peña Nieto), al mismo tiempo que, sobre el caso Ayotzinapa busca encarcelar a Tomás Zerón. Sin embargo, esto parece estar más enmarcado en “ajustes de cuentas” y castigos a algunos políticos importantes sin tocar de fondo el pacto de impunidad de los políticos más poderosos.

Aunque cualquier avance en las investigaciones del caso Ayotzinapa puede resultar relevante y se puedan abrir pistas que den con la ubicación de los 43 normalistas, de fondo se sostiene la verdad histórica: que el asesinato de algunos y la desaparición de otros ocurrió por haberlos confundido con narcotraficantes, lo que ayuda a invisibilizar que lo que lo que sucedió en Iguala fue un crimen de Estado planificado y premeditado con fines a destruir a un grupo social -los normalistas rurales- por el peso histórico de su participación política y por la radicalidad de sus demandas.

5. *El despojo sobre los territorios indígenas y comunitarios del sur del país para la instalación de Megaproyectos.* En esa línea están los alcances más significativos del gobierno con un paquete de programas sociales. Los más destacados: A) El apoyo universal a mayores de 65 años por cerca de 50 USD al mes B) Las becas del bienestar para estudiantes menores de 18 años en situación de pobreza extrema de 40 USD al mes C) El programa Jóvenes Construyendo Futuro en que el Estado paga la fuerza de trabajo aprovechada por empresas privadas con un monto mensual de 170 USD D) Becas universitarias de 50 USD al mes E) Apoyos a personas de 0 a 64 años de edad, así como niñas, niños y jóvenes con discapacidad permanente o de 0 a 29 años que vivan en municipios y zonas urbanas de alta y muy alta marginación por 60 USD al mes F) Y el más atractivo de los programas, Sembrando Vida, ofrece 200 USD mensuales a campesinos que tengan al menos 2.5 hectáreas, para la siembra de árboles frutales o maderables. A pesar de que pueda sonar excesivo, para que una familia de cuatro personas rebase la línea de la pobreza tendría que tener un ingreso mayor a los 500 USD por mes, según el CONEVAL.

Reconociendo que esta transferencia de recursos del Estado a los sectores más pobres resulta insuficiente, la apuesta de la 4T se con-

centra en el *desarrollo de megaproyectos* de infraestructura, industria y turismo en el sur del país para así acrecentar el derrame económica.⁸

Los dos grandes proyectos se centran en la península de Yucatán y el Istmo de Tehuantepec. Del primero la cara visible es el -mallado "Tren Maya", que incluye la creación de polos de desarrollo turístico, creación de 18 ciudades y de granjas de producción animal y agrícola. El segundo una serie de proyectos energéticos, instalación de industria y transporte multimodal en los estados que convergen en el istmo de Tehuantepec (Veracruz, Chiapas, Tabasco y Oaxaca) (Ceceña, 2020).

Ambos megaproyectos han sido denunciados por parte de la población local, por diversas agrupaciones sociales y populares que, a lo largo de los años y no sólo ahora, han dado vida a las resistencias populares en aquellas regiones. A pesar de que las consultas han resultado favorables para los proyectos, el rechazo en los territorios es fuerte, aunque por las condiciones tan difíciles de organización del movimiento social no siempre alcanza a ver la fuerza de la oposición.

Diversos especialistas y periodistas han denunciado que estos megaproyectos implican el despojo de territorios, la destrucción del tejido social, la imposición de proyectos económicos lesivos para las comunidades, alteraciones graves al medio ambiente, la violación de los derechos de los pueblos, y las irregularidades y ocultamiento del proyecto así como las amenazas en contra de los que resisten al megaproyecto, como las amenazas contra Pedro Uc, alertan que se puede repetir un crimen similar al que se cometió contra Samir Flores en Morelos, también bajo el gobierno de AMLO.

Estos proyectos no representan la llegada del Estado por primera vez a "zonas abandonadas" sino la intensificación de los ya existentes en la región en materia de industria alimentaria (agricultura -soya-, aviar y porcícola), especulación, turismo y transporte de cara a la sumisión geoestratégica de México a las dinámicas de libre comercio. Si bien estas iniciativas se remontan al Plan Puebla Panamá y a las Zonas Económicas Especiales de Peña Nieto, este proyecto resulta más ambicioso y, al mismo tiempo, más prometedor para los empresarios, en la medida que el gobierno que los impulsa tiene mayor simpatía de la población en la zona que los gobiernos anteriores y una parte de sus operadores en la región provienen de espacios sociales.

8 Véase en este mismo texto la relación de estos megaproyectos con la subordinación a EE.UU.

2020: ESCENARIO DE MOVIMIENTOS, ANTES Y DESPUÉS DE LA PANDEMIA

La situación de México ya era preocupante para inicios de 2020. En aquellos días dos movimientos irrumpieron en la denuncia del horror que se vivía y en la enunciación de alternativas ante el desastre: 1) El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, exigiendo un alto a la violencia, los asesinatos y las desapariciones, ante la falta de una estrategia de seguridad integral y civil, y frente a la necesidad de asumir un proyecto de “justicia transicional”; 2) El movimiento de mujeres, con una fuerza y masividad inéditas en México, condenando la violencia del sistema en contra de ellas, los abusos del sistema patriarcal y, de manera más enfática y urgente, llamando a detener los feminicidios.

En ambos casos, de parte de la presidencia y del partido en el poder (Morena) se denostaron a los actores, se tergiversaron las demandas, haciéndolas aparecer como movimientos de la derecha, cuando no intentonas golpistas. Incluso, se llegó al extremo de llamar a atacar a la movilización de familiares de víctimas de la violencia, como nunca había ocurrido antes, ni siquiera con Calderón o Peña Nieto.

Además del descontento social y las expresiones políticas que comenzaban a hacerse eco, la pandemia llegó a nuestro país en medio de una crisis de salud producida por: 1) La implantación de un sistema alimentario basado en la agroindustria tóxica y en la adopción de patrones de consumo norteamericanos; 2) Procesos de devastación ambiental y contaminación provocados por actividades industriales; 3) Un sistema de sanidad pública desmantelado por décadas de políticas neoliberales en beneficio del sector médico y farmacéutico privado.

En cuanto al control de la crisis sanitaria, los países más exitosos en América Latina, como Venezuela o Cuba, cerraron sus fronteras muy tempranamente e implementaron estrictas cuarentenas desde las pocas decenas de casos -además de estar ocupados en la salud integral de su población- lo que les permitió reactivar también antes su economía. Mientras tanto, en México se apeló a la necesidad de sostener el flujo con el exterior -refiriéndose principalmente a Estados Unidos-, manteniendo abiertas las fronteras no sólo al paso de personas sino también, y sobre todo, para garantizar el funcionamiento de las maquilas norteamericanas.

La desprotección social ha sido otro rasgo de la gestión epidemiológica en México. En otros países con gobiernos de tipo “progresistas” -recién llegados tras devastadoras gestiones neoliberales- como España o Argentina optaron por proteger el consumo básico de la población mediante medidas como el ingreso familiar de emergencia. En

México se optó tan sólo por otorgar créditos a algunas Pymes y algunas ayudas puntuales a ciertos sectores, sin atender las necesidades básicas que más del 40% de la población que vive del trabajo informal requería en estas circunstancias.

Sin embargo, lo más grave de todo es el incremento exponencial de los contagios y muertes desde el primer día de junio, momento en que se anunció la entrada en la “nueva normalidad”. En aquel momento, las cifras eran de 90 mil contagios y 10 mil fallecidos. En los primeros días de julio los contagios estaban cerca de los 260 mil y los muertos rozaban los 31 mil. En poco más de un mes las cifras se triplicaron, según datos oficiales. La tasa de infectados aumentó en 189% y la tasa de muertos 213%. En el mes de septiembre -y a pesar de encontrarse en una fase de retroceso- se contabilizó un total de 64,158 personas fallecidas. Para esta altura del año 2020, con datos del Registro Nacional de Población y algunas investigaciones periodísticas, se estima que las cifras reales de muertos fueron al menos del doble de las registradas. Con este nuevo escenario, México se ubica entre los diez países con más muertes por covid, de los primeros países por contagio diario y también de los de más alto índice de letalidad. Y con el incremento de contagios, la pandemia se ha “ruralizado”, haciendo que se incremente su letalidad por las condiciones tan adversas para enfrentarlas en las comunidades.

En la medida en que la crisis económica se agudiza, y por la relación entre pobreza, desigualdad y salud mencionada antes, el escenario de los meses próximos sigue siendo preocupante. La crisis económica, acelerada por el paro mundial que trajo la pandemia, ha traído impactos económicos muy graves en México. Ha aumentado el desempleo en grandes proporciones. Se calcula que, a septiembre de 2020, se han perdido un millón quinientos mil empleos formales y que, al menos durante el mes de abril, 12.5 millones de personas dejaron de trabajar. Y no hay datos claros sobre los impactos en la economía informal. Además, se pronostica una caída económica de 3 al 10% del PIB a este año, respecto al anterior, y se estima que a fin de año la pobreza habrá aumentado un 7%, según datos del Coneval.

PRÓXIMAS ELECCIONES: LOS USOS DE LA POLARIZACIÓN Y LOS LÍMITES DE LOS MOVIMIENTOS

Es difícil predecir los tiempos en que los conflictos irán dirimiéndose o transformándose. En un escenario tan inestable, nuevas eventualidades

dades pueden alterar los escenarios. Sin embargo, la certeza de la realización de elecciones en 2021 es sin duda un momento clave. Éstas incluyen el cambio de 15 gubernaturas, de la cámara de diputados federal (500 diputados), 30 congresos locales (1,063 diputados estatales) y 1,926 ayuntamientos y juntas municipales en 30 entidades. Además, son el posicionamiento más contundente -en términos electorales- que pueden hacer los partidos para la contienda presidencial de 2024.

De esa contienda, lo que resulta evidente es que -a pesar de toda la figura del presidente será el principal núcleo que atraerá votantes, por lo que Morena seguirá siendo el partido con más fuerza. Por eso, ya el Partido Verde (aliado antes con el PAN y con el PRI) se alineó a Morena y al PT. Esto ocurrirá también en grupos políticos y personalidades que buscarán el cobijo del partido en el poder. Además, la mayor parte de los partidos que posiblemente obtendrán el registro orbitan en torno a AMLO. La polarización, en este contexto, es una herramienta política fundamental para el actual gobierno, por eso la aviva, en la medida que obliga a las fuerzas a su alrededor a cerrar filas en torno a su persona.

En cuanto a la oposición, PAN, PRI y PRD (y, si consigue el registro, el Partido Libre) buscarán cosechar la inconformidad por la crisis -económica y de salud- de la mano de los discursos polarizantes, *fake news* y del “riesgo” de que “la situación de México se torne tan grave como la de Venezuela”. En su caso, la polarización opera en su favor para atraer votantes y es necesaria para que surjan liderazgos de contrapeso frente a AMLO.

Al mismo tiempo, crece la beligerancia -sin que sea en cantidad de simpatizantes- de grupos de la ultra derecha que intentan generar una desestabilización mayor, en especial del Frente Nacional Anti AMLO (FRENA). Su actividad ataca a AMLO exagerando cualquier acto y lo acusan de socialista, pro cubano o pro chavista. Su lenguaje burdo y agresivo alimenta el clasismo y racismo latente en sectores diversos de la población (no sólo en los sectores elitistas están latentes esas ideas) e incita a transformar discursos trillados en acciones agresivas. Los ataques realmente no van dirigidos contra el Presidente, sino contra las expresiones de izquierda y anhelos más radicales que su presidencia puede representar. Sabedores de que más allá de la 4T hay una emergencia de ansias de cambio que no puede resolver la derecha, su virulencia busca gestar organizaciones con capacidad de choque.

Pero la contienda sólo tiene como centro la disputa por puestos de poder. Se ha desmoronado, por la convergencia de la crisis de salud y la económica, toda posibilidad de profundizar en el proyecto más ra-

dical de 4T. La pugna entre actores será tan sólo por espacios de poder.

Por fuera de las posiciones de las elites, las expresiones populares se encuentran sumamente fragmentadas y con débil capacidad de movilización. Hasta ahora no han encontrado formas de recuperar la movilización que interrumpió la pandemia y más allá de la coyuntura del Covid, no han logrado desarrollar organizaciones con fuerza social y proyectos capaces de mostrarse como una alternativa y no existe una posibilidad entre ellas de aglutinarse en torno a una disputa electoral. Algo parecido ocurre con los sectores populares que simpatizan con AMLO y son parte de Morena, ya que tenderán a ser barridos por los acuerdos con ciertos sectores y partidos.

¿FIN DEL NEOLIBERALISMO O NUEVAS MÁSCARAS DEL CAPITALISMO?

Con la pandemia han surgido diversos discursos coincidentes en que estamos entrando en una época de cambios históricos y que nada será como antes. El ambiente imperante ha pasado de la apología de lo existente a una supuesta crítica radical de todo, inclusive del capitalismo. Al respecto, han surgido declaraciones “espectaculares”, pero sin fundamento, acerca de su “inminente fin”. Sin embargo, todas esas voces, provenientes de los espacios de poder, pretenden -intencionalmente o no- una especie de *aggiornamento* de la dominación y del sistema en un momento en que resulta indefendible un discurso que -como en los años 80 y 90- insistía en que no había alternativa y que el capitalismo es el único de los mundos posibles.

De la misma manera que en Washington se retiran monumentos y cambian nombres de las calles para ocultar el racismo y esclavismo del pasado para dejar que opere libremente y con legitimidad ese sistema de opresión en el presente, las proclamas del fin del neoliberalismo o de un mundo post capitalista desde las voces oficiales probablemente logre una lavada de cara del propio sistema, método aplicado infinidad de veces para ocultar la continuidad del mismo.

En realidad, ante la convergencia de diversas crisis (ambiental, sanitaria, económica, política) se han abierto débiles vetas de crítica radical del capitalismo en todas sus maneras. Estas tienen en el poder socialista cubano y las comunas venezolanas los atisbos más cercanos y reales, de posibilidades de abrir nuevos horizontes. Por eso la virulencia de los ataques no van en contra de los actores de la *real politik* mexicana, sino de los discursos que pueden ser reapropiados por los sectores populares más agraviados.

El martes 1 de septiembre de 2020, López Obrador llevó adelan-

te el segundo informe presidencial, un acontecimiento obligado en la historia política mexicana. Se asemeja más a un acto enunciativo de logros y aciertos, que a un informe puntual de la situación contemporánea (en términos sociales, económicos y políticos) del país. Ejemplos de esto último son los siguientes puntos: “Hay menos feminicidios y menos robos” ó “ya no hay García Lunas” -refiriéndose al Secretario de Seguridad de Felipe Calderón que hoy está siendo juzgado en Estados Unidos por actos de colusión con el crimen organizado- o cuestiones tan imprecisas y falaces como “A pesar de la crisis no se despidieron a empleados”⁹ y por último, un elemento más que problemático -por no decir anti democrático, al estar influyendo públicamente en cuanto a su propia “opinión”- “Yo votaría por no someter a proceso a los expresidentes”, apunta. “De realizarse la consulta, respetaré el fallo popular”.

Corresponde a los movimientos populares ahondar las vetas contra el capitalismo que las crisis han evidenciado. El hartazgo social puede llevar a explosiones de inconformidad, pero si no somos capaces de convertirlas en plataformas de lucha que articulen las demandas reivindicativas con planteamientos políticos profundos, en el corto plazo -y en el mediano también- no se ve que ninguna fuerza social -por fuera de la política dominante- tenga capacidad para disputar, a través de un proyecto y fuerzas propias, la conducción de la sociedad. En tanto, las agrupaciones populares que se sostienen, las que resisten a los megaproyectos y las comunidades en resistencia cotidiana tenemos que avanzar con la humildad necesaria para construir un espacio en que converjan nuestras luchas, para convertir la resistencia cotidiana en rebeldía. El acumulado histórico de nuestros pueblos permite enfrentar la resistencia más urgente, la supervivencia ante la crisis económica y de salud, pero si somos consecuentes con las aspiraciones profundas que laten en el pueblo, y que la 4T demostró no poder realizar por las vías del establishment político, lo que corresponde a esta posible convergencia de fuerzas es enarbolar un proyecto y un programa político que, basado en ese acumulado, pero yendo más allá de las acciones locales en que se expresa, abarque la dimensión nacional, con un carácter anticapitalista y revolucionario.

BIBLIOGRAFÍA

Alainet-OLAG (2020). “Panamá en Tehuantepec: colonización fe-

9 Cfr. <https://www.animalpolitico.com/elsabueso/el-sabueso-datos-cifras-frases-amlo-verificadas-segundo-informe/>

roviaria del sureste mexicano” (Quito) 547, feb-mar, año 44, 2ª época.
https://www.alainet.org/sites/default/files/alem-547_v1.pdf

Ceceña, A. E. (2020) “En plena catástrofe ambiental, ¿el Tren Maya va!” en *Nexos* (Ciudad de México), 20 de julio <https://medioambiente.nexos.com.mx/?p=566>

Ceceña, J. L. (1970) *México en la órbita imperial*. Ciudad de México: Editorial El caballito.

Fazio, C. (2016). *Estado de emergencia. De la guerra de Calderón a la Guerra de Peña Nieto*. México: Grijalbo.

González Casanova, P. (2019). “A dónde va México”, en *La Jornada*, 07/04/2019, <https://jornada.com.mx/2019/04/07/politica/006a1pol>.

Harvey, D. (2005). “El “nuevo” imperialismo: acumulación por desposesión”, en *Socialist register 2004* (enero 2005). Buenos Aires : CLACSO.

López y Rivas, G. (2012). “Viejas y nuevas guerras sucias” en *El Cotidiano*. (Ciudad de México), núm. 172, marzo-abril

Ortiz, I. & Cummins, M. (2019). “Austerity: The New Normal A Renewed Washington Consensus 2010-24” en *Working Paper*, october.

Saxe-Fernández, J. y Fal, J. (2012). “La especificidad de la etapa actual del capitalismo: los límites materiales del crecimiento y sus consecuencias geopolíticas”, en John Saxe-Fernández (editor). *Crisis e imperialismo*. México: UNAM-CEIICH.

VVAA (2020). “México. Análisis en un momento de tensiones”, en *Incendiar el Océano*, 8 de julio.

Zeppeda Patterson, J. (2020). “AMLO y Ejército: un romance peligroso” en *Sin embargo*. 19 julio. <https://www.sinembargo.mx/19-07-2020/3825864>

Notas periodísticas

“Coronavirus deja sin empleo a 12 millones de mexicanos: Inegi” en *Forbes*. México: 2 de junio 2020 [<https://www.forbes.com.mx/noticias-coronavirus-dejan-sin-empleo-a-12-millones-mexicanos-inegi/>].

“Desempleo en México alcanza a casi 25% de la población: Heath”. *Forbes*. México: 3 de junio 2020 [<https://www.forbes.com.mx/economia-desempleo-mexico-casi-25-poblacion-heath/>].

“Es necesario flexibilizar la jubilación, podemos trabajar hasta los 80 años”. España: 13 de marzo de 2018. En línea: [<https://economia3.com/2018/04/13/139920-flexibilizar-jubilacion-trabajar-hasta-80-anos/>].

“La pandemia también azota a los jóvenes”, *Forbes*. México: 15 junio 2020 [<https://www.forbes.com.mx/la-pandemia-tambien-azo->

ta-a-los-jovenes/].

“Pacto secreto México- EU para producir droga” en Contralínea. México, mayo 2007 [http://www.sinaloa.contralinea.com.mx/archivo/2007/mayo/htm/pacto_secreto_mexico_EU_Droga.htm].

“El Sabueso: Datos, cifras y frases de AMLO verificadas del Segundo Informe” en Animal Político, septiembre 2020 [<https://www.animalpolitico.com/elsabueso/el-sabueso-datos-cifras-frases-amlo-verificadas-segundo-informe/>]

“Estas son las razones por las cuáles es más barato invertir en México que en China” en *El Financiero*, 28/08/2020

“Dos años de muy poco” en *El Universal*, 31/08/2020 [<https://www.eluniversal.com.mx/opinion/alejandro-hope/dos-anos-de-muy-poco>]

“Guanajuato y la espiral de violencia” en *El Universal*, 05/10/2018 [<https://www.eluniversal.com.mx/columna/alejandro-hope/nacion/guanajuato-y-la-espiral-de-violencia>]

“La ola de violencia en Guanajuato retrata la ineficacia de la Guardia Nacional” en *El País*, 15/07/2020 [<https://elpais.com/mexico/2020-07-15/la-ola-de-violencia-en-guanajuato-retrata-la-ineficacia-de-la-guardia-nacional.html>]

REFORMA DEL ESTADO Y NUEVA GOBERNANZA PÚBLICO-PRIVADA. CLAVES PARA PENSAR ESCENARIOS POST-PANDEMIA EN PARAGUAY

Camilo Gauto¹

Quizás el debate más importante en el contexto de pandemia en la política paraguaya ha sido la reforma del Estado. Su génesis y futuro parecen tener un mismo contenido: parte del sector privado impugnando el orden actual y haciéndose de funciones democrático-plebeyas. Esto puede ser una paradoja, debido a la insistencia destituyente del poder empresarial con respecto a lo público: es deficiente, obsoleto, anticuado, corrupto desde las bases hasta las cúpulas. Una marea de críticas provenientes del sector privado terminó por evidenciar el objetivo político del mismo: la transformación del aparato institucional del Estado. Aunque esto no representa una novedad, sucesivos intentos de realizar una reforma del Estado fueron propuestos desde los años noventa (Lacchi, 2010).

¿Con qué finalidad se piensa la reforma? Si nos ajustamos estrictamente a la separación de los campos público y privado se podría dificultar el análisis, porque con dicha dicotomía se pierden las conexiones, las tramas, los orígenes, los lazos, la estrategia y las afinidades políticas. El bloque de poder, “la unidad contradictoria particular de las clases o fracciones de clases dominantes, en su relación con una forma particular del Estado capitalista” (Poulantzas, 2012), se inmiscuye en lo público-estatal a través de diversas formas. Las particularidades de las periferias latinoamericanas evidencian la composición oligárquica de las clases dominantes, con burguesías nacionales estrechamente vinculadas al capital transnacional en su gran mayoría de los países centrales.

El Enfoque Estratégico Relacional (EER) de Jessop nos permitirá investigar mejor las dinámicas del bloque de poder en la disputa por el

1 Licenciado en Sociología por la Universidad Nacional de Asunción.
camilogauto@hotmail.com

Estado, las modalidades de gobernanza y dónde se debe poner la mira para analizar las transformaciones estatales, ya que “redirige la atención desde los elementos del Estado al poder estatal” (Jessop, 2017).

ESTADO Y CLASES DOMINANTES, TRAYECTORIAS DEL PODER EN PARAGUAY

En sus orígenes, gran parte de lo que hoy son las clases dominantes, es decir familias, empresas, clanes y conglomerados empresariales, crecieron y se hicieron de fortunas acompañados de lo estatal, es decir, sus emprendimientos nacieron bajo el auspicio institucional del Estado en la dictadura de Stroessner (1954-1989) o en los años noventa. Los diversos negocios ilícitos y los contratistas del Estado convergen en lo que se denominó la burguesía fraudulenta (Rojas, 2014), muchos de ellos vinculados principalmente a la construcción de la Represa Binacional de Itaipú. En la actualidad, son actores importantes de la política sin que la modalidad de acumulación haya variado mucho a lo largo del tiempo, más bien han sofisticado y complejizado sus operaciones. Además, se han diversificado, por lo que sus negocios atraviesan toda la economía paraguaya.

La constitución de los gremios empresariales, los negocios vinculados a la agroexportación y la tierra, la importación, el sistema bancario, el comercio, los servicios, las grandes construcciones, ciertas industrias y la actividad económica ilícita son las fuentes más lucrativas en un mercado pequeño como el paraguay, si lo comparamos regionalmente o internacionalmente. Estas clases dominantes, que conforman el bloque de poder, siempre tuvieron incidencia política ya sea a través de los partidos tradicionales -Asociación Nacional Republicana-Partido Colorado (ANR) y Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA)- o directamente mediante los gremios empresariales. La relación entre economía y política está siempre presente, y resulta de vital importancia para el mantenimiento de la dominación política y la reproducción de las condiciones de explotación en una economía capitalista.

Entonces, cuando hablamos de que el bloque de poder quiere transformar el aparato institucional del Estado, lo hace pensando en sus objetivos políticos, por lo que la discusión sobre agrandar o achicar el Estado resulta desacertada. El Estado no es una cosa medible, ni una herramienta a utilizar, ni un vacío que se ocupa, ni un elefante al que se quiere engordar o adelgazar. El Estado, dice Poulantzas (2005), es una relación social de fuerzas que ciertos actores políticos y/o clases sociales pretenden volcar más hacia sus objetivos en detri-

mento de otros. El núcleo de estas relaciones de fuerza se condensa en un aparato estatal susceptible de ser dirigido, bajo determinadas circunstancias históricas, por actores políticos que tienen intereses particulares, ideológicos y de clase. Generalmente se dirige, al menos en ciertos aspectos, a través de un gobierno constituido, luego de procedimientos político-electorales en un sistema formalmente democrático.

No obstante, hay una selectividad estratégica que favorece más a unos que otros, un sesgo potencial de ciertas áreas clave del Estado, de manera tal que las disputas siempre son desiguales (Monedero, 2017). Es por eso que un gobierno democráticamente electo puede tropezar con la selectividad estratégica del Estado, o bien puede ser impulsado por esas mismas tendencias. Todo depende de las trayectorias políticas y de la historia social.

La organización de las clases sociales, partidos y fuerzas políticas resulta fundamental para las disputas por el Estado. Una visión hegemónica acerca de cómo debe ser la sociedad puede verse reforzada por un proyecto de Estado (Jessop, 2017) que implica la manera en que la institucionalidad estatal responda a las dinámicas de la disputa política, lo cual ofrece ventajas para la dominación política. La reforma del Estado en Paraguay es una síntesis de victorias y derrotas pasadas que pretende poner en marcha el proyecto político-estatal del bloque de poder.

El Gobierno de Horacio Cartes (2013-2018) y posteriormente la victoria del actual presidente Mario Abdo Benítez (2018-2023) expresan una trayectoria no está exenta de fricciones y fisuras internas, encaminada a la consolidación de un proyecto de Estado que tiene una política económica específica, una idea de (sub)desarrollo concreta y que piensa el territorio nacional en clave de acumulación de capital que beneficia principalmente a las clases dominantes. Existe una correlación entre el Plan Nacional de Desarrollo 2030 presentado durante el gobierno de Cartes y la reforma del Estado presentada en el gobierno actual de Abdo Benítez. Las medidas de política económica tampoco han variado a pesar del cambio de presidencia.

Actualmente, existen diversas discusiones sobre la incidencia en las políticas estatales con miras a la reforma: la propuesta inicialmente vendría del poder ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda, pero es acompañada por instituciones sin fines de lucro, en especial Desarrollo en Democracia (DENDE), y el Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD). En general, hay una unificación de ideas-fuerza: reordenamiento y coordinación del aparato institucional

y normativo del Estado, un manejo prudente de las finanzas públicas y la reducción del empleo público. También existen propuestas con respecto a las pensiones y jubilaciones, la educación y salud.

LA GOBERNANZA PÚBLICO-PRIVADA PARA LA GESTIÓN DEL APARATO ESTATAL

En sentido estricto la gobernanza “se refiere a mecanismos y estrategias de coordinación de cara a la interdependencia recíproca compleja entre agentes, organizaciones y sistemas funcionales operativamente autónomos” (Jessop, 2016), y está relacionada con las nuevas formas de afrontar problemas que al viejo esquema de gobierno le cuesta resolver. Se pretende que, en este proceso de transformación política, “la actuación pública comenzaría a experimentar procesos de socialización, socavando el tradicional monopolio partidista en la dirección del Estado, así como la vieja dualidad entre las trincheras enfrentadas de lo público y lo privado” (Porras, 2014).

La nueva gobernanza público-privada se proyecta como la forma de solventar y dar salida a las demandas políticas nacidas por la pérdida de legitimidad de los últimos gobiernos nacionales. ¿Qué implica esto? Se trata de una práctica que ganó fuerza en el gobierno de Horacio Cartes, en la que el grupo empresarial o parte del sector privado incide de forma directa en la toma de decisiones sobre políticas públicas. Con la reforma del Estado lo que se quiere es potenciar esta modalidad desde un plano más indirecto, a través de redes de poder, diálogos y decisiones en conjunto (sector privado + público). Es lo que comúnmente se conoce como articulaciones entre el sector privado, el político y la sociedad civil. Gramsci (2013) las problematiza, mientras que en la teoría de Jessop (2017) nos encontramos frente a la conceptualización del “Estado en su sentido inclusivo (gobierno + gobernanza a la sombra de la jerarquía)”. Esto va acompañado de ciertas transformaciones con respecto al Estado: “progresiva desjerarquización del Estado, recalibración del poder estatal, desestatalización de la política, despolitización del poder y diversas técnicas de gubernamentalidad” (Jessop, 2017).

En Paraguay, los principales pilares de la reforma del Estado relacionados a la gobernanza, algunos de los cuales se analizaron en una investigación anterior (Gauto, 2020), se encuentran en los siguientes documentos:

- *Plan Nacional de Desarrollo 2030. Gobierno Nacional*: elaborado durante el Gobierno de Horacio Cartes (2013-2018),

contiene las principales orientaciones de políticas económicas y sociales de la próxima década.

• *Estudios de la OCDE sobre Gobernanza Pública. Paraguay: Hacia un desarrollo nacional mediante una gobernanza pública integrada. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico*: se refiere a las principales herramientas y mecanismos de política pública para lograr el Plan Nacional de Desarrollo 2030 en relación a la gobernanza, el centro de gobierno, la planificación estratégica, la función pública y el gobierno abierto

• *Paraguay: Rutas para el Desarrollo. Banco Interamericano de Desarrollo*: en este documento se tratan las recomendaciones de política para la gestión pública, instituciones y marcos de política que consisten en: fortalecer marco de responsabilidad fiscal, mejorar la calidad y eficiencia del gasto, consolidar marco de alianzas público privadas, entre otras (BID, 2018).

• *Reforma del Estado. Propuesta del Poder Ejecutivo. Benigno López, Ministro de Hacienda*: contiene los objetivos y presupuestos básicos que se consideran para la reforma en términos generales.

La demanda de participación e incidencia de la ciudadanía o, mejor dicho, de ciertas clases medias que comparten la misma visión hegemónica que el bloque de poder, se puede lograr a través de las redes de poder y lógicas horizontales de colaboración en políticas públicas muy específicas. Estas modalidades de gobernanza se encuentran incluidas dentro de las propuestas más arriba planteadas. Toda hegemonía de las clases dominantes pretende incorporar a sus objetivos e intereses específicos a las clases dominadas a través del consenso en la toma de decisiones con respecto al manejo del aparato institucional del Estado. Pero, ¿dónde radica la trampa de la gobernanza? En que la propuesta política se basa en

- 1) menor participación popular en la política;
- 2) primacía de lo individual sobre lo colectivo;
- 3) sustitución del Estado por el mercado y determinados actores sociales;
- 4) preponderancia del técnico sobre el político. Es el management frente a la democracia. Como opuesto a la idea de transformar la sociedad se ofrece el principio de resolución de problemas concretos (Monedero, 2017)

Para lograr su cometido, la Nueva Gobernanza público-privada

necesita de actores que acompañen y legitimen esta propuesta. El ciudadanía, encarnado en las protestas anticorrupción, los imaginarios de las Pequeñas y medianas empresas (PYMES), el activismo en diversos espacios públicos, académicos y en redes sociales ofrece este apoyo político, debido a que

(...) apuestan por un aumento de la participación y la autogestión y que reclaman una continua activación de la ciudadanía al margen de la política formal y como fuente permanente de fiscalización y crítica de los poderes gubernamentales y económicos en aras de una agudización de los valores democráticos. (Delgado, 2016)

Para tranquilidad del proyecto de Estado del bloque de poder en Paraguay, el ciudadanía no pretende disputarle la hegemonía sino “encontrar aquello que el idealismo democrático de la pequeña burguesía siempre ha anhelado: una superación e incluso una deslegitimación de la vieja disciplina sindical y política de clase” (Delgado, 2016). En ese sentido, no hay conflictos políticos, ni puja distributiva, sino diálogos y consensos amplios entre la política y la sociedad civil representada por el ciudadanía. Finalmente, esta nueva modalidad de hacer política y ejercer el gobierno por consenso tiene consecuencias, debido a que “toda práctica de gobernanza afecta al equilibrio de fuerzas” (Jessop, 2017). Además, este tipo de activismo ciudadano, cuenta con el respaldo mediático.

La reforma del Estado, como síntesis de una nueva gobernanza, no solamente debe entenderse en clave de victoria para las clases dominantes sobre sus adversarios políticos, sino que implica también una incorporación ideológica y de imaginarios con respecto a las clases medias. Una amplia alianza de clases sociales bajo la conducción del bloque de poder, que hoy representan los principales grupos empresariales, es el mapa de nuestros tiempos. Lógicamente, este equilibrio político inestable puede ser quebrado y/o disputado, pero existen tendencias hacia su preservación.

EL "MANEJO PRUDENTE DE LAS FINANZAS PÚBLICAS" Y EL EMPLEO PÚBLICO

A pesar de perder el partido hegemónico (ANR y aliados) y a cierta base social representada en los funcionarios públicos, el bloque de poder pretende volcar la condensación de fuerzas lograda en los últimos años mediante la reforma del Estado en el Paraguay, en especial desde el golpe de Estado a Lugo del 2012 y el Gobierno de Cartes (2013-

2018). Mucho de la reforma tiene que ver con el empleo y la dirección del gasto público estatal. No está de más indicar que “la gobernanza como concepto de las ciencias sociales nació en el ámbito de la economía neoclásica y hacía referencia a la eficacia y rentabilidad dentro de las empresas como lugares donde se ahorran costes” (Monedero, 2017).

El gran acuerdo entre las fracciones de clase del bloque de poder y sus técnicos para la gobernanza es el manejo prudente de las finanzas públicas y transitar hacia un aparato institucional del Estado que emplee a cada vez menos funcionarios. Todo esto a pesar de que el peso del empleo público total esté por debajo de la media en comparación a otros países (12%), un gran porcentaje perciba un salario menor a dos mínimos y exista un mercado laboral privado con salarios más bajos y altas tasas de informalidad (Garichoche, 2020).

En primer lugar, el gasto público cumple un papel importante en el crecimiento de una economía y más aún en contexto de crisis. Una expansión del gasto público genera ingresos en las empresas y hogares por su función de multiplicador. En ese sentido, el déficit fiscal es un instrumento más de la política económica y no puede equipararse al análisis individual de cada unidad económica, es decir de una persona o familia. La centralidad de todas las propuestas de reforma del Estado plantea mantener una responsabilidad fiscal del 1,5%, que ya fue aprobado previamente a través de la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF) en el año 2013.

Esta política de supuesto equilibrio podría generar una contracción de la economía, en contravía a los objetivos de crecimiento y recuperación post pandemia recomendados por la CEPAL (2020), según los cuales “la política económica debe contribuir a la reconstrucción a través de una política fiscal progresiva y un gasto público eficiente, efectivo y equitativo que priorice las necesidades de las sociedades de la región”. En específico se recomienda que “con miras tanto a las acciones de control de la pandemia como a las etapas de recuperación y reconstrucción, es imprescindible que la inversión pública en salud aumente hasta alcanzar al menos un 6% del PIB nacional” (CEPAL, 2020). Así, la política económica en Paraguay pretende ir a contramano de las tendencias que se piensan en Latinoamérica para salir de la crisis.

Desde una mirada más amplia, las finanzas públicas deben ser tratadas en su conjunto como herramientas para lograr los objetivos de la política económica y de las políticas sociales. Para este cometido es el crecimiento por demanda el que genera las inversiones y no el ahorro

del gasto público como habitualmente se considera (Cesaratto, 2018).

Ocurre lo mismo con el empleo público. Una disminución del gasto corriente en salarios públicos puede tener resultados contractivos, porque todo gasto público implica un ingreso en los hogares. Entonces, ¿dónde podría radicar la ventaja política de la propuesta de reducción del empleo público? Potencialmente toda la fuerza de trabajo restada al sector público (por jubilación, despido, recorte) pasaría al sector privado como disponible, en dónde los grupos empresariales proyectan un crecimiento de sus conglomerados en las próximas décadas. Sí, la estrategia del bloque de poder es a largo plazo. Pero esto se plantea solamente a nivel de potencialidad, debido a la incertidumbre del futuro, podría también ser el disciplinamiento de las clases dominadas el objetivo principal.

Lo anterior pone en evidencia la preocupación del sector privado empresarial, ¿priorizar la economía o acumular poder? Si el Paraguay en los últimos años ha experimentado un crecimiento económico importante debido a la demanda de commodities internacionales, esto no parece ser suficiente para sus ambiciones. La expansión del gasto público, que bien podría aumentar la cantidad de dinero en el bolsillo de la gente y por ende su consumo, a pesar de ser beneficioso para el empresariado (el crecimiento por demanda), no satisface la ambición de poder. Esta posibilidad de avanzar sobre el Estado, sobre la sociedad e ir acumulando poder únicamente se vuelve posible para el empresariado en la medida que las clases populares y los sindicatos no tienen fuerza para pelear por un mayor porcentaje de participación en los beneficios del crecimiento económico. De hecho, Paraguay tiene una baja tasa de sindicalización y generalmente son los sindicatos públicos los que ofrecen resistencia en ciertas ocasiones.

A todo esto, hay una insistencia cotidiana en evitar los desajustes o desequilibrios económicos, que se puede leer en los principales medios de comunicación y en el Pacto Social por el manejo de las finanzas públicas (CIRD, 2020). El objetivo desde donde se lo mire es el ajuste que terminaría afectando el poder adquisitivo de la población trabajadora. ¿Cómo se explica esto? Scaletta (2017), retomando a Kalecki, sostiene que existe una dimensión política del salario:

el crecimiento del PIB supone una mayor demanda de capital y trabajo. La mayor demanda de trabajo supone una disminución del desempleo. Un aumento del empleo significa un mayor poder de negociación de los trabajadores. Este mayor poder se traduce en aumentos de salarios. Es decir, con el crecimiento se

empodera a los trabajadores y sus organizaciones y se pone en marcha la puja distributiva (Scaletta, 2017).

El crecimiento de la economía, bajo ciertas condiciones, puede significar mayores ingresos para la población. Obviamente, en qué medida o porcentajes dependerá de la correlación de fuerzas entre las clases sociales, es decir a través de la puja distributiva. Pero, sorprendentemente en la realidad puede ocurrir de otra forma, de modo que cabe preguntarse

[...] ¿Por qué la clase de los empresarios, que se beneficia con la expansión del PIB, apoya proyectos políticos que frenan el crecimiento y conducen a la contracción? [...] En términos puramente económicos, la expansión da lugar en general a procesos “ganar-ganar”, tanto para el trabajo como para el capital. Pero como señaló Kalecki, los problemas están en otra parte, en los “aspectos políticos”. [...] A los empresarios no les gusta que el Estado se inmiscuya en un ámbito que consideran propio, como el de la creación de empleo y mucho menos que el Estado dirija el gasto. Dicho de otra manera, detestan que el Estado intervenga en sus negocios y que los desposeídos de medios de producción reciban ingresos que no provengan del “sudor de su frente”. Nada de subsidios y transferencias sociales y nada de planificación del desarrollo.

Sin embargo, decía Kalecki, la verdadera resistencia es “a los cambios sociales y políticos resultantes del mantenimiento (en el tiempo) del pleno empleo”, o niveles cercanos a él. Primero, porque el desempleo deja de cumplir su papel disciplinador deteriorando la autoridad del empleador. Luego, porque junto con el aumento del poder de negociación de los trabajadores [...] aumentan las demandas por mayores salarios y mejores condiciones de trabajo [...] Kalecki no creía que la gran motivación empresaria sea estrictamente la ganancia: “los dirigentes empresariales aprecian más la disciplina en las fábricas y la estabilidad política que las ganancias”. (Scaletta, 2017)

Si los recortes en el gasto público pueden significar una caída en el consumo y, por tanto, una pérdida del poder adquisitivo del funcionariado público y los hogares, suponemos que esa fuerza de trabajo pasaría al sector privado con salarios más bajos. ¿A dónde se apunta entonces? Consideramos que el bloque de poder busca disciplinar a la clase trabajadora, más allá de la crítica ética o política que se podría hacer al funcionariado público. Justamente el centro de la reforma del Estado tiene que ver con la función pública, lograr la manera de

disminuirlo a pesar de las múltiples necesidades sociales en servicios de gran parte de la población, las cuales paradójicamente implicarían más empleos públicos.

Adicionalmente, cuando el gasto público se ve restringido por el ajuste, es el sector privado el que presta y financia el dinero para la educación, la salud y el consumo. Casualmente los grupos empresariales que apoyan la reforma del Estado, también son dueños de bancos privados. En palabras de Garzón (2016)

ellos decidieron hace ya tiempo que nuestros modelos económicos deberían priorizar la inyección de dinero a través de dinero bancario y reducir al máximo la inyección de dinero vía déficit fiscal. Se reduce y limita la inyección de dinero vía déficit público y se fortalece y prioriza la inyección de dinero vía préstamos, separando para ello lo máximo posible el espacio del banco central del espacio del Estado. Se trata de una decisión política que responde a un proyecto ideológico, no a una inevitabilidad técnica por motivos científicos.

Profundizar los objetivos y las causas de la reforma del Estado en su papel de ajuste en las finanzas públicas, como en la transformación del empleo público debería considerar también el aspecto político, o mejor dicho, la lucha por el poder en Paraguay.

EL BLOQUE DE PODER EN DISPUTA: FRACCIONES HEGEMÓNICAS DE LAS CLASES DOMINANTES

El debate de la reforma del Estado fue instalado en la población desde los grandes medios de comunicación, pertenecientes a su vez a grupos empresariales poderosos con múltiples negocios en rubros diversos. Los principales grupos empresariales del Paraguay hoy son el Grupo Cartes, el Grupo Vieri y el Grupo Zuccolillo. Su presencia se destaca en actividades económicas industriales, comerciales, servicios y bancarias. El Grupo Cartes tiene presencia política directa en el Congreso Nacional a través de diputados y senadores de la ANR, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Por su parte, el Grupo Vieri tiene presencia en el Poder Ejecutivo (Ministerio del Interior y Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación) y junto con el Grupo Zuccolillo comparten afinidades políticas con los partidos políticos de Patria Querida (PPQ) y Partido Encuentro Nacional (PEN). ¿Por qué importan estos grupos empresariales principalmente dentro del bloque de poder?

los conglomerados Zuccolillo, Vierci y Cartes han vivenciado un crecimiento exponencial de sus negocios y la diversificación de su estructura productiva, logrando invertir en distintos sectores de acuerdo con los niveles de rentabilidad que se iban imponiendo con la nueva lógica económica. Asimismo, lograron cierto grado de integración en su estructura empresarial: controlan los flujos y manejan las distintas actividades de las cadenas de valor final de los productos o servicios que ofrecen (Nikolajczuk, 2018).

La composición burguesa y oligárquica de las clases dominantes incluye también en sus filas a los grandes capitales que forman las principales organizaciones de gremios empresariales, en conjunto al capital transnacional y un complejo esquema organizativo que atraviesa el aparato institucional del Estado, medios de comunicación, instituciones educativas, clubes sociales, lazos familiares, partidos políticos y alianzas sectoriales. Aquí un breve resumen de los principales grupos empresariales.

Tabla 1: principales características de los grupos empresariales en Paraguay

Grupo empresarial y cantidad de empresas	Grupo Cartes (Más de 30 empresas contabilizadas, podrían ser más)	Grupo Vierci (aproximadamente 45 empresas)	Grupo Zuccolillo (alrededor de 25 empresas)
Ámbitos económicos	Industrial, comercial, financiero, comunicaciones, ganadero.	Industrial, comercial, financiero, comunicaciones.	Comercial, financiero, comunicaciones, inmobiliario.
Afinidades políticas	ANR (cartismo) PLRA (llanismo)	ANR (oficialismo) PPQ, PEN	PPQ, PEN
Principales empresas	Tabesa S.A. Banco BASA Bebidas del Paraguay S.A.	Supermercados Stock, Superseis, Banco GNB (acciones)	Inmobiliaria del Este, S.A. Banco Atlas, Núcleo S.A.
Medios de comunicación	La Nación, Canal Gen, Unicanal	Telefuturo, Última Hora, NPY	Diario ABC Color.
Postura con respecto a la Reforma del Estado	A favor, son los que allanaron el camino para las reformas.	A favor, pero con cierta diversidad en el debate.	A favor, es el grupo de postura más conservadora.
Particularidades	Presuntamente estaría en una red internacional de lavado de dinero. Tiene fuerza política propia.	Es un grupo empresarial multinacional. Dos ministros del gobierno provienen de ese grupo. ²	El Diario ABC Color puede marcar agenda política a nivel país. Aliado del sector agroexportador.

Fuente: elaboración propia con datos extraídos de Gauto (2020)

2 Euclides Acevedo, el actual ministro del Interior; anteriormente formaba parte de los medios de comunicación del Grupo Vierci. En tanto que Alejandro Peralta Vierci, actualmente encargado del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación, fue director de los medios del Grupo Vierci por décadas.

Las disputas entre los principales grupos empresariales tuvieron un quiebre importante en el proyecto de enmienda del 2017, por un lado, el Grupo Cartes -a favor de la enmienda que iba a permitir la reelección de Horacio Cartes como presidente- y por otro lado, los grupos empresariales Vierci y Zuccolillo, que se opusieron y apoyaron al actual presidente Mario Abdo Benítez. La imposibilidad de este último de sostener un gobierno sin el apoyo completo de la ANR terminó por volcar la balanza nuevamente hacia el cartismo en lo que se denominó “Operación Cicatriz”, la unidad granítica del partido hegemónico. La ambivalencia de las posturas del actual presidente lo lleva a andar entre contradicciones y precipicios. De todas maneras, hay un consenso con respecto al proyecto de reforma del Estado, ya que en líneas generales comparten las mismas políticas económicas, salvo ciertas diferencias propias de la disputa que se reflejarían en la arquitectura institucional del Estado y la conducción hegemónica del bloque de poder.

Las fricciones dentro del bloque de poder se explican por quién lleva el liderazgo hegemónico de la sociedad y por la competencia entre los capitales, dinámicas estrechamente relacionadas. En los últimos años, la concentración empresarial ha sido importante. No se puede olvidar que la lógica de acumulación es el motor de las clases dominantes y eso implica una concentración de poder en un contexto social determinado.

Para sobrevivir, es conveniente que la empresa sea capaz de dominar su entorno, ejerciendo un control sobre la entrada de empresas rivales, sobre las actividades propias de investigación y desarrollo, sobre sus proveedores, sobre sus fuentes de crédito, sobre el futuro de la industria y, eventualmente, sobre la legislación del gobierno. Para ejercer un control, hace falta disponer de cierto poder. El poder es, pues, el medio para asegurar la perennidad de la empresa, un escalafón en la jerarquía social y el respeto de sus iguales. ¿Cómo se consigue el poder? Una empresa con un gran volumen de negocios y una gran cuota de mercado tendrá más poder. El poder, por tanto, está vinculado al tamaño de la empresa y a las cuotas del mercado. Para aumentar su tamaño y su parte de mercado es preciso crecer. El crecimiento es, pues, el medio para conseguir el poder. (Lavoie, 2005)

A pesar de la retórica antiestatal en los medios de comunicación, el conjunto de las clases dominantes participa con propuestas claras en la reforma del Estado, dejando en claro que no existe una relación independiente entre lo público y lo privado, sino que es un terreno de

la política que atraviesa a los distintos sectores, se encuentra en permanentes fricciones y disputas por el poder estatal.

SÍNTESIS Y PROYECCIONES POLÍTICAS

El escenario actual de pandemia y su posterior resolución pueden variar considerablemente, de existir una apuesta importante y un proyecto político de Estado de las clases dominadas y populares para revertir las actuales tendencias. La organización de los partidos de oposición, los sindicatos, los nuevos movimientos sociales y la ciudadanía crítica serán fundamentales para lograr conseguir consensos mayoritarios para hacer frente a la reforma de Estado planteada por el bloque de poder. Las disputas claves por el poder estatal pasarían a definirse en las siguientes dimensiones:

Las políticas económicas que el Gobierno implemente en los próximos años.

El imaginario político de las clases medias, el funcionariado público y la juventud pueden ser decisivos para frenar o acelerar el proyecto de Estado, que finalmente sintetiza una política de ajuste para las mayorías sociales.

La reorganización de clase en los sindicatos, partidos y la fuerza laboral del país, pueden revertir la potencialidad triunfante de las clases dominantes con otro proyecto de Estado, por lo que debería ser planteada como una tarea urgente para estos tiempos.

BIBLIOGRAFÍA

CEPAL (2020). *Salud y economía: una convergencia necesaria para enfrentar el COVID-19 y retomar la senda hacia el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe*. Informe COVID-19, CEPAL-OPS.

Cesaratto, S. (2018). *Seis clases sobre economía. Conocimientos necesarios para entender la crisis más larga (y cómo salir de ella)*. Editora Universidad Nacional de Moreno, Buenos Aires, Argentina.

CIRD (2020). *Pacto Social por el manejo de las finanzas públicas*. Documento elaborado con aportes de exministros de Hacienda en el marco de la Plataforma de Participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil en el proceso de la Reforma del Estado, impulsada por la Fundación CIRD. Asunción, Paraguay.

Delgado, M. (2016). *Ciudadanismo. La reforma ética y estética del capitalismo*. Editorial Catarata, Madrid, España.

Garicoche, J. (2020). *Reforma del Estado. Apuntes salarios públicos e impuestos*. Investigación para el Desarrollo, Asunción, Paraguay.

Garzón, E. (2016). *Desmontando los mitos económicos de la dere-*

cha: Guía para que no te la den con queso. Ediciones Península, Barcelona, España.

Gramsci, A. (2013) *Antología*. Selección, traducción y notas de Manuel Sacristán. Siglo Veintiuno Editores, Buenos Aires, Argentina.

Gauto, C. (2020). “Hegemonía, Gobernanza y Acumulación. El proyecto neoliberal del Nuevo Rumbo. Actores claves, políticas fundamentales y transformaciones estatales en el proceso de acumulación por desposesión durante el Gobierno de Horacio Cartes (2013-2018)” (tesis de grado). Escuela de Ciencias Sociales y Políticas, Facultad de Derecho, Universidad Nacional de Asunción. Paraguay.

Jessop, B. (2017) *El Estado. Pasado, Presente y Futuro*. Editorial Catarata, Madrid, España.

Lacchi, M. (2010). “La función pública en Paraguay. Aspectos históricos, situación actual y perspectivas para una reforma del estado”. PUBLICACIÓN PERIÓDICA DE ANÁLISIS Y ESTUDIOS SOBRE LA REALIDAD SOCIAL Y POLÍTICA DEL PARAGUAY N° 5 – junio 2020. Centro de Estudios y Educación Popular Germinal, Asunción, Paraguay.

Lavoie, M. (2005). *La economía postkeynesiana. Un antídoto al pensamiento único*. Icaria Editorial, Barcelona, España.

Monedero, J. (2017) *Los nuevos disfraces del Leviatán. El Estado en la era de la hegemonía neoliberal*. Editorial Akal, Madrid, España.

Nikolajczuk, M. (2018). “Élites económicas, poder político y medios de comunicación en Paraguay”, *Cultura Política y Acción Pública*, REVISTA NOVAPOLIS N° 13 – Junio 2018, Arandura Editorial, Asunción, Paraguay.

OCDE (2018). *Estudios de la OCDE sobre Gobernanza Pública: Paraguay: Hacia un desarrollo nacional mediante una gobernanza pública integrada*, Editions OCDE, París.

Porras, A. (2014). *Acción de Gobierno. Gobernabilidad, Gobernanza, Gobermedia*. Editorial Trotta, Madrid, España.

Poulantzas, N. (2012) *Poder político y clases sociales en el Estado Capitalista*. Editorial Siglo XXI, México D.F., México.

Poulantzas, N. (2005) *Estado, poder y socialismo*. Siglo Veintiuno Editores, México.

Rojas, L. (2014). *La metamorfosis del Paraguay. Del esplendor inicial a su traumática descomposición*. BASE Investigaciones Sociales, Asunción, Paraguay.

Scaletta, C. (2017). *La recaída neoliberal. La insustentabilidad de la economía macrista*. Capital Intelectual, Buenos Aires, Argentina.

Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y

Social. (2014). *Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2030*. Asunción.

BOLIVIA: LA CONTRARREVOLUCIÓN DE NOVIEMBRE Y LA INEFICACIA DE LA REVOLUCIÓN.

Jorge Viaña¹

“cuando el poder se vacía de clases, es lógico que lo llene la derecha que, en cambio, sólo necesita sus intereses, sus dirigentes y la inactividad de las masas”

Rene Zavaleta Mercado 1970

FORMAS DE MANEJO DEL PODER Y ANÁLISIS SINTÉTICO DE LAS FASES DE VACIAMIENTO DE LAS MASAS EN EL PODER DEL ESTADO (2006-2019)

En el periodo de luchas que va desde fines del siglo pasado hasta la promulgación de la nueva constitución el 7 de febrero del 2009, con su punto más alto en la guerra del agua en abril del 2000², en Bolivia sólo conquistamos *el terreno*³ para buscar una emancipación revolucionaria. Sin embargo, muchos creyeron que ya habíamos logrado la

1 Economista y catedrático en economía y filosofía de la Universidad Mayor de San Andrés de Bolivia. Investigador del Instituto Internacional de Integración Convenio Andrés Bello y autor del libro Configuración y Horizontes del Estado Plurinacional.

2 Pasando por los levantamientos indígenas Aymaras de abril y septiembre del 2000, junio-julio del 2001, el levantamiento cocalero del 2002, la lucha contra el impuestazo de febrero del 2003, la guerra del gas en octubre del 2003 y la lucha nacional por el gas que derrocó a Carlos Meza en el 2005. Para profundizar el análisis de todo este ciclo ver Viaña (2000, 2006, 2006^a, 2007). Este es el núcleo de ascenso de masas sobre el que se basó hasta el final del proceso constituyente el accionar del MAS en el Estado. Y es el periodo en el que se da lo que Zavaleta llama un momento constitutivo y, por lo tanto, la condensación de un polo articulado de lo nacional popular que se suele llamar la formación de un bloque histórico.

3 Este es el método que usa y el núcleo de la idea de Marx para analizar la revolución de febrero en la revolución francesa de 1848, ¿qué era lo que conquistaba el proletariado en esta fase de la revolución de 1848? Solo el terreno para seguir luchando. (Marx. 1979: 36)

emancipación misma y se entregaron conservadoramente a las distintas variantes de esta peligrosa certeza, en especial los pragmáticos estatistas. Como casi siempre ocurre, apenas se abrió el terreno para luchar por la emancipación se precipitó la tendencia al cierre, debido a la incomprensión absoluta de lo que nos estaba pasando. Así, desde 2010 empezó la decadencia gradual del proceso⁴, la cual se hizo estrepitosa en 2016. Si diez años se requirieron para abrir este escenario, otros diez fueron necesarios para que cayera lentamente.

No supimos realmente avanzar: ¿En que se diferenciaba un Estado plurinacional a la república? ¿Cómo construir un “Estado Plurinacional”? ¿Cómo construirlo sin enajenar las fuerzas vitales de la sociedad y los movimientos sociales? ¿Cómo evitar los graves peligros conservadores de la construcción de Estado que siempre entraña una faceta conservadora? El fin del proceso constituyente y la promulgación de una constitución profundamente garantista una de las más avanzadas de Latinoamérica y el mundo, fue el punto de inflexión ya que la construcción institucional de cualquier Estado siempre es conservadora⁵. Después de este largo proceso de casi cuatro años (2006 al 2009)⁶, el Movimiento al Socialismo (MAS) se concentró cada vez más

4 Para profundizar este otro periodo se puede consultar Viaña (2011, 2012, 2014, 2017, 2018)

5 No olvidemos que en el marxismo emancipativo tenemos presente cuando Marx, analizando la Comuna de París, insistía en una concepción revolucionaria de la necesidad incuestionable de la transformación revolucionaria y radical del Estado, que la comuna de París era una forma política comunal y que la revolución era siempre una revolución “contra el Estado mismo”, no contra tal o cual forma de Estado “legitimista” “constitucional” “imperial”, sino contra el Estado como tal. Ese “aborto” sobrenatural de la sociedad” le llamó Marx a la forma Estado. Y planteó junto con Engels el postulado de ya no hablar más de Estado y llamarle a un “Estado” revolucionario “semi Estado comuna”. Lenin retomó esto y en El Estado y la revolución planteó claramente que la revolución consistía, primero que nada, en la “demolición” del Estado, y nos alertó de que, en 1923, el Estado ruso seguía siendo todavía “un Estado zarista y burgués barnizado de socialismo”, por lo cual no se podía defender al “Estado” en abstracto. Retomamos brevemente estos debates porque creemos que hay dos grandes errores, los estatistas (que son la gran mayoría del MAS) que ni se plantearon este debate porque son muy conservadores y medran del poder sin remordimientos, y los hiperantiestatistas e hiperautonomistas sin principio de realidad, que no entienden que el Estado también es un campo de lucha y debemos lidiar con esta contradicción; al menos estos últimos no son ministros ni senadores, y en general están más en lo correcto en el debate en este gran dilema.

6 Los procesos constituyentes en Venezuela y Ecuador fueron mucho más cortos mostrando un síntoma; en Bolivia se cedió demasiado y se empezó la erosión de la relación gobierno-masas. En Venezuela fue ejemplar, ya que se dio de abril de 1999 a diciembre de 1999, es decir, en menos de un año. El ecuatoriano duró un año, del 2007 al 2008. El boliviano tardó casi 4 años (Viaña, 2016) y no se vio que al salir de la

en dar forma al Estado, lo que hizo reflotar las tendencias más conservadoras machistas, coloniales y capitalistas. Ahí surgió claramente el ala derecha del MAS, por lo general abogados y funcionarios burocratizados, varios de ellos ministros que empezaron a dominar el escenario, alentados por lo general por los máximos dirigentes de la peor forma posible, pues primó una gestión instrumental del poder. Los síntomas de esta primacía llegaron en el 2010 después del gasolinazo, un error político que intentó quitar la subvención a los hidrocarburos afectando a los sectores populares, y en el 2011 con el manejo conservador del conflicto del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Secure (TIPNIS). Se configuró así el momento más claro de viraje gradual a una posición conservadora desde sectores pragmáticos, estatistas y economicistas que tienen una larga e importante historia en Bolivia y nos pesa en la actualidad como un lastre.

Esta nueva etapa conservadora estuvo marcada de forma cada vez más clara por permitir o no hacer lo suficiente frente a la corrupción y apoyarse gradualmente en la agroindustria del oriente y la banca bajo el criterio de que el crecimiento del PIB y la economía eran lo más importante. Entre el 2011 y 2015 ya había cuajado este nuevo esquema de poder del MAS con ciertos aspectos que permitían mantener cierta fachada popular. Paralelamente se fue tutelando y luego desarticulando a las organizaciones fundamentales del proceso como el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ), la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB), la Central Obrera Boliviana (COB), Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia - Bartolina Sisa y otras. Se las veía como retaguardia del proceso a tono con este estatismo y economicismo pragmático y conservador. Pero además, hicieron un uso instrumental y grosero de ellas y poco a poco dañaron su autonomía, vitalidad e iniciativa y, por lo tanto, su capacidad de movilización. Este fue el mayor error del MAS.

En 2016 se da un impasse histórico: la derrota en el Referéndum constitucional del 21 de febrero (21F), el cual buscaba habilitar la reelección. Un gravísimo error político del MAS, como el propio vicepresidente reconoció un año después en una entrevista, resultado de la impaciencia de Morales y sus colaboradores más cercanos por

constituyente ya estaba empezando la decadencia del proceso. La parcial revolución política se dio entre el 2000 al 2009 y luego empezó lentamente a detenerse desde el 2010, y colapso entre el 2016 y el 2017. Esto se desarrollará más adelante.

asegurar el poder hasta el 2025 y del que después no se pudo salir. ¿Qué necesidad había de convocar a un referéndum por una nueva reelección después de seis meses de haber ganado la elección nacional? Ahí se notaba ya un extravío grave, el cual pudo resolverse al hacer la autocritica y reconducir el proceso. Pero, no quisieron. En su balance aludían a que prácticamente todo se había hecho bien y lo único que hacía falta era redoblar la propaganda en las redes sociales. Un extravío clase mediero clásico amparado en que el mundo empieza y acaba en la Internet; exotismos posmodernos propios de los liberales y populistas que pululaban en el MAS. La solución fue peor que la enfermedad.

La opción era ganarle en la cancha a los conservadores como había hecho en Venezuela Hugo Chávez, quien después de haber asegurado 14 elecciones seguidas perdió el referéndum para la reelección en el 2007 y en vez de inventar artilugios legales profundizó la estrategia de movilización de masas y de radicalización del proceso desde el 2002, año del golpe de Estado fallido. Esta era la única vía revolucionaria para revertir el impase del 21F⁷, porque combinaba construcción de poder popular y movilización de masas en la coyuntura con la necesidad de reelección. René Zavaleta criticó a los presidentes Juan José Torres y Alfredo Ovando en los setenta por no movilizar a las masas, el único método fundamental de un gobierno progresista para resistir el embate del imperialismo (Zavaleta, 2011, p. 656). Desmovilizar a las masas es un suicidio político en Bolivia y lamentablemente eso hizo el MAS.

Además, se descuidó el sistema de salud y apenas en el 2018 se implementó el Seguro Único Gratuito y Universal, pese a que estaba en la constitución desde el 2009. La educación también fue secundaria y casi toda la política del gobierno entre el 2016 y 2019 estuvo

7 Los abogados conservadores del MAS y funcionarios obsecuentes inventaron cuatro vías de habilitación de Morales a las elecciones del 2019 en el IX Congreso Ordinario del MAS en diciembre del 2016, con el beneplácito y aplauso de Morales. Basados en artilugios legales típicos de funcionarios conservadores (dos vías estaban basadas en la reforma del artículo 168 de la Constitución, una tercera renunciar al cargo 6 meses antes del cumplimiento del periodo, y la cuarta pedir una interpretación del Tribunal Constitucional sobre la elección y reelección que fue el que se eligió posteriormente), cuesta creer que no hubiera nadie para decirles que era un gravísimo error político. Esto pasó porque no entienden ni les interesa las bases clasistas y la política revolucionaria de un gobierno, solo atajos legales, solo pensar en el poder del Estado y la "realpolitik", el poder para un individuo sea como sea y a toda costa. Cosa que además no hacía falta, ya que el MAS sin Morales sacó 55% en la última elección, más votos que el propio Morales el 2005, demostrando al fin que Morales no era ni es imprescindible en absoluto.

dirigida a la adulación de las clases medias urbanas, complemento a la desmovilización de las masas. Otro grave error en un país tan politizado y de amplias capas populares que empezaron a tener una actitud de votar por el MAS bajo sospecha, pues no irían más a poner el pecho como habían hecho entre 2006 al 2010 y no se las puede culpar por eso como hacen algunos intelectuales. Esto es lo que el gobierno fue provocando con su acomodo a las clases medias sin verlo siquiera. La gente inteligentemente usaba el escenario liberal del MAS porque no les quedaba otra, pero desconfiaba de ellos. De ahí la consigna “nosotros no somos del MAS, el MAS es de nosotros”.

Para ser justos, también hay que decir que esto no se veía de manera clara por los enormes éxitos en el campo económico. En ese periodo el PIB creció aproximadamente en 35.000 millones de dólares y a una tasa promedio superior al 4,5%, uno de los más dinámicos en la región cuando otros crecían a 1% o estaban en recesión. Un verdadero récord. Así mismo, la pobreza extrema y la moderada se redujeron sustancialmente, como no había ocurrido en la historia de Bolivia, de manera que más de 2 millones de personas pasaron de la pobreza a la clase media en un país de 10 millones de personas; todo un cambio estructural. Pero ahí se ve uno de los mayores errores que se cometieron, pues no se hizo una adecuada conducción política de estos éxitos económicos que traían cambios estructurales en las relaciones de clase y casta. En gran medida el mensaje que acabó dando el propio gobierno era hiper conservador, tarifas baratas y consumismo, con lo que acabó siendo uno de clase media para las clases medias, con cierta fachada popular e indígena.

En la campaña electoral de 2019 un altísimo funcionario dijo que sólo una crisis económica o problemas con la economía podrían desatar una gran crisis política; ahí ya se veía el reduccionismo economista ciego frente a lo que estaba pasando y a sus impredecibles consecuencias. Dos semanas después vino la gran crisis política que creían imposible, rematada con la caída de Morales. Veamos ahora el gran dilema estructural de “la toma del poder” que da lugar casi irremediablemente a casi todas las versiones de las posiciones conservadoras.

PARADOJA DE LA OCUPACIÓN DEL ESTADO Y RELACIÓN ESTADO-MASAS EN EL PODER

La paradójica consecuencia de la “toma del poder” por las mayorías subalternas y explotadas que analizaremos a continuación es el punto de partida fundamental. Gramsci en una concepción aparentemente más estatalista que Zavaleta nos plantea:

Las clases subalternas, por definición, no se han unificado y no pueden unificarse mientras no puedan convertirse en “Estado”: su historia, por tanto, está entrelazada con la de la sociedad civil” (Gramsci, 1970, p. 491).

Más estatalista porque plantea que las clases subalternas sólo pueden unificarse al convertirse en Estado, lo que parece un exceso. Sin embargo, tal idea es el resultado de su forma de ver a las clases subalternas y el peso de la historia de los subalternos como permanentemente disgregada y episódica:

La historia de los grupos sociales subalternos es necesariamente disgregada y episódica. No hay duda de que en la actividad histórica de estos grupos hay una tendencia a la unificación, aunque sea a nivel provisional pero esta tendencia se rompe constantemente por la iniciativa de los grupos dirigentes (Gramsci, 1970, p. 493).

Zavaleta en una versión menos estatalista plantea una idea similar: “en determinadas instancias la única forma de unidad de lo popular es lo estatal” (Zavaleta, 1990, p. 179); así, no siempre es el Estado la única forma de unidad de lo popular como da plantea Gramsci. En otro texto muy revelador aclara que “la historia de las masas es siempre una historia que se hace contra el Estado mismo” (Zavaleta, 1983, p. 110), ya que el Estado está imposibilitado en última instancia para expresar a las masas y sus luchas revolucionarias, posición acorde con un marxismo emancipatorio que casi todos los altos funcionarios del MAS no quisieron ni discutir: “todo Estado en último término niega a las masas, aunque la exprese o la quiera expresar, porque quiere insistir en su ser que es el de ser Estado” (Zavaleta, 1983, p. 111). Aquí vemos una concepción vital de la relación masas-Estado: la historia de las masas es siempre una historia contra el Estado y el Estado niega a las masas por mucho que intente representarlas, incluso los Estados “socialistas” o “plurinacionales”. Una paradoja que requiere un enfoque historicista como veremos.

A todo lo anterior habría que sumar la idea de Gramsci de que la unidad histórica de las clases dirigentes se produce en el Estado, que la historia de estas clases es, en gran medida, la historia de los Estados y los grupos de Estados. Tal es la base en su concepción de “Estado ampliado”, el cual no constituye una mera unidad formal ni jurisdiccional, más bien se trata de la articulación entre sociedad política o Estado

y sociedad civil a través de diversas líneas de mediación. Es este un asunto fundamental porque la esencia de esta concepción plantea las relaciones orgánicas y de interpenetración mutua entre los diferentes elementos, al no ser cosas diferentes ni estar tajantemente divididos. Esto permite a las clases dominantes no sólo su organización sino construir hegemonía de manera efectiva.

En las luchas de los explotados es necesario introducirse en el manejo del Estado o “tomar del poder”⁸, como inicio de una “revolución” y para crear unidad. Si bien es una necesidad también es una trampa muy peligrosa, casi como meterse en la boca del lobo. Esa es la manera en la que se unifican las clases dominantes para dominar y explotar, y con las clases subalternas no cambia mucho la situación si no se hace un trabajo revolucionario sistemático con la propia “ocupación del Estado” o “toma del poder”. Tal asunto está completamente descuidado en las luchas latinoamericanas porque hay una estadolatría ciega en este fenómeno fundamental.

¿Cómo hacer para no renunciar a las luchas dentro del Estado, pero que a la vez podamos salir de la visión conservadora según la cual el Estado es lo más importante? Lo más importante son las masas y la lucha por la democracia como autodeterminación y el 10 de noviembre de 2019 aprendimos dramáticamente eso cuando el gobierno de Morales cayó como castillo de naipes. Podemos empezar por meditar las siguientes palabras de Zavaleta al reflexionar la cuestión del funcionario de Estado que se reclama “revolucionario” desde el punto de vista de la democracia como autodeterminación de las masas:

El mediador es una mezcla entre el funcionario y el jefe social. Si la sociedad civil nacionaliza a los mediadores es que ha llegado la hora de la crisis nacional general porque ellos ahora no creen más en el Estado y han comenzado a creer en sí mismos en el

8 Recordemos y enfatizamos contra la tendencia de los exististas estatistas y pragmáticos que creen que al ocupar el Estado ya hicimos una “revolución”, que “los grupos subalternos sufren siempre la iniciativa de los grupos dominantes, incluso cuando parecen victoriosos, los grupos subalternos se encuentran en una situación de alarma defensiva”. (Gramsci, 1970, p. 493). Estas ideas de Gramsci las aplica Zavaleta para comprender por qué en el ‘52 el proletariado renuncia al poder, que el pecado original del movimiento obrero boliviano es haber nacido sindicalista, ya que cuando no había nadie de quien defenderse -por que los habían derrotado a todos- fundaron un sindicato, la COB, y no un órgano de poder. Están en una situación de “alarma defensiva” incluso en las victorias, por lo que en vez de sentirse poder y autogobernarse renuncian al poder. Por eso Zavaleta dice que el proletariado no sólo no tiende al poder sino que, incluso teniéndolo, tiende a perderlo. (Zavaleta, 1995)

mito revolucionario. Es correcto decir por tanto que todo dirigente es un mediador hasta que no se convierte en un amotinado (Zavaleta, 1983, p. 110).

¿Cómo se construye unidad de lucha y se sostiene la perspectiva emancipatoria dentro y fuera del Estado sin ser tragado por su poderosa fuerza metafísica que destruye la vitalidad de lo social y enajena a los sujetos subalternos? Esta es una de las tareas más importantes. Sobre la base de estos análisis vitales veamos ahora la cuestión del Estado y alcance de la “revolución”.

ESTADO, "REVOLUCIÓN" Y NÚCLEO DE PODER DEL MAS EN SU FASE DE DECADENCIA (2010-2019)

A partir del 2000 y hasta el 2010 vivimos el inicio de una transformación revolucionaria y del 2010 al 2019 su gradual decadencia. Se equivocan quienes niegan ciertas transformaciones que claramente eran el inicio de un proceso revolucionario, en especial cierta presencia de los sectores populares en el Estado que lo fractura parcialmente, la impronta plebeya y popular en la constituyente y en el imaginario social; pero también se equivocan quienes magnifican tales transformaciones de manera triunfalista y ven una revolución con mayúscula. En tal sentido, en un texto de 2018 reflexionamos sobre los alcances de lo que denominamos una “parcial revolución política”, en diálogo con autores como Daniel Rafuls y José Valdez (Viaña, 2018). Estas vías conducen a un análisis conservador, bien al negar lo avanzado, por muy modesto que sea, o bien por *exitista* y dañino, pues no se puede vivir creyendo que se hizo una revolución inexistente.

En su análisis de la revolución de 1848, Marx y Engels descubrieron que todos los procesos anteriores se habían reducido a la sustitución de unas minorías por otras en el manejo del Estado para amoldarlo a sus intereses. De ahí que sólo se analizaran revoluciones que en su mayoría parecían circunscribirse a lo político a la manera de los golpes de Estado, aunque emprendieran cambios más profundos en las estructuras económicas y las relaciones de producción, acercándose a verdaderas revoluciones sociales. Así identificaron que siempre son los grupos minoritarios preparados para la dominación y el gobierno (terratenientes aristócratas, aristocracias aburguesadas, burguesías liberales) los que acaban encumbrados en el poder, aunque las mayorías (campesinos, siervos, pongos, obreros) cooperarán con ellos.

Tal hecho cambió radicalmente entre 1848 y la comuna de París de 1870. ¿Cómo hacer cuando el arribo al poder es de mayorías fragmentadas con historias episódicas y difusas y sin ninguna práctica para el gobierno y el ejercicio del poder? Tiende a ser igual pues la supremacía en los cargos del poder es de quienes vienen de las clases privilegiadas, sólo que esta vez hablan en nombre de las mayorías explotadas. Así, surge el siguiente dilema: ¿cómo hacemos para que las revoluciones de minorías se conviertan en revolución de las mayorías? En esto radica la mitad del problema para entender por qué tienden los sectores minoritarios de los grupos de funcionarios y profesionales a ser tan importantes “expresando” y “representando” a las mayorías en los procesos latinoamericanos. Tal situación tiene una larga historia en Bolivia, iniciada en 1952 como veremos.

Una revolución política también tiene niveles, uno de ellos es la diferencia entre llegar al gobierno y la toma del poder real; en ese sentido, Zavaleta retomando los debates de Lenin sobre el poder dual planteó la diferencia entre el poder del Estado y el aparato del Estado. En Bolivia se llegó a medio camino del manejo del poder real, aunque se tenía todo el “aparato” del Estado. Una segunda fase de una revolución política es la transformación profunda del Estado como se explicó líneas arriba, lo que en Bolivia fracasó completamente; para lograrla por lo general hace falta el inicio de la revolución social o de una serie de revoluciones como en Francia⁹. Y sólo se puede construir esta bisagra entre revolución política en cualquiera de sus niveles de desarrollo y el inicio de una revolución social con la construcción de poder popular, movilización de masas y formas de autogobierno social. Ese fue el más grave error político estratégico de Morales, no avanzar en ese sentido. Hubiese o no posibilidades de ir más allá del capitalismo¹⁰, se debió encarar esta tarea construcción de poder popu-

9 Es importante tener en cuenta que en las revoluciones, cuando las minorías dominantes se desplazan entre sí, pueden parcialmente lograr transformar el Estado sin grandes revoluciones sociales y cambios de la estructura económica, aunque a veces es el preludio de su concreción. Tal es el caso de la revolución de febrero de 1848 en Francia, descrita por Marx: “La república no encontró ninguna resistencia...y esto la desarmó. Su misión no consistía ya en transformar revolucionariamente el mundo consistía solamente en adaptarse a las condiciones de la sociedad burguesa.: Pero el viejo Estado había desaparecido y la revolución iba dirigida, ante todo contra la aristocracia financiera.” (Marx, 1979, p. 41-42) Esta es una revolución a la vez política y social.

10 En la gran mayoría de los debates se nos acusa de que queríamos destruir el capitalismo y nos preguntan si había condiciones o no para hacerlo; hagamos la concesión de que es posible que no, pero ello no es excusa para no haber hecho otro tipo de manejo del poder que nos encaminara en esa perspectiva, ya que es ahí donde se

lar y mantener latente y viable la posibilidad de movilización de masas por lo menos para sostener al gobierno del MAS.

Claramente esto no se dio en Bolivia y las cúpulas del MAS no quisieron discutir tales asuntos. Por eso hablamos de una parcial revolución política que empieza a declinar desde el 2010 y que entre 2016 y 2019 ya era una revolución detenida o en retroceso, aunque se manejara bien la política económica. No se puede decir ni antes ni hoy que “el viejo Estado había desaparecido” y este es un criterio objetivo de una revolución política. Lamentablemente el Estado se mantuvo casi intacto mostrándonos que estábamos ante un gobierno extraviado en la *real politik*. El punto más crítico llegó de manera catastrófica en 2019 cuando a Evo Morales le llegó la orfandad total de masas el 7 noviembre, dos semanas después de la elección presidencial. Esto es lo que no se quiso ver entre el 2010 y el 2019¹¹.

Por este problema histórico y teórico analizado líneas arriba, era

verificaban las fuerzas que se tenía. Por supuesto, eso nadie lo sabe de antemano, solo los que juegan a adivinos o ven siempre o nunca “situaciones revolucionarias”, pero lo cierto es que impidieron todo avance hacia estas bisagras anteriores al gran debate de si se puede o no ir más allá del capitalismo.

11 Esto es lo que no entiende lamentablemente Atilio Borón o no lo quiere decir porque no quiere criticar a Morales y al núcleo de poder del MAS. Resulta inaceptable cuando plantea en su Prólogo al libro de Hugo Moldis, (Moldis. 2020, p. 8) que, al preguntar a los bolivianos de a pie si deberían tener un sentimiento de gratitud con Evo Morales, como si fuera solo Evo Morales el asunto, afirma que había un sentimiento de “ingratitude masoquista” en las masas en Bolivia, posicionamiento inaceptable que, según él, abrió paso a los racistas que luego tomarían el palacio. Parecería que la culpa la tienen las masas ingratas y masoquistas y no Evo Morales y sus colaboradores por el desastre al que nos llevaron, quienes con golpe y todo son los responsables principales de lo que pasó. Lo que no quiere y debería hacer Borón es criticar a Morales y el núcleo de poder que nos llevó a ese desastre y no creer que la gente tiene una ingratitude masoquista. Es fácil echarle la culpa a la gente y eximir a los caudillos; la gente tenía sospechas completamente legítimas sobre la actitud del MAS -que Borón no entiende-, e incluso así votaban por el MAS, intuyendo lo que era correcto y que Borón no quiere ver o no lo quiere decir en voz alta: que el núcleo de poder al mando de Morales estaba ya completamente extraviado desde hace años. Atilio Borón mezcla más de 10 motivos de diversa índole de “crítica y autocritica” sin llegar al fondo del asunto. Por lo menos Borón sí entiende que en Bolivia no hubo ninguna revolución, ni siquiera política, solo el inicio de una que es muy diferente y que no es poca cosa, tomando en cuenta que Hugo Moldis sí lo cree, ya que trata de explicar confusamente en su libro la existencia de una revolución con mayúsculas, cosa que explica esta posiciones exististas de los núcleos de poder más densos del MAS. Sin embargo, a Hugo Moldis hay que reconocerle el mérito de plantear el debate más profundamente de “la soledad de Evo” (Moldis, 2020) que la produjo el mismo Morales, a diferencia de todos los grandes dirigentes del MAS, que hasta ahora no dicen nada sustancial y profundo y menos intentan hacer una autocritica seria.

de primera importancia neutralizar las tendencias pequeñas burguesas del proceso, pero se hizo todo lo contrario. No sólo no se comprendió ni se hizo nada al respecto, sino que se incentivó al máximo la situación con la participación de los populistas y liberales que tanto les gustaban a Morales, García Linera y el círculo de poder cuando coparon la escena en el 2016 sin ninguna lectura clasista, teórica o histórica del proceso.

Veamos más de cerca este problema. Según Marx, “en Alemania no es posible precisamente la revolución radical, sino por el contrario, la revolución parcial, la revolución meramente política, una revolución que deje en pie los pilares del edificio (Marx como aparece en Dussel, 2011). De tal manera, sólo una revolución parcial, ósea revolución política, implicaba nada menos que dejar en pie “los pilares del edificio”, pero dismantelar todo lo demás. Esta es una concepción de revolución política profunda, pero ni siquiera eso se pudo hacer en Bolivia y tal vez no se podía de cualquier forma, pero el referente es fundamental para que por lo menos no creamos que hicimos una revolución política completa y profunda que nunca existió.

La “revolución” depende de la trama en la que está inserta. Veamos la aplicación que hace Marx de la conquista de la república por presión de los obreros en Francia en 1848: “el 25 de febrero de 1848 había concedido a Francia la república, el 25 de junio le impuso la revolución y desde junio, la revolución significaba: subversión de la sociedad burguesa, mientras que antes de febrero había significado: subversión de la forma de gobierno” (Marx, 1979, p. 56). En ese momento de revolución estrictamente sólo se “conquistaba el terreno para luchar por su emancipación revolucionaria, pero no, ni mucho menos, esta emancipación misma” (Marx, 1979, p. 38). En Bolivia con ciertos logros de esta parcial revolución política vivida entre 2000 y 2010, al salir del proceso constituyente se había ido un poco más allá de sólo la *subversión de la forma de gobierno*, ese era el inicio de una revolución política hacia cambios estructurales. Sin embargo, con eso sólo conquistamos *el terreno para la lucha por una revolución política*; era el inicio de una revolución política y no su materialización.

La bisagra emancipativa no era ponernos a discutir si ir o no más allá del capitalismo en el corto plazo, más bien consistía en construir poder popular, formas de autogobierno social, movilizar a las masas, o al menos entender la importancia de que preserven su fuerza autónoma, unidad, vitalidad, organización y capacidad de movilización, al menos por instinto de supervivencia. Seguir con la iniciativa política desde las bases movilizadas de la sociedad y con las transformaciones

estructurales hasta; a) nos acercarnos a que el viejo Estado estuviera más o menos “desaparecido”, en la medida de las fuerzas sociales existentes para lograrlo, b) siguieran los cambios estructurales profundos y c) acercarnos más a que el proceso significara subversión de la sociedad burguesa, colonial y patriarcal, y no sólo subversión de la forma de gobierno. Pero no se hizo nada de eso¹².

Como vemos no existió ninguna revolución política, aunque sí el inicio de una que, al detenerse, hizo imposible avanzar hacia una revolución social. Insistimos que el inicio de esta revolución política empezó rápidamente a retroceder desde el 2010 y para el 2016 ya no existía en absoluto, sólo la lucha instrumental por el poder. Los grandes dirigentes del Estado preservaron en el imaginario de la correlación de fuerzas del 2010, la apertura del proceso de revolución política parcial y vivieron de ficciones entre el 2016 y el 2019, pues ya no existía ninguna revolución a esas alturas, hecho dramáticamente demostrado con la soledad de Morales y la orfandad perpleja del núcleo de poder.

Lo anterior seguramente será visto parcialmente por Atilio Borón como resultado de la “ingratitude masoquista” de las masas, según su prólogo al más reciente libro de Moldis (2020). Sin embargo, hay que reconocer que hay elementos reveladores que aportan estas y otros enfoques que deben ser profundizados, pues nos ayuda a armar un balance urgente y pendiente desde varios ángulos. La base es el reconocimiento hecho por Borón de que “Evo tenía la calle y la perdió”, pero a su vez que “el proceso de cambio sin masas que salieran a defenderlo” fue consecuencia de la cadena de graves errores que cometió Morales y su núcleo de poder, antes que una expresión de la “ingratitude masoquista” de las masas a las que culpamos por lo que paso con el gobierno del MAS en sus últimos días. El desenlace del 10 de noviembre de 2019, cuando Evo Morales debió renunciar a la presidencia, desnudó objetivamente la subestimación de la movilización de las élites y que todos los grandes temas del poder fueron manejados de la peor forma durante años, por eso el desastre fue monumental.

Quienes controlaban el aparato de Estado trataron de equilibrar una política que seguía teniendo aspectos populares con el beneficio de los sectores de poder de las élites y nunca pensaron que tales adulaciones y privilegios resultarían totalmente ineficaces. En Bolivia para

12 Esto no tiene que ver directamente con la generalidad de la lucha por ir más allá del capitalismo, si no se hacía esto -que es el abc revolucionario y no se quiso hacer-, no tiene sentido discutir si se podía ir a la revolución anticapitalista o cosas por el estilo, porque ni siquiera se quiso que avanzáramos en este sentido.

un proyecto emancipatorio no se puede suponer lo que no existe. De alguna forma los gobiernos de Morales tuvieron elementos semibonapartistas, como los de Ovando o Torres de los sesenta y setenta, aunque sin basar su poder en el ejército. Sobre los que Zavaleta (1987) sugerentemente planteó en *El poder dual* que “practican una equidistancia política (la autonomía del aparato estatal no existe en un Estado subdesarrollado) con relación a las clases” (1987, p. 193).

Esta equidistancia política fue practicada entre 2016 y 2019 creyendo, insólitamente, que los salvaría. Por eso volcaron sus esfuerzos a adular a las clases medias y a construir un “estatuto de equilibrio y de paz social entre las clases con concesiones paralelas a los sectores subalternos, pero también a las clases dominantes” (Zavaleta, 1987, p. 193), a hacer alianzas con la agroindustria y otros sectores de poder económico. Pero en momentos de polarización y lucha de clases este semibonapartismo siempre lleva a todo lo contrario, porque el tipo de Estado boliviano, en especial sus órganos de represión no resisten esa ambigüedad del poder, más aún si se está en un paroxismo de poder incapaz de ver que ya no tenían a las masas. Así, quedó claro que tal autonomía del aparato estatal y en especial de los órganos de represión no existe en absoluto. Si no están las masas están el Ejército y/o la Policía ocupando el poder o desplazándolo, no hay lugar para otra cosa en Bolivia. Si se exacerba la lucha de clases, el Estado –incluso el plurinacional– muestran esa particular característica de un Estado aparente.

Cuando las masas fueron desmovilizadas por el propio MAS, una corresponsabilidad de los funcionarios del Estado y las ambiciones de los dirigentes de los movimientos sociales, el poder fue ocupado gradualmente por el golpe que en última instancia fue definido por el Ejército, único núcleo real, verificable y duro del Estado en Bolivia y esto el MAS ni lo vio venir. Tal condición es más difícil que pase en otros países cuyo Estado no es aparente o tan “subdesarrollado” como el nuestro hasta hoy.

MOMENTOS CONSTITUTIVOS, EJES ESTATALES Y EXTRAVÍO LIBERAL DEL MAS

Los Estados y las masas nunca son las mismas en los diferentes países, debemos entender sus especificidades. Partamos de sus momentos constitutivos más generales:

Un pueblo...se remite siempre al momento de su constitución, es decir, de su momento originario...en ese sentido, todo acto fun-

dacional tiene un requisito de masa. No obstante ello ¿Por qué hay pueblos que fundan su mito en el orden y pueblos que lo fundan en la masa y su autodeterminación?” (Zavaleta. 1983, p. 114)

Es completamente diferente un pueblo que basa su identidad y origen político en pactos, en el orden o en la dádiva de las clases dominantes y los pueblos que lo basan en la masa y su autodeterminación. El “pueblo” en Bolivia, las masas subalternas, se han constituido desde y por medio del “maximalismo de masas” desde antes que exista Bolivia con Katari. Esto explica en parte la caída de Morales como castillo de naipes cuando las élites se movilizan y las masas populares están paralizadas y desmoralizadas. Por eso la democracia representativa en Bolivia es, por lo general, ineficaz, porque “la democracia representativa, para ser efectiva requiere de un grado de homogeneidad que Bolivia no tiene” (Zavaleta, 1986, p. 20).

¿Cómo puedes volverte cada vez más liberal en un país donde la democracia representativa es ineficaz y no funciona? Esto hizo el MAS pues no tenía como eje de su forma de gobierno y sostenimiento en el poder la movilización de masas, de manera que se volvió una estructura liberal electoralista. Esto ya es conservador, más aún si la política liberal se practica de la peor forma al insistir en hacer en el referéndum del 21F, perderlo y luego ignorarlo y repostular a Morales con un atajo tomado en las superestructuras políticas. Esto explica que en 2019 la gente votara por Morales, pero desconfiara de él y no saliera a defenderlo en noviembre. Son dos lógicas completamente diferentes. Cuando el MAS se volvió casi completamente liberal, aunque con un manejo instrumental del poder, los sectores populares empezaron a desconfiar y sospechar profundamente, eso es lo que pasa en Bolivia hasta hoy:

sería ilusorio sin remedio sostener que existe una tradición democrática (en el sentido representativo) entre las masas bolivianas. Todo lo contrario, esto aquí no produce sino sospechas (Zavaleta, 1983, p. 36).

En la antesala existe un trasfondo profundo y por lo general permanente de la ecuación social en Bolivia, en la que hay un “predominio taxativo y asediante” de la sociedad sobre el Estado; incluso movilizaciones de las élites pueden ser centrales en este eje, donde el “maximalismo de masas” de los sectores populares puede ser emulado y ser muy efectivas por la inexistencia de poderes reales en el Estado.

Esto tampoco lo vio el MAS.

Pero vamos más profundo en un análisis de la relación entre la dialéctica de clases que se da en Bolivia como resultado del momento constitutivo que implicó la Revolución Nacional de 1952 y, por lo tanto, el tipo de eje o ecuación que se configuró y sus consecuencias hasta hoy. La revolución del 52 marcó la dinámica de clases que perdura hasta ahora porque

El resultado de esta liberación vertical, casi paternalista, de arriba hacia abajo, del proletariado hacia los campesinos, resultó paradójal. Finalmente, al liberar a los campesinos, los obreros estaban creando las condiciones para que la pequeña burguesía les arrebatase la hegemonía dentro del poder por que el campesinado creó una fijación... no con relación a la clase obrera, que la había liberado desde el Estado, sino con relación al aparato del Estado como tal. Los dirigentes campesinos se acostumbraron a tratar de continuo con el aparato del Estado, a no existir independientemente de él...el campesino había hecho un hábito de su dependencia del Estado (Zavaleta. 2011, p. 675)

Esta inserción del campesinado indígena en el poder durante la revolución del '52, creó una relación de dependencia al aparato estatal y denotó la dificultad para existir autónomamente, reforzando una costumbre conservadora. En Bolivia esta característica de la "acumulación en el seno de la clase" hizo de la campesina indígena una cien veces más conservadora que en otros países. A la vez cimentó la posterior neutralización, tutelaje, utilización, desorganización y desmonte de las organizaciones sociales y movimientos de forma instrumental que realizó el MAS cuando llegó al gobierno.

Por eso, no era una actitud romántica ni un detalle secundario preservar la autonomía, fuerza y vitalidad de las organizaciones y movimientos sociales¹³ frente al propio Estado¹⁴; era un problema político de primer orden para sostener el poder. Pero la ceguera liberal, pragmática estatalista y economicista imposibilitaba al MAS para ver este asunto, creían por el contrario que digitando, tutelando e incluso -en la última época- prevendalizando a los movimientos sociales todo se resolvería. Suprimieron la verdadera fortaleza del proceso que, en

13 Esa es la única fuerza y garantía cuando se agudiza la lucha de clases; más aún si se sabe en general que el otro poder real es tan difícil de asegurar que se mantendrá de tu lado (los órganos de represión del Estado)

14 Por mucho que fuera un Estado Plurinacional.

Bolivia, siempre es la masa y su capacidad de movilización, y que tiene su fundamento en la relación masas-mediciones-Estado, es decir, en su ecuación o tipo de eje estatal, que es de permanente supremacía de la sociedad civil frente a un Estado aparente.

El otro componente que se revivió para complementar el adormecimiento de la fuerza de las masas fue la adulación de las clases medias y el gradual giro hacia la preservación del poder basado en los pactos con la agroindustria conservadora y fracciones burguesas como la banca. Una de las consecuencias de la revolución de 1952 al definirse el poder dual a favor de su lado pequeño burgués, fue que se crearon las condiciones de todo un hábito reaccionario. Al irse vaciando de lo obrero fue cundiendo la concepción conservadora de la clase media como dirigente, una mentalidad que el MAS revivió y potenció, contagiando a la militancia de este enfoque que tenía en la defensa del Estado y la supremacía de las dinámicas y objetivos clase medieros. Fue esta una de sus aristas más peligrosas, cuando al mismo tiempo se estaba desmovilizando a las masas explotadas y movimientos subalternos:

Esta concepción (de la clase media como dirigente) será el punto de partida de toda una mentalidad posterior. Cuando el poder dual se resuelva a favor de su lado pequeño burgués, los dirigentes de esta clase se sorprenderán de la actitud de insubordinación del proletariado. Es un modo de pensar con que se contagió toda la militancia y la defensa del Estado nos parecía en aquel momento más importante que la defensa de los sindicatos. (Zavaleta, 2011, p. 671-672)

Los funcionarios y burócratas del MAS les fueron arrebatando la hegemonía dentro del poder entre 2010 y 2016, porque el campesinado y los indígenas permitieron y viabilizaron el tutelaje y la subordinación de sí mismos frente al Estado, sin poder existir independientemente. Todos los sectores subalternos habían hecho un hábito conservador de su dependencia al Estado. Esto terminó de cerrar un impasse histórico entre el 2016 y 2019. Zavaleta lo planteó en términos sintéticos respecto a los gobiernos de Torres y Ovando, al referirse a la única medida que garantiza que los gobiernos progresistas no se caigan: “en realidad, los únicos regímenes que pueden sobrevivir con éxito al poderío de la presión imperialista de un país como Estados Unidos son los que logran movilizar a las masas” (Zavaleta, 2011a, p. 656)

Fueron erosionando y desmoralizando al bloque popular por ese manejo instrumental del poder, tutelando y subordinando a los movimientos sociales en vez de tener a las masas movilizadas como eje de su forma de manejo del poder¹⁵. Las sospechas del bloque de poder popular frente al MAS se confirmaban día a día al no priorizar la salud, la educación, el empleo y tender a colocar en primer plano las políticas de adulación de las clases medias para que votaran por el MAS. Cundió en el núcleo de poder del MAS una mentalidad de clase media como eje de sus acciones y el campesinado y los indígenas ya estaban adormecidos por su hábito de la dependencia del Estado. Por todo esto Morales se cayó como castillo de Naipes el 10 de noviembre.

BIBLIOGRAFÍA

- Dussel, E. (2011). *Carta a los indignados*. México. La Jornada.
- Gramsci, A. (1970). *Antología*. Siglo XXI. España.
- Marx, K. (1979). *Las luchas de clases en Francia de 1848 a 1850*. Moscú. Progreso.
- Moldis, H. (2020) *Golpe de estado en Bolivia. La soledad de Evo Morales*. La Paz. Ocean Sur.
- Viaña, J. (2000) “Después de 15 años de neoliberalismo la guerra del agua funda una nueva época”. En: Revista UMBRALES. La Paz. CIDES UMSA
- Viaña, J. (2006). “Autodeterminación de las masas y democracia representativa. Crisis estatal y democracia en Bolivia 2000-2006”, en *Sujetos y formas de la Transformación Política en Bolivia*, Ed. Autodeterminación y Tercera Piel. La Paz- Bolivia.
- Viaña, J.; Tapia, L.; Rozo, B. y Hoffman, S. (2006a). *La reconstrucción de lo público. Movimiento Social ciudadanía y gestión del agua en Cochabamba*, La Paz.
- Viaña, J. y Orozco, S. (2007). “El cierre de un ciclo y la compleja relación ‘movimientos sociales’ gobierno en Bolivia”. Revista OSAL de CLACSO. No 22.
- Viaña, J. (2011). “La compleja trama de permanente interlocución/ruptura entre movimientos sociales y el gobierno del MAS en Bolivia 2006-2009”. En: Claves para la transición del poder. Cuadernos de futuro No 26. PNUD. La Paz.
- Viaña, J. (2012). “Estado Plurinacional y nueva fase del proceso

15 O al menos tener conciencia de que era fundamental mantener la vitalidad, unidad y autonomía de los movimientos frente al Estado, para preservar la posibilidad de movilización real de las organizaciones y los movimientos sociales. Y para eso había que impedir que se haga un uso instrumental y conservador de estas.

boliviano”, En Thwaites Rey, M. (edit.) *El Estado en América Latina: Continuidades y rupturas*. CLACSO. Ed. ARCIS, Santiago de Chile.

Viaña, J.; Foronda M. y Pruden, H. (2014). *Configuración y Horizontes del Estado Plurinacional. Disputa de proyectos sociales y formación del bloque histórico*. CIS- PNUD, La Paz – Bolivia.

Viaña, J. (2016). “La necesidad del aprendizaje mutuo de los ciclos estatales de las luchas en Latinoamérica entre 1998 y 2016”, En *Ruptura revista de análisis internacional, Latinoamérica*. Academia diplomática plurinacional de Bolivia.

Viaña, J. (2017). “Necesidad de un balance autocrítico, a once años del ciclo estatal”. En: Revista Migraña No 22. La Paz. Vicepresidencia.

Viaña, J. (2018). “El ciclo estatal boliviano 2010-2018 y la necesidad de una estrategia clasista”, en Ouviaña, H. y Thwaites Rey, M. (edit.) *Estados en disputa. Auge y fractura del ciclo de impugnación al neoliberalismo en América Latina*. CLACSO- IEALC, Buenos Aires.

Zavaleta, R. (1990). *El Estado en América Latina*. La Paz. Los Amigos del Libro.

Zavaleta, R. (1983). *Las masas en Noviembre*. La Paz. Editorial Juventud.

Zavaleta, R. (1995). *La caída del MNR y la conjuración de Noviembre*. La Paz. Los amigos del libro.

Zavaleta, R. (1986). *Lo nacional popular en Bolivia*. México. Siglo XXI.

Zavaleta, R. (1987). *El poder dual*. La Paz. Los Amigos del libro.

Zavaleta, R. (2011). “Reflexiones sobre Abril”. En *Obras completas* Tomo I. La Paz. Plural.

Zavaleta, R. (2011a). “Ovando el Bonapartista”. En *Obras completas* Tomo I. La Paz. Plural.

HAÍTÍ, FRENTE A UNA DECADENCIA QUE MATA¹

Islanda Micherline Aduel²

Haití se hunde en una crisis endémica que alcanza a todos los sectores del país. Sus dificultades económicas se originan, principalmente, en las malas decisiones económicas de los gobiernos anteriores. La población total del país es de 11.541.848 habitantes, dentro de la cual la económicamente activa compuesta por mujeres asciende al 52%, lo que lo convierte en uno de los países en desarrollo con la cantidad más alta de mujeres en el mercado de trabajo. Debido al fuerte crecimiento demográfico, la tasa de desempleo en el país alcanza al 65% de la población económicamente activa. Estos factores de crisis, agudizados por la pandemia, deberían sumergir a la economía haitiana en una fuerte recesión. Mientras tanto, ya son 4.6 millones³ las personas que necesitan asistencia humanitaria, dado que una gran mayoría de la población no cuenta con acceso a los servicios básicos. Por otra parte, las consecuencias de esta situación económica se suman a la polarización política que afecta, en especial, la integridad y eficacia de instituciones clave, como la Justicia y la Universidad del Estado de Haití.

LA INSEGURIDAD: ENTRE LA COMPLICIDAD DEL ESTADO HAITIANO Y LOS JEFES DE LAS BANDAS ARMADAS DEL PAÍS

En Haití, ya hace varias décadas el Estado ha perdido el monopolio de la violencia legítima y de zonas enteras del país, controladas actualmente por bandas armadas que cuentan, en algunos casos, con mejores armas y equipamientos que los fuerzas armadas y policiales.

1 Traducción del francés a cargo de Juan Manuel Rendón.

2 Estudiante de Ciencias Políticas en la Universidad Estatal de Haïti. Integrante de la Vía Campesina.

3 Carline Noailles (2007), Análisis de datos del RGPH (Censo General de Población y Hábitat) de 2003 sobre distribución espacial de la población y urbanización, pp. 39-40.

Estamos ante una crisis constitucional y una violencia degradante, que ponen en peligro los logros democráticos alcanzados desde la caída del régimen de Duvalier. Frente a las violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos que suceden en el país, las autoridades haitianas no cumplen con la obligación de respetar y proteger estos derechos, como la libertad de circulación (que no está garantizada) y el derecho a la integridad física y a la dignidad humana. En este contexto, el conjunto de la población civil y particularmente estudiantes y profesionales, sufren una verdadera psicosis de miedo. Ocurren secuestros y tomas de rehenes de personas que circulan por las rutas, a quienes se maltrata y se somete al pago de un rescate. Asimismo, también son frecuentes las colectivas a mujeres y la violencia de género.

Los jefes de las bandas criminales son los responsables de la gravísima inseguridad que sufren los barrios populares de Bel-Air, Solino, Lasaline, Maya, Delmas 2 y Delmas 4, donde saquearon e incendiaron casas con sus habitantes adentro. Estos actos, junto con otros robos y secuestros, quedan impunes, sin seguimiento de la Justicia y ante el silencio de las autoridades implicadas. No hay timón ni capitán al mando.

Un hecho representativo en esta espiral de violencia ocurrió en agosto del 2020, cuando perdió la vida Monferrier Dorval, presidente del Consejo de abogados de Puerto Príncipe, doctor en Derecho y profesor de Derecho Constitucional y Derecho Administrativo, luego de ser interceptado por criminales cuando regresaba del trabajo. La mañana del día de su muerte, el 28 de agosto de 2020, habló por Radio Magik 9 de la capital sobre la reforma constitucional que debería ocurrir en los días venideros. Dijo lo siguiente: “Ya no soy de mi propiedad, pertenezco al país. Sacrifico mi vida para servir al país. Amo este país, dado que tiene una gran historia”. Desgraciadamente, por la tarde, dio el último suspiro en su domicilio de Pélerin 5, cerca de la residencia privada del presidente de la República, Jovenel Moïse.

Luego de este hecho, estudiantes de diferentes facultades de derecho de las universidades del país reclamaron justicia por las personas de barrios populares asesinadas durante enfrentamientos ocurridos con la complicidad del Estado, que banaliza la vida humana. Los últimos informes de los organismos de derechos humanos de Haití, como el de la Fundación *Je Klèr*⁴, señalan que los jefes de las bandas conoci-

4 Terreur dans les quartiers populaires / Pont Rouge au coeur d'une stratégie électorale macabre (Terror en los barrios populares. Puente Rojo en el corazón de una estrategia electoral macabra), 22 de junio de 2020.

das como G-9 y sus aliados buscan extender sus zonas de influencia en beneficio del poder que representa Moïse, y capturar a los jefes de las bandas enemigas para reemplazarlos por personas cercanas. Cuentan con la financiación del Estado haitiano, que busca apagar los movimientos de protesta que reclaman, hasta el día de hoy, la renuncia de este régimen corrupto y sanguinario, que trabaja al servicio de CORE Group y de las Embajadas de Estados Unidos, Francia y Canadá.

De otro lado, en respuesta a las protestas protagonizadas por los estudiantes de la Escuela Normal Superior (ENS), un agente de la USGPN (Unidad de Seguridad General del Palacio Nacional) ejecutó, el pasado 2 de octubre, a pocos metros del Palacio Nacional, a Grégory St-Hilaire –un estudiante de la promoción 2013-2017 de Ciencias Sociales, una de las siete carreras que ofrece la ENS–, quien fue alcanzado por dos proyectiles M-4 que impactaron en su espalda, cuando reclamaba frente a la facultad para ser seleccionado por el sistema educativo nacional. Inmediatamente después, agentes de esta fuerza incendiaron la biblioteca de la facultad. Hasta el momento, ningún representante del Poder Ejecutivo asumió la responsabilidad de los hechos, ni se ofreció a recompensar a los familiares de la víctima.

A esto, se suman actos de intimidación y persecución política dirigidos contra figuras emblemáticas del sistema educativo haitiano, a raíz de su participación en el movimiento sindical. El profesor Josué Mérilien, docente de Filosofía y Coordinador general de la Unión Nacional de Normalistas de Haití (UNNOH), recibió una orden de comparecencia, ilegal y arbitraria, que forma parte de una estrategia de intimidación y persecución política. Este régimen fascista intenta destruir los derechos y libertades elementales del pueblo haitiano. Es un régimen antidemocrático y liberticida, que solo se mantiene en el poder gracias a la desenfrenada violencia de los grupos criminales, fuertemente armados contra la población.

ENTRE LA RUPTURA DEL ORDEN CONSTITUCIONAL Y LA CORRUPCIÓN

La crisis haitiana se recrudeció desde el primer lunes del mes de enero, cuando concluyó el mandato de la 50a Legislatura, de acuerdo a la Constitución enmendada de 1987, que habla del equilibrio entre poderes y estipula la realización de elecciones legislativas cada dos años para renovar un tercio del Senado, y cada cuatro años para renovar la totalidad de la Cámara de Diputados. Las elecciones legislativas que, según la ley, debían celebrarse en noviembre de 2019, no se realizaron. Jovenel Moïse no respetó ninguno de los encuentros que prevé la

constitución para organizar las elecciones legislativas y municipales, que debían tener lugar entre 2017 y 2019. Desde entonces, el Congreso funciona de manera anormal, y el presidente gobierna por decreto. Esta situación inaceptable fue denunciada por los sectores populares y las organizaciones sociales, que temen el regreso de una dictadura. El preocupante devenir de la situación sociopolítica de Haití durante estos últimos meses le da aún más fuerza y legitimidad al pedido de renuncia de Jovenel Moïse, quien, además, está directamente implicado en el escándalo del desfalco de fondos de Petrocaribe, estimados en 4.200 millones de dólares.

ACAPARAMIENTO DE TIERRAS: UN PELIGRO PARA LA SOBERANÍA AGRÍCOLA

Desde la época de la colonia, el tema del acaparamiento de tierras estuvo siempre en agenda, y los campesinos y campesinas de Haití nunca abandonaron la lucha. La política agrícola de estos gobiernos no promueve el desarrollo agrícola ni garantiza la seguridad alimentaria a lo largo del país. El gobierno actual busca apropiarse de las tierras de los campesinos e impulsar la llegada de productos importados. No hay ningún acompañamiento a los campesinos, que sea verdadero y sostenido a lo largo del tiempo. Por el contrario, este gobierno opta por entregar el país y sus recursos a empresas multinacionales, a expensas de la agricultura campesina, como puede constatarse en los departamentos del norte, noroeste y nordeste. Sirve de ejemplo la aventura de la empresa Agritrans. Recientemente, en el departamento de Artibonite, el gobierno decidió expulsar a la organización SOFA (Solidaridad de Mujeres Haitianas) –que gestionaba una granja experimental donde ofrecía una formación en agroecología a mujeres campesinas–, para beneficiar a un empresario capitalista, que firmó un contrato con Coca Cola para producir estevia en más de seis mil hectáreas, con fines de exportación. No es en este marco que la población de Haití logrará construir las bases de una auténtica soberanía alimentaria.

BOLSONARO EN LA PANDEMIA: DE LA REVOLUCIÓN AL LULISMO AL REVÉS

Fabio Luis Barbosa dos Santos¹

INTRODUCCIÓN

En el mundo, muchas personas estaban aburridas durante la cuarentena. Sin embargo, en Brasil esto no sucedió. En este país la política se aceleró en un ritmo febril, liderada por un presidente con potencial suicida a quien jamás se le ocurre frenar. A diferencia de Orbán en Hungría o Erdogan en Turquía, Bolsonaro no aprovechó la pandemia para concentrar poder y restringir las libertades. Su intención original era radicalizar un horizonte de refundación moral y política: una revolución al revés al estilo del fascismo.

Repasemos brevemente el contexto. Tras una exitosa década en la cual articuló moderadas mejoras para los de abajo, con los privilegios de siempre para los de arriba, el modo lulista de regulación del conflicto social se hundió. La conjunción entre las jornadas de junio de 2013, los escándalos de corrupción y la recesión económica implicó un cambio de enfoque de las clases dominantes en relación a la reproducción social, que se desplazó de una “contención inclusiva” a una “aceleración excluyente”. En ese contexto, la piedra filosofal de un “neoliberalismo inclusivo” dio paso a la intensificación de la desposesión social, mientras que la conciliación cedió paso a la guerra de clases. Esto es el trasfondo de la destitución de Rousseff en 2016, del arresto de Lula y de la victoria de Bolsonaro en 2018 (Santos, 2019; Feldmann y Santos, 2020).

Para la clase dominante, Bolsonaro ofrece el marco de este nuevo neoliberalismo en el cual se agudizan la violencia política y económica: este marco es el Estado policial (Dardot y Laval, 2018). Sin estructurar un programa específico, dejó la gestión de la economía en manos de un genuino Chicago *boy*, Paulo Guedes. Para añadir, promueve una

1 Profesor de la Universidad Federal de São Paulo. Autor de Una historia de la ola progresista sudamericana (1998-2020) (La Paz: Cedla), entre otros libros.

retrógrada agenda comportamental, cultural y científica que la élite tolera, pero que no le encanta. El apoyo que brinda al excapitán es de un matrimonio de conveniencia, ya que nutren como ideal un bolsonarismo sin Bolsonaro (Santos, 2019).

Sin embargo, el militar tiene sus propias ideas: una dinastía, con los militares como partido y los evangélicos como base social. Desde este punto de vista, su mayor desafío es convertir el apoyo virtual que lo eligió en una verdadera movilización. Convertir a los usuarios de Internet en camisas negras.

Con este objetivo, sigue un guion invariable: elige a enemigos para atacarlos mientras se pone como víctima. Acusa a personas, instituciones o los medios de obstáculos a su proyecto, según una lógica de profecía autocumplida. Cuando el presidente acusa al Congreso de boicotearlo, transfiere la responsabilidad de sus fracasos a quienes “no le dejan” gobernar. Al mismo tiempo moviliza el apoyo popular para enfrentar la institución que, según la perspectiva de la ciudadanía, sintetiza la política podrida y corrupta. Cuando se levanta el congreso, el presidente ve su narrativa legitimada y sube el tono. Cuando se calla, el presidente avanza otro paso. En este juego de inversiones, Bolsonaro aparece como subversivo, mientras que la izquierda blande la Constitución en defensa del orden.

La práctica de respuestas sencillas a problemas complejos en Brasilia corresponde en la Internet a la narrativa de un héroe que se enfrenta a sucesivos villanos tal como en un videojuego. En esta lógica, poco importan los logros del gobierno, porque la regla de la eficacia política es diferente: inflamar a sus partidarios y naturalizar lo que hasta hace poco era intolerable (Lago, 2020).

Es un movimiento que no puede retroceder, al contrario, solo acumula masa, velocidad y violencia como una bola de nieve. En este impulso, el presidente convocó a su base para exigir el cierre del Congreso Nacional el 15 de marzo de 2020. Tres días después, se esperaba una manifestación por la educación que, dadas las circunstancias, tomó la forma de una contramanifestación por la democracia.

Es en este contexto que el covid-19 llegó a Brasil. El acto del 15 de marzo fue cancelado, pero algunos bolsonaristas intransigentes salieron a las calles y fueron recibidos personalmente por el presidente. Ante los hechos, la manifestación del día 18 se convirtió en un cacerolazo nacional, revelando un desplazamiento del apoyo a Bolsonaro entre los ricos y la clase media, los primeros afectados por un virus traído al país por brasileños que portan pasaporte.

Sin embargo, Bolsonaro radicalizó el negacionismo acumulando

enemigos en el proceso. En las primeras semanas de la pandemia, durante cada pronunciamiento suyo sonaban cacerolazos en las ventanas. ¿Estaría perdido el presidente en su mundo paralelo? En el cálculo supervivencial del animal político perverso, cualquier pulsión de muerte es una oportunidad política. Es necesario buscar la razón detrás de la locura (Santos, 2020).

RAZÓN BOLSONARISTA

Bolsonaro asume que la crisis tiene dos dimensiones: una sanitaria y la otra económica. Apuesta que los efectos de la segunda serán más experimentados por el pueblo. Su discurso contra el aislamiento horizontal dialoga con quienes mueren de hambre, no del covid-19. Bolsonaro supone correctamente que los trabajadores quieren trabajar. Los líderes evangélicos, cuyas iglesias han vaciado, así como muchos comerciantes y empresarios, también se opusieron a cualquier *lockdown*.

La otra cara de esta política es la certeza de que el Estado brasileño, de origen esclavista, nunca asistirá a los trabajadores como en partes de Europa: por el contrario, las medidas provisionales facilitaron los recortes salariales y los despidos. El fundamentalismo neoliberal del ministro de Economía Paulo Guedes es el punto de apoyo del cálculo político de Bolsonaro.

El fundamentalismo aquí no es una figura de imagen. En una reunión difundida por video en abril, que comentaré más adelante, el propio director del Banco Central cuestionó la posición de Guedes, quien para sacar al país de la crisis propone desregular la economía para atraer la inversión privada, que como todos saben no vendrá. La orientación del gobierno desafía la propia racionalidad capitalista ante la crisis; al final, los países en Europa han confinado y remunerado a los trabajadores no por caridad, sino para minimizar los efectos de la misma. Como dijo Keynes, se trata de salvar al capitalismo de los capitalistas (Feldmann, 2020). La respuesta brasileña busca facilitar la deforestación, los despidos y la reestructuración: en síntesis, intensificar la acumulación por despojo.

De hecho, se trata de una jugada arriesgada, que ha llevado al país a una catástrofe diluviana. En junio, Brasil se convirtió en el epicentro mundial de la epidemia al superar a Estados Unidos en muertes diarias por coronavirus, a pesar del notorio subregistro de casos. En agosto, el país superó 100.000 muertes y aún se reportaba más de mil muertes diarias. Los estudios demuestran una correlación entre la popularidad del presidente, la falta de respeto por el aislamiento y el colapso del sistema de salud pública en varias regiones. En las periferias es imprac-

ticable el aislamiento, mientras que los trabajadores acuden en masa para recibir R\$ 600 (USD 110) en los bancos. En el campo es reducida la posibilidad de asistencia médica, y el virus llegó a los territorios indígenas con un efecto potencialmente devastador.

Como señaló Pierre Salama, si se piensa la lucha contra el covid como una guerra, entonces Bolsonaro es un criminal de guerra (Salama, 2020). Es posible argumentar que es un Hitler periférico, en el sentido de que practica una política potencialmente genocida y suicida, pero sin industria ni ejército. Él es el nazismo con otros medios, con medios periféricos. En lugar de intentar construir cualquier tipo de arca frente al diluvio social y económico, su política sumerge al país en la plaga. Y lo hace deliberadamente como resultado de un cálculo político.

De hecho, el cálculo bolsonarista es cínico y perverso al poner en riesgo millones de vidas. Pero al percibirlo como un cálculo, no es un delito. En un mundo presidido por la lógica ciega, impersonal y destructiva del capital, el presidente aparece como una variación de las contradicciones entre el capitalismo y la vida, que acecha la cotidianidad global en forma de bombas atómicas, del drama ecológico y de las pandemias. Bolsonaro es solo una caricatura de esta contradicción; los rasgos se vuelven más evidentes en él, pues están más exagerados.

El presidente brasileño surge como una versión radical de la necropolítica, un poder de muerte ejercido de forma indirecta (Mbembe, 2013). Si en el feudalismo la coacción económica era indirecta y el castigo con la muerte era visible (la horca), en el capitalismo la coacción económica es directa; y la muerte, invisible. En Bolsonaro, la muerte económica, la indiferencia social, la perversión política y el oscurantismo ideológico conducen al paroxismo: pero él no va a Nuremberg, porque es una versión exagerada de lo normal. Más que matar, deja morir. Como había dicho cuando el país superó a China en muertes por la pandemia: “¿Y qué?” (Folha, 28 abr 2020). Al final, allí no hay crimen.

Sin embargo, si entendemos el atentado deliberado contra la vida como un crimen, entonces hay muchos crímenes allí, pero no se perciben como tales. Hitler confinó a los judíos en campos de concentración, un crimen. Bolsonaro instó a su pueblo a no respetar el confinamiento, lo que en la práctica los expone a la muerte. Los ricos, en Brasil, se rebelaron y estaban en desobediencia civil, pero tienen los medios para hacerlo. Por lo que si mueren, es por obstinación. Como afirmó Paulo Guedes mientras defendía la liberación de los casinos y el turismo de lujo: “Deja que cada uno se joda como quiera. Sobre todo si es mayor, vacunado y multimillonario” (Metrópolis, 22 mayo 2020).

Que este escandaloso foso tenga la complacencia de los de arriba y de los de abajo es un termómetro de la corrosión del tejido social de este país: los de arriba no se importan con los de abajo, y los de abajo no esperan nada más de los de arriba.

SENTIDO DEL BOLSONARISMO

Creo que el sentido más profundo de los bolsonarismos a nivel mundial es profundizar esta violencia invisible. El objetivo es normalizar la violencia practicada por otros medios, lo que también puede describirse como naturalizar la barbarie. Esto explica el compromiso de los Bolsonaros de este mundo con una batalla cultural, en el terreno de los valores. El propósito de esta política no es prohibir la actuación de sindicatos, partidos o manifestaciones (aunque esto pueda suceder eventualmente), sino modificar las condiciones en que las personas consideran legítimo manifestarse y rebelarse: es decir, generar una nueva normalidad.

Para esto, Bolsonaro tiene un método. Primero prueba, si no se reacciona, avanza; después, si la reacción es fuerte, niega. Como el personaje Bolsonaro es una glosa entre el político y el bufón, no hay compromiso con la verdad. Como político, su base lo tolera cuando él falla con la verdad, y como bufón se le permite decir cualquier tontería. Aun así, establece comunicación con su pueblo, que, con razón, desconfía de la tele y de Brasilia. Dado que no tener compromiso con la verdad es parte de su política como bufón, esto le permite retroceder sin remordimientos y sin prejuicios entre los fieles. Además, esta conducta le confiere un aura de autenticidad, mientras que quienes le afrontan se asocian con la política convencional, percibida como mentirosa.

En este sentido, pienso que Bolsonaro es literalmente un *bandeirante* del siglo XXI: es el explorador que abre a machete los senderos por donde pasará el progreso de los paulistas. Eso explica el apoyo complaciente de los de arriba, análogo a la condescendencia de un Churchill hacia un Hitler que prometió erradicar la Unión Soviética y el comunismo. En ese entonces, dejaron al nazismo seguir su camino hasta que quedó claro que los alemanes querían apoderarse del mundo. Luego, negociaron un reparto más razonable con los soviéticos, como base para la coexistencia pacífica en un mundo donde la violencia se trasladaba a la periferia, y en el cual “Guerra Fría” solo puede ser comprendido como un término eurocéntrico.

Lo que hace nuestro explorador nazi del siglo XXI, aunque de manera impredecible porque en gran parte es intuitivo –de ahí que Juca Kfourri lo comparó con Garrincha disculpándose por la ofensa (Kfourri,

2020)—, es ampliar el horizonte al que aspira su base. Bolsonaro viene quemando la fina capa de la sociedad civil brasileña mientras se profundiza la dinámica de autofagia de los negocios.

Veamos un ejemplo: La designación del juez responsable de la detención de Lula como ministro de Justicia ha sido un escándalo, según cualquier parámetro republicano. Poco tiempo después, se dieron a conocer pruebas irrefutables de la connivencia de este juez Sergio Moro con quienes acusaron al expresidente Lula (Intercept, 2019). Cuando Bolsonaro percibió que su gobierno estaba pasando por ese escándalo ileso, se dio cuenta que nunca caería por razones éticas. El presidente siguió quemando nuestra fina capa de civismo, y en ese entonces avanzó un paso más al exigir el cierre del congreso.

Haré un paréntesis para proponer un ejercicio. Imaginemos que el Partido de los Trabajadores (PT) en el poder nombrara como ministro a un juez que había arrestado a su mayor rival, lo mantuviera a ese juez a pesar de las pruebas de que lo hizo, eligiera a un loco como canciller e interfiera en los nombramientos de Itamaraty faltándole el respeto a las jerarquías. Y si Lula intentara nombrar a su propio hijo como embajador en Estados Unidos; tuviera hijos involucrados con milicianos y admitiera públicamente que necesita defenderlos de la Policía Federal. Y si este gobierno provocara a toda la prensa, amenazara con cerrar la Corte Suprema, preparase a la policía federal y dijera que cerrará el congreso. O simplemente, imagínelo decir todas las ignorancias que dice Bolsonaro de una manera vil, violenta y grosera.

Los dos pesos y dos medidas que todo brasileño sabe que existe de manera intuitiva significan que Bolsonaro cuenta con el apoyo de la élite, siempre que su estupidez esté en armonía con la agenda económica de la burguesía. Tiene el consentimiento para quemar arbustos y abrir senderos, porque lo está haciendo en la dirección correcta.

La pandemia muestra también que la clase dominante brasileña considera a Bolsonaro, como mucho, desagradable, según define la líder de extrema derecha francesa Marine Le Pen². Esto se debe a que la violencia del militar es, en realidad, la otra cara de su violencia de clase.

2 En una entrevista al canal France 2 el 11 de octubre de 2018, Marine Le Pen se vio obligada a distanciarse de Bolsonaro. Cuando la preguntaron sobre las declaraciones del candidato brasileño de que prefiere un hijo muerto a un homosexual, o que el embarazo es una carga para los empleadores, Le Pen cuestionó la lectura de que Bolsonaro es alguien de derecha y afirmó que el militar sostiene “propuestas eminentemente desagradables”.

El razonamiento de los ricos fue explicado por Paulo Guedes al justificar su asociación con el militar en la campaña electoral de 2018: “Todos allí trabajaron para Aécio, un ladrón, un drogadicto. Trabajaron para Temer, un ladrón. Trabajaron para Sarney, un ladrón y malaleche que tomó el control de todo Brasil. Entonces llega un tipo completamente tosco, rudo y obtiene votos como lo hizo Lula. La élite brasileña, en lugar de entender y hablar así ‘ahora tenemos la oportunidad de cambiar la política brasileña para mejor. [...] Ah, pero él insulta esto, insulta aquello...’ Doma el tipo”. Cuando se le preguntó si era posible domar a Bolsonaro, dijo: “Creo que sí, ya es otro animal” (Gaspar, 2018). Domar la bestia en pro de sus intereses de clase es la jugada de los de arriba.

Después de elegido, Bolsonaro consolidó una especie de división del trabajo. Ante el inexorable recrudecimiento de la violencia política y económica propia del neoliberalismo, el militar garantiza el Estado policial, mientras que entrega la economía a las finanzas, el campo a la agroindustria, el medioambiente a las empresas madereras, la salud a los seguros privados, y así sigue.

GOBERNAR EN LA CRISIS

En este contexto, ¿cuál sería la diferencia fundamental entre el gobierno de Bolsonaro y las gestiones del PT que lo precedieron? Críticos del progresismo sudamericano afirman que, al renunciar a enfrentar las raíces de la desigualdad y de la dependencia, el gobierno del PT y sus pares se han resignado a una gestión de la crisis. El gobierno de Bolsonaro, en cambio, no se propone hacer ninguna gestión, porque gobierna a través de la crisis.

Esto se evidencia en una reunión ministerial en abril de 2020, que tuvo su contenido en video divulgado al público por orden judicial. A pesar de que las autoridades consideraron las declaraciones del presidente insuficientes para incriminarlo, el video expone la naturaleza del gobierno a todos los que comprendan portugués (Brasil de Fato, 2020).

El propósito de la reunión fue discutir un programa diseñado por ministros militares para estimular la economía en el contexto pandémico, lo cual presentaron como un “Plan Marshall Brasileño”, una comparación que incluso Paulo Guedes consideró extraña. Sin embargo, en la reunión el programa “Pro Brasil” fue poco discutido y ni siquiera se mencionó el covid-19, aunque en ese momento el país avanzaba en un ritmo acelerado para convertirse en el epicentro global de la epidemia. Para ser preciso, la pandemia sí se mencionó en la reunión, pero no como una crisis sanitaria, sino como una oportunidad

para dismantelar el marco legal que protege la Amazonía. En palabras del ministro del Medio Ambiente, Ricardo Salles: “mientras estamos en este momento de tranquilidad en cuanto a cobertura de la prensa, que solo se habla del covid, es hora de ir pasando la manada de reglas, cambiando todo el reglamento y simplificando las reglas. Del IPHAN, del Ministerio de Agricultura, del Ministerio del Medio Ambiente, del Ministerio de eso, del Ministerio de aquello. Ha llegado el momento de unir fuerzas para hacer una simplificación regulatoria” (Brasil de Fato, 2020).

Mas allá del cinismo y la indiferencia en relación a la hecatombe sanitaria que asolaba al país, se observa que, en una reunión de alto nivel para presentar un plan socioeconómico de emergencia, el presidente de la República solo trató de exigir militancia incondicional y acción política de sus subordinados. Se hizo evidente que Bolsonaro preside el país de la misma forma que se construyó en la política: echando leña al fuego. El diputado que en veintisiete años en el parlamento solo ha presentado dos proyectos de ley no se propone gestionar nada.

¿Y si el PT gobernara así sin gestión, con solo ideología?

Lo que hace Bolsonaro es ampliar los límites de lo aceptable. El presidente convierte lo imposible en posible, lo que, paradójicamente, siempre ha sido un lema de la izquierda. Esto resulta el mundo al revés en el que vivimos: la subversión del orden se ha convertido en una política de la derecha, mientras que la izquierda defiende este orden.

LA IZQUIERDA DEL ORDEN

De esta paradoja surge una tercera constatación en la pandemia: la izquierda institucional no demuestra ser una alternativa para el cambio en el sentido de que no razona ni actúa bajo una lógica fundamentalmente distinta.

Tal como Bolsonaro, el Partido de los Trabajadores (PT) trató la crisis pandémica como una oportunidad al calcular la mejor forma de aprovecharla. De hecho, lo que el PT identifica como oportunidad es muy distinto de Bolsonaro, pero la racionalidad es idéntica: es la lógica del cálculo político. Todos calculan, aunque son cálculos que involucran distintas variables.

En una entrevista concedida a principios de marzo de 2020 en Europa, Lula afirmó estar en contra de la destitución de Bolsonaro. “Le he advertido al PT que tenga paciencia, porque debemos esperar cuatro años. A menos que él (Bolsonaro) cometiera un acto de locura, un crimen de responsabilidad, así podríamos pedir su destitución, pero si no lo hace, no podemos pensar en derrocar a un presidente solo

porque no nos gusta. No podemos” dijo al periódico suizo *Le Temps* (Lula, 1 mar 2020).

Luego, la pandemia llegó a Brasil. Considerándose la respuesta de Bolsonaro a la crisis sanitaria, cabe plantear a Lula que defina “locura” y “crimen de responsabilidad”.

A principios de abril, se contaban más de veinte procesos para derrocar a Bolsonaro registrados en la Cámara de Diputados, ninguno de ellos por iniciativa del PT. El partido decidió sumarse al movimiento bajo presión de su base, y cuando lo hizo, la destitución ya no era más pauta de discusión en Brasilia. Poco tiempo después, el presidente que defendió un acuerdo con Judas si tuviera voto se negó a firmar manifiestos en contra de Bolsonaro, y se justificó que serían respaldados por personas que apoyaron la destitución de Rousseff. La posición de Lula es legítima, sin embargo, su argumento es dudoso: seguramente, había más cálculo político que principios en juego.

La racionalidad del partido y su líder es fácil de entender. Tal como el Frente Amplio en Uruguay o el kirchnerismo en Argentina, el PT reclama su lugar como la izquierda del orden. Su expectativa es que el bolsonarismo se disipe como una pesadilla, y tal como en Uruguay y Argentina, las elecciones vuelvan a realizarse dentro de la normalidad burguesa, en la que el partido siempre tiene un candidato en la carrera. En este contexto, el mensaje de Lula es que la oposición debe respetar el resultado de las urnas, aunque en este caso el resultado fue a costa de su propia detención. Es la oposición del presente que envía un mensaje a la oposición del futuro, al futuro deseado por el PT, que todavía sueña con volver al poder.

En consecuencia, la política del partido de oposición más grande en el contexto pandémico se caracterizó por una lógica similar a la de sus congéneres, lo que contribuyó al impasse en Brasilia. Las solicitudes de destitución no han prosperado porque todos temen que su concurrente político saque más provecho político de esta acción. En otras palabras, la destitución solo podrá avanzar cuando los parlamentarios calculen que los provechos de una destitución serán mayores que explotar las debilidades del gobierno.

Mientras algunos negocian cargos y fondos, otros insisten en una oposición responsable, con la esperanza de que los desastrosos resultados del actual gobierno allanen el camino para el regreso del líder mesiánico. En palabras del respetado líder del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra, João Pedro Stédile: “Lula tiene que ser nuestro Moisés para convencer al pueblo a cruzar el Mar Rojo. No hay otro personaje que pueda cumplir este rol” (Stédile, 2019). En síntesis, es

tan improbable una salida del bolsonarismo que proceda de Brasilia como la hazaña del barón de Münchhausen, que salió del pantano donde se hundía utilizando su propia trenza.

LULISMO AL REVÉS

Mientras tanto, Bolsonaro duplicó su jugada. De su gobierno que tiene más militares en puestos de mando que en la dictadura se apartaron dos figuras que podrían eclipsarlo. La primera, el ambiguo ministro de Salud, que no estaba de acuerdo en que el virus es solo “un pequeño resfriado”, como dijo el presidente. Y la segunda a fines de abril, cuando se apartó el ministro de Justicia Sergio Moro, responsable de la detención de Lula, entonces reemplazado por un evangélico. Identificado como un héroe de la lucha contra la corrupción, el costo de esta deserción aún no está claro. Moro salió disparando: afirmó que el presidente quiso controlar a la Policía Federal, lo que motivó una denuncia por parte de la Corte Suprema (Supremo Tribunal Federal, STF), otro blanco del mandatario. Bolsonaro también acumuló desafectos entre los gobernadores de los estados, y muchos de ellos ignoraron Brasilia e implementaron el aislamiento social.

Criticado por la prensa, acosado por el poder judicial, hostigado por la clase dominante y con una popularidad amenazada, Bolsonaro consideró una *fuite en avant*. Coaccionado por el Congreso, anunció una ayuda de emergencia de R\$ 600 para más de 50 millones de personas, es decir, cuatro veces más dinero para cuatro veces más personas que el *Bolsa Família*, la estrella social del lulismo. Después, rodeado de militares y sin Paulo Guedes, anunció un plan de inversión pública masivo, contrariando la ortodoxia neoliberal. Era evidente el movimiento: fortalecer un vínculo directo con los de abajo apoyado por los militares en detrimento de la solidaridad de clase con los de arriba. Un tipo de lulismo al revés, como decía el filósofo Paulo Arantes.

Sin embargo, el presidente se mueve en un campo minado. Las turbulencias políticas inquietaron al capital y le obligaron a retroceder, reafirmando plenos poderes al ministro de Economía. Mientras el país se convertía en el epicentro mundial de la pandemia, su destino dependía del parlamento - el que el presidente planeaba cerrar. Sin fuerzas lo suficiente para hacerlo, Bolsonaro compraba su estabilidad con el “centrão”, un grupo heterogéneo de pequeños partidos que negocia su lealtad a cambio de cargos y fondos.

Contra la indiferencia de los ricos y el cinismo de Brasilia, las redes de solidaridad florecieron en las comunidades pobres. Una imagen icónica muestra a 425 “presidentes de la calle” en una comunidad de

São Paulo donde se reunieron en una cancha de fútbol, a dos metros uno del otro, para discutir su campaña de solidaridad. En junio, el MST había donado más de 2.300 toneladas de alimentos que produce. Es posible encontrar miles de iniciativas comunitarias sin asociación con el Estado ni con la izquierda del orden, las cuales se centran en Brasilia (Abers y Bulow, 2020).

Sin embargo, en un contexto en que los principales enemigos de Bolsonaro son sus pares, como Sergio Moro o el gobernador de São Paulo João Doria, la izquierda pierde relevancia. En este marco, la tragedia no es mirar al PT, sino al pueblo brasileño, para constatar que la pandemia revela un país dividido.

Esta constatación no es novedosa en el ámbito socioeconómico, una vez que Florestan Fernandes ya se refería a su país como un “apartheid social”. Sin embargo, se constata también una división en el ámbito de los referentes culturales, políticos y simbólicos. De un lado, está el país de los relativamente integrados, que participa o no de los cacerolazos, y de otro, la periferia que intenta sobrevivir, donde los cacerolazos tienen poco ruido.

Desde esta realidad, destacamos dos aspectos en los que se basa la política de Bolsonaro. En primer lugar, lo que se puede describir como una relación haitiana entre el pueblo y el Estado. Tal como sucedió después del terremoto en la isla, aquí nadie espera el apoyo del gobierno. A las personas no se le ocurre que el Estado brasileño es financieramente responsable de mantener a los trabajadores en casa durante la pandemia.

En segundo lugar, el descrédito de la política y las instituciones, que incluye la red Globo. Este es el trasfondo de la autenticidad del presidente: en lugar de las falsas promesas de los políticos habituales que pretenden contener la crisis, Bolsonaro reconoce la crisis. Admite la autofagia social (unos contra otros) y promete armar a sus votantes para que se defiendan atacando, como él mismo. De allí su “autenticidad”.

El discurso del presidente está dirigido a esta población que no cree en Lula, Doria o Globo, que ve cierta autenticidad en el presidente, que no espera nada del Estado y, si recibe R\$ 600, seguirá trabajando. Bolsonaro dialoga con alternativas que parecen abiertas a la población trabajadora. Siguiendo su lógica, el presidente no pretende contener la pandemia, pero defiende la libertad de las personas a trabajar, es decir, la libertad de cada quién luchar en el mundo de la autofagia por su supervivencia.

Este es el abismo que observamos en Brasil. Por un lado, la socie-

dad que tiene ahorros (mejor dicho, títulos de deuda), escandalizada por el primitivismo del presidente que desafía la ciencia y los modales europeos, que incluyen la cuarentena. Por otro, la masa que se ingenia, que gana la vida día a día. El opuesto que complementa la abismal indiferencia y cinismo de los de arriba es la falta de perspectiva de los de abajo, más allá del heroísmo individual de sobrevivir día a día frente a la autofagia.

En este contexto, un golpe de Estado parece poco probable. Un golpe es motivado históricamente por la amenaza de los abajo, que no se plantea hoy en Brasil. Al contrario, parece que la fachada democrática es valiosa para este nuevo neoliberalismo. Dada la impotencia de los de abajo, Bolsonaro puede incluso sufrir a manos de la pequeña política, que derrocó a Dilma, especialmente si la inestabilidad que alimenta compromete los negocios. O si la miseria que manipula se convierte en rebelión. Pero por ahora, esto no va a suceder. Hay que tener cuidado de no mirar la política del siglo XXI a partir de la perspectiva del siglo pasado. Con tres mil militares en el gobierno, quizás el golpe ya esté hecho.

Sin embargo, en agosto de 2020 se estaba dibujando un escenario alternativo. En ese momento, a pesar del asombroso número de muertes por covid-19, muchas de ellas evitables, el país se dirigía hacia una estabilidad inédita y aterradora con el militar. Se instaló una nueva normalidad sobre la cifra de 110.000 muertos (*and counting*), mientras que aumentaba la popularidad del presidente. Se necesitará investigaciones y tiempo para entender el fenómeno, pero dos cuestiones son evidentes: el pueblo no responsabilizó al presidente de las muertes que se acumulaban. Por otra parte, la ayuda de emergencia de R\$ 600, cuya duración se extendió, impulsó su popularidad incluso en el Nordeste del país, antes cautivado por la *Bolsa Família* lulista. En cinco meses, el programa transfirió a millones de personas 250 mil millones de reales, equivalente al 3,5% del PIB. Esto permitió que los niveles de pobreza extrema hayan alcanzado su más bajo nivel en 40 años, aunque se supone que las tasas aumentarán rápidamente al finalizar la ayuda de emergencia (Correio do Povo, 15 agosto 2020).

Mientras tanto, en Brasilia, el presidente ha cultivado buenas relaciones con el “centrão” y lanzaba una versión menos ideológica de sí mismo, al pacificar las relaciones con el Supremo Tribunal Federal (STF) y los medios corporativos. El capital acogió con simpatía el movimiento, apostando por despegar la agenda que le interesa. ¿Sería posible un bolsonarismo sin Bolsonaro? La paradoja era notable: por mucho que el PT se haya esforzado por ser la conciliación bajo el li-

derazgo de un “Lulinha Paz y Amor” como se describe a sí mismo el propio expresidente (Lula, 2018), el sueño del consumo burgués puede realizarse en la figura de un “Bolsonaro paz (con los medios y la Corte Suprema) y amor (con el centrão)”. Si el militar deja a un lado la ideología –como lo hizo el PT en otro momento– y se concentra en “ir pasando la manada”, podrá ganar a cambio la reelección. Y el lulismo al revés estaría completado.

¿Cuál será el alcance de la momentánea renovación de la popularidad presidencial en un país donde se prevé un descenso económico del 11% para el 2020, donde hasta agosto había contabilizado 110.000 muertes por Covid-19, y gobernado por alguien cuyo hijo mayor, el senador Flávio Bolsonaro, es investigado por tener esquemas de corrupción que involucran directamente al presidente? El futuro es incierto, y el mandatario enfrentará un escenario internacional desfavorable a la reanudación de la economía, lo que indica que la crisis social se profundizará. La ayuda de emergencia tiene un plazo y el aumento del endeudamiento público combinado con la ley de techo de gastos limita las opciones del Ejecutivo. Conciliar el fundamentalismo neoliberal con un ingreso mínimo universal es la cuadratura del círculo que se coloca para un gobierno que hasta el momento no puede prescindir de Paulo Guedes, visto como el fiador de Bolsonaro con las finanzas y el gran capital.

REFLEXIONES FINALES

Sin pretender gestionar la crisis, Bolsonaro opera generando crisis –algunas reales, otras falsas– por las cuales navega. De allí el sentido de su política muy evidente en el video de la reunión: es una lucha contra todo lo que se opone a él. También es una política fetichizada, en el sentido de que se realiza como un fin en sí mismo: no hay proyecto, no hay futuro. Para Bolsonaro, la lucha es un fin en sí mismo. Esta es su “mi lucha”. Mientras tanto, la manada pasa, según explicó el ministro de Medio Ambiente.

Contra todo esto, queda el humanismo de las personas que quieren la paz, no la guerra. Y la imaginación política, que hay que recuperar. Si el PT aprisionó a la izquierda en la lámpara mágica del lulismo, es forzoso señalar que Bolsonaro pervirtió la rebelión. El dilema para el campo popular se agudizó durante la pandemia: movilizarse para el retorno a una normalidad cada vez más rebajada, lo que transforma el progresismo en una ideología restauracionista, o denunciar lo normal como problema y atreverse a nuevos horizontes de cambio “para que mañana no sea solo el ayer, con un nuevo nombre”, como canta el rapero Emicida.

BIBLIOGRAFÍA

Abers, Rebeca y Bulow, Marisa von (2020). “The struggle of civil Society groups in Brazil’s urban peripheries” (March - June 2020). Disponível em: <<https://resocie.org/wp-content/uploads/2020/07/Resocie-Research-Report-1.pdf>>. Acesso em 28 ago 2020.

Brasil de Fato (2020). “Ouça e leia na íntegra a reunião ministerial de Bolsonaro liberada pelo STF”. 22/5/2020. Available at: <<https://www.brasildefato.com.br/2020/05/22/ouca-e-leia-na-integra-a-reuniao-ministerial-de-bolsonaro-liberada-pelo-stf>>. Retrieved 24/8/2020.

Correio do Povo (2020). “Auxílio emergencial injeta R\$ 20 bilhões no comércio por pagamento digital”. 15 Ago 2020. Disponível em: <<https://www.correiodopovo.com.br/not%C3%ADcias/economia/aux%C3%ADlio-emergencial-injeta-r-20-bilh%C3%B5es-no-com%C3%A9rcio-por-pagamento-digital-1.465709>>. Acesso em: 20 ago 2020.

Dardot, Pierre y Laval, Christophe (2018) « Anatomie du nouveau néolibéralisme ». Avant-propos pour la traduction anglaise de Ce Cauchemar qui n’en finit pas (à paraître).

Feldmann, Daniel (2020). “No curto prazo, estaremos todos mortos: apontamentos críticos sobre o novo consenso keynesiano”. Blog da Boitempo. 27/5/2020. Disponível em: <<https://blogdaboitempo.com.br/2020/05/27/no-curto-prazo-todos-estaremos-mortos-apon-tamentos-criticos-sobre-o-novo-consenso-keynesiano/>>. Acesso em 28/8/2020.

Feldmann, Daniel; Santos, Fabio Luis Barbosa dos (2020). “O Médico e o monstro (no prelo)”, mimeo.

Folha de São Paulo (2020). ‘E daí? Lamento, quer que eu faça o que? Diz Bolsonaro sobre recorde de mortes por coronavírus’ 28 abr 2020. Disponível em: <<https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/04/e-dai-lamento-quer-que-eu-faca-o-que-diz-bolsonaro-sobre-recorde-de-mortos-por-coronavirus.shtml>> Acesso em 30 mai 2020.

Fraga Araújo, Ernesto (2017). “Trump e a história”. Cadernos de Política Exterior / Instituto de Pesquisa de Relações Internacionais. – v. 3, n. 6 (dez. 2017). Brasília: FUNAG, 323-358.

Gaspar, Malu (2018). “O fiador”, em *Piauí*, set. 2018.

Intercept (2019) “Scandal for Bolsonaro’s Justice Minister Sergio Moro grows as the Intercept partners with Brazil’s largest magazine for new exposé”. 5 Jul 2019. Available at: <<https://theintercept.com/2019/07/05/scandal-for-bolsonaros-justice-minister-sergio-moro-grows-as-the-intercept-partners-with-brazils-largest-magazine-for-new-expose/>>. Retrieved 24/8/2020.

Kfourir, Juca (2020). “Quem segura o Messias?” Folha de São Paulo, 11 mai 2020. Disponível em: <<https://www1.folha.uol.com.br/columnas/jucakfourir/2020/05/quem-segura-o-messias.shtml>>.

Lago, Miguel (2020). “Uma esfinge na presidência”. Revista Piauí, Abril 2020. Available at: <<https://piaui.folha.uol.com.br/materia/uma-esfinge-na-presidencia/>>. Retrieved 24/8/2020.

Lula (2020). “Não podemos pedir impeachment de Bolsonaro só porque não gostamos dele”, Apud: IG, 2 mar 2020. Disponível em: <<https://ultimosegundo.ig.com.br/politica/2020-03-02/lula-nao-podem-pedir-impeachment-de-bolsonaro-so-porque-nao-gostamos-dele.html>>. Acesso em 25 mai 2020.

(2018). *A verdade vencerá*. Entrevista concedida a Ivana Jinkings, Gilberto Maringoni, Juca Kfourir & Maria Inês Nassif. São Paulo: Boitempo.

Mbembe, Achille (2013). *Critique de la raison nègre*. Paris: La Découverte.

Metrópolis (2020). “Guedes pede a Damares: deixa cada um se foder do jeito que quiser” 22 mai 2020. Disponível em: <<https://www.metropoles.com/brasil/justica/guedes-pede-a-damares-deixa-cada-um-se-foder-do-jeito-que-quiser>> Acesso em 30 mai 2020.

Salama, Pierre (2020). “Estamos diante de uma nova grande transformação”. O Globo: 14 abr 2020. Disponível em: <<https://oglobo.globo.com/mundo/estamos-diante-de-uma-nova-grande-transformacao-diz-economista-frances-sobre-impacto-da-pandemia-24369511>>. Acesso em 2/6/2020.

Santos, Fabio Luis Barbosa (2019). *Uma história da onda progressista sul-americana (1998-2016)*. 2ª edição. São Paulo: Elefante.

(2020). “Bolsonarismo na pandemia explicado aos jovens”, Correio da Cidadania, 19/6/2020. Available at: <<https://www.correiodacidade.com.br/72-artigos/imagens-rolantes/14247-bolsonarismo-na-pandemia-explicado-aos-jovens>> . Retrieved 24/8/2020.

Stédile, João Pedro (2019). “Stédile: Lula foi escolhido pelo povo para explicar o que está acontecendo no país”. Brasil 247. 15/11/2019. Disponível em: <<https://www.brasil247.com/brasil/stedile-lula-foi-escolhido-pelo-povo-para-explicar-o-que-esta-acontecendo-no-pais>>. Acesso em 27/4/2020.

BRASIL EN LA ERA BOLSONARO: EL DESBORDE DE LA POLÍTICA

Maíra Machado Bichir y Victoria Darling¹

En el marco del cierre del Ciclo de Impugnación al Neoliberalismo en América Latina, Brasil protagonizó uno de los procesos políticos más destacados en términos de ascensión de sectores ultraconservadores a sitios clave de la estructura institucional del Estado. El Partido Social Liberal, primero y el liderazgo sin partido de Bolsonaro, luego, inauguraron un escenario de represión política, impulso de los aspectos patriarcales de la dominación estatal y promoción de valores considerados tradicionales, como Dios, patria y familia. Este proceso parece entrar en su apogeo en tiempos de la pandemia producto de la Covid-19, en la que las medidas adoptadas resultan a todas luces insuficientes para dar respuesta a los problemas que la crisis sanitaria despunta.

El artículo analiza algunos rasgos del tipo de dominación política construida por el presidente Jair Messias Bolsonaro, explica algunas de las medidas de su gobierno en los primeros siete meses de la pandemia y discute la crisis política que se ha agravado durante este periodo. Intentaremos, además, en un esbozo preliminar, dar cuenta de algunas razones que permiten caracterizar su discurso como eminentemente patriarcal, de diálogo entre y para hombres y, a modo de cierre, llamaremos la atención sobre algunos movimientos de lucha y resistencia al gobierno Bolsonaro durante el 2020.

LA PROFUNDIZACIÓN DEL PROYECTO BOLSONARISTA BAJO LA PANDEMIA

Brasil vive desde febrero la mayor crisis de su historia reciente. La

1 Profesoras de la Carrera de Ciencia Política de la Universidade Federal da Integração Latino-Americana en Brasil, investigadoras del GT Estados en disputa de CLACSO. mairabichir@gmail.com darling.victoria@gmail.com

pandemia de la COVID-19 agravó sobremanera la crisis multidimensional vivida por el país, incorporando la dimensión sanitaria a las otras crisis preexistentes - económica, política y social. Evidentemente, ese fenómeno no se circunscribe a Brasil, sino que es mundial, habiendo empezado en los países centrales y trasladándose en seguida a los países dependientes. Considerando la jerarquía de poder en el sistema interestatal, la posición de cada país en la reproducción de capital a nivel mundial y las condiciones particulares de cada formación social, hemos observado cómo las sociedades no se vieron afectadas de la misma manera. Dirigiendo nuestra mirada hacia América Latina y Caribe, y al capitalismo dependiente que estructura esa región, vislumbramos rasgos comunes y contradicciones semejantes, como la transferencia de valor hacia los países centrales y la superexplotación del trabajo, elementos que en un momento de crisis capitalista se ven agudizados y restringen significativamente el rango de respuestas posibles. Sin embargo, aún bajo esas limitaciones, las medidas tomadas por cada gobierno en la región variaron mucho en estos últimos meses y eso se relaciona sobre todo con los gobiernos que ocupan los aparatos de los Estados, sus proyectos políticos y su articulación con el bloque en el poder, o sea, las fracciones de la clase dominante que ejercen el poder de Estado.

De los Estados latinoamericanos, Brasil se ha destacado como uno de los más negligentes en el enfrentamiento de la pandemia²: no solamente no hubo un serio enfrentamiento de la crisis sanitaria, sino que hubo intentos deliberados de profundizarla, los cuales se expresaron en la negación de la gravedad de la pandemia³, en la ausencia de políticas públicas de salud a nivel federal⁴, culminando incluso en la exoneración de dos ministros de la Salud y su sustitución por un ministro provisional, desde mayo hasta el mes de septiembre⁵. Bajo ese escenario, Brasil ya ha ultrapasado el número de 4 mil millones de

2 Una cartografía de las medidas tomadas por los gobiernos latinoamericanos y algunos gráficos del avance de la pandemia de COVID-19 en la región pueden ser accedidos a través de esos reportajes: BBC News, 2020, 27 de abril; 2020, 28 de abril.

3 Una síntesis de las posiciones de Jair Bolsonaro sobre la pandemia de COVID-19 a lo largo de los últimos meses puede ser encontrada en esa noticia: Tajira, y Teixeira L., 2020, 08 de agosto.

4 Un ejemplo ilustrativo son las medidas de aislamiento social que partieron de gobiernos estatales y municipales, en constante tensión con Bolsonaro. Consultar: Chaib, y Teixeira M., 2020, 14 de abril; Linhares, 2020, 05 de septiembre.

5 Los ministros Luiz Henrique Mandetta y Nelson Teich dejaron el Ministerio de la Salud el 16 de abril y 15 de mayo, respectivamente, por sus discordancias con el presidente sobre el manejo de la crisis sanitaria en Brasil. Eduardo Pazuello, general de división, ha ocupado el puesto provisionalmente hasta 16 de septiembre, fecha en

infectados y más de 130.000 muertos por COVID-19, datos que clasifican al país en la tercera posición en el mundo, perdiendo solamente con Estados Unidos e India en número de infectados⁶ (Johns Hopkins, 2020). Esos números no son abstractos, sino que tienen clase, color y género y expresan la profunda desigualdad social que estructura la sociedad brasileña: quienes pueden o no mantener aislamiento social y quienes están más expuestos al virus⁷; la mayor mortalidad de personas negras⁸, además de otras consecuencias de la pandemia, como el incremento de la violencia doméstica y de femicidios⁹ y aumento de la carga de trabajo de cuidados para las mujeres¹⁰.

Gran parte de esa tragedia la podemos atribuir a la política genocida del gobierno de Jair Bolsonaro, que pasó a ocupar el principal puesto del Ejecutivo en enero de 2019 y, desde entonces, ha puesto en práctica un proyecto político ultraneoliberal, fascista, racista, patriarcal, homofóbico, xenófobo y dependiente, profundizando el sentido del golpe institucional a la presidenta Dilma Rousseff (2016), y del gobierno de Michel Temer (2016-2019). Bolsonaro construyó un Estado

la cual asumió oficialmente como ministro.

6 Datos recolectados en 13 de septiembre de 2020.

7 Para una visualización de las desigualdades que subyacen la pandemia, consultar: Instituto Pólis, 2020, 27 de mayo; Informe ENSP, 2020; Trindade, y Reis, 2020; Sampaio, 2020, 07 de abril. Cumple resaltar, sin embargo, que esa diferenciación sienta sus bases profundas en las relaciones de dominación y explotación que estructuran las clases sociales brasileñas y en la división social, racial y sexual del trabajo en Brasil.

8 El Instituto Pólis ha producido un levantamiento sobre el impacto desigual de la pandemia de COVID-19 en la ciudad de São Paulo, ciudad que registra los mayores índices de casos y muertes en el país, y señala que entre primero de marzo y 31 de julio de 2020 la tasa de mortalidad estandarizada de la población negra en São Paulo es mayor que de la población blanca. En cada 100 mil habitantes, hay 115 muertes de personas blancas, mientras entre las personas negras, el número es de 172 óbitos. Informaciones más detalladas pueden ser encontradas en: Instituto Pólis, 2020, julio. El Grupo de Trabajo Racismo de la Associação Brasileira de Saúde Coletiva (ABRASCO) también ha producido estudios y artículos sobre la agudización de las desigualdades sociales y raciales bajo la pandemia (Martins, 2020; Dias, 2020). Ver también: Goes, Ramos, y Ferreira A. J., 2020.

9 Según un estudio realizado por el Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), hubo un incremento de 22% de casos de feminicidios en 12 estados brasileños, entre marzo y abril de 2020, en comparación con el mismo período en 2019. Para más datos e informaciones sobre la violencia doméstica durante la pandemia de COVID-19 en Brasil, consultar: Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2020.

10 La investigación hecha por Género e Número y SOF Sempreviva Organização Feminista sobre el trabajo y la vida de las mujeres durante la pandemia trae datos importantes sobre las intersecciones de género y raza en el trabajo reproductivo y la sobrecarga que la pandemia ha generado sobre la vida de las mujeres (Género e Número, y SOF Sempreviva Organização Feminista, 2020).

cada vez más mínimo con respecto a los derechos de los y las trabajadores, una democracia liberal burguesa más y más restricta, con el fortalecimiento de las fracciones burguesas dominantes.

Podemos enunciar como algunas de las principales agendas y medidas del bolsonarismo: privatizaciones de los servicios y de las empresas públicas¹¹, precarización de los derechos laborales¹², expansión del agronegocio¹³, despojo de las tierras y de los derechos de los pueblos indígenas (Cohen, y Aranha, 2020, 2020; Fellet, 2020), destrucción ambiental (Silva, 2020; Brasil de Fato, 2020, 05 de junio), profundización del control del Estado sobre los cuerpos de las mujeres¹⁴, agravamiento del genocidio de la población negra¹⁵ (Veloso, 2019; Coalizão Negra por Direitos, 2020), ataques a la laicización del Estado¹⁶ (Rocha, 2019, 04 de junio), censura en las áreas de educación¹⁷ y cultura (Aragão, 2019), adhesión y alineamiento a los Estados Unidos en el plano de la política externa (Berringer, Carneiro, Soprijo, Souza, y Barros, 2020).

11 Un levantamiento pormenorizado de las empresas estatales que ya fueron privatizadas, y de las que el gobierno de Bolsonaro intenta privatizar puede ser encontrado en: Sant'Ana, 2020.

12 Una de las medidas más representativas en ese sentido ha sido la contrarreforma de la seguridad social, que ha sido aprobada en 2019. Verificar: DIEESE, 2019. A principios del mes de septiembre, Bolsonaro ha encaminado al Congreso una propuesta de reforma administrativa, que intenta reestructurar todas las carreras del funcionalismo público brasileño, reduciendo los derechos sociales conquistados a lo largo del siglo veinte.

13 La orientación de las políticas del gobierno Bolsonaro hacia el fortalecimiento de la gran burguesía agroexportadora en detrimento de los pequeños productores y de los agricultores familiares se refuerza durante la pandemia, como se puede notar en la siguiente noticia: Sampaio, 2020, 29 de agosto.

14 En ese sentido podemos destacar la reciente portaría n° 2.282 del Ministerio de la Salud, publicada en 28 de agosto de 2020 (Brasil, 2020, 28 de agosto), que obliga a los y las médicos/médicas y demás profesionales de la salud a notificar las autoridades policiales los casos de atención a mujeres que fueron víctimas de violaciones y que deseen abortar. Esa medida intenta dificultar y obstaculizar aún más la garantía del derecho al aborto a las mujeres en caso de violaciones.

15 Para una visión de la trayectoria política de Jair Bolsonaro respecto al tema del genocidio de la población negra en Brasil, ver: Ferreira, A (2020).

16 Una discusión sobre la relación entre las iglesias pentecostales y neopentecostales, el proyecto de poder bolsonarista y la ascensión de la extrema derecha en Brasil se puede encontrar en: Ferreira, M. (2020).

17 Como ejemplos de ese proceso podemos mencionar la centralidad que el proyecto Escola sem partido alcanzó bajo la gestión de Abraham Weintraub en el Ministerio de la Educación (Gazeta do Povo, 2020), entre 08 de abril de 2019 y 19 de junio de 2020 y también la intervención del gobierno federal en las elecciones de los/ las rectores de las universidades federales brasileñas, hiriendo la autonomía universitaria, principio garantizado en la Constitución Federal Brasileña (Sayuri, 2019).

Aunque muchas de esas agendas ya estaban vigentes el año pasado, es justamente en este momento de crisis aguda que el proyecto bolsonarista se ha profundizado. Uno de los rasgos centrales de ese avance es la creciente militarización del aparato del Estado. De acuerdo con un levantamiento solicitado por el Tribunal de Cuentas de la Unión (Lis, 2020; Brasil, 2020, 17 de julio) sobre el número de militares en el gobierno de Bolsonaro, existe un total de 6.157 que cumplen funciones civiles, de los cuales 3.029 se encuentran en servicio activo. Ese número total significa más del doble del número de militares en el gobierno de Michel Temer, que contaba con 2.765. Ese proceso de militarización¹⁸ va más allá de la ocupación del aparato estatal, y representa una disputa por la hegemonía en el ejercicio del poder político, y pone en cuestión el mantenimiento del régimen democrático liberal en Brasil. Todo ese proceso ha dado lugar a una profunda crisis política, que se ha intensificado en estos últimos meses, involucrando a las distintas fracciones de las clases dominantes, expresándose en tensiones y fracturas entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Nuestro enfoque se dirigirá, en este momento, a la dimensión del poder Ejecutivo en la crisis. Pasemos, entonces, a ese tema.

CAMBIOS EN EL GABINETE E INESTABILIDAD DEL GOBIERNO

No fueron pocos los cambios que se sucedieron en la élite gobernante que ocupa los sillones más cercanos al primer mandatario en el marco de la crisis sanitaria. Si bien el gobierno como tal fue instalado en sus funciones en enero de 2019, en abril de este año comenzaron a decidirse recambios importantes, ya sea por la renuncia voluntaria o por el pedido de retiro del cargo de ministros por parte del presidente.

Recordemos que cuando el gobierno Bolsonaro asumió formalmente, luego de captar un total de 57 millones de votos válidos a costa de la proscripción del líder del PT, Lula da Silva, de 22 representantes del Gabinete -dentro de los cuales hay 16 ministros, 2 secretarías y 4 órganos con estatus de ministerio-, al menos diez eran militares o pertenecientes a la corporación castrense, incluso el presidente. La presencia de miembros de corporaciones -empresas privadas y militares- en instituciones del Estado vinculadas directamente al poder ejecutivo (en el marco de un país con rasgos fuertemente presidencialistas), ejerce influencia directa en las políticas públicas llevadas

18 Un análisis sobre las Fuerzas Armadas desde los gobiernos del Partido dos Trabalhadores (PT), pasando por Michel Temer y llegando al gobierno Bolsonaro está disponible en: Penido, Rodrigues, y Kalil Mathias (2020).

adelante, ampliando las condiciones favorables a intereses privados y corporativos.

Esto redefine la correlación de fuerzas que estructura al Estado y su materialización en términos de disputas dominantes y con los sectores subalternos. El regreso al vocabulario corriente de conceptos como familia, ideología, disciplina militar y religiosidad, a su vez, expresan la construcción de hegemonía que lentamente gana terreno desde las prácticas estatales. La existencia de un proceso de “captura del Estado”, esto es, la asunción de cargos de dirección en Ministerios (cargos de primera y segunda línea) por parte de militares y líderes religiosos evangélicos ha definido un perfil que signa no sólo la composición política materializada en sus miembros, sino también su dimensión simbólica, de sostén de un proyecto de Nación.

Los militares que ocupan carteras definen como áreas de interés la defensa nacional, la infraestructura, el control de los recursos estratégicos del país, como minas y energía; la ciencia, tecnología, innovaciones y comunicaciones, además de Salud.

La mayoría de los funcionarios provienen del Ejército y otros del círculo de formación del presidente durante su paso por la Academia Militar Agulhas Negras (AMAN). Localizada en Resende, Rio de Janeiro, es la única escuela de enseñanza superior para militares, heredera de la Real Academia Militar de 1810. La propuesta de la Academia es el desarrollo de atributos específicos de las áreas afectiva, cognitiva y psicomotora necesarios para la profesión militar. El presidente, su vice y cinco ministros realizaron allí su formación superior. Los valores que la AMAN promueve se caracterizan por la colectividad y la camaradería, no obstante, “convive com a competição meritocrática, expressa na classificação escolar, que é muito importante: classificação é antiguidade; e antiguidade, como diz o ditado militar, é posto” (Castro, 2004). La escuela crea un tipo de socialización masculina firmemente cohesionada. Recién en el año 2018 fueron admitidas las primeras mujeres. De 414 cadetes, ingresaron 33 mujeres (Moury, 2018). Además, por primera vez en 2019 fue abierta una generación con cuota racial para ingresantes negros.

Regresando al Gabinete, en abril de 2020 comenzaron los primeros cambios. El primero en alejarse del gobierno por propia decisión fue el juez Sérgio Moro. Acusando al presidente de querer intervenir en la designación del director de la Policía Federal y de no respetar la autonomía de la fuerza. Esto claramente se debía a las investigaciones en curso que ponían a los tres hijos de Bolsonaro en la mira de la

Justicia, y por eso Moro renunció al cargo de Ministro de Justicia y Seguridad Pública.

En junio fue el ministro de Educación quien anunció su renuncia. Cuestionado por sus declaraciones sobre su expresa voluntad de cerrar el Congreso Nacional, en un vídeo que se tornó viral, Abraham Weintraub dejó su cargo. Amigo personal del presidente, aliado político y nexos con instituciones internacionales como el Banco Mundial, esta dimisión consensuada para apaciguar a la opinión pública significó un importante temblor para la cúpula gobernante.

Finalmente, la tercera de las carteras que quedó vacante en reiteradas oportunidades, de importancia destacada por el contexto de pandemia, es el Ministerio de Salud. En abril, el entonces popular Ministro de Salud Luiz Henrique Mandetta, quien realizaba partes diarios a la opinión pública para informar respecto de las medidas a tomar para enfrentar la pandemia del nuevo coronavirus, fue sorpresivamente destituido. Los comentarios difundidos por el periodismo hegemónico indican que el presidente habría encontrado en su popularidad una razón crítica de difícil convivencia. Mientras la imagen positiva del presidente comenzaba a caer debido a sus declaraciones de subestimación de la propagación del virus, la visibilización del Ministro se incrementaba, volviendo ineludible su presencia en las conferencias de prensa oficiales.

En reemplazo de Mandetta fue nombrado Nelson Teich, un empresario de reconocido prestigio en la medicina privada. Su permanencia en el cargo fue menor a un mes. Enfrentado con la supuesta necesidad de proponer el uso de hidroxiclороquina de manera profiláctica, el ministro no resistió. En reemplazo de Teich fue nombrado Eduardo Pazuello, general del Ejército, sin vínculos con el ámbito de la salud ni conocimientos específicos sobre el tema.

De un total de nueve recambios, tres fueron en las áreas más sensibles en el marco de la crisis sanitaria: salud, educación y seguridad. Podría aducirse que aquello que prima es una actualización de ideas y propuestas de políticas públicas, no obstante, lo que ciertamente parece imponerse es una política de complicado equilibrio, de intento de estabilización en el marco de una crisis estructural.

DE FORMAS Y CONTENIDO: LA CONSTRUCCIÓN DEL DISCURSO PATRIARCAL

Si existe una característica distintiva de la lógica patriarcal es la práctica discursiva. El discurso patriarcal contempla formas, hábitos y ejemplos masculinos, se desarrolla con verbos y formas gramaticales

propias del género masculino y, además, se realiza principalmente entre hombres. Este circuito cerrado contiene mensajes que se presentan como encriptados para quienes lo escuchan y no forman parte de ese conjunto. En todo caso, una no puede sentirse más que excluida, pues, las formas y el contenido son claramente limitados a un conjunto de interlocutores que entienden dichos códigos. Rita Segato afirma que, en situaciones de violencia explícita, sobre todo en su análisis sobre hombres que perpetraron crímenes sexuales y femicidios, los hombres actúan ejerciendo la dominación política en hermandad. Llama a esa solidaridad masculina de “cofradía”. Así, funcionarían como una corporación: “para una corporación no existe ninguna lealtad más importante (...) sacrifico cualquier cosa en este mundo para no sacrificar esa lealtad, lo que es letal porque un hombre va a tener que ser primero un hombre, eso lo vemos diariamente”. La segunda característica señalada es que la corporación es en su interior jerárquica: “los hombres son competitivos, pero al mismo tiempo dóciles a su posición en la corporación” (Segato, 2019).

Desde que la crisis del gobierno de Bolsonaro se desató, a partir de la pandemia del Covid-19, el presidente no ha dejado de enviar mensajes a sus compañeros y rivales políticos o cófrades. Abundan las declaraciones públicas o pronunciamientos en que el mensaje parece estar dirigido a la ciudadanía, pero que, analizándolo con detenimiento y precisión, no hace más que orientarse a sus cófrades.

Un ejemplo claro de esta forma de establecer comunicación fue la conferencia de prensa del 24 de abril, en la que ofreció las razones que daban cuenta de la renuncia de Sergio Moro al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. En aquella oportunidad, Bolsonaro se *explayó* en su relación personal con el entonces ministro. Comentó cómo se conocieron, su consideración de él antes de conocerlo en persona, explicó sus sentimientos al haber sido casi ignorado por el exministro en un comedor de un aeropuerto, justificó sus momentos de acercamiento y distanciamiento en el tiempo compartido de gobierno. No hubo en la conferencia de prensa razones públicas, propias de una legitimidad democrática en cuestión, debido a la renuncia de uno de los principales miembros del Gabinete Nacional. Estas declaraciones, su contenido y destinatarios eran de hombres para hombres. Hombres que, en una lógica de articulación de poder, se miran entre sí asumiendo una percepción cómplice y empática que llega a ser semejante a la del discurso amoroso.

Eu sempre abri o coração para ele [Moro], mas eu duvido se ele sempre abriu o coração para mim. Eu sempre disse aos meus ministros: a confiança tem que ter dupla mão. O ministro quer que eu confie nele, quer e tem razão, mas eu também quero que o ministro confie em mim (UOL, 2020, 24 de abril).

A su vez, el presidente prosiguió en un discurso que fue ganando énfasis, hasta acusar a Moro de traición por, presuntamente, preocuparse más por el asesinato de la concejala municipal Marielle Franco que por la investigación en torno de la cuchillada que el propio Bolsonaro recibió durante su campaña electoral.

A Polícia Federal de Sergio Moro mais se preocupou com Marielle do que com seu chefe supremo. Acho que todas as pessoas de bem no Brasil querem saber. Me desculpe senhor ex-ministro, entre meu caso e o da Marielle, o meu está muito menos difícil de solucionar (UOL, 2020, 24 de abril).

Cuando el problema era, a todas luces, público, el exministro no habría estado a la altura de las jerarquías propias del código masculino y se volvió personal. Sólo en este contexto y en estos códigos puede ser cuestionable que Moro haya colocado entre sus tareas prioritarias la investigación del caso de una mujer, negra, lesbiana y feminista, antes que el atentado a un compañero hombre, además blanco, político y aliado.

Abonando la lógica mencionada, la foto de la conferencia de prensa resulta expresiva de estas declaraciones. De un total de 25 personas a su lado, sólo dos mujeres se encontraban presentes. Había una mujer detrás del presidente, Damares Alves, Ministra de la Mujer, la familia y derechos humanos, pastora evangélica, abogada y representante del protestantismo en el círculo del presidente. La segunda de las mujeres que se encontraba junto al presidente era Tereza Cristina Corrêa, Ministra de Agricultura, Pecuária y Abastecimiento. Tereza presidió hasta 2018 un grupo político que defiende abiertamente los intereses de los grandes propietarios rurales en el Congreso.

Queda claro que el perfil de las mujeres invitadas a participar del Gabinete Nacional es del todo particular. Por un lado, vinculado a intereses específicos que en nada cuestionan la lógica patriarcal, sino que la alimentan; por otro, alineado con la lógica de acumulación de capital que abona la presencia de grandes grupos transnacionales, potencialmente favorecidos por políticas públicas. Cabría en otro análisis dar cuenta de la manera en que esta lógica también nutre un orden

jerárquico de patrones que se codean con patrones, de militares que se vinculan con militares, de alianzas que atraviesan al patriarcado y lo complejizan en estructuras de poder y autoridad.

GRIETAS EN EL MURO: LUCHAS Y RESISTENCIAS POPULARES AL BOLSONARISMO

Frente al escenario de crisis profunda en Brasil, en los primeros siete meses de la pandemia es posible observar distintos procesos de lucha y resistencia al bolsonarismo, aunque ninguno de ellos se ha vuelto masivo ni ha significado una amenaza real a la permanencia de Jair Bolsonaro en la presidencia. En el marco de la política institucional, desde marzo de 2019 en adelante ya fueron protocolizados 50 pedidos de *Impeachment* en el Congreso de la República (A Pública, 2020), muchos de los cuales fueron producto de la articulación política de movimientos sociales, partidos políticos, organizaciones y colectivos de la sociedad civil. Existen, además, cinco denuncias internacionales por crímenes contra la humanidad (Brasil de Fato, 2020, 27 de julio). Tales estrategias enfrentan los obstáculos impuestos por las “reglas del juego” de la democracia liberal burguesa y las alianzas y compromisos entre las fracciones de clase dominantes brasileñas y extranjeras que sostienen al gobierno bolsonarista en el poder.

Por otro lado, hubo protestas y manifestaciones sociales que también ocuparon el espacio de la calle en tiempos recientes. De marzo a mayo, el protagonismo movimientista fue del bolsonarismo, el cual tenían como pautas políticas el apoyo a los discursos y medidas del presidente durante la pandemia – en oposición a las medidas estatales y municipales de aislamiento social– ataques al Congreso, al Supremo Tribunal Federal, en clara defensa y exaltación de las Fuerzas Armadas, con pedidos de intervención militar, entre otras proclamas (Mercier, 2020).

Pero lo cierto es que hacia fines de mayo ocurrió un hecho inesperado. El día 31 de dio la primera reacción articulada frente a las acciones pro bolsonaristas. Se trata de un movimiento encabezado por los hinchas de “antifas”, o sea, en defensa de la democracia y con carácter antifascista (Jiménez, y Alessi, 2020). A este siguieron otros actos en el mes de junio que reunieron movimientos sociales de las periferias urbanas, sectores y colectivos del movimiento negro, grupos antifascistas y el frente popular *Povo sem medo*¹⁹ (Schreiber, 2020; Jiménez,

19 El frente *Povo sem medo* nació en octubre de 2015, integrando 27 entidades, movimientos sociales de izquierda, sectores de la juventud, sindicatos, movimientos

Arroyo, y Rupp, 2020). Otro movimiento importante que tuvo lugar en Brasil recientemente fueron las huelgas de los repartidores de plataformas en julio, una expresión de los cambios en las relaciones de trabajo de la última década y del fenómeno de *uberización* del empleo, las cuales ilustran el carácter de la crisis capitalista y profundización del neoliberalismo que vivimos mundialmente, y más aún, sus repercusiones en los países dependientes. En el caso de Brasil, después de ataques muy duros a los/las trabajadores, como la contrarreforma laboral de 2017 y la contrarreforma de la previsión social de 2019, específicamente. El contexto de pandemia significó un incremento de las horas de trabajo de esta categoría de trabajadores, y profundizó las condiciones de precarización a las cuales ellos/ellas estaban sujetos²⁰. Sus reivindicaciones se centraban en mejores condiciones de trabajo, como el aumento del valor mínimo del viaje, la necesidad de un seguro de robo y accidente, el incremento del valor por kilómetro recorrido, asistencia por la pandemia y fin del sistema de puntos.

Al considerar este punteo de movimientos sociales y políticos recientes en Brasil, se vuelve necesario puntualizar el caso de la transversalidad de la lucha antirracista²¹ que ha cobrado fuerza en este período. Aunque la lucha antirracista sea de muchos siglos, desde la resistencia de los y las esclavizados negros/negras en la colonia, en los quilombos y en sus luchas por el fin de la esclavitud, siguiendo el período postabolición, pasando por la formación del movimiento negro unificado, hasta llegar a la contemporaneidad, el debate antirracista en Brasil nunca había ganado la proporción y dimensión que ha tomado hoy. Y este es un dato fundamental para entender la historia de la lucha de clases en Brasil, considerando la centralidad que tiene la cuestión racial en la estructura de clases brasileña.

La mayoría de la sociedad brasileña es negra, formada por 55,8% (Afonso, 2020), y si miramos hacia la clase trabajadora, ese número

de lucha por la vivienda, como el Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST), que tiene gran protagonismo en la articulación de la frente (Bedinelli, 2015). Ella surge en un contexto de crisis de la hegemonía del PT en la izquierda brasileña, en un intento de construcción de un nuevo campo político de lucha popular.

20 Para más información sobre la condición de los repartidores de aplicativos durante la pandemia, consultar: BBC News, 2020, 22 de agosto.

21 La posición social desde la cual hablamos es de profesoras universitarias blancas, y desde esa posición, reconocemos el lugar de privilegio de la blanquitud y su posición opresora en las relaciones de poder raciales en Brasil, entendiendo el racismo como estructural en la formación social brasileña, encarnado en nuestras relaciones sociales, en las relaciones de producción, en los afectos, en todas las dimensiones de existencia.

es aún mayor. Un dato representativo de esa realidad es que el 75% de las personas que viven en condición de extrema pobreza son negros (Bóas, 2020). En ese sentido, la división social del trabajo está sustentada en una división racial y al mismo tiempo sexual del trabajo - hay una diferencia de sueldo de 45% entre trabajadores negros y blancos, y si observamos entre las mujeres negras, ese número pasa al 70%, considerando mismo cargo y función (Freire, 2020).

Otro elemento central es la estructura racista y patriarcal del Estado dependiente brasileño, que se expresa en el encarcelamiento en masa y genocidio de jóvenes negros en las favelas - 75,7% de las personas asesinadas son negras (Bond, 2020) -, en el hecho de que las mujeres negras sean las que más sufren violencia en el hogar, las principales víctimas de femicidios, 58%, de violencia obstétrica, 65%, y de mortalidad materna 56% (Rede Brasil Atual, 2018).

La lucha antirracista gana fuerza en Brasil en el contexto mundial del *Black lives matter*, después del asesinato de George Floyd en Estados Unidos, a finales de mayo. Algunas de las pautas fundamentales de esta lucha ocuparon el debate público a través de las redes sociales, en los grandes medios de comunicación y en las calles, sobre todo en el mes de junio. Los reclamos eran la destrucción del mito de la democracia racial; el fin del genocidio de la población negra; la afirmación del carácter estructural del racismo -ya que no se trata de algo individual y personalizado- y contra la segregación racial, que ha existido desde los tiempos de colonización y continúa existiendo en el día de hoy; y la interpelación a la blanquitud, develando su racialización y su lugar en la estructura de opresión de Brasil.

En este contexto de crisis política y bajo el impacto de la lucha antirracista en el mundo, los actos de oposición al gobierno de Jair Bolsonaro que ocurrieron en junio y reunieron millares de personas, fueron permeados por este debate y dieron lugar a discusiones en el seno de las izquierdas, de los movimientos sociales y de los sectores progresistas. Las preguntas que se lanzaron no son menores: si los actos a desarrollar serían antirracistas o antifascistas, si habría contradicción entre ambas o no. Más allá de las respuestas, es importante señalar que tal proceso se convirtió en una interpelación a todos los sectores y colectivos del movimiento negro, los sectores y grupos de izquierda, movimientos populares y partidos políticos²². En ese senti-

22 Una expresión de la articulación entre la lucha antirracista y la oposición al gobierno de Jair Bolsonaro es el pedido de Impeachment protocolado por la Coalizão Negra por Direitos, en agosto de 2020 (Coalizão Negra por Direitos, 2020), bajo el cual denunciaron el agravamiento del genocidio de la población negra brasileña

do, aun cuando el debate público sobre racismo haya ganado fuerza como nunca, hay aún un larguísimo camino a recorrer. Es urgente que las fuerzas y movimientos de izquierda enfrenten el tema desde una perspectiva estructural, que tomen al antirracismo como eje con centralidad en la lucha entendiéndolo como parte indisociable de las luchas en el seno del capitalismo dependiente.

En el presente artículo hemos buscado caracterizar algunos rasgos del caso brasileño durante los primeros siete meses de la pandemia de Covid-19, señalando elementos de profundización del proyecto político bolsonarista, pero, al mismo tiempo, destacando la crisis política en la cual el gobierno Bolsonaro se vio involucrado. Aunque el presidente y sus aliados más directos hayan logrado resistir a la crisis, llama la atención la inestabilidad del equilibrio bajo el cual se sostiene su poder en el aparato estatal. De todas formas, aunque la agudización de la crisis haya explicitado de manera ineludible las desigualdades, las relaciones de explotación y opresión que subsisten en el marco del capitalismo dependiente brasileño, y que el gobierno Bolsonaro haya adoptado una política genocida frente a la pandemia, su base social permanece intacta, sosteniéndolo sea en manifestaciones callejeras durante los últimos meses, sea manteniendo relativamente alta su aprobación como presidente, como lo demostró la última encuesta de opinión (Datafolha, 2020), según la cual Bolsonaro contaba, en el mes de agosto, con 37% de aprobación. Otra dimensión de nuestro análisis fue la identificación del discurso patriarcal de Bolsonaro, en un intento de relacionar forma y contenido, entre su lógica discursiva y su praxis política, discusión que podrá ser desarrollada con mayor profundidad en otros estudios.

La crisis que vivimos se manifiesta en distintas dimensiones, económica, política, sanitaria y es una de las mayores, sino la mayor vivida en Brasil y tenemos delante de nosotres la perspectiva de profundización del fascismo dependiente. A la par, en el interregno de los primeros meses de la pandemia pudimos observar la emergencia de luchas y movimientos de resistencia que expresaron en las calles la oposición al proyecto bolsonarista, asumiendo un carácter antifascista y antirracista. Sin embargo, tales movimientos no han logrado una correlación de fuerzas que permita enfrentar las bases sociales y las alianzas políticas entre las fracciones dominantes que sostienen al

durante el gobierno de Bolsonaro, particularmente en el período de la pandemia de COVID-19.

proyecto bolsonarista de gobierno. Ese es el principal desafío que se coloca delante de nosotres en ese momento.

BIBLIOGRAFÍA

Afonso, Nathália (2019, 20 de noviembre). “Dia da Consciência Negra: números expõem desigualdade racial no Brasil”. *Piauí*. Disponible en: <https://piaui.folha.uol.com.br/lupa/2019/11/20/consciencia-negra-numeros-brasil/>. Acceso en: 12 de septiembre de 2020.

A Pública. (2020). “Os pedidos de Impeachment de Bolsonaro”. *A Pública*. Disponible en: <https://apublica.org/impeachment-bolsonaro/>. Acceso en: 22 de julio de 2020.

Aragão, Helena (2019, 21 de diciembre). “2019: Censuras e nomeações polêmicas marcaram relação entre o governo federal e o setor cultural”. *O Globo*. Disponible en: <https://oglobo.globo.com/cultura/2019-censuras-nomeacoes-polemicas-marcaram-relacao-entre-governo-federal-o-setor-cultural-1-24152224>. Acceso en: 27 de agosto de 2020.

BBC News. (2020, 01 de julio). “Com pandemia, entregadores de app têm mais trabalho, menos renda e maior risco à saúde”. *BBC News*. Disponible en: <https://www.bbc.com/portuguese/brasil-53258465>. Acceso en: 22 de agosto de 2020.

BBC News. (2020, 27 de abril). “Coronavirus en América Latina: 7 gráficos para entender el avance de la pandemia de covid-19 en la región”. *BBC News*. Disponible en: <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-52405371>. Acceso en: 22 de julio de 2020.

BBC News. (2020, 28 de abril). “Coronavírus: o mapa interativo que mostra as medidas e tipos de isolamento adotados na América Latina”. *BBC News*. Disponible en: <https://www.bbc.com/portuguese/internacional-52248493>. Acceso en: 22 de julio de 2020.

Bedinelli, Talita (2015, 08 de octubre). “Movimentos sociais lançam frente de esquerda anti-Levy e sem o PT”. *El país*. Disponible en: https://brasil.elpais.com/brasil/2015/10/07/politica/1444171412_797786.html. Acceso en: 27 de agosto de 2020.

Berringer, Tatiana; Carneiro, Gabriel; Soprijo, Gabriel, Souza; Leonardo Martin de; y Barros, Larissa de Oliveira (2019, 21 de junio) *Governo Bolsonaro e os EUA: O nacionalismo às avessas*. Observatório de Política Externa e da Inserção Internacional do Brasil. Disponible en: <http://opeb.org/2019/06/21/governo-bolsonaro-e-os-eua-o-nacionalismo-as-avessas/>. Acceso en: 27 de agosto de 2020.

Bôas, Bruno Villas (2019, 13 de noviembre). “IBGE: Dos 13,5 milhões vivendo em extrema pobreza, 75% são pretos ou pardos”. *Valor Econômico*. Disponible en: <https://valor.globo.com/brasil/noti->

cia/2019/11/13/ibge-dos-135-milhoes-vivendo-em-extrema-pobreza-75percent-sao-pretos-ou-pardos.ghhtml. Acceso en: 12 de septiembre de 2020.

Bond, Leticia (2020, 27 de agosto). “Atlas da Violência: assassinatos de negros crescem 11,5% em 10 anos”. *Agência Brasil*. Disponible en: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2020-08/atlas-da-violencia-assassinatos-de-negros-crescem-115-em-10-anos>. Acceso en: 13 de septiembre de 2020.

Brasil. (2020, 17 de julio). Memorando nº 57/2020-Segecex. *Tribunal de Contas da União*. Disponible en: <https://www.conjur.com.br/dl/levantamento-tcu.pdf>. Acceso en: 5 de septiembre de 2020.

Brasil. (2020, 28 de agosto). Portaria Nº 2.282, de 27 de agosto de 2020. Dispõe sobre o Procedimento de Justificação e Autorização da Interrupção da Gravidez nos casos previstos em lei, no âmbito do Sistema Único de Saúde-SUS. Brasília: *DOU Diário Oficial da União*. Disponible en: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-2.282-de-27-de-agosto-de-2020-274644814>. Acceso en: 11 de septiembre de 2020.

Brasil de Fato. (2020, 05 de junio). “Passar a boiada’: política ambiental de Bolsonaro é alvo de ações na Justiça”. *Brasil de Fato*. Disponible en: <https://www.brasildefato.com.br/2020/06/05/passar-a-boiada-politica-ambiental-de-bolsonaro-e-alvo-de-acoes-na-justica>. Acceso en: 05 de septiembre de 2020.

Brasil de Fato. (2020, 27 de julio). “Bolsonaro é alvo de nova ação no Tribunal de Haia por crime contra a humanidade”. *Brasil de Fato*. Disponible en: <https://www.brasildefato.com.br/2020/07/27/bolsonaro-e-alvo-de-nova-acao-no-tribunal-de-haia-por-crime-contra-a-humanidade>. Acceso en: 10 de septiembre de 2020.

Carta Capital. (2019, 25 de julio). “Damares justifica abuso de meninas por falta de calcina”. *Carta Capital*. Disponible en: <https://www.cartacapital.com.br/politica/damares-justifica-abuso-de-meninas-por-falta-de-calcinhas/>. Acceso en: 4 de septiembre de 2020.

Castro, Celso (2014). *O espírito militar. Um antropólogo na caserna*. São Paulo: ZAHAR.

Chaib, Julia; y Teixeira, Matheus (2020, 14 de abril). “Ameaças de Bolsonaro a governadores e prefeitos mobilizam Supremo e Congresso”. *Folha de São Paulo*. Disponible en: <https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/04/ameacas-de-bolsonaro-a-governadores-e-prefeitos-mobilizam-supremo-e-congresso.shtml>. Acceso en: 11 de septiembre de 2020.

Coalizão negra por direitos. (2020). “Coalizão Negra por Direitos protocola pedido de impedimento contra o presidente Jair Bolsonaro”. *Coalizão negra por direitos*. Disponible en: <https://coalizaonegra->

pordireitos.org.br/impeachmentbolsonaro/. Acesso en: 28 de agosto de 2020.

Cohen, Mary; y Aranha, Camila da Fonseca (2020, 19 de agosto). “A conta do governo Bolsonaro no genocídio dos povos indígenas chegará”. *Carta capital*. Disponible en: <https://www.cartacapital.com.br/blogs/lado/a-conta-do-governo-bolsonaro-no-genocidio-dos-povos-indigenas-chegara/>. Acesso en: 04 de septiembre de 2020.

Colombari, Emanuel y Gonzalez, Mariana. (2020, 24 de abril). “Decepção com Moro, ‘mentiroso’ e mais: o discurso de Bolsonaro em 10 frases”. *UOL*, São Paulo. Disponible en: https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/04/24/10-frases-bolsonaro-pronunciamento-moro.htm?utm_source=twitter&utm_medium=social-media&utm_content=geral&utm_campaign=uol. Acesso en: 25 de abril de 2020.

Datafolha. (2020, 14 de agosto). “Aprovação a Bolsonaro cresce e é a mais alta desde início de mandato”. *UOL*. Disponible en: <http://datafolha.folha.uol.com.br/opiniaopublica/2020/08/1988832-aprovacao-a-bolsonaro-cresce-e-e-a-mais-alta-desde-inicio-de-mandato.shtml>. Acesso en: 14 de septiembre de 2020.

Dias, Bruno C. (2020, 11 de abril). “Letalidade da Covid-19 na população negra pauta imprensa sobre raça e desigualdades”. *ABRASCO*. Disponible en: <https://www.abrasco.org.br/site/noticias/saude-da-populacao/letalidade-da-covid-19-na-populacao-negra-pauta-debate-sobre-raca-e-desigualdade-social-na-imprensa/46775/>. Acesso en: 3 de septiembre de 2020.

Dias Carneiro, Julia (2019, 02 de enero). “Governo Bolsonaro: conheça a academia que formou o presidente e seis integrantes do governo”. *BBC News Mundo*. Disponible en: <https://www.bbc.com/portuguese/brasil-46655124>. Acesso en: 20 de septiembre de 2019.

DIEESE. (2019, noviembre). “Nota técnica PEC 6/2019: como ficou a Previdência depois da aprovação da reforma no Senado Federal”. *DIEESE*. Disponible en: <https://www.dieese.org.br/notatecnica/2019/notaTec214ReformaPrevidenciaAprovada.html>. Acesso en: 04 de septiembre de 2020.

Fellet, João (2020, 29 de enero). “Os 5 principais pontos de conflito entre governo Bolsonaro e indígenas”. *BBC News*. Disponible en: <https://www.bbc.com/portuguese/brasil-51229884>. Acesso en: 04 de septiembre de 2020.

Ferreira, Adalene (2020, 04 de junio). “A trajetória de Bolsonaro pelo extermínio da população preta e pobre”. *Catarinas Jornalismo com perspectiva de gênero*. Disponible en: <https://catarinas.info/a-trajetoria-de-bolsonaro-pelo-extermínio-da-populacao-preta-e-pobre/>. Acesso en: 03 de septiembre de 2020.

Ferreira, Manuela Lowenthal (2020, abril). “Evangélicos e Extrema Direita no Brasil: um projeto de poder”. *Revista Fim do Mundo*, 1, enero-abril, p. 46-71.

Fórum Brasileiro de Segurança Pública (2020, 29 de mayo). “Nota técnica Violência Doméstica Durante Pandemia de Covid-19 Edição 02”. *Fórum Brasileiro de Segurança Pública*. Disponible en: <https://forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2020/06/violencia-domestica-covid-19-ed02-v5.pdf>. Acceso en: 04 de septiembre de 2020.

Freire, Simone (2020, 08 de enero). “Racismo é causa da diferença salarial de 31% entre brancos e negros com ensino superior, diz pesquisa”. *Alma Preta*. Disponible en: <https://www.almapreta.com/editorias/realidade/racismo-e-causa-da-diferenca-salarial-de-31-entre-brancos-e-negros-com-ensino-superior-diz-pesquisa>. Acceso en: 23 de julio de 2020.

Gazeta do Povo. (2019, 18 de diciembre). “Weintraub é ‘excelente’ e o Escola Sem Partido já está em operação, diz Bolsonaro”. *Gazeta do Povo*. Disponible en: <https://www.gazetadopovo.com.br/educacao/weintraub-e-excelente-e-o-escola-sem-partido-ja-esta-em-operacao-diz-bolsonaro/>. Acceso en: 11 de septiembre de 2020.

Gênero e Número; y SOF Sempreviva Organização Feminista (2020). “Sem parar: o trabalho e a vida das mulheres na pandemia”. *Gênero e Número, y SOF Sempreviva Organização Feminista*. Disponible en: <http://mulheresnapandemia.sof.org.br/>. Acceso en: 04 de septiembre de 2020.

Goes, Emanuelle Freitas; Ramos, Dandara de Oliveira; y Ferreira, Andrea Jacqueline Fortes (2020). “Desigualdades raciais em saúde e a pandemia da Covid-19”. *Trabalho, Educação e Saúde*, 18(3). Epub May 29, 2020. Disponible en: <https://doi.org/10.1590/1981-7746-sol00278>.

Informe ENSP. (2020, 13 de mayo). “Desigualdade social e econômica em tempos de Covid-19”. *Portal Fiocruz*. Disponible en: <https://portal.fiocruz.br/noticia/desigualdade-social-e-economica-em-tempos-de-covid-19>. Acceso en: 03 de septiembre de 2020.

Instituto Pólis. (2020, 27 de mayo). “Quem são as pessoas mais afetadas pela pademia?” *Instituto Pólis*. Disponible en: <https://polis.org.br/noticias/quem-sao-as-pessoas-mais-afetadas-pela-pandemia/>. Acceso en: 04 de septiembre de 2020.

Instituto Pólis. (2020, julio). “Raça e Covid no município de São Paulo”. *Instituto Pólis*. Disponible en: <https://polis.org.br/estudos/raça-e-covid-no-msp/>. Acceso en: 04 de septiembre de 2020.

Jiménez, Carla y Alessi, Gil (2020, 31 de mayo). “Ato em defesa da democracia e contra Bolsonaro acaba em choque com a polícia em São Paulo”. *El país*. Disponible en: <https://brasil.elpais.com/brasil/2020-05-31/ato-por-democracia-e-contra-bolsonaro-acaba-em-con>

fronto-em-sao-paulo.html. Acceso en: 12 de septiembre de 2020.

Jiménez, Carla; Arroyo, Priscilla; y Rupp, Isadora (2020, 08 de junio). <https://brasil.elpais.com/brasil/2020-06-08/atos-pela-democracia-elevam-tom-contra-o-racismo-no-brasil.html>. Acceso en: 12 de septiembre de 2020.

Johns Hopkins University (2020, 13 de septiembre). *Covid-19 Map*. Johns Hopkins Coronavirus Resource Center. Disponible en: <https://coronavirus.jhu.edu/map.html>. Acceso en: 13 de septiembre de 2020.

Linhares, Carolina (2020, 05 de septiembre). “Bolsonaro critica governos e prefeituras por ‘projetos ditadores’ contra Covid”. *Folha de São Paulo*. Disponible en: <https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/09/bolsonaro-critica-governos-e-prefeituras-por-projetos-ditadores-contra-covid.shtml>. Acceso en: 11 de septiembre de 2020.

Lis, Laís (2020, 17 de julio). “Governo Bolsonaro mais que dobra número de militares em cargos civis, aponta TCU”. *G1*. Disponible en: <https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/07/17/governo-bolsonaro-tem-6157-militares-em-cargos-civis-diz-tcu.ghtml>. Acceso en: 23 de julio de 2020.

Martins, Pedro (2020, 30 de marzo). “População negra e Covid-19: desigualdades sociais e raciais ainda mais expostas”. *ABRASCO*. Disponible en: <https://www.abrasco.org.br/site/noticias/sistemas-de-saude/populacao-negra-e-covid-19-desigualdades-sociais-e-raciais-ainda-mais-expostas/46338/>. Acceso en: 03 de septiembre de 2020.

Mercier, Daniela (2020, 19 de abril). “Bolsonaro endossa ato pró-intervenção militar e provoca reação de Maia, STF e governadores”. *El país*. Disponible en: <https://brasil.elpais.com/politica/2020-04-19/bolsonaro-endossa-ato-pro-intervencao-militar-e-provoca-reacao-de-maia-stf-e-governadores.html>. Acceso en: 12 de septiembre de 2020.

Moury, Taciana (2018, 23 de marzo). “Academia militar del Ejército Brasileño recibe a primeras mujeres”. *Revista Diálogo*.

Rede Brasil Atual. (2018, 20 de noviembre). “Mulheres negras são as maiores vítimas de feminicídio no Brasil”. *Rede Brasil Atual*. Disponible en: <https://www.redebrasilatual.com.br/politica/2018/11/mulheres-negras-sao-as-maiores-vitimas-de-feminicidio-no-brasil/>. Acceso en: 23 de julio de 2020.

Penido, Ana; Rodrigues, Jorge M. y Kalil Mathias, Suzeley (2020) “As Forças Armadas no governo Bolsonaro”. *Jornal GGN*. Disponible en: <https://jornalggn.com.br/artigos/as-forcas-armadas-no-governo-bolsonaro-por-ana-penido-jorge-m-rodrigues-e-suzeley-kalil-mathias/>. Acceso en: 12 de septiembre de 2020.

O’Leary, Dale (2004, 19 de noviembre). “El feminismo de género.

Corrientes de pensamiento que impiden la promoción de la mujer”. *L’Osservatore Romano*, n° 47.

Rocha, Igor Tadeu Camilo (2019, 04 de junio). “Ao sugerir evangélico no STF, Bolsonaro reafirma Estado ‘quase laico’”. *UOL*. Disponible en: <https://entendendobolsonaro.blogosfera.uol.com.br/2019/06/04/ao-sugerir-evangelico-no-stf-bolsonaro-reafirma-estado-quase-laico/>. Acceso en: 29 de agosto de 2020.

Sampaio, Cristiane (2020, 07 de abril). “Demissões, perda salarial e redução de jornada: ¿como ficam os trabalhadores formais?”. *Brasil de Fato*. Disponible en: <https://www.brasildefato.com.br/2020/04/07/demissoes-perda-salarial-e-reducao-de-jornada-como-ficam-os-trabalhadores-formais>. Acceso en: 14 de septiembre de 2020.

Sampaio, Cristiane (2020, 29 de agosto). “Bolsonaro veta socorro para pequenos produtores, mas libera benesses para o ‘agro’”. *Brasil de Fato*. Disponible en: <https://www.brasildefato.com.br/2020/08/29/bolsonaro-veta-beneficio-para-pequenos-produtores-mas-libera-benesses-para-o-agro>. Acceso en: 05 de septiembre de 2020.

Sant’Ana, Jessica (2019). “Painel das privatizações: as estatais que o governo quer vender, e as que estão escapando”. *Gazeta do povo*. Disponible en: <https://especiais.gazetadopovo.com.br/politica/painel-das-privatizacoes/>. Acceso en: 05 de septiembre de 2020.

Sayuri, Juliana (2019, 02 de octubre). “Bolsonaro já interveio em metade das universidades federais que tiveram eleições para a reitoria”. *The Intercept Brasil*. Disponible en: <https://theintercept.com/2019/10/02/bolsonaro-universidades-reitores/>. Acceso en: 12 de septiembre de 2020.

Schreiber, Mariana (2020, 05 de junio). “Pandemia e risco de conflito podem limitar alcance de atos contra Bolsonaro e racismo”. *BBC News*. Disponible en: <https://www.bbc.com/portuguese/brasil-52931385>. Acceso en: 12 de septiembre de 2020.

Segato, Rita Laura (2019, 17 de julio). “Politicidad de las mujeres y desafíos del movimiento feminista. Entrevista: Rita Laura Segato”. Entrevista concedida a Antonia del Solar Benavidez. *Heinrich Böll Stiftung*, Santiago de Chile. Disponible en: <https://cl.boell.org/es/2019/06/17/rita-segato-en-chile-politicidad-de-las-mujeres-y-desafios-del-movimiento-feminista>.

Silva, Ronnie Aldrin (2020, 11 de febrero). “As 26 principais violações ao meio ambiente feitas por Jair Bolsonaro”. *Carta Capital*. Disponible en: <https://www.cartacapital.com.br/blogs/brasil-debate/as-26-principais-violacoes-ao-meio-ambiente-feitas-por-jair-bolsonaro/>. Acceso en: 05 de septiembre de 2020.

Tajra, Alex; y Teixeira, Lucas Borges (2020, 08 de agosto). “‘Tem medo do quê? Enfrenta’: Lembre frases de Bolsonaro durante a pan-

demia”. *UOL*. Disponible en: <https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/08/08/bolsonaro-pandemia-100-mil-mortes-fala.htm>. Acceso en: 4 de septiembre de 2020.

Trindade, Eliane; y Reis, Giovanna (2020, 06 de mayo). “Nas classes D e E, 51% perderam metade da renda ou mais na pandemia”. *Folha de São Paulo*. Disponible en: <https://www1.folha.uol.com.br/empreendedorsocial/2020/05/nas-classes-d-e-e-51-perderam-metade-da-renda-ou-mais-na-pandemia.shtml>. Acceso en: 14 de septiembre de 2020.

Veloso, Lucas (2019, 12 de julio). “Movimento negro faz denúncia internacional dos decretos de armas de Bolsonaro”. *Alma Preta*. Disponible en: <https://almapreta.com/editorias/realidade/movimento-negro-faz-denuncia-internacional-dos-decretos-de-armas-de-bolsonaro>. Acceso en: 28 de agosto de 2020.

PANDEMIA Y ESTADOS CAPITALISTAS LATINOAMERICANOS "DE NUEVO TIPO". ALGUNAS REFLEXIONES A PARTIR DEL CASO ARGENTINO

Rodolfo Gómez¹

INTRODUCCIÓN

Este ensayo, pretende examinar de un modo preliminar el funcionamiento del Estado capitalista en Latinoamérica en el marco de la pandemia que actualmente tiene lugar a nivel mundial, partiendo de algunos presupuestos y antecedentes. Entre estos últimos se cuenta un trabajo inicialmente presentado en el XXXI Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS), que tuvo lugar en la ciudad de Montevideo (Uruguay) que llevó por título *Estados capitalistas, conflictos sociales y rol de los sectores medios en los regímenes políticos latinoamericanos actuales*; en el que se abordaba la relación entre los Estados capitalistas latinoamericanos y las democracias capitalistas latinoamericanas a partir del rol jugado por los sectores medios en las sociedades capitalistas en la región.

En dicho trabajo, nuestra hipótesis planteaba que tanto en ese proceso de crisis política que atravesaban los gobiernos progresistas gobernantes (o que, como en el caso argentino, habían gobernado hasta 2015), como en la búsqueda de este “re-equilibrio” de la crisis del “sub-sistema político” habían jugado –y están jugando– un rol importante buena parte de los llamados “sectores medios” (o clases medias); cuyo rol político se ha potenciado a raíz de las reestructuraciones capitalistas llevadas adelante por las dictaduras de la región durante la década de los ochenta –que a su vez produjeron una desestructuración de la composición y la homogeneidad previas de las clases trabajadoras y populares– y cuya ideología representaba una sobrevalorización del régimen político republicano representativo burgués. Actualmente, dicha hipótesis se complementa por el rol que des-

1 Docente e investigador de las Carreras de Ciencia Política y de Ciencias de la Comunicación, Facultad de Ciencias Sociales, UBA.

empeñan los medios masivos de comunicación –considerados como una suerte de “subsistema” dentro del conjunto del “sistema social” capitalista latinoamericano, más en el marco de esta pandemia de alcance planetario, que afecta al conjunto de las sociedades capitalistas a nivel mundial.

Respecto a los presupuestos mencionados, el principal de los presupuestos entiende que tanto en América Latina como en el resto del mundo vivimos en sociedades capitalistas, esto es, sociedades donde se impone una dinámica contradictoria, conflictiva y totalizadora entre capital y trabajo, entendiendo estos dos últimos conceptos (capital y trabajo) no solamente como conceptos sino más bien como prácticas sociales concretas histórica y socialmente determinadas, que se han expresado y expresan en “formas” –económicas, políticas, sociales, culturales, comunicacionales- diversas y diferenciadas.

A partir de aquí asumimos que el Estado, la democracia representativa y el subsistema de medios masivos de comunicación son tres de esas “formas” en las que se expresa la dinámica conflictiva y contradictoria entre capital y trabajo. Sin embargo, también asumimos que los cambios en las “formas” múltiples y diversas en las que se presenta este conflicto no supone un cambio en la “sustancia” expropiadora y explotadora de la sociedad capitalista. Esta perspectiva no deja de reconocer influencias de los puntos de vista derivacionista y del enfoque de la reformulación del Estado, sin embargo, ello no implica desestimar desde un punto de vista “abierto” otras perspectivas o posiciones que se desarrollan al interior de la tradición marxista o fuera de ella.

A partir de los antecedentes y presupuestos mencionados, intentaremos describir de modo inicial, tomando como base el caso argentino, los cambios históricos en la “forma” Estado latinoamericano en su vinculación con el régimen político haciendo hincapié en las modificaciones que se suscitaron desde las últimas dictaduras, y donde cobran importancia los medios masivos de comunicación. Nuestro argumento señala que, en este contexto donde se desata la pandemia mundial actualmente en curso, el espacio público político se encuentra determinado mucho más que antes por este subsistema mass-mediático cuya función es equilibrar el funcionamiento capitalista.

LO TEÓRICO, LO EMPÍRICO Y LO HISTÓRICO, DESDE ANTES DE LA PANDEMIA

En algunos trabajos anteriores (Gómez, 2019 y 2018) desarrollamos algunas construcciones tipológicas respecto de los cambios históricos en las formas del estado capitalista latinoamericano. Establecíamos allí cierta correlación histórica y una diferenciación entre las formas

estado que se fueron haciendo presentes en los países capitalistas en general y en los países capitalistas latinoamericanos en particular; sosteniendo que estos cambios tenían que ver con variaciones en las relaciones de fuerza donde se desarrollaba la lucha de clases (es decir, la relación capital-trabajo):

Países desarrollados	América Latina
Estados liberales	Estados liberales oligárquicos
Estados interventores (y estados fascistas)	Estados interventores modernizadores (sustitutivos e industrialistas)
Estadoskeynesianos (y Estados de bienestar)	Estados populistas y desarrollistas
Estados neoconservadores	Estados burocráticos autoritarios
Estados neoliberales (y tercera vía)	Estados neoconservadores y neoliberales
Estados neokeynesianos*	Estados neodesarrollistas y neopopulistas

Como toda tipología, esta también se basa en algunos reduccionismos y caracterizaciones que hacen hincapié en algunos aspectos en detrimento de otros, y que por lo tanto podría prestarse a discusión ya que muchas de estas taxonomías no son exhaustivas, sino que se construyen con fines didácticos o exploratorios, antes que con fines polémicos. Por ejemplo, tanto Negri (2002) como Holloway (1994) explicaron que el surgimiento del Estado keynesiano y del Estado de bienestar europeo tuvieron más que ver con el in crescendo de la lucha de clases que dio lugar tanto a la Revolución Rusa de octubre de

* Tanto Astarita (2008) como Fiorito y Murga (2007) han distinguido entre las posiciones poskeynesianas (entre las que podrían ubicarse autores como Galbraith), las keynesianas neoclásicas (correspondientes al denominado modelo IS-LM) y las neokeynesianas (en las que podrían ubicarse los trabajos de autores como Stiglitz y Sachs). Distinciones que hemos abordado en relación con los tipos de intervenciones estatales y “formas estado” capitalistas en Gómez (2018).

1917 que con la crisis económica mundial de 1930; en el caso de América Latina puede decirse que las modificaciones que se fueron suscitando en la “forma estado” capitalista fueron producto de la (“forma”) dinámica de la lucha de clases (es decir, la dialéctica capital-trabajo). Esto quiere decir que en América Latina la aparición de una forma de Estado interventor hacia la década del treinta del siglo XX, no fue solamente el resultado reactivo que produjeron unas clases dominantes que en teoría “supieron” leer la nueva particularidad de la coyuntura internacional sino además producto de la conflictividad social y la presión de las clases trabajadoras (entre las que no solamente se encuentran los trabajadores industriales de las grandes ciudades, o los mineros, o los trabajadores rurales, sino incluso aquellos trabajadores y trabajadoras comunales que se resisten a la incorporación al mercado de trabajo y que se ubican en los límites del mismo Estado capitalista).

Para el caso de Argentina Iñigo Carrera (2000) ha mostrado que durante la década del treinta –contradiendo algunos trabajos historiográficos previos- la conflictividad social se mantuvo presente, incluso en el marco de organizaciones propias de las clases trabajadoras que renegaban en buena medida de una búsqueda de representación al interior del subsistema político. Esto también permitiría explicar la configuración de una “forma estado” populista como la que tuvo lugar en Argentina con el peronismo, que desde el punto de vista del trabajo de Aspiazu, Basualdo y Kavhishe (2004) representó un segundo momento del proceso de industrialización por sustitución de importaciones que allí se desarrolló entre mediados de la década del cuarenta y mediados de la década del cincuenta.

La configuración de esa “forma estado” –y el tipo de políticas públicas que implementó- es resultado del impacto en la estructura y la dinámica del Estado capitalista de la institucionalización de las clases trabajadoras y populares en general en organizaciones sindicales y partidarias que llevó adelante el peronismo. También tiene que ver con una característica relativa al modo de inserción dependiente –que es al mismo tiempo una “forma” particular de inserción- de las naciones latinoamericanas en el mercado mundial, porque ello va a suponer unas clases dominantes donde la “vocación hegemónica” –como bien supo observar Lechner (1977)- se encuentra poco presente y por tanto determina el funcionamiento de un subsistema político proclive a las experiencias autoritarias (es decir “formas estado” capitalistas dictatoriales). Todo eso mismo es lo que tiene que ver con el despliegue conflictivo de la contraposición entre capital y trabajo, que resulta

en una cristalización en el Estado capitalista del conflicto de clases en un momento histórico particular de funcionamiento del capitalismo a nivel general (aunque se exprese en “formas” particulares según las regiones y los países).

De modo que así como es posible explicar la “forma estado” populista, lo mismo podría decirse respecto de una “forma estado” como la “desarrollista”, que el brasileiro José Mauricio Domingues (2012) engloba en una misma categoría analítica². Entre otras cuestiones porque esta “forma estado”, intentó promover un tipo de desarrollo económico e industrial a partir de lo que se suele denominar Inversión Extranjera Directa (IED) pero también porque supo convivir promediando el siglo XX con regímenes políticos dictatoriales, como fue el caso de países como Brasil, Argentina, Perú, Bolivia, Paraguay, Ecuador, Venezuela, Nicaragua, etc.

Sin embargo, como también intentamos mostrar en otros textos (Gómez, 2018), dado que los Estados populistas y desarrollistas latinoamericanos se distinguieron (más allá de su compartida característica keynesiana) de los Estados capitalistas benefactores europeos, estas crisis redundaron en la emergencia de nuevas formas de Estados capitalistas en los países desarrollados y en los de América Latina. Mientras que en el caso de los primeros la forma estado capitalista podría caracterizarse como “neoconservadora”, enmarcadas en el funcionamiento de las democracias capitalistas “realmente existentes”; en el segundo la forma estado capitalista cobra la forma “burocrático-autoritaria” que ya había descrito O'Donnell para el Estado capitalista latinoamericano de la década del sesenta.

Es en este punto donde queremos introducir los dos elementos planteados en la introducción, aquel relativo a la presencia de los sectores medios al interior de las democracias capitalistas y otro relativo a los subsistemas de medios masivos de comunicación.

Si en primer lugar Gramsci tomó en consideración ciertos elementos culturales en sus Cuadernos de la Cárcel a la hora de explicar la construcción de hegemonía por parte del Estado capitalista fascis-

2 Referimos a este planteo de Domingues en un texto anterior (Gómez, 2015), pero a nuestro entender debería hacerse la distinción entre populismo y desarrollismo, ya que corresponde a modos diferentes en los que se expresa el Estado capitalista. Si bien el Estado capitalista populista presenta una característica modernizadora y desarrollista, lo que supone una diferencia con el Estado benefactor keynesiano europeo, lo cierto es que el Estado populista implicó –sobre todo en Argentina– un sesgo distribucionista que no estuvo tan presente en las “formas estado” capitalistas desarrollistas.

ta, aproximadamente por esa misma época teóricos frankfurtianos como Adorno, Horkheimer o Marcuse mostraban el “peso” de la industria cultural a la hora de dar cuenta del funcionamiento equilibrado (y enajenante) de la sociedad capitalista estadounidense. Es más, dicho funcionamiento en relación con el desarrollo del subsistema mass-mediático comercial en ese país fue también descrito por buena parte de la sociología estadounidense, que vio en esa sociedad capitalista desde la década del cuarenta en adelante una “mesocracia”, esto es, una “gran democracia” –la “Great Society” proclamada por Lyndon Johnson- de clase media.³ Pero ya en la década del sesenta, retomando en buena medida los planteos gramscianos previos, la problemática de lo simbólico-ideológico y comunicacional fue un elemento que atravesó por lo menos una parte de los argumentos de Althusser en su conocido texto “Ideología y aparatos ideológicos del Estado”, que tuvo un importante impacto en América Latina.

La incorporación de estos elementos simbólicos a la reflexión sobre el Estado, permitieron comenzar a considerar más o menos explícitamente en el campo intelectual del primer mundo la problemática ideológica y hegemónica que introducía el desarrollo de la industria cultural, de la cultura de masas y de los medios masivos de comunicación en el funcionamiento de las democracias y las sociedades capitalistas occidentales. Y si a ello le sumamos los trabajos que, inicialmente desarrollados por Foucault y luego proseguidos por Deleuze y Guattari, mostraban el paso de las sociedades disciplinarias a las sociedades de control, podremos intentar una explicación más consistente de por qué en los países desarrollados la crisis del Estado benefactor capitalista de tipo keynesiano pudo canalizarse como proceso institucionalizado al interior de una democracia capitalista transformando esa anterior forma estado en una de tipo neoconservador.

LOS ESTADOS CAPITALISTAS LATINOAMERICANOS BAJO LAS DICTADURAS (CAPITALISTAS) COMO INSTRUMENTO DE RECONFIGURACIÓN -Y CONTROL- EN LAS SOCIEDADES CAPITALISTAS DE LA REGIÓN

Desde nuestro punto de vista las dictaduras latinoamericanas impulsieron aquellos cambios en el funcionamiento del capitalismo que en los países capitalistas desarrollados se llevaron a cabo a través de la institucionalidad de las democracias capitalistas occidentales, ante la

3 Cfr. al respecto Cambiasso, Norberto y Grieco y Bavio, Alfredo (1999), especialmente los capítulos 6 y 7.

“imposibilidad” que esos mismos cambios fueran encauzados por el limitado funcionamiento de unas democracias capitalistas latinoamericanas donde las clases subalternas en general eran demasiado combativas y las clases dominantes presentaban escasa vocación hegemónica (Lechner, *Op.Cit.*, 1977). Ello implicó el intento por parte de las dictaduras latinoamericanas de transformar de raíz las sociedades, neutralizando y fijando límites a cualquier intento de modificación a futuro de nuestras sociedades, no solamente en un sentido socialista sino incluso en permitir la posibilidad de existencia de un capitalismo con algún sesgo inclusivo o redistributivo, que cuestionara el nuevo modo de acumulación capitalista vigente a partir de la consolidación de una forma estado –capitalista- neoconservadora.

Esto que afirmamos pudo verse de manera explícita en el llamado Proceso de Reorganización Nacional (PRN), dictadura militar que tuvo lugar en la Argentina entre 1976 y 1983, y que como señalamos en la introducción de este texto, tomaremos como estudio de caso. La última dictadura militar argentina no surgió de la nada, o como un sesgo subjetivo de las características de los militares argentinos o de los partidos políticos o de diversos sectores de la “sociedad civil” sino como un producto de la lucha de clases. Y ello se dio de ese modo a partir de la imposibilidad del último gobierno de Perón de reinstitucionalizar y encauzar (a través de las organizaciones e instituciones “tradicionales”, como los partidos políticos y los sindicatos) la potencia transformadora del movimiento social y de trabajadoras y trabajadores argentinos que amenazaba con volverse revolucionaria. Un dato no menor, que ilustra que la intención principal del régimen dictatorial era disciplinar al movimiento de trabajadores y desestructurar a las clases populares y al movimiento social en su conjunto, es que según los datos oficiales la mayor cantidad de “desaparecidos” durante la última dictadura fueron trabajadores y gremialistas combativos, más allá de la participación de estos mismos en organizaciones revolucionarias.

Sin embargo, la política desplegada desde el Estado burocrático autoritario capitalista de la última dictadura militar argentina, sobre la que queremos focalizar, no fue solamente la política represiva sistémica del “terrorismo de Estado”, sino además una política cultural que buscaba efectivamente una refundación de la sociedad capitalista argentina. En efecto, esta tarea puede observarse con todo detalle en el trabajo de Julia Risler (2018), donde esta autora -a partir de un relevamiento de documentaciones clasificadas de la dictadura en el llamado “archivo Banade” y del análisis de las campañas publicitarias

del régimen- muestra el detallado dispositivo comunicacional y cultural desplegado por el autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional” (PRN) argentino entre los años 1976 y 1983.

En el relevamiento que Risler realiza incluso de los diferentes organigramas de la institucionalidad estatal encuentra que la estrategia comunicacional y cultural buscaba promover tanto una “acción psicológica” como así una complementaria “acción cívica”, que iba a desarrollarse desde el Estado burocrático autoritario capitalista a partir de la utilización de sus diferentes medios masivos de comunicación como así también utilizando estrategias publicitarias al interior de los medios masivos de comunicación privados o instituciones de la sociedad civil en general. Si consideramos además que esto que estamos describiendo para la última dictadura argentina suponía al interior del Estado capitalista burocrático autoritario una conexión de “inteligencia” y de procesamiento de la información donde se articulaban el Ministerio del Interior (es decir el ministerio “político”) con el Ministerio de Educación y Cultura, con la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Información Pública podremos considerar que se trataba de toda una política cultural sistemática.⁴

Sin embargo, más allá de esta consideración sobre la importancia que la última dictadura militar argentina asignó a lo cultural-comunicacional, nos interesa aquí reforzar un elemento que podemos observar como articulado con las políticas culturales llevadas adelante por el gobierno de facto, y que el mismo concepto de “política cultural” permite considerar; porque una política cultural no es solamente una “policie” desplegada a partir del poder de policía del Estado capitalista sino que su producción y presencia pública va a desarrollarse al interior de la sociedad civil. En ese sentido, como señala Mangone (1996), la dictadura tuvo también sus educadores, productores culturales, periodistas, escritores, artistas, libretistas, locutores, cineastas y realizadores de radio y televisión, que ejercieron su labor no solamente desde puestos ocupados en el Estado sino desde los más diversos ámbitos de la sociedad civil.

Lo que sostenemos no niega sin embargo el lado represivo o de fuerte censura presente no sólo en la dictadura militar argentina sino en el conjunto de las dictaduras latinoamericanas, pero nos permite ponderar el aspecto “positivo” de la discursividad dictatorial capita-

4 Que no se desplegaba para nada de forma aislada, como muestran Judith Gociol y Hernán Invernizzi (2002) respecto del ámbito literario, educativo y cultural, y los investigadores Laura Graciela Rodríguez y Daniel Lvovich (2011) que trabajaron campañas destinadas a niñas y niños por la Gendarmería Nacional.

lista, esto es, aquel que hace posible la constitución de un “sentido común” dominante. Y en consonancia con esta visión sostenemos al mismo tiempo que la dictadura cívico-militar pudo instalar ese “sentido común” a partir del importante desarrollo en la Argentina de una industria cultural y de un extendido subsistema mass-mediático que han sabido promover de un modo eficiente sus funciones de “entretenimiento” y de “control social”.⁵

Si bien tanto Marcuse como Löwenthal refirieron a estas funciones de los medios de comunicación, nos interesa resaltar el planteo que respecto de esta última función nos brindan los autores funcionalistas estadounidenses, básicamente porque para estos últimos el efecto que promueve el consumo de los mensajes mass-mediáticos es el de reforzamiento de las normas y valores vigentes. Lo que según estos autores lleva por un lado al reforzamiento de “lo dado” y por el otro a la resolución institucionalizada de los conflictos y a la promoción del “equilibrio social”. Este tipo de discursos que expresaban una búsqueda de promoción del “equilibrio” social, coincidían en los medios masivos de comunicación con un rechazo a “los extremismos”, con la difusión de noticias “objetivas” y “no tendenciosas”, con la representación del “término medio” social; esto es, con aquello que Umberto Eco (1997) –reformulando los planteos del crítico estadounidense Dwight Mc Donald– supo definir como el “mid-cult” (la “cultura media”) característico de una cultura de masas orientada a la difusión de los valores de una “clase media”.

Estos valores e ideologías de “clase media” (o por lo menos de una parte importante de esos “sectores” sociales) ya habían sido analizados durante la década del sesenta en Argentina en relación al rol desempeñado en el golpe de Estado que derrocó a Perón, por ensayistas como Arturo Jauretche (1966) o Juan José Sebreli (1964), entre otros. Sin embargo, nos interesa rescatar un aspecto del análisis de este último, ya que en el mismo puede verse un elemento “identitario” de estos sectores “pequeño burgueses” –desarrollado más recientemente por Adamovsky (2019) y por Piva (2014)– constituido por oposición y diferenciación a las ideologías más consolidadas de las clases burguesas (capitalistas) y de las clases populares (trabajadoras). Un elemento “identitario” de estos sectores “medios” que en el dinamismo de la diferenciación con las clases y sectores de clases –y en el marco de la

5 Un análisis detallado del efecto de “control social” relevado por los funcionalistas estadounidenses, su transformación en “función” y la interpretación sobre su valoración política puede verse en Cambiasso y Grieco y Bavio (1999), especialmente los capítulos 6 y 7.

lucha de clases- consolida una situación que podríamos caracterizar como de “disponibilidad ideológica”. Elemento simbólico-ideológico sobre el que Marx (1975) había hecho referencia a la hora de hablar del “lumpen-proletariat”.

Llegado a este punto podemos considerar la política económica del PRN pero no tanto para analizarla críticamente sino para ver sus consecuencias económicas y sociales. Los datos disponibles indican que las consecuencias fueron desastrosas en todo sentido: aumento de la pobreza, aumento exponencial de la deuda externa, aumento de la desocupación, aumento de la inflación, pérdida del poder adquisitivo del salario, aumento de la desindustrialización, destrucción de la pequeña y mediana industria, entre otros indicadores negativos.

Aquí nos interesa considerar un trabajo reciente de Adrián Piva (2020) donde explica cómo la dictadura modificó la composición de la estructura social y económica de la Argentina. Lo señalado por Piva es relevante en primer lugar porque muestra una concentración del ingreso en los primeros deciles de la sociedad (los de más altos ingresos) y porque también muestra una diversificación y expansión de los sectores medios; en segundo lugar porque nos muestra -en el paso de una década a la otra- un proceso de desestructuración que se produce sobre los sectores populares si consideramos la homogeneidad y persistencia estructural que se observa tanto en las décadas del cincuenta, del sesenta y del setenta. Esto nos muestra que el resultado de las políticas del gobierno dictatorial fue una notable transformación en la estructura social previa, reduciendo la cantidad de trabajadores, haciendo crecer los niveles de desocupación, incrementando la precarización del empleo y el fomento del cuentapropismo y por tanto transformando las relaciones de fuerza políticas pre existentes. Esto implica que el retorno al régimen político democrático posterior encontró una sociedad capitalista profundamente transformada, en su estructura social, en sus prácticas sociales, sobre todo en los sectores medios y populares y en este último caso donde las relaciones sociales en la fábrica fueron reemplazadas por las relaciones familiares, grupales e individuales y donde ese contexto social permitía una incidencia mayor de las “cuasi-interacciones” (Thompson, 1998) promovidas por el consumo de medios masivos de comunicación.

LA DEMOCRACIA CAPITALISTA ARGENTINA, LAS DEMOCRACIAS CAPITALISTAS LATINOAMERICANAS Y LA PANDEMIA. A MODO DE CONCLUSIÓN

Intentamos hasta aquí mostrar de qué manera la última dictadura

cívico-militar argentina transformó el funcionamiento de la conflictiva sociedad capitalista nacional, modificando las relaciones de fuerza sociales hasta entonces existentes, de modo tal que se “permitiera” el retorno a un régimen democrático de derecho. También que el componente simbólico-cultural-comunicacional no fue menor en las políticas de transformación de toda la sociedad llevadas adelante por la dictadura, aunque dicho componente debía desarrollarse en consonancia con el proceso de desestructuración de las clases trabajadoras y de configuración de una cantidad importante de sectores sociales (medios y lumpen) con posibilidades de “disponibilidad” ideológica, de modo tal que los discursos mediáticos pudieran tener incidencia, se trate esta en términos de reforzar las normas y valores de sentido común “medio” vigentes (el trabajo, la honestidad, el amor, la no protesta, la apoliticidad) o se trate de generar un “efecto agenda” (instalación de temas que los medios masivos consideran importantes) o bien de crear “marcos interpretativos” (frames) que fijen límites –dominantes– a la valoración de los temas de “agenda”.

Así, si el Estado burocrático autoritario capitalista de la última dictadura argentina incorporó como parte del mencionado proceso de transformación de la “totalidad” de la sociedad capitalista un “aparato ideológico” mediático y cultural, este último mostró su línea de continuidad en la forma estado capitalista neoliberal y neoconservador que se fue luego desarrollando durante los diferentes gobiernos constitucionales posteriores. Desde la última dictadura en adelante esto implicó toda una novedad en la funcionalidad y el rol desempeñado por el subsistema de medios masivos de comunicación en relación con el funcionamiento general capitalista.

Ciertamente que ello supuso cambios durante los gobiernos elegidos por el voto popular, manifestados sobre todo a partir del levantamiento de la censura, aunque también supuso notables puntos de continuidad, manifestados del mismo modo que en otras instituciones más reconocidamente “propias” de las democracias capitalistas, como ser por ejemplo el Poder Judicial o incluso aquellas que habían terminado en algunos casos cuestionadas, como las mismas FFAA.

No es una casualidad esta línea de “continuidad” y de proximidad observada en aquellas instituciones ocupadas precisamente del “control social” y del manejo y procesamiento de la información. Una posición que para el caso del funcionamiento de los medios masivos nos describe el catalán Miquel Rodrigo Alsina, quien nos brinda ejemplos de la interacción necesaria del subsistema de medios masivos con el subsistema político (en el que se encuentra el Estado) y con el

subsistema económico; y para el caso del funcionamiento del Estado capitalista toma en cuenta Jessop (2009) al considerar los flujos de información (públicos e interinstitucionales) como elementos de la mayor importancia a la hora de buscar reequilibrar la acumulación de capital con la legitimidad y la consolidación del orden social capitalista.

Tampoco fue una casualidad en la América Latina de la década del noventa, la consolidación de la “forma estado” capitalista neoconservadora-neoliberal en consonancia con la consolidación de un modo de acumulación basado en la incorporación de la producción nacional al mercado mundial a partir de la presencia de grandes empresas monopólicas transnacionales junto con la configuración de subsistemas de medios masivos monopólicos e incluso oligopólicos. Se trató más bien del desarrollo “natural” de la “forma” de funcionamiento de las sociedades capitalistas latinoamericanas como “totalidad”, de modo tal que por primera vez durante la historia latinoamericana se expresó con todas las letras un proyecto verdaderamente hegemónico desarrollado por las clases dominantes capitalistas, tal como muestra Bonnet (2008) en el análisis que realiza de los gobiernos del justicialista Carlos Menem en Argentina.

Cuando durante la primera década del siglo XXI, una articulación diferente entre distintos sectores de las clases subalternas puso en cuestionamiento este “consenso neoliberal”, el resultado fue la emergencia de una “forma estado” capitalista diferenciada de la anterior, que viró –a grandes rasgos y con excepciones- entre posiciones neokeynesianas, neodesarrollistas, neopopulistas, y que se desarrolló en América Latina entre 2005 y 2015 (Gómez, 2019). Sin embargo, estas “formas estado” capitalistas mostraron desde entonces sus límites, su agotamiento a la hora de construir consenso sobre todo entre las clases dominantes y los sectores “medios” pero también en la medida que al mismo tiempo estos procesos fueron “institucionalizando” al interior del Estado capitalista de derecho a los movimientos sociales que cuestionaron al orden neoconservador y neoliberal; lo que fue derivando y consolidando, reposicionando, una “forma estado” capitalista de “nuevo tipo”, que busca de algún modo el retorno a los viejos límites establecidos por un modo de acumulación capitalista que no se ha modificado de manera sustantiva aún durante los procesos “neodesarrollistas” o “neopopulistas”.

En esta “forma estado” capitalista de “nuevo tipo”, que podríamos caracterizar al momento y en términos preliminares como de un “neokeynesianismo autoritario” podemos observar, la importante pre-

sencia de la función de “control social” y de reequilibrio sistémico que desempeñan los medios masivos de comunicación capitalistas fuertemente concentrados (a lo largo y a lo ancho de toda América Latina), que actúan coordinando los flujos informativos con los poderes judiciales y con los servicios de inteligencia pertenecientes a las Fuerzas Armadas y de Seguridad del Estado capitalista.

Esta situación, ejemplificada a partir del caso argentino pero planteada a nuestro entender en un sentido general para toda América Latina, es la que encontramos a la hora del estallido mundial de la Pandemia, y donde pueden verse dos posiciones políticas diferenciadas, ligadas a los gobiernos de derecha y a los gobiernos progresistas de la región. Donde en la primera de las posiciones tiende a privilegiarse el funcionamiento de la economía prestándole menor atención a lo sanitario, mientras que en el segundo de los casos se busca privilegiar lo sanitario, aunque intentando mantener la actividad económica.

En este marco, donde al momento de inexistencia concreta de una vacuna que pueda combatir la enfermedad no se ve otra posibilidad de evitar el contagio que a partir del aislamiento social; esto supone que si se privilegia la economía existen grandes chances de aumento de los contagios por contacto o proximidad y al revés si se privilegia lo sanitario y se practica el aislamiento ello resiente el normal funcionamiento de la economía capitalista.

Al asumir los gobiernos derechistas la primera opción, han producido en la mayoría de los casos una crisis sanitaria importante con un número de muertes alto sin que ello suponga evitar la caída de la economía, que muestra indicadores a la baja en todos los países, independientemente de la posición (pro-economía o pro-sanitaria) asumida. En el caso de los gobiernos progresistas, la segunda opción ha provocado resultados sanitarios más equilibrados, sin que por ello se haya evitado por completo el aumento de los contagios o las muertes; pero a diferencia del primer caso –aunque hay que tomar este enunciado sobre todo en términos ideológicos y discursivos– en este caso se plantea la posibilidad de implementación de políticas públicas como modo de contrarrestar la crisis económica producida por la Pandemia.

Puede verse aquí, en este mismo ejemplo relativo a la posición adoptada en la Pandemia, una diferencia política y una tensión entre quienes por derecha postularían el regreso a una “forma estado” capitalista neoliberal-neoconservadora donde el tipo de intervencionismo del Estado capitalista busque favorecer el desarrollo capitalista a través de un aumento de la inversión proveniente del mercado, y quienes

por el lado progresista postularían en cambio el retorno a una “forma estado” capitalista neodesarrollista o neopopulista donde el tipo de intervencionismo del Estado capitalista –en ausencia de un incremento de la inversión proveniente del mercado- sea un motor del mismo desarrollo capitalista.

Pero como indicamos anteriormente, la “forma estado” capitalista se encuentra en directa vinculación con la “forma” en que se desarrolla la lucha de clases en las sociedades capitalistas, y en ese caso, mientras que la “forma estado” neoconservadora y neoliberal se encontraba en consonancia con la desorganización de las clases subalternas, la emergencia de una “forma estado” capitalista neodesarrollista o neopopulista había sido producto de un aumento de la protesta pública llevada adelante por estas mismas clases subalternas que hacia fines de los años noventa mostraban una importante articulación.

Ahora bien, si cruzamos estas dos variables enunciadas (la posición frente a la Pandemia y la emergencia o configuración de una “forma estado” capitalista producto de la presencia pública de la lucha de clases) veremos que el asumir la segunda posición, que defiende el aislamiento social y el intervencionismo estatal, resulta problemática, porque la posibilidad de implementación de una política progresista supone necesariamente la presencia pública en las calles de las clases subalternas movilizadas. En cambio, la primera posición –la de la derecha- tiene dos posibilidades de una presencia pública, una a través de la intervención del subsistema de medios masivos de comunicación capitalistas (entre los que se encuentran por supuesto también las redes sociales, aunque el medio predominante siga siendo, por lo menos en América Latina, la televisión) encargado de mantener tanto el “control social” como así el “equilibrio” que permita la reproducción capitalista, y otra a través de la presencia en las calles de aquellos sectores medios consumidores de los medios masivos de comunicación que desacreditan la existencia de la Pandemia y desestiman tanto las políticas sanitarias como la recomendación al aislamiento social.

Esta prédica, radicalizada por parte de la derecha de la región (aunque podemos encontrar una retórica similar en Donald Trump o Boris Johnson) que ocupa diariamente una esfera pública política prácticamente reducida a lo que se construye desde el subsistema de medios masivos de comunicación capitalistas; busca bloquear cualquier intento o posibilidad de retorno a “formas estado” capitalistas de tipo neodesarrollistas o neopopulistas y reconducir dicha “forma estado” hacia la “forma” neoliberal previa. En el medio de esa tensión nos encontramos con una “forma estado” capitalista que no es ni una

ni otra, y que por ese motivo definimos como “neokeynesiana”, pero que, por las condiciones de “nuevo tipo” donde los medios masivos de comunicación y los sectores medios juegan este importante rol, también definimos como “autoritaria” (tomando por momentos y en algunos casos los ribetes de una suerte de “fascismo” institucionalizado en el Estado capitalista).

Sin embargo, lejos de suponer que esto implica el triunfo definitivo y a futuro del capitalismo, consideramos que es más bien una muestra más, de allí la radical irracionalidad de esas prácticas discursivas- de la profunda crisis de este tipo de sociedades basadas en la explotación y la explotación de los seres humanos y del planeta.

BIBLIOGRAFÍA

Adamovsky, E. (2009). *Historia de la clase media argentina. Apogeo y decadencia de una ilusión*, Buenos Aires, Crítica.

Adorno, T y Horkheimer, M. (1997), *Dialéctica del Iluminismo*, México, Sudamericana.

Althusser, L. (1999) *La filosofía como arma de la Revolución (Ideología y aparatos ideológicos de Estado)*, México, Siglo XXI.

Astarita, R. (2008) *Keynes, poskeynesianos y keynesianos neoclásicos. Apuntes de Economía Política*, Bernal, Editorial de la Universidad Nacional de Quilmes.

Aspiazu, D.; Basualdo, E. y Kavhisse, M. (2004). *El nuevo poder económico en la Argentina de los años 80*, Buenos Aires, Siglo XXI.

Bonnet, A. (2008). *La hegemonía menemista*, Buenos Aires, Prometeo.

Cambiasso, N. y Grieco y Bavio, A. (1999). *Días Felices. Los usos del orden de la Escuela de Chicago al funcionalismo*, Buenos Aires, Eudeba.

Deleuze, G. y Guattari, F. (2002). *Mil Mesetas. Capitalismo y esquizofrenia II*, Valencia, Pre-Textos.

Deutsch, K. (1980). *Los nervios del gobierno: modelos de comunicación y control políticos*, Barcelona, Paidós.

Domingues, J. M. (2012). *Desarrollo, Periferia y Semiperiferia en la Tercera Fase de la Modernidad Global*, Buenos Aires, CLACSO.

Dubiel, H. (1993). *¿Qué es el neoconservadurismo?*, Barcelona, Antropos.

Eco, U. (1997). *Apocalípticos e Integrados*, Barcelona, Lumen-Tusquets Editores.

Fiorito, A. y Murga, G. (2007). *John Maynard Keynes (Lectura e interpretaciones II)*, Buenos Aires, Ediciones Cooperativas.

Foucault, M. (1993). *Microfísica del poder*, Madrid, Ediciones La Piqueta.

Gociol, J. e Invernizzi, H. (2002). *Un golpe a los libros. Represión a la cultura durante la última dictadura militar*, Buenos Aires, Eudeba.

Gómez, R. (2018). "Políticas estatales keynesianas, poskeynesianas, neodesarrollistas. ¿Progresistas, "poscoloniales" o de un neoliberalismo "regulado"?" en Revista de Ciencias Sociales (Segunda época) N°34, primavera de 2018, páginas 103-116.

Gómez, R. (2019). "Neopopulismos y neodesarrollismos latinoamericanos en momentos de crisis y de balances", en Ouviña, Hernán y Thwaites Rey, Mabel (edit.) *Estados en disputa. Auge y fractura del ciclo de impugnación al neoliberalismo en América Latina*, Buenos Aires, CLACSO-El Colectivo.

Gramsci, A. (1999-2000). *Cuadernos de la Cárcel* (Seis Tomos), México, Editorial Era y Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

Habermas, Jürgen (1999) *Problemas de legitimación en el capitalismo tardío*, Madrid, Cátedra.

Heredia, M. (2004). "El Proceso como bisagra. Emergencia y consolidación del liberalismo tecnocrático: FIEL, FM y CEMA", en Pucciarelli, Alfredo (Coord.), *Empresarios, tecnócratas y militares. La trama corporativa de la última dictadura*, Buenos Aires, Siglo XXI.

Hirsch, J. (1992). "Fordismo y posfordismo. La crisis social actual y sus consecuencias" en AA.VV. *Los estudios sobre el Estado y la reestructuración capitalista*, Buenos Aires, Tierra del Fuego.

Holloway, J. (1994). *Marxismo, Estado y Capital*, Buenos Aires, Tierra del Fuego.

Iñigo Carrera, N. (2000). "La estrategia de la clase obrera. Enero de 1936" en Dossier: CICSO: Marxismo, Historia y Ciencias Sociales en la Argentina, Razón y Revolución n°6, otoño de 2000, reedición electrónica.

Jauretche, A. (1966). *El medio pelo en la sociedad argentina (Apuntes para una sociología nacional)*, Buenos Aires, A. Peña Lillo Editora.

Jessop, R. (2009). *El futuro del Estado capitalista*, Madrid, La Catarata.

Lazarsfeld, P. y Merton, R. (1985). "Comunicación de masas, gustos populares y acción social organizada", en de Moragas, Miguel (Ed.), *Sociología de la comunicación de masas*, Barcelona, Editorial Gustavo Gili.

Lechner, N. (1977). *La crisis del Estado en América Latina*, Caracas, Editorial El Cid.

Luhmann, N. (1990). *Sociedad y sistema. La ambición de la teoría*,

Barcelona, Paidós.

Mangone, Carlos (1996) “Dictadura, cultura y medios”, en Revista Causas y Azares N° 4, invierno de 1996.

Marcuse, H. (1993). *El hombre unidimensional. Ensayos sobre la ideología de la sociedad industrial avanzada*, Barcelona, Planeta Agostini.

Marx, C. (1975). *El dieciocho Brumario de Luis Bonaparte*, Buenos Aires, Polémica.

Negri, A. (2002) “John Maynard Keynes y la teoría capitalista del Estado en el 29” en *Crisis de la política. Escritos sobre Marx, Keynes, las crisis capitalistas y las nuevas subjetividades*, Buenos Aires, El Cielo por Asalto.

O'Donnell, G. (2009). *El Estado burocrático autoritario*, Buenos Aires, Prometeo Libros.

Offe, K. (1009). *Contradicciones en el Estado de bienestar*, Madrid, Alianza.

Piva, A. (2014). “La movilización antikirchnerista de clase media. Entre la crisis de representación y la recomposición neopopulista del consenso”, Revista Astrolabio. Nueva época, 12, 394-421.

Piva, A. (2020). “Clase y estratificación social en Argentina, 1947-2010”, en Papers. Revista de Sociología Volumen 105 Número 3, disponible en: <https://papers.uab.cat/article/view/v105-n3-piva>.

Risler, J. (2018). *La acción psicológica. Dictadura, inteligencia y gobierno de las emociones 1955-1981*, Buenos Aires, Tinta Limón.

Rodríguez, L. y Lvovich, D. (2011). “La Gendarmería Infantil durante la última dictadura”, Quinto Sol, 15 (1). En Memoria Académica. Disponible en: http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.9154/pr.9154.pdf

Thompson, J. B. (2002). *Ideología y cultura moderna. Teoría Crítica social en la era de la comunicación de masas*, México, Editorial de la Universidad Autónoma Metropolitana.

LA CRIMINALIZACIÓN COMO CONDICIÓN DE LA DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS EN EL CONTEXTO DE PANDEMIA EN LA ARGENTINA

Mariana Giaretto¹

INTRODUCCIÓN

A partir del eje general de los conversatorios compartidos del GT “Estados en disputa”, acerca de los principales cuestionamientos que emergen de la situación actual de pandemia hacia los Estados y los procesos populares, proponemos problematizar cierta naturalización y aceptación del carácter represivo del Estado en el contexto de pandemia, identificando políticas de criminalización y situaciones de desaparición forzada de personas bajo la cuarentena implementada durante los primeros seis meses en la Argentina.

El contexto de excepcionalidad ha posibilitado un despliegue material inédito de las fuerzas represivas en los territorios y una aceptación general de la militarización de los espacios públicos. Las desapariciones forzadas por parte de policías provinciales, como la de las provincias de Tucumán en el caso de Luis Espinoza y de Buenos Aires en el caso de Facundo Astudillo Castro, revelan la capacidad operativa que tienen estas fuerzas para llevarlas adelante, pero también el entramado judicial y político que administra la impunidad de crímenes de lesa humanidad en plena democracia.

Nos interesa problematizar esta aceptación social de la criminalización y analizar su impacto en las dificultades de organización de diversas formas de lucha y resistencia populares en los territorios. En este sentido, la respuesta represiva a una serie de tomas de tierras que se dieron en septiembre de 2020, son un ejemplo de estas dificultades,

1 Licenciada en Sociología (UNLP), Mgs. en “Teoría y Metodología de las Ciencias Sociales” (CLACSO/FLACSO). Docente de las áreas Sociología/Teoría y Sociología Política e investigadora de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad Nacional del Comahue, Argentina. marianatt3010@yahoo.com.ar

pero también de las posibilidades de disputar esa aceptación social de la criminalización.

En un primer apartado proponemos ciertas coordenadas de análisis del Estado como forma social en la que se particularizan las relaciones sociales de producción capitalistas, bajo condiciones históricas concretas que en este caso se vinculan a la situación excepcional de pandemia por COVID-19 y a su impacto en Argentina. En un segundo apartado, focalizamos en el carácter represivo del Estado y en el análisis de dos casos de desaparición forzada seguida de muerte que impugnan los discursos que intentan instalar nociones como las de “Estado materno” y de “policía del cuidado”. Por último, analizamos críticamente la naturalización de los procesos de criminalización de la protesta y la pobreza, cuestionando tanto la visión del gobierno nacional que profundiza la legitimación de las fuerzas represivas incrementando sus partidas presupuestarias, expandiendo la militarización de los territorios y promoviendo la aceptación de la población de una política represiva que recurre a mecanismos de terrorismo estatal utilizados por la última dictadura cívico-militar-eclesiástica.

CONTRADICCIONES ENTRE FORMA Y FUNCIONES DEL ESTADO CAPITALISTA EN UN CONTEXTO DE CRISIS

No hay dudas de que los grandes protagonistas de la administración de la pandemia son los Estados nacionales. Una vez más queda claramente constatada la centralidad de los Estados como unidades mínimas desde donde operar, acondicionar, restablecer, garantizar y reproducir la ley del valor a escala mundial. El carácter global de la pandemia y la imposibilidad de controlar su expansión reveló que las relaciones sociales capitalistas se encuentran esparcidas en cada rincón del mundo y, sobre todo, constató el rasgo anárquico del proceso de producción capitalista, en el que los flujos de circulación de capitales y mercancías -incluida la fuerza de trabajo- y de realización de la plusvalía no se someten a la simple voluntad de los individuos. Sin embargo, tampoco los Estados son capaces de controlar ese proceso anárquico, se trata de intervenir para intentar mitigar sus consecuencias inesperadas, incluso las de la propia pandemia. Se trata de aceptar al Estado como núcleo de dominación en la sociedad capitalista.

En la organización nacional del mercado mundial, con todas sus implicancias para el desarrollo del poder y para su ejercicio, existe sin embargo una aceptación, a saber, la aceptación de que la dominación existe en el centro del modo de producción capitalista y, con ella, la lucha antagónica y competitiva para mantenerla,

de la manera en que sea necesario. El estado nación burgués es de hecho el principal espacio de la reproducción de la relación de clases: aquí es donde se llevan adelante políticas represivas para su sostenimiento, y esto se vuelve evidente con la creciente coincidencia entre los alcances de la reproducción social y la económica. (Braunmühl, 2017, p.722)

Más allá de las diversas estrategias nacionales para gestionar la pandemia, durante estos meses se tornó evidente esa organización nacional del mercado mundial y esa aceptación de la dominación como núcleo del modo de producción capitalista, es decir de la dominación como condición de la explotación capitalista. Pero fundamentalmente, nos interesa detenernos en el reconocimiento del Estado capitalista como el principal espacio de reproducción de la relación de clases y, por lo tanto, de aplicación y despliegue de políticas represivas para su sostenimiento.

Cuando nos referimos al Estado como el lugar privilegiado en el que se reproducen las relaciones de clase, estamos asumiendo que el Estado es una forma social, es decir un modo diferenciado de existencia de esas relaciones, por lo que es necesario caracterizar cómo se desenvuelve concretamente la contradicción entre la forma y las funciones del Estado burgués, que a diferencia de otras formas de organización de la dominación se basa en la separación de los productores de los medios de subsistencia y de los propietarios de los medios de coerción. En definitiva, el Estado surge de la separación entre lo político y lo económico. En ese sentido, Gerstenberger (2017) señala que, si bien en el momento de la acumulación originaria es más claro y evidente que el aparato represivo estatal sirve directamente a la consolidación de la clase capitalista como clase dominante, luego esa dominación de clase adquiere la forma de poder público impersonal y se materializa en el aparato de coacción estatal como lo advirtiera Pashukanis (1976).

¿Por qué el estado cambia su forma en la época burguesa? ¿Por qué se convierte, en su forma, en el estado de la sociedad en su conjunto? Esta es la pregunta que debe responderse analizando las estructuras básicas de la sociedad burguesa. (...) La condición previa para que la reproducción de las relaciones de producción se presente ante la conciencia de esta manera fue históricamente (y es sistemáticamente) que el estado ya no aparezca abiertamente como la organización de los dominadores. Una vez que el estado deja de obligar a los vagabundos y a los internos de las prisiones a trabajar y se propone como garante de la regulación

(legal) de las relaciones de intercambio, se retira formalmente de la sociedad y, al mismo tiempo, se convierte en el estado de la sociedad en su conjunto. (Gerstenberger, 2017, p. 689-690)

Puntualmente nos interesa analizar las implicancias de la intervención del Estado en el marco de una situación de crisis que, al mismo tiempo, requiere garantizar las condiciones generales de la producción -específicamente salvaguardando la propiedad privada y las reglas de cambio en el marco de la libertad e igualdad individual-, y reforzar el carácter represivo de la dominación de clase sin que se revele como tal.

Por eso es que el aparato político de dominación está equipado con medios específicos (fuerza de ley y de organización, justicia, aparato policíaco y militar). La existencia del estado burgués significa, en otros términos, la confesión de que la conservación de la sociedad en sus estructuras concretas a través únicamente de la auto-reproducción del capital en el proceso de acumulación no estuvo ni está asegurada en ninguna época. (Hirsch, 2017 a, p.479)

Entonces está claro que, si la auto-reproducción del capital en el proceso de acumulación no está asegurada en ninguna época menos aún en una de pandemia, en el que debe reforzar esa función de garantizar las condiciones generales de la producción imponiendo medidas de carácter excepcional que revelan su núcleo de dominación de clase, autoritario y represivo.

También para Hirsch (2017 b), el Estado se particulariza como instancia de dominación política de la sociedad como un todo, en la medida que los mecanismos de expropiación del excedente en la sociedad capitalista implican la separación entre lo económico y lo político. De allí que, la libertad, igualdad y el dominio de la ley sólo representen un lado del dominio capitalista, que se basa en última instancia en el uso directo de la violencia física. Y señala que, justamente la necesidad de implementar medidas ejecutivas necesarias para garantizar las condiciones materiales generales de producción y reproducción, incluso reprimiendo a la clase trabajadora, expresa la contradicción que atraviesa al Estado capitalista.

Por ende, la violencia del estado burgués está siempre caracterizada simultáneamente por la generalidad abstracta y la concreción específica a una situación. Salvaguardar las reglas que expresan la operación ciega de relaciones económicas, va de la mano con el ejercicio directo de los medios de fuerza y poder

del Estado con el específico y particular objetivo de asegurar la reproducción y la autoexpansión del capital y la dominación de la burguesía. (Hirsch, 2017 b, pp.521-522)

En nuestro caso, esa concreción específica se vincula con la situación de crisis profundizada por la pandemia y para intentar salvaguardar las reglas que expresan la operación ciega de las relaciones económicas, el Estado se topa con las limitaciones derivadas de la relación entre su propia actividad y el desarrollo del capitalismo en crisis (Gerstenberger, 2017, p. 694).

EL CARÁCTER REPRESIVO DEL ESTADO: LO QUE LA PANDEMIA NO PUEDE OCULTAR

En el caso de Argentina, esas medidas de carácter excepcional se tomaron a través de decisiones del Poder Ejecutivo, expresadas en diversos Decretos de Necesidad y Urgencia, el primero de ellos planteó:

Que, con el objetivo de proteger la salud pública como una obligación inalienable del Estado nacional, se establece para todas las personas que habitan en el país o se encuentren en él, la medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, por un plazo determinado, durante el cual todas las personas deberán permanecer en sus residencias habituales o en el lugar en que se encuentren y abstenerse de concurrir a sus lugares de trabajo.

(...)

ARTÍCULO 3º.- El MINISTERIO DE SEGURIDAD dispondrá controles permanentes en rutas, vías y espacios públicos, accesos y demás lugares estratégicos que determine, en coordinación y en forma concurrente con sus pares de las jurisdicciones provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para garantizar el cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, de las normas vigentes dispuestas en el marco de la emergencia sanitaria y de sus normas complementarias. (Presidencia de la República, 2020)

El carácter autoritario y represivo de estas medidas fueron justificadas y legitimadas apelando a la conexión entre policía y salubridad. En el mismo DNU, el poder ejecutivo reconocía la amplitud del campo de acción de la policía de salubridad “siendo su atinencia a todo lo que pueda llegar a afectar la vida y la salud de las personas, en especial la lucha contra las enfermedades de todo tipo, a cuyo efecto se imponen mayormente deberes preventivos, para impedir la aparición y difusión

de las enfermedades -por ejemplo... aislamiento o cuarentena-" (Cita en DNU 297/2020). Además de esa amplitud, el ejecutivo nacional enfatizó en el carácter "imprescindible, razonable y proporcionado" de dichas medidas con relación a la amenaza y el riesgo sanitario que se enfrentaba.

Así fue como se presentó la expansión del poder de policía del Estado vinculado a la situación de excepcionalidad de la pandemia. Ante la comparación con otras estrategias estatales que implicaron mayor cantidad de contagios y muertos en menor cantidad de tiempo, incluyendo el colapso del sistema sanitario -entre ellas las tomadas por Gran Bretaña, EE.UU. y Brasil-, la estrategia estatal argentina se presentó como un modo de intervención que priorizaba la salud incluso a costa de la economía. No nos interesa aquí comparar estas estrategias, ni ahondar en los debates salud vs. economía. En lo que sí nos interesa detenernos, es en las implicancias políticas que adquiere esa supuesta opción por la salud.

Lo cierto es que esa noción de policía de salubridad operó como fuente de legitimación para ampliar los procesos de criminalización de la población. Para amenguar el rechazo y las críticas al despliegue del control estatal, se inscribieron mediáticamente y operaron los conceptos de "Estado de cuidado" o "Estado materno" y de "policía del cuidado". De esta manera, el carácter higienista de la noción de policía de salubridad es *aggiornado* y presentado como una función de cuidado universal. Según Rita Segato (2020), quien caracterizó al presidente Alberto Fernández como un "colega educador", en la Argentina se planteó un nuevo modo de gestionar el problema de la pandemia, que ponderó el cuidado sobre la autoridad, señalando que "la indicación de quedarnos en casa implica transitar la pandemia en un espacio del cuidado donde se despliega la politicidad femenina". Además, según Mignolo (2020) este Estado materno cuida a la nación, "pone a la salud, educación y la alimentación primero, y en segundo plano al beneficio económico de bancos, corporaciones, intereses mediáticos y usuras tecnológicas", y fundamentalmente, redefine la libertad que no será una libertad individual, sino concertada y comunal.

Para "cuidar maternalmente" a la población, el Estado despliega territorialmente a la "policía del cuidado". Según Seghezzo y Dallorso (2020), las tareas de cuidado que llevan adelante cotidianamente las policías desplazan a las tareas de persecución y represión penal, incluso apuestan a que esta situación excepcional sea una oportunidad para imaginar una policía por fuera del paradigma securitario punitivo, señalando que no siempre las políticas que involucran a las

fuerzas de seguridad son fascistas o suponen violencia institucional y apostando al pasaje de un modelo policial punitivista a un modelo policial centrado en el cuidado, que incluso promueva el “cuidado de quienes nos cuidan”.

Sin lugar a dudas, la difusión de estas maneras de presentar el carácter represivo del Estado expresa la necesidad de justificar el protagonismo de las fuerzas represivas en el modo de intervención estatal en la situación de crisis, por su rasgo profundamente anti-popular. Por eso es necesario crear las condiciones de aceptación de esa política estatal.

El Estado, cuando quiere iniciar una acción poco popular, crea preventivamente, la opinión pública adecuada, esto es, organiza y centraliza ciertos elementos de la sociedad civil. (...) La opinión pública el contenido político de la voluntad política pública que podría ser discordante: por eso existe la lucha por el monopolio de los órganos de la opinión pública, periódicos, partidos, parlamento, de modo que una sola fuerza modele la opinión y con ello la voluntad política nacional, convirtiendo a los disidentes en un polvillo individual e inorgánico. (Gramsci, 1999, p. 196)

Si bien fueron diversas las expresiones anti-cuarentena de corte republicanista, liberal, y/o simplemente de derecha que no sufrieron ningún tipo de reprimenda estatal, aquí nos interesa focalizar en aquellas situaciones en las que ciertos disidentes concretos de las medidas de control de la pandemia sufrieron la represión estatal. Antes, veamos en números cómo esa política estatal basada en la “policía de salubridad” fue más policía que salubre.

Según fuentes oficiales, a seis meses de iniciadas las medidas por la pandemia, en la primera semana de septiembre de 2020, el presupuesto vigente del Ministerio de Salud y de los organismos que dependen directamente de este ministerio era de 155.191,43 millones de pesos. Mientras que el presupuesto vigente para el Ministerio de Seguridad era de 227.402,05 millones de pesos y para el Ministerio de Defensa Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de 172.218,83 millones de pesos, lo que arroja un total de 399.620,88 (Ministerio de Seguridad de la Nación, 2020), a los que hay que sumarle las partidas especiales como las del Programa de Fortalecimiento de Seguridad para el Conurbano de la Provincia de Buenos Aires con 38.000 millones pesos, incluyendo la construcción de nuevas cárceles. De este modo, se torna evidente la diferencia presupuestaria y el énfasis securitario punitivo de la intervención estatal.

Si bien hay cierta continuidad entre las administraciones kirchneristas anteriores y la de Fernández en relación a la adscripción a un paradigma de la “Seguridad Democrática”, especialmente en lo que refiere al control y dirección civil de las fuerzas de seguridad personalizado en la Ministra de Seguridad Sabina Frederic, también es cierto que existen líneas de continuidad entre el discurso de mano dura y de la Doctrina Chocobar que caracterizó a la política represiva durante el macrismo con el protagonismo del Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires Sergio Berni, ex-militar que sostiene discurso y prácticas vinculadas a la Tolerancia Cero y al modelo securitario punitivo. Más allá de esta relativa tensión en la política represiva entre el gobierno nacional y el bonaerense, son los hechos concretos los que muestran la profundización de los casos de abuso policial, detenciones arbitrarias, desapariciones y asesinatos policiales. Revelando cómo la política represiva de la posdictadura reproduce prácticas propias del terrorismo de Estado.

CRIMINALIZACIÓN Y REPRESIÓN ESTATAL COMO PROBLEMA PARA LAS LUCHAS POPULARES

En otros trabajos analizamos cómo las administraciones kirchneristas desarrollaron una política que se auto-declaraba no represiva de la protesta y la pobreza social, pero desplegaba procesos de criminalización de los conflictos sociales (Giarretto, 2018a, 2018b). De este modo, el “progresismo punitivo” (Motto, Liguori y Fiuza, 2015) promovía la estigmatización y la judicialización de quienes luchas y/o la militarización de los territorios intentando domesticar las disidencias (Korol y Longo, 2009). Los discursos, las prácticas y los datos que arrojan estos seis meses de gobierno de Fernández parecen mostrar un redoblamiento de estos procesos.

Según la Coordinadora contra la represión policial e institucional (CORREPI, 2020) en los primeros seis meses de la cuarentena fueron oficializados 102 hechos represivos en los que murieron personas por fusilamientos por gatillo fácil o muertes en custodia. Asimismo, el informe señala la administración de impunidad por parte del Ministerio Público Fiscal y del sistema judicial penal que lejos de esclarecer y encerrar a los policías involucrados, en la mayoría de los casos colaboran en los procesos de encubrimiento desviando las hipótesis que los involucran y dilatando los tiempos judiciales.

Entre estos 102 casos hay dos desapariciones forzadas seguidas de muerte en las que vamos a detenernos. En el primero, el 15 de mayo, Luis Armando Espinoza, trabajador rural de 31 años, y su her-

mano, fueron atacados por uniformados pertenecientes a la Policía de la provincia de Tucumán que se encontraban dispersando una carrera de caballos no autorizada en el marco de la cuarentena. Los hermanos fueron golpeados y a Luis le dispararon y lo cargaron en una camioneta. Durante una semana estuvo desaparecido, sus familiares además de realizar la denuncia presionaron con un corte de la ruta, por lo que el juez debió intervenir encontrando restos de sangre en la camioneta señalada por su hermano. Finalmente, su cuerpo envuelto en bolsas y encintado apareció arrojado en un precipicio a kilómetros del lugar en el que sucedió el ataque. El juez de la causa, Mario Velázquez, ordenó la detención de 11 personas: 9 policías, un vigía comunal y un civil. Si bien reconoció que la desaparición forzada de persona es uno de los crímenes más graves del Código Penal y que establece conexiones con el *modus operandi* durante la última dictadura, el juez consideró que los acusados portan uniformes, pero no pueden ser considerados policías, negando el carácter institucional y fundamentalmente, estatal de la represión ejercida (Meyer, 2020a).

En el segundo caso, Facundo Astudillo Castro, un joven de 22 años de Pedro Luro provincia de Buenos Aires, el 30 de abril salió a la Ruta 3 hacia Bahía Blanca, fue interceptado y detenido al menos dos veces por la policía bonaerense y estuvo desaparecido hasta que el 15 de agosto se encontraron sus restos óseos en un cangrejal en la localidad de Villarino (Meyer, 2020b). Desde un primer momento, la policía bonaerense, el Ministro de Seguridad Berni, el fiscal Ulpiano Martínez y la jueza Marrón negaron su desaparición y contribuyeron de diversas formas a encubrir la responsabilidad policial en el caso. Aún no hay detenidos y los esfuerzos judiciales se inclinan a la hipótesis del accidente, mientras hostigan a la querella y a la madre de Facundo sin quienes la causa por desaparición de persona no hubiese prosperado. A modo de mensaje mafioso en el momento en el que se encontraron los restos óseos, la madre se topó “casualmente” con una de las zapatillas de Facundo, intacta como si recién se la hubiesen sacado.

Estos casos no son aislados, no son el simple resultado de excesos o de abusos policiales, y tampoco se circunscribe al contexto de excepcionalidad por la pandemia, porque lo cierto es que desde el retorno de la democracia la desaparición forzada de persona se ha mantenido como práctica recurrente de los aparatos policiales; basta con mencionar los casos de Miguel Bru, Luciano Arruga, Daniel Solano, Sergio Ávalos, entre otros. Para que esta práctica represiva sea posible es necesario garantizar un entramado de encubrimiento institucional

que implica a responsables políticos de los poderes ejecutivos nacional, provinciales y municipales, así como funcionarios del Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial.

Después de los 30.000 desaparecidos-as, en la Argentina es posible llevar adelante el mecanismo de aniquilamiento de la disidencia bajo la modalidad de la desaparición forzada de persona. Incluso, en los dos casos mencionados los puntos en común son: la ruptura de la cuarentena, la represión policial y el encubrimiento estatal. Que los cuerpos aparezcan bajo la presión política y social puede significar que se apela a la desaparición para ganar tiempo en la construcción del encubrimiento y también que la omnipotencia de la impunidad puede arrojar restos humanos cuándo y dónde quiera, porque aún en democracia la represión estatal es aceptada.

En esta dirección nos interesa remarcar el carácter sistemático de estas prácticas de aniquilamiento y la necesidad quebrar una concepción que tiende a aislar e individualizar los hechos.

La comprensión de los hechos de aniquilamiento sistemático ocurridos en la República Argentina como una práctica social genocida puede permitir, por el contrario, la posibilidad de quebrar una concepción de los hechos individualizante y alienadora, que pretende reducir la anulación y clausura de una relación social a través del exterminio y el terror a la confrontación entre “bandos” alienados de la sociedad, extraños e irreconocibles, que habrían atravesado a la sociedad argentina casi sin modificarla, produciendo un número determinado de delitos puntuales (privaciones de la libertad, tormentos, homicidios, violaciones, apropiaciones de menores) que serían apenas un problema entre los victimarios y sus víctimas directas (sobrevivientes, familiares o amigos).

(...) La elaboración colectiva de la experiencia genocida requiere analizar, comprender, cuestionar y aprender de una profunda derrota. Pero, simultáneamente, requiere comprenderse como una generación de sobrevivientes, que necesita salir de la confusión y poder asumir dicho pasado para aprender del mismo y, sobre todo, para poder legar algo de ese pasado a las nuevas generaciones. (Feierstein, 2008, p. 163)

Evidentemente esa elaboración colectiva de la experiencia genocida se encuentra pendiente, incluso podríamos discutir si de alguna manera no ha sido obturada. En este sentido, al plantear estos casos de desaparición de personas, no sólo de manera escindida entre sí, sino también con relación a esas prácticas sociales genocidas de

la dictadura, no sólo se sedimentan los procesos de criminalización como forma socialmente aceptada de abordar los conflictos sociales, sino que además se cristaliza la lógica individualizante de victimización y la negación de las consecuencias sociales y políticas que tienen estas prácticas².

A MODO DE COMENTARIOS FINALES

En este texto intentamos reestablecer en términos gramscianos ciertos nexos entre lo coyuntural y lo orgánico, problematizando el modo de intervención del Estado en Argentina en una situación de crisis propia del contexto mundial de pandemia. En esa dirección, el punto de partida es comprender cómo el Estado lejos de ser ese “Estado de todos”, o bien, mero instrumento de la clase dominante es la forma política que adquieren las relaciones sociales capitalistas y que una de sus funciones, entre otras, es garantizar las condiciones generales para la producción y reproducción de esas relaciones, de allí su carácter represivo inherente, incluso bajo formas de gobierno democráticas. Lo cierto, es que en la Argentina reciente asistimos a procesos de criminalización como modalidad de la política represiva, y particularmente, consideramos que esa modalidad se profundizó en el contexto de crisis por la pandemia.

Analizamos cómo es presentada esa política represiva bajo discursos que, no sólo apuntan a negar la violencia estatal contenida en la función de “policía de salubridad”, sino que además promueven la aceptación social como forma de cuidado universal, bajo las nociones de “Estado maternal” y “policía del cuidado”. También analizamos cómo se reforzó la propia materialidad de los recursos destinados al área de Seguridad, tres veces mayor que el presupuesto destinado al área de Salud, a la que supuestamente se priorizaba.

2 En este sentido, Feierstein (2018) problematiza las implicancias jurídicas y políticas que distinguen las prácticas genocidas de los crímenes de lesa humanidad, en la medida que estos últimos “categorizan al aniquilamiento como violaciones a los derechos de los sujetos, construyendo al concepto de víctima en tanto ciudadano, pero excluyendo del mismo a los individuos que no sufrieron en modo directo dichas prácticas esto es, al conjunto del propio grupo nacional-. De este modo, la transformación de los procesos genocidas en crímenes de lesa humanidad implica una desjerarquización y olvido del elemento identitario y del objetivo de opresión en el proceso de destrucción, ya que solo se observa una mirada liberal, en términos de derechos individuales de ciudadanos, que vislumbra la acción específica cometida secuestro, desaparición, tortura, asesinato, violación-, pero no logra restablecer la finalidad de la práctica social, las lógicas de implementación del terror ni su sentido estratégico” (p.258)

El despliegue de las fuerzas represivas en los territorios, lejos de expresar las virtudes de una “policía del cuidado” -si estas fueran posibles-, reforzó las prácticas de violencia estatal que se venían desplegando en la posdictadura. Nos detuvimos a presentar dos casos de desaparición forzada de personas seguidas de muerte, Luis Espinoza y Facundo Astudillo Castro, para comprender cómo es posible esta práctica de aniquilamiento de la disidencia en un país que dice haber dejado atrás el terrorismo de Estado de la última dictadura. Analizamos cómo no son hechos aislados, ni excesos de policías individuales violentos, sino que son expresiones de procesos de criminalización de la protesta y pobreza social en los que se ponen en marcha discursos y mecanismos en los que el personal del estado, incluyendo policías, fiscales y jueces, ejercen violencia estatal y administran su impunidad.

Sin lugar dudas, este recrudescimiento de la política represiva presenta un desafío para las luchas populares que estén dispuestas a desafiar a la policía, esa “máquina de estrangular revueltas” (Serge, 2019) y, sobre todo, a cuestionar las condiciones generales de las relaciones sociales capitalistas, entre ellas la mismísima existencia del Estado.

BIBLIOGRAFÍA

Braunmühl, C. von. (2017). El análisis del estado nacional burgués en el contexto del mercado mundial. Un intento por desarrollar una aproximación metodológica y teórica. En Bonnet, A. y Piva, A. (eds.) *Estado y capital. El debate alemán de la derivación del Estado* (pp. 697-724). Buenos Aires: Herramienta. Recuperado en: <<http://www.herramienta.com.ar/ediciones-herramienta/estado-y-capital-el-debate-aleman-sobre-la-derivacion-del-estado>>.

CORREPI (2020). Archivo de casos. Recuperado en: <http://www.correpi.org/2020/mas-gatillo-facil-y-muertes-bajo-custodia-en-cuarentena-ya-son-102-los-casos-registrados-en-el-archivo-de-casos/>

Feierstein, D. (2008). El carácter genocida del Proceso de Reorganización Nacional. En *Revista Digital de la Escuela de Historia – UNR / año 1 – n° 1* / Rosario.

Feierstein, D. (2016). El concepto de genocidio y la “destrucción parcial de los grupos nacionales” Algunas reflexiones sobre las consecuencias del derecho penal en la política internacional y en los procesos de memoria. En *Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales* Universidad Nacional Autónoma de México, Nueva Época, Año LXI, núm. 228 septiembre-diciembre de 2016 pp. 247-266.

Gerstenberger, H. (2017). Antagonismo de clase, competencia y funciones del estado. En Bonnet, A. y Piva, A. (comp.) *Estado y capital. El debate alemán sobre la derivación del Estado* (pp. 677-696). Buenos Aires: Ediciones Herramienta. Recuperado en: <<http://www.herramienta.com.ar/ediciones-herramienta/estado-y-capital-el-debate-aleman-sobre-la-derivacion-del-estado>>.

Giaretto, M. (comp) (2018a). Luchas territoriales y Estado. Criminalización y resistencias en el sur. Ed Publifadecs, Fiske Menuco.

Giaretto, M. (2018b). Aportes para un análisis crítico de los procesos de criminalización de las luchas territoriales en el sur de Argentina. *Revista Entropía*, v. 2 n. 4, Movimentos Sociais na América Latina: A atualidade da luta e formas de comunicação. Consultar en: <http://www.entropia.slg.br/index.php/entropia/article/view/93>;

Gramsci, A. (1999). Cuadernos de la cárcel. México: Ed. Era.

Hirsch, J. (2017a). Elementos para una teoría materialista del estado. En Bonnet, A. y Piva, A. (comp.) *Estado y capital. El debate alemán sobre la derivación del Estado* (pp. 441-508). Buenos Aires: Ediciones Herramienta. Recuperado en: <<http://www.herramienta.com.ar/ediciones-herramienta/estado-y-capital-el-debate-aleman-sobre-la-derivacion-del-estado>>

Hirsch J. (2017b). El aparato de estado y la reproducción social: elementos de una teoría del estado burgués. En Bonnet, A. y Piva, A. (comp.) *Estado y capital. El debate alemán sobre la derivación del Estado* (pp. 509-588). Buenos Aires: Ediciones Herramienta. Recuperado en: <<http://www.herramienta.com.ar/ediciones-herramienta/estado-y-capital-el-debate-aleman-sobre-la-derivacion-del-estado>>.

Korol, C. y Longo, R. (2009). Criminalización de los movimientos sociales de la Argentina. Informe general. En Korol, C. (Coord.) *Criminalización de la pobreza y la protesta social*. Bs. As.: Ed. El Colectivo y América Libre.

Meyer, A. (2020a). La desaparición forzada de Luis Espinoza en Tucumán: “Tiene todos los condimentos del terrorismo de Estado”. *Diario Página/12*. Recuperado en: https://www.pagina12.com.ar/268071-la-desaparicion-forzada-de-luis-espinoza-en-tucuman-tiene-to?gclid=CjwKCAjwkdL6BRAREiwA-kiczHNhfl-3Du25a5AnVc0T2xkneAfA7Bd9WQnyIdY_ooGYaL-BWD6FU9RoC_ckQAvD_BwE

Meyer, A. (2020b). Cómo sigue la investigación por la muerte de Facundo Castro. *Diario Página/12*. Recuperado en: <https://www.pagina12.com.ar/289336-como-sigue-la-investigacion-por-la-muerte-de-facundo-castro>

Mignolo, W. (29 de abril de 2020). Coronavirus, la libertad y el Estado. *Diario Página /12*. Recuperado en: <https://www.pagina12.com.ar/262889-coronavirus-la-libertad-y-el-estado>.

Ministerio de Seguridad de la Nación (2020). Datos oficiales del presupuesto. Recuperado en: <https://www.presupuestoabierto.gob.ar/sici/quien-gasta>.

Motto, C.; Liguori, M. E.; Fiuza, P. (2015). Políticas públicas en seguridad y la cuestión policial: un abordaje arqueológico. En *Cuadernos de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos*. (pp. 173-183.)

Pashukanis, E. B. (1976). La teoría general del derecho y el marxismo. México: Grijalbo.

Serge, V., (2019). *Lo que todo revolucionario debe saber sobre la revolución*. México: Fondo de Cultura Económica.

Segato, R. (31 de marzo de 2020). Entrevista a la antropóloga Rita Segato en Brotes Verdes. (C5N, Entrevistador) Obtenido de <https://www.youtube.com/watch?v=L5JjUAW82is>

Seghezzo, G. y Dallorso, N. (28 de marzo de 2020). Elogio a la policía del cuidado. *Diario Página/12*. Recuperado en: <https://www.pagina12.com.ar/255797-elogio-a-la-policia-del-cuidado>

Presidencia de la Nación, DNUN° 297/2020. Recuperado en: <https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227042/20200320>

SEGUNDA PARTE

TENDENCIAS

REGIONALES

Y ANÁLISIS

TEÓRICOS

TIEMPO DE PANDEMIA EN AMÉRICA LATINA: CRISIS SOCIAL Y AUTORITARISMO

Sandra Carolina Bautista¹

Milton Piñeros Fuentes²

Franco Rossi³

INTRODUCCIÓN

El rápido crecimiento en el número de contagios por la enfermedad COVID-19 en el mundo ha hecho del 2020 un año particular que la mayoría hemos vivido desde nuestras casas -si es que éstas existen- con una combinación de miedo, zozobra por la incertidumbre ante la inminente crisis económica, y desazón por la ruptura de los lazos sociales más básicos, ya que hasta los abrazos han sido prohibidos. Para el capital ha sido un momento de ajuste a través del aprovechamiento pleno de las tecnologías de la información para enfrentar el cierre de varios mercados e incrementar los procesos de explotación mediante el teletrabajo. Asistimos con cierta perplejidad a un trance global que ha puesto sobre la mesa el hondo calado de la crisis civilizatoria vigente. Nuevamente se cuestiona la viabilidad de un sistema que ha sometido a calidad de mercancía a todas las formas de vida planetarias. La pandemia de Coronavirus ha sido la prueba fehaciente de tal contradicción.

La pandemia asociada a la COVID-19 llegó a la región el 26 de febrero de 2020, fecha en la que se reportó el primer caso en Sao Paulo, Brasil. Su impacto en la geografía latinoamericana, así como la gestión estatal de la misma, sólo pueden entenderse en el marco de complejidad que conlleva el actual régimen de acumulación de capital en Nuestra América. Así, la crisis actual se vincula directamente con

1 Economista y magíster en Estudios Políticos de la Universidad Nacional de Colombia. Doctorante en Estudios Latinoamericanos, Universidad Nacional Autónoma de México carolinabautistab@gmail.com

2 Politólogo de la Universidad Nacional de Colombia mpinerosf@gmail.com

3 Docente de Escuela Pública y estudiante de Sociología, Universidad de Buenos Aires francotemporal516@gmail.com

la que viene desplegándose hace más de un lustro y en la que convergen múltiples factores. Entre ellos, el lento crecimiento económico de la última década, por la dependencia estructural del ciclo de las *commodities*; el aumento del subempleo y empleo informal; la profundización de la crisis de derechos sociales sometidos a la lógica del mercado, particularmente los vinculados al mundo del trabajo como salud y salarios dignos. En este proceso, cabe destacar el fin del Ciclo de Impugnación al Neoliberalismo (CINAL), característico de las primeras dos décadas del siglo XXI, y el escalamiento de la corrupción que la ratifica como un rasgo constitutivo del capitalismo y del Estado en la fase neoliberal. Este conjunto de elementos posibilitó un nuevo momento de lucha social que se sintió con fuerza durante el 2019 en países como Haití, Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú, Chile y Argentina, acrisolado por la configuración de movimientos sociales regionales como el feminismo y la causa socioambiental.

El ejercicio que presentamos a continuación propone analizar y discutir algunas respuestas estatales a la crisis actual, en el caso de 14 países, durante los primeros seis meses de la pandemia. Con el propósito de indagar en qué medida las condiciones sociales y económicas tuvieron un correlato en los efectos de la pandemia, y si aparece una tendencia hacia el reforzamiento del autoritarismo como rasgo sustancial del neoliberalismo a nivel regional. Con el objetivo de construir reflexiones de tendencia general organizamos la muestra de países en cuatro grupos, de acuerdo con la relación existente entre la fecha en la que fue reconocido el primer caso de COVID-19 por parte de los gobiernos y aquella en la que emitieron las medidas económicas y sanitarias centrales. Medidas que en la mayoría de los casos estuvieron vinculadas a sendas excepcionalidades políticas como los estados de emergencia, de sitio, de calamidad pública y de excepción.

Si bien los datos más recientes muestran que los primeros casos de COVID-19 son anteriores a las fechas de reconocimiento, asumimos las fechas oficiales como hecho político que demarcan el inicio de un estado de alarma general. En el mismo sentido, las fechas de declaratoria de medidas fuertes y/o restrictivas, a fin de reducir la velocidad de contagio, adquieren en este trabajo un carácter de referencia política ya que con ellas se oficializó un momento de excepcionalidad inaugurado bajo un paquete de medidas estándar. Las mismas fueron aplicadas con cierto nivel de uniformidad en todos los países, consistente en aislamiento social, cancelación de eventos masivos públicos y privados, cierre de parques y plazas públicas, de establecimientos dedicados a bienes y servicios no esenciales, clausura de las fronte-

ras, así como la restricción de los derechos constitucionales de libre locomoción.

Como resultado de esta clasificación, presentada en la tabla 1, tenemos un primer grupo de países que declararon medidas de excepcionalidad con antelación al reconocimiento del primer caso de COVID-19 (Honduras, Guatemala y El Salvador); el segundo grupo lo hizo posteriormente, pero de manera temprana en un rango de dos a tres días después de ser confirmado el primer contagio (Bolivia, Paraguay y Haití); el tercer grupo es el más numeroso e incluye a los países que hicieron una declaratoria de medidas que hemos denominado tardía, pues se produjo entre 11 y 33 días después de ser detectado o detectada la paciente cero (Perú, Colombia, Ecuador, Chile, Argentina y México); el cuarto grupo incluye a Brasil y Uruguay, únicos países en los que la declaración de medidas fuertes coincidió con el reconocimiento del primer caso de COVID-19, y sin embargo, han tenido resultados opuestos.

Tabla 1 Clasificación de países para el análisis

País	Fecha*	Relación con el reconocimiento del primer caso de COVID-19
------	--------	--

Grupo 1: declaratoria previa

Honduras	10/02/2020	1 mes antes
Guatemala	05/03/2020	1 semana antes
El Salvador	19/03/2020	2 semana antes

Grupo 2: declaración posterior temprana

Bolivia	12/03/2020	2 días después
Paraguay	11/03/2020	3 días después
Haití	19/03/2020	3 días después

Grupo 3: declaratoria posterior tardía

Perú	15/03/2020	11 días después
Colombia	17/03/2020	11 días después
Ecuador	16/03/2020	13 días después
Chile	18/03/2020	15 días después
Argentina	20/03/2020	16 días después
México	31/03/2020	33 días después

Grupo 4: dos excepciones

Brasil	04/02/2020	
Uruguay	13/03/2020	

*Corresponde a la fecha en la que cada país decretó por primera vez medidas fuertes y/o restrictivas para frenar la expansión de la COVID-19. **Fuente:** elaboración propia

A partir de ese escenario común, indagamos qué posibilidades de contener efectivamente la pandemia hubo en la región, tras los avances neoliberales en materia de salud pública, protección social y empleo, de las últimas décadas. Entendiendo que los resultados de las medidas estatales variaron según los niveles de subsistencia y cuidados garantizados. A su vez, observamos con suma atención, el vínculo existente entre la reconfiguración estatal erigida en la segunda mitad del siglo pasado, desde la lógica de enemigo interno a la manera de dictaduras o procesos de guerra interna, con el carácter autoritario de ciertas respuestas estatales ante la proliferación del Coronavirus.

GRUPO 1: DECLARATORIA PREVIA Y AUTORITARISMO EXACERBADO EN CENTROAMÉRICA

El primer grupo está compuesto por El Salvador, Honduras y Guatemala, países que no sólo comparten vecindad y ciertas características socioeconómicas y políticas, sino que frente a la pandemia realizaron una declaratoria de excepcionalidad política temprana anticipándose a la aparición de casos de contagio en sus territorios y desplegando un autoritarismo de gran calado en el contexto regional. Así, el despliegue militar y policial, en países con historias recientes de conflicto armado interno como El Salvador y Guatemala en los ochenta, o de golpe de Estado en Honduras en 2006, además de una característica concentración de poder en la figura presidencial y el poder ejecutivo, resultan claves para el análisis de este primer grupo.

Como se observa en la tabla 2, los tres países se caracterizan por un complejo panorama en términos de pobreza y pobreza extrema ya que superan con amplitud las medias regionales que en 2019 se encontraban en 30,8% y 11,5% respectivamente. Particularmente grave es la situación de Honduras, sólo superada en América Latina y el Caribe por Haití. En materia de desigualdad la situación más difícil se vive en Guatemala, país cuya población indígena llega al 43%, pues casi el 60% de los ingresos se concentran en el 20% más rico de la población, equiparable a lo que acontece en Brasil y Colombia, con quienes conforma el podio de las sociedades más inequitativas de la región.

En tales condiciones, la llegada del Coronavirus significó un sensible condicionamiento que agravó la crisis económica, social y política previamente existente, signada por bajos crecimientos del PIB no superiores al 3%, los más bajos a nivel regional en el último quinquenio, cuyo promedio estuvo en el 4%. Según la CEPAL, El Salvador es el país que más se verá afectado por la crisis económica (Hernández,

Tabla 2 Indicadores de pobreza países del grupo 1

	Pobreza (2019)	Pobreza (2020*)	Pobreza extrema (2019)	Pobreza extrema (2020*)	Gini (2018)	Ingreso concentrado por el 20% más rico (2018)	Acceso a agua potable (2019)	Camas de hospital por 1.000 personas
Honduras	54.8%	59%	18.7%	22.2%	0.405	53.2%	70%	0.7
Guatemala	48.6%	51.6%	19.8%	22.7%	0.535**	57.9%	70%**	0.6
El Salvador	33.7%	40.2%	7.4%	11.9%	0.405	46.6%	91%	1.3

*Fuente: Cepal y OPS. *Proyectado. **2014.*

2020), pues se prevé una caída del 8% en el PIB en un contexto de dolarización y alta dependencia de las remesas (tabla 3), 95.4% de las cuales provienen de los Estados Unidos, el país más afectado por el Coronavirus (Cárdenas Salgado, Espinosa, José, & Serrano, 2019). De igual manera, los elevados niveles de pobreza en Guatemala y Honduras han sido compensados con alta dependencia de las remesas, aunque los pronósticos sobre la caída del PIB son un tanto menos críticos al ubicarse en -4.1% y -6.1%, respectivamente. En todo caso, 2020 será el peor año en la historia económica de los países centroamericanos.

Tabla 3 Importancia de las remesas en los países del grupo 1

	Como porcentaje del PIB (2018)	Crecimiento 2020
Honduras	12%	-43%*
Guatemala	20%	-3%**
El Salvador	21.4%	-9.8%***

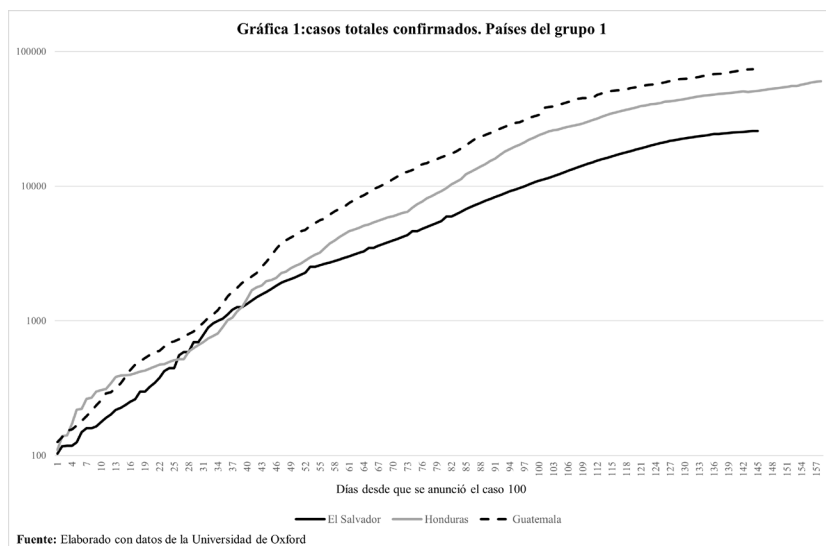
Fuente: OIM * Marzo y abril. **Enero a mayo. ***Enero a abril.

Ahora bien, las medidas dispuestas en El Salvador, Guatemala y Honduras evidencian una anticipación al diagnóstico de casos al interior de sus fronteras, lo que fue asumido como un gran acto de prevención. Sin embargo, el alto despliegue militar, la instalación de lugares de confinamiento y detención, así como las tensiones entre poderes públicos característicos del desenvolvimiento de la pandemia en los primeros seis meses, develaron el férreo talante autoritario estatal en Centroamérica.

El primer país en decretar algún tipo de medida excepcional fue Guatemala el 31 de enero con la instauración de la Alerta Sanitaria Nacional. El 5 de marzo, presidente Alejandro Giammattei, médico conservador que llegó al poder en 2019 con el apoyo del empresaria-

do, los militares, grandes medios de comunicación y, para algunos analistas, también de la mafia (Villagrán del Corral, 2019), declaró la alerta máxima sin ningún caso confirmado y proyectó la creación de centros de aislamiento de pacientes y sus allegados para la atención de los primeros casos.

El 13 de marzo fue anunciado el primer caso, en tanto que el 22 fue ratificado el Estado de Calamidad y decretado un toque de queda nacional por 12 horas diarias desde las 4 p.m., el más drástico en la región. Bajo el paquete estándar aplicado en toda América Latina, las estrictas medidas contuvieron la epidemia hasta la segunda semana de mayo, momento en el que el número de casos cruzó la barrera de los 1.000 diarios. Como se observa en la gráfica 1, Guatemala fue el país con mayor número de casos y crecimiento más acelerado del contagio entre los tres que hacen parte del grupo, superados en toda Centroamérica por Panamá.



El despliegue militar fue un pilar en el desarrollo del Estado de Calamidad Pública, se concentró el control de las fronteras nacionales, especialmente con El Salvador y Honduras, en labores de asistencia hospitalaria, seguridad y vigilancia en centros de salud y hospitales, así como apoyo a la Policía en zonas caracterizadas oficialmente por la presencia de pandillas y los altos niveles de delincuencia (Diario La Huella, 2020). Pese a la militarización y al toque de queda, que

dejó cerca de 40.000 detenidos-as durante seis meses (Chumil, 2020), a finales de abril el presidente reconoció que al menos el 17% de las personas no cumplían la cuarentena, refiriéndose a este grupo como “malcabrestos”, es decir, personas que se les habían salido del redil (Coronado, 2020). La consecuencia fue un endurecimiento de las medidas con la imposición de “toques de queda largos” durante todo el fin de semana desde mayo. Reluce así el claro desconocimiento de las condiciones de pobreza en la efectividad de la cuarentena y el estado de encarcelamiento generalizado vivido por la población, con el cual el presidente Giammattei puso en práctica su experticia como director del sistema penitenciario guatemalteco entre 2005 y 2007 en la gestión represiva de la pandemia.

Si bien el desempleo en Guatemala fue el más bajo de América Latina en 2019, con una tasa de apenas 2.5%, la cifra debe tomarse con cautela pues obedeció más al hecho de que la población dejó de buscar trabajo y tuvo que acomodarse en actividades informales de muy baja remuneración, misma situación que explica el poco efecto que tuvo la drástica cuarentena en el mercado laboral, ya que el desempleo sólo aumentó 0.1% en el primer trimestre de 2020 (Barría, 2020). La crudeza de la represiva cuarentena y la necesidad de rebuscar la vida redundaron en el crecimiento acelerado de contagios observable en junio y julio. También figuró como factor relevante la creciente presión migratoria, pues durante los primeros seis meses de pandemia Estados Unidos deportó cerca de 11.800 personas hacia Guatemala, el 55% de las cuales fueron ingresadas por vía terrestre a través de México (Agencia EFE, 2020).

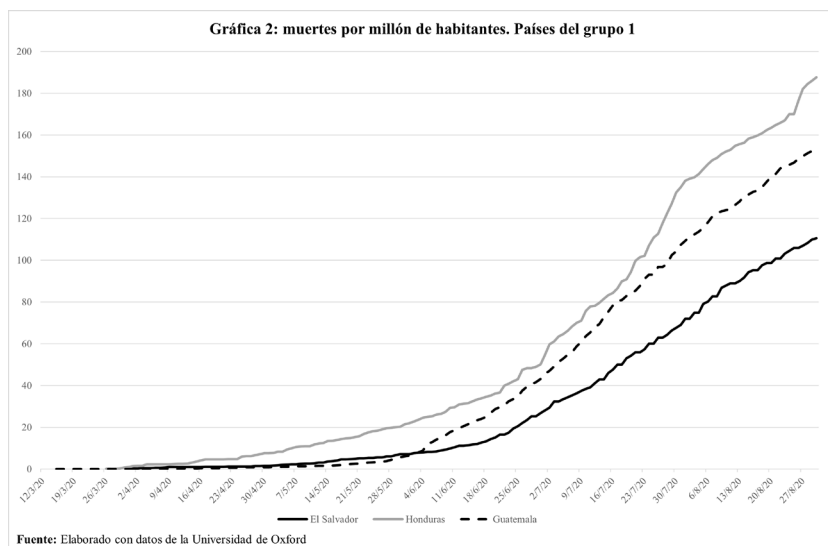
Por su parte, el gobierno de Juan Orlando Hernández en Honduras decretó el Estado de Emergencia Sanitaria el 10 de febrero y aplicó el paquete estándar de medidas con una radical suspensión de derechos constitucionales, aunque el primer caso de COVID-19 fue reconocido sólo un mes después. Esto en un clima de profunda crisis política expresada en grandes movilizaciones que en 2019 exigieron la renuncia de Hernández, continuador del autoritarismo y la represión que vive el país desde el golpe de Estado contra Manuel Zelaya en 2009, el cual de paso inauguró un modelo regional de desestabilización de gobiernos que plantearon críticas al neoliberalismo, replicado posteriormente en Paraguay, Brasil y Bolivia (Comité de Familiares Detenidos Desaparecidos - COFADEH, 2020). Además, Hernández atraviesa una crisis de legitimidad por la inconstitucional reforma que le permitió ser electo para un segundo periodo en 2018, los fuertes vínculos con el narcotráfico que tienen a su hermano en una prisión

en los Estados Unidos y la incesante corrupción.

La temprana acción frente a la COVID-19 ocurrió en medio de la epidemia de dengue que en 2019 contagió a más 107.000 personas y produjo 180 muertes, sobre todo en la población de más bajos ingresos, y bajo el argumento de preparar al sistema de salud que ya estaba saturado (Comité de Familiares Detenidos Desaparecidos - COFADEH, 2020). Después de seis casos confirmados en el país, el poder legislativo ratificó el Estado de Emergencia el 16 de marzo y dispuso a las Fuerzas Armadas para apoyar a la Secretaría de Salud con un doble propósito: mantener el orden y evitar la propagación del virus (Congreso Nacional de Honduras, 2020). El carácter de las medidas dejó en claro que entre los dos objetivos el primero tuvo siempre la prioridad, pues la represión estatal no impidió el avance de la epidemia.

Honduras ocupó el segundo lugar en número de contagios entre los tres países del grupo (gráfica 1), pero tuvo la mayor mortalidad por millón de habitantes (gráfica 2) y el pico más alto en la tasa de fatalidad por caso, cercana al 10% en la segunda semana de abril. Lo anterior se explica dadas las precariedades del sistema de salud que sólo contaba con 0.7 camas hospitalarias por 1.000 personas antes del primer caso de COVID-19 y apenas un 70% de acceso a redes de agua, no toda de buena calidad (tabla 2), hechos agravados por la evidente corrupción en la gestión de los recursos para atender la pandemia (Comité de Familiares Detenidos Desaparecidos - COFADEH, 2020).

Luego de la contención autoritaria de la pandemia y tras la presión del gran capital, el 8 de junio inició la *reapertura inteligente* con toque de queda, cuyo efecto fue el crecimiento exponencial de casos, pues a final de mes se superó la barrera de los 1.000 casos diarios sin lograr revertir la tendencia hasta septiembre. A la par y pese a no contar con estadísticas oficiales de empleo a la fecha, las estimaciones de la Secretaría del Trabajo establecieron que la tasa de desocupación será de al menos el 13% (Dinero HN, 2020), lo que ha sido ratificado en la calle por las cientos de manifestaciones mensuales en contra del hambre (Comité de Familiares Detenidos Desaparecidos - COFADEH, 2020).



La represión creció a la par con la pandemia, el desempleo y el hambre. Desde sus puntos de control la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional, FUSINA, creada en 2014 para combatir al crimen organizado, realizó al menos 90.000 detenciones y decomisó 13.000 vehículos (Secretaría de Defensa Nacional de Honduras, 2020) en medio de constantes denuncias por abuso de autoridad, torturas y malos tratos, así como la constante represión de cientos de protestas y la persecución a periodistas y opositores. A contracara de tal despliegue de fuerza que hizo de la cuarentena un estado de guerra, el Ejército desarrolló la entrega de alimentos y kits medicinales para el tratamiento de síntomas asociados al COVID-19 para un total de 237.615 familias atendidas durante la tercera fase de la operación “Honduras Solidaria” (Secretaría de Defensa Nacional de Honduras, 2020) en diferentes zonas del país, lo que adosó el ejercicio represivo con tintes de fraternidad.

Por otra parte, la declaratoria de Estado de Emergencia en El Salvador fue emitida por el mediático presidente Nayib Bukele el 11 de marzo, cuando aún no se registraba ningún contagio. Las tensiones del ejecutivo con el legislativo y el judicial, el despliegue militar y policial a propósito del régimen de excepción política que implicó la emergencia y la creación de centros de contención como lugar de cuarentena forzosa para personas retornadas del extranjero y aquellas detenidas en medio de los toques de queda, son elementos que

configuraron el autoritarismo del poder político y militar durante la pandemia. Tan sólo un mes antes de la emergencia, el 11 de febrero, Bukele ordenó a los militares tomar la Asamblea Legislativa y amenazó con su disolución en caso de no aprobar los préstamos para su plan de seguridad, un intento de golpe que atizó las diferencias con el ejecutivo con el posterior tratamiento de la pandemia.

Si bien El Salvador tuvo el menor número de casos, la tendencia general sigue el patrón visto en Honduras y Guatemala (gráfica 1). Lo particular del caso está en la pugna entre poderes que hizo de la renovación de la cuarentena un asunto de control policíaco y de disputa política en un contexto preelectoral, pues en febrero de 2021 se deben celebrar los comicios para renovar la Asamblea Legislativa y los consejos municipales en todo el país.

El 14 de marzo fue promulgado el estado de excepción con el que fueron suspendidas varias libertades constitucionales e inició la cuarentena domiciliaria, obligatoria y absoluta que se extendió hasta finales de agosto, y por la que las y los salvadoreños tuvieron que permanecer en sus casas bajo la custodia de 40.000 efectivos, so pena de detenciones y multas. La medida fue impuesta con la promesa de entregar 300 dólares al 75% de la población y bajo una performática del miedo en la que Bukele advirtió/amenazó con más de tres millones de casos en mayo sin la medida de confinamiento obligatorio. Por su parte, el gobierno de San Salvador ordenó cavar 118 tumbas en el cementerio de la ciudad cuando apenas se confirmaba el caso número tres (DW, 2020).

Las violaciones de derechos humanos no se hicieron esperar. Como saldo parcial de los patrullajes, la instalación de cordones sanitarios alrededor de municipios y la vigilancia de 186 pasos fronterizos por parte de la Policía y las Fuerzas Militares, hasta mayo cerca de 10.000 ciudadanos-as habían pasado por los centros de contención. La acción militar también recayó en las y los periodistas, quienes denunciaron obstrucciones y la destrucción de material usado en su labor informativa (DW, 2020). Un caso grave de masiva violación de derechos humanos ocurrió a mediados de abril en el Puerto de la Libertad, localidad costera que fue castigada por Bukele con un cerco sanitario desproporcionado de un fin de semana tras la difusión de un vídeo en redes sociales que mostraba un incumplimiento masivo de la cuarentena.

La Corte Suprema de Justicia ordenó frenar las detenciones y confinamientos forzosos; Bukele no acató la orden judicial y procedió a desestimarla públicamente vía Twitter, alegando la superioridad cons-

titucional del derecho a la vida y la salud del pueblo salvadoreño (DW, 2020). La Corte Interamericana de Derechos Humanos, diferentes organizaciones nacionales e internacionales defensoras de derechos, así como figuras políticas extranjeras rechazaron las declaraciones y denunciaron que dichos centros pasaron de ser una medida efectiva para garantizar la cuarentena a convertirse en focos de contagio en los que no se aseguraban condiciones sanitarias mínimas (Alemán & Sherman, 2020).

La renovación de la cuarentena se convirtió en el punto central del tira y afloje de Bukele con el poder legislativo y judicial, pues en dos ocasiones la Asamblea Legislativa se negó a refrendar la continuación de la cuarentena propuesta por el presidente, quien se lanzó a proclamarla por su cuenta para que posteriormente la Corte Suprema de Justicia decidiera suspender la medida por usurpación de funciones del ejecutivo (DW, 2020). Como respuesta, el presidente más mediático de la región y el de mayor aprobación con un 72.7%, amenazó con una verdadera reforma del Estado a través de un cambio constitucional después de la pandemia, lo que no sólo reafirma el carácter autoritario de Bukele, sino que anuncia la posible apertura de un nuevo momento en la configuración de lo estatal en el caso salvadoreño (Marroquín & Tejada, 2020).

GRUPO 2. DECLARATORIA POSTERIOR TEMPRANA Y REAPERTURA RÁPIDA EN PAÍSES CON POBREZA EXTREMA

El segundo grupo está compuesto por Haití, Paraguay y Bolivia, países en los que la declaratoria de medidas fuertes frente a la pandemia se dio 2 o 3 días después de reportar el primer caso, en un complejo contexto de pobreza y desigualdad extremas con profundos legados autoritarios de las dictaduras en Paraguay y Haití, y renovados aires despóticos en Bolivia después del golpe de estado al gobierno de Evo Morales en 2019. Para contener la pandemia en los tres países se decretó el estado de emergencia nacional, generando condiciones de excepcionalidad política y administrativa a gobiernos fuertemente cuestionados con anterioridad.

Jovenel Moïse, presidente haitiano desde febrero de 2017, enfrentó las más persistentes y duras movilizaciones populares en 2019, motivadas por sendos procesos de corrupción, la exigencia de su renuncia y de un cambio radical en el sistema. En Bolivia, el gobierno de facto de Jeanine Áñez prometió “transición y pacificación”, pero en su lugar se impuso una agenda racista, aporofóbica y confesional en medio de una brutal represión policial que dejó casi dos decenas

de muertos, quiso dotar de inmunidad penal a las Fuerzas Armadas en su accionar en contra de la movilización popular; desató una amplia persecución judicial contra funcionarios-as del gobierno anterior y modificó la política exterior para alinearse de lleno con los intereses de los Estados Unidos.

En Paraguay, el presidente Mario Abdo Benítez, empresario hijo del secretario privado del dictador Alfredo Stroessner a quien ha reivindicado abiertamente, ha tenido una agenda en oposición a las luchas de las mujeres, desconocedora del movimiento campesino, centrada en políticas económicas ortodoxas que le hacen el juego a los intereses despojadores del capital internacional, entre ellos el brasilero, y comprometida con una lucha contrainsurgente escudada en la existencia del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) cruzada por el ingreso de tropas norteamericanas y el Buró Federal de Investigaciones (FBI).

Por razones diferentes los tres países tuvieron momentos de reconocimiento en el cumplimiento de la cuarentena y en el comportamiento de la pandemia, coincidiendo también con reaperturas rápidas en el contexto regional que redundaron en desbordados crecimientos en el número de contagios, ratificando que las medidas represivas y policiales son inocuas para detener la pandemia en contextos de alta desigualdad socioeconómica, pero resultan altamente lesivas en términos democráticos, fortaleciendo dos rasgos fundamentales del neoliberalismo: precariedad de la vida y autoritarismo.

Estos países presentan algunos de los peores niveles de pobreza monetaria, con el caso paradigmático de Haití, la nación más golpeada por este fenómeno en el hemisferio occidental (tabla 3). Si bien Bolivia y Paraguay presentan mejores indicadores en este rubro que los países centroamericanos y se caracterizan por una menor desigualdad en la región si se comparan con Brasil o Colombia, cuentan con peores condiciones respecto al acceso a agua potable. Aunque en promedio el 95% de la población de América Latina cuenta con este servicio, Bolivia, Paraguay y Haití presentan valores críticos de conexión a redes por debajo del 85%, lo que genera serias restricciones al momento de poner en práctica el lavado de manos, uno de los principales mecanismos preventivos frente a la COVID-19. Lo anterior pese a los esfuerzos realizados por el Estado boliviano entre 2006 y 2019 para cerrar la histórica brecha en derechos sociales básicos y a estar junto con Paraguay en el top de países con mayor disponibilidad de agua en el continente.

Tabla 4 Indicadores de pobreza países del grupo 2

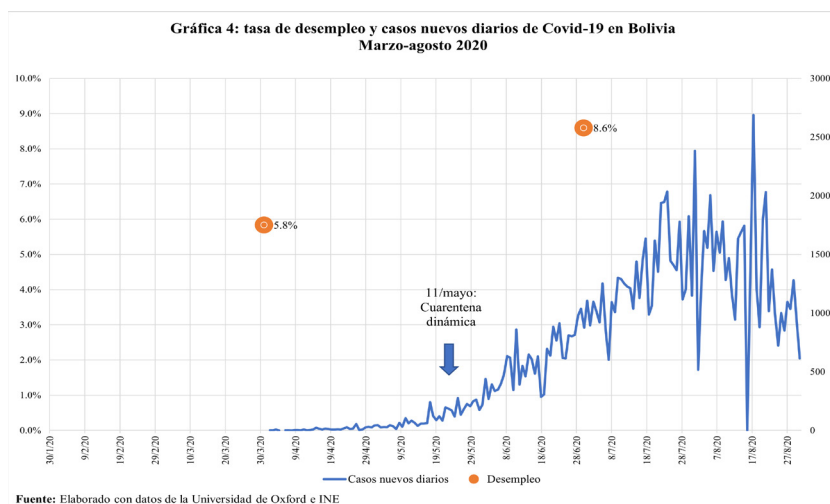
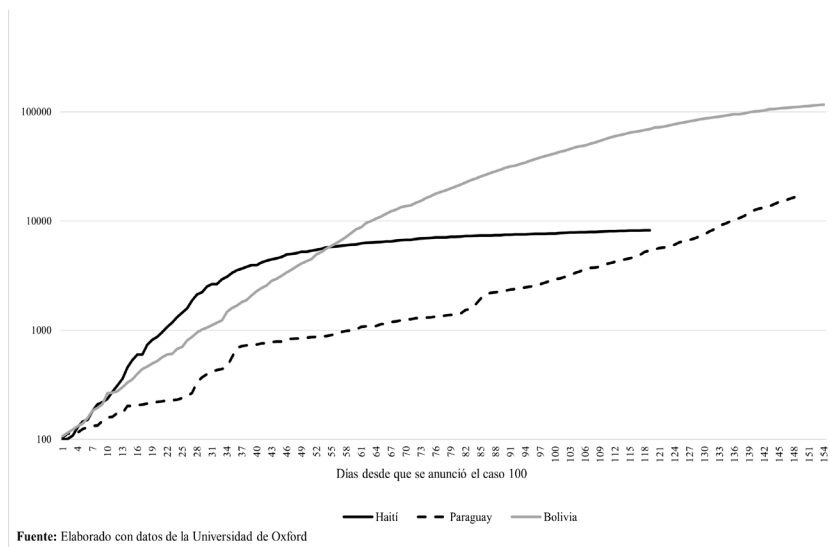
	Pobreza (2019)	Pobreza extrema (2019)	Gini (2018)	Ingreso concentrado por el 20% más rico	Acceso a agua potable (2019)	Disponibilidad Hídrica (m3/ hab/año)	Camas de hospital por 1.000 personas**
Bolivia	32.3%	14.3%	0.438	48.3%	84.70%	46.856	1.1
Haití*	68%	24%	0.66	---	64%	1.360	0.7
Paraguay	6.2%	19.4%	0.474	52.5%	85%	55.990	1.3

Fuente: Cepal y OPS

*Datos de 2013

**Antes de la pandemia

La pandemia arribó en este contexto de crisis política y pobreza adosado por la composición demográfica de los países: un 95% de población afro en Haití y 41% de indígenas en Bolivia. Bolivia es el que reporta un mayor número de casos en los primeros seis meses de la pandemia (gráfica 3), sexto lugar dentro de la muestra analizada con un total de 115.968 concentrados fundamentalmente en Santa Cruz, La Paz y Cochabamba. Después de tres meses de cuarentena militarizada que redujo la movilidad en un 90% según las estadísticas de Google, la caída más drástica en Suramérica, el punto de quiebre en la escalada apareció en mayo con la puesta en marcha de la cuarentena nacional dinámica y condicionada, la cual flexibilizó las rígidas medidas iniciales en un contexto de creciente desempleo previo a la llegada de la pandemia, como se observa en la gráfica 4. Estas condiciones de orden estructural, cuya resolución fue truncada por el gobierno de facto de Jeanine Áñez, ha limitado la efectividad de las ayudas directas entregadas a las y los trabajadores, cercanas al 47% de los recursos entregados por el Estado en el contexto de creciente desempleo.



El despliegue de más de 47.000 efectivos militares se concentró en el cierre de fronteras y la garantía del confinamiento total, especialmente en los departamentos de más alto contagio (Europa Press, 2020). Sin embargo, la presencia militar en zonas afectas al ex presidente Evo Morales (Miranda, 2020), los procesos de erradicación de cultivos de coca declarados ilegales y en el desencadenamiento de protestas y movilizaciones por el aplazamiento reiterado de elecciones

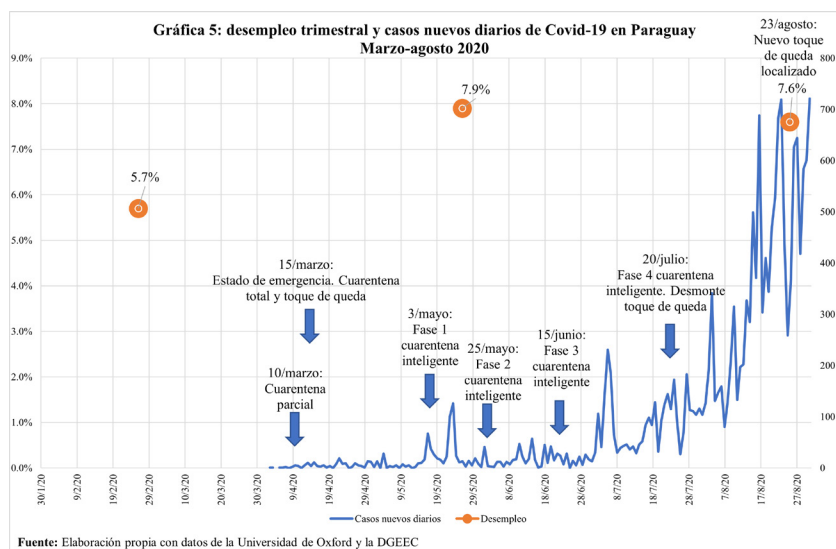
presidenciales (Efecto Cocuyo, 2020), evidenció que el despliegue de las fuerzas militares, no tuvo necesariamente una única relación con la contención de la COVID-19.

En Paraguay el primer caso llegó por la frontera con Brasil y se reportó el 7 de marzo. Las primeras medidas fuertes fueron tomadas tres días después con una cuarentena parcial que incluyó el paquete estándar con el fin de evitar la propagación comunitaria. El 15 de marzo se impuso la restricción nocturna nacional de 8 horas a la circulación de personas y vehículos, acompañada de multas hasta de 6.000 dólares por incumplimiento, pese a que la constitución paraguaya prohíbe el toque de queda. En los medios el ministro del interior Euclides Acevedo afirmó que “esta medida drástica es para los inadaptados, no para el ciudadano común”, en tanto que la Fuerza Pública actuaría “con mayor cautela y firmeza” (Agencia EFE, 2020). Como resultado de la irregular política de toques de queda en abril más de 1.500 personas habían sido detenidas y para agosto las autoridades reconocían la saturación del sistema penitenciario por asuntos relacionados con la violación de la cuarentena (Prensa Latina, 2020).

Durante los primeros cuatro meses se observó un momento de crecimiento contenido en el número de contagios con un total de 2.191, expuesto en prensa internacional como un éxito a nivel regional, el cual fue asegurado con medidas represivas propias del gobierno afecto al exdictador Stroessner. Con 370 casos totales el 3 de mayo, Paraguay inició la fase 1 de la *cuarentena inteligente* para reactivar la economía y la vida social, utilizando como uno de los argumentos fuertes la existencia de una suerte de “bono generacional”, supuesta ventaja que significa contar con un 43% población menor de 24 años al enfrentar a la COVID-19. No obstante, el criterio fundamental en este proceso fue la dinamización del capital y no la preservación de la vida en condiciones dignas para la población.

Como se observa en la gráfica 5, la progresiva apertura tuvo como consecuencia el incremento exponencial en los contagios diarios en julio y agosto, justo después de la fase 4, pues en tan solo sesenta días se reportaron más de 15.000. También resulta evidente el parco efecto de las medidas en la creación de empleo, con apenas una reducción de 0.3% desde el inicio de cuarentena inteligente, lo que significó una mayor exposición al virus en peores condiciones de vida. Hasta junio, Paraguay entregó 2.798 millones de dólares en ayudas para enfrentar la pandemia, lo que significó el 7.5% del PIB de 2019; sin embargo, la distribución de tal monto inclinó la balanza a favor de las grandes empresas que recibieron 57.1%, en contraste con el 1.07% que de manera

directa fue entregada a las y los trabajadores del país (García Sojo & Calderón Castillo, 2020).



El segundo toque de queda nocturno comenzó el 23 de agosto, no condujo al cierre total de establecimientos comerciales y fue acotado a los departamentos de Amambay y Capital Central que concentraron el 85% de los casos. El argumento de las autoridades sanitarias y del ejecutivo para restringir la movilidad nocturna fue que el mayor nivel de contagios ocurría en las actividades sociales nocturnas y no en las laborales, lo que no sólo desconoció el efecto negativo del 2% más de desempleo a lo largo del semestre en el incumplimiento de la cuarentena, sino que configuró un entramado de control social sobre los cuerpos que ha pululado por América Latina en tiempos de Coronavirus (ADN Paraguay, 2020). Tal es la ineficacia de las medidas represivas que, a inicios de septiembre, el foco ya se había presentado con el colapso de las unidades de cuidados intensivos en el país que fue ejemplo de gestión de la pandemia a nivel regional en los primeros cuatro meses.

En general, el despliegue militar en Paraguay se dedicó al patrullaje conjunto entre militares y policías, el cuidado de albergues temporales para las cuarentenas, así como en el control y vigilancia de fronteras, especialmente en las ciudades Pedro Juan Caballero y Ciudad del Este. La concentración en la frontera con Brasil desató

fuertes tensiones entre militares, autoridades locales y residentes, así como importantes movilizaciones, pues el cierre fronterizo y la cuarentena detuvieron abruptamente la actividad comercial. También se presentaron procedimientos irregulares en allanamientos realizados durante las protestas de finales de julio que conllevaron a la reiterada violación de Derechos Humanos y maltratos por parte de efectivos en los albergues temporales, en los que se reportaron casos de ciudadanos que permanecieron recluidos por más de dos meses (Sáenz & Rodríguez, 2020).

Empatando con el repunte de casos de contagio y el reforzamiento de medidas de control y vigilancia, Paraguay vivió un momento de intensificación de la lucha contrainsurgente. Así, se desarrolló una operación militar contra el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) que tuvo como resultado la muerte de dos menores de edad argentinas, en principio presentadas como combatientes, y la incautación de elementos personales de los insurgentes presentes en el campamento allanado. La irregularidad en esta operación, el encubrimiento inicial y la actitud laxa por parte de las autoridades civiles frente a esta situación, fueron características de la respuesta Estatal (BBC News Mundo, 2020).

Como consecuencia de este operativo, el EPP retuvo en los primeros días de septiembre al expresidente Oscar Denis y a su asistente Adelio Mendoza en cercanías a la ciudad de Asunción. El Gobierno paraguayo desplegó 350 efectivos de la Policía y 434 de las Fuerzas Armadas, además de disponer de diferentes medios de transporte para realizar una intensiva búsqueda del expresidente en el norte del país (Fest, 2020). Así mismo, se recibió una comisión del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal, GAULA, para asesorar la investigación, como respuesta de una solicitud expresa del presidente Mario Abdó al gobierno colombiano (El Tiempo, 2020). Como en otros casos a nivel regional, el despliegue de dispositivos contrainsurgentes se enfocó también hacia la izquierda y el movimiento popular. Diversas organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos fueron acusadas de tener nexos con el EPP con materiales editados y fuera de contexto, creando odio y miedo en la población con un libreto que sigue al pie de la letra el canon de guerra interna en Colombia. Entre las organizaciones afectadas destaca el Frente Guasú, que llevó a Fernando Lugo a la presidencia en 2008 para ser destituido por la vía golpista en 2012.

Por otro lado, en Haití el virus ingresó y explica su comportamiento con el retorno de más de 30.000 trabajadores-as migrantes que

perdieron su trabajo en República Dominicana, país con la situación de contagio más crítica de las Antillas. El crecimiento más acelerado se presentó después del caso 100, particularmente durante mayo y junio, los peores meses de la pandemia en los que la tasa de fatalidad por caso contagiado fue cercana al 12%, equiparable a la de México, el país con el peor comportamiento de este indicador en la región. Tal estado de cosas se dio en asocio con la situación dominicana, las condiciones estructurales de pobreza, el negacionismo ante la existencia de la pandemia y la desconfianza cultural y política en el sistema sanitario por parte de la población, por lo que las y los pacientes llegaban a los centros asistenciales en estado grave.

El crecimiento en contagios llevó a pensar en una situación catastrófica dadas las extremadas condiciones de pobreza; sin embargo, durante los primeros seis meses no ocurrió un incremento explosivo y desde la primera semana de julio se reportaron menos de cien casos nuevos diarios (gráfica 3). Allí parecen conjugarse diversos factores. A manera de hipótesis encontramos asuntos más o menos evidentes como el subregistro, dado el bajo nivel de testeo, la escasez de pruebas y el escepticismo de la población, ante lo cual diferentes organizaciones médicas han desarrollado esfuerzos para fortalecer diversos procesos de salud comunitaria. Como en Paraguay, otro factor se ha jugado con la idea del bono generacional, dado que el 54% de la población es menor de 24 años. No obstante, existen otros elementos menos evidentes que también podrían explicar el crecimiento no explosivo en el nivel de contagios como la medicina ancestral y tradicional que da protagonismo a los saberes botánicos, así como las acciones de la brigada médica cubana con presencia en Haití desde hace 22 años, otro de los países que logró un crecimiento contenido en el número de casos, apenas 3973 y un total de 94 muertes en los primeros seis meses.

En todo caso, el comportamiento del conteo oficial en el número de casos contrario a un crecimiento exponencial en el caso de Haití no implica que las consecuencias posteriores no adquieran la dimensión catastrófica por la aguda crisis económica mundial. En el caso particular de este país antillano junto a la crisis por Coronavirus, la reducción de las remesas y de las exportaciones hacia los Estados Unidos en medio de una sequía, las previsiones de la CEPAL proponen una caída del PIB del 5%, lo que no es otra cosa que el espacio propicio para agravar el problema de hambre crónico, la epidemia fundamental.

Respecto a la situación político-militar haitiana en medio de la pandemia, es clave tener en cuenta como antecedente inmediato la creciente movilización social del año 2019 (El País, 2019) con coleta-

zos hasta febrero de 2020 con el levantamiento de un grupo de policías en contra del Ejército exigiendo mejoras salariales y el derecho a sindicalizarse (Infobae, 2020). Este suceso configuró un escenario difícil para un despliegue coordinado de la fuerza pública, con un Ejército reestructurado por Moïse en 2017 después de ser disuelto en 1995, por lo que buena parte de las tareas de control y represión poblacional recayó en los 15.000 efectivos de la Policía Nacional.

Como en otros países, el despliegue policial y militar se concentró en el resguardo del toque de queda, el control de fronteras y el cumplimiento de las medidas sanitarias en lugares públicos. Los controles realizados por la Policía en el contexto de la pandemia lograron contener de momento los ánimos convulsos y la movilización social, generando una oportunidad de control y disciplinamiento social para el gobierno. Incluso, se ha llegado a mencionar la creación de grupos paramilitares en medio de la pandemia como es el caso del G9, perpetrador de varias masacres contra la población civil en los barrios populares de Puerto Príncipe y del país (Asmann, 2020). No obstante, las condiciones estructurales y coyunturales de la crisis se mantienen, evidenciando que la movilización tiene sus causas vigentes y es cuestión de tiempo (y de cuidados) que su reactivación sea una realidad (López E., 2020).

GRUPO 3: DECLARATORIA POSTERIOR TARDÍA EN EL ENTRAMADO DE MOVILIZACIÓN POPULAR CRECIENTE

El presente grupo está conformado por Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México y Perú, países que decretaron el estado de excepcionalidad entre 11 y 33 días después de la aparición del primer caso en sus territorios. La dinámica de movilización social y de crecientes luchas subalternas, son elementos compartidos entre estos países. Dichos procesos iniciados tiempo antes de la pandemia, en algunos casos, han desencadenado en crisis de legitimidad. Si bien las formas y temporalidades de los procesos de lucha social fueron disímiles, y en algunos casos, como Argentina y México, gobiernan coaliciones que se han declarado críticas al neoliberalismo, encontramos algunas claves comparativas en las respuestas políticas que dieron los Estados a la difícil realidad que viven los pueblos.

En Argentina, la situación presentó una complejidad paradójica. Si bien, en octubre del 2019 el triunfo de la coalición encabezada por Alberto Fernández – Cristina Kirchner impidió que continúe la gestión neoliberal de Mauricio Macri, promotor del desacatamiento de las medidas de aislamiento, con la pandemia, la crítica situación so-

cio económica se ha profundizado. El Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) decretado el 20 de marzo, 17 días después de haberse detectado el primer caso, logró un éxito relativo respecto a los contagios, durante los primeros meses. Esto permitió al gobierno nacional, constituir un comité de especialistas y funcionarios, que planificó medidas económicas, sanitarias y de cuidado en el corto plazo. A través de múltiples disposiciones se acondicionó el sistema de salud pública, y se realizaron acuerdos parciales con los sanatorios privados, en vistas a un crecimiento de los contagios. Es decir, se ganó tiempo en pos de preparar el debilitado sistema sanitario.

En simultáneo, se tomaron medidas para atender a los trabajadores en situación de informalidad entre los 18 y 65 años. Se dispuso un Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de \$10.000 (130 dólares) que en septiembre llegó al tercer pago. Este programa de asistencia que intenta mitigar la crítica situación de millones de argentinos trajo consigo un debate público sobre la necesidad y pertinencia de una Salario o Renta Universal. El gobierno estimaba que esta ayuda estatal sería requerida por no más de 4 millones de personas. A los pocos días se desató el desconcierto. Fueron 11,2 millones los solicitantes, es decir, más de la mitad de la población económicamente activa del país. Finalmente, el subsidio lo recibieron 8,9 millones de familias. En una reciente encuesta realizada por la CELAG, el 64,7% de la población consultada aseguró estar de acuerdo con la implementación de una Renta Mínima Universal (Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica - CELAG, 2020).

Con una tasa de empleo en el primer trimestre de 42,2% y una tasa de desocupación del 10,4% (Instituto Nacional de Estadística y Censos - INDEC, 2020), el gobierno afrontó la renegociación de una exuberante deuda externa, tomada por la administración anterior, e intentó contener a través de la transferencia de recursos, vía organizaciones, iglesias y organismos públicos, uno de los peores escenarios socio económicos de la historia argentina. A la par, otorgó importantes ayudas a grandes empresas, montos equivalentes a los concedidos a los sectores de trabajadores. Con un discurso promotor del cuidado y de “lucha conjunta contra el virus”, el gobierno logró transitar los primeros meses con amplios niveles de aprobación. Situación que fue modificándose tras el desgaste de las medidas preventivas, provocado, entre otras cosas, por la imposibilidad de una amplia porción de la población de trabajar desde sus casas. Dicho agotamiento fue aprovechado y acrecentado, a través de la configuración de sentidos negacionistas, en “defensa de las libertades individuales”, por dirigentes

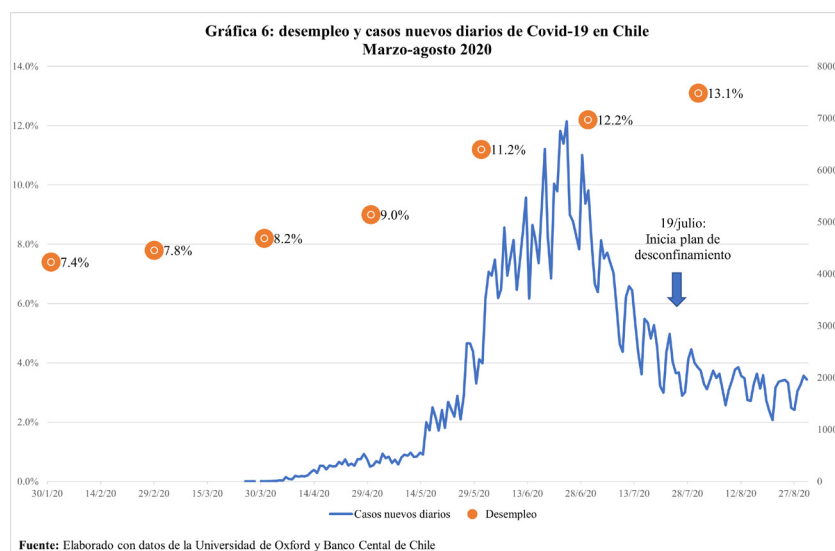
políticos de derecha y corporaciones mediáticas (Infobae, 2020). Lo cual acarreó un hartazgo social difícil de moderar.

Ante eso, se impartió un uso diferencial de las fuerzas de seguridad. Mientras en los barrios donde reside la población más adinerada consintieron los encuentros en espacios públicos, en los barrios más pobres, tales como Villa Azul, provincia de Buenos Aires, se aplicó una militarización perimetral, y continuó la persecución a los más humildes (El Día, 2020). Situación que no es exclusiva del país. En niveles bastante mayores, en los barrios más vulnerables de Chile, el gobierno de Sebastián Piñera utilizando argumentos contra el avance del Coronavirus intentó apaciguar la conflictividad de los sectores populares. El caso de la comuna El Bosque, al sur de Santiago de Chile es ejemplo (Diario UChile, 2020). Tras la protesta de vecinos por falta de alimentos e insumos, decenas de carabineros se hicieron presentes con gases lacrimógenos y carros hidrantes para acallar los reclamos. Lo cierto es que estos despliegues de fuerzas represivas, lejos de contener la curva de contagios podrían estar abriendo una nueva fase de hostigamiento y de control sobre las barriadas populares.

La rebelión del pueblo chileno iniciada en octubre con la evasión masiva del pasaje del Metro, por parte de estudiantes secundarios y universitarios, ante el alza del valor del pasaje, provocó una escalada impugnatoria a las medidas neoliberales del gobierno de Piñera y sus antecesores. Ante el crecimiento progresivo de las protestas, incluidos enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas armadas, el gobierno declaró el toque de queda. De este modo, el presidente reinstaló la figura de enemigo interno. “Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie y que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite”, señalaba Piñera el 20 de octubre de 2019. Luego de reiteradas acciones de protesta, incluida la denominada Marcha más grande de la historia que colmó las calles de Santiago (Alonso Bravo, 2019), el gobierno accedió a iniciar un proceso constituyente, y a la par, anunció un proyecto de Infraestructura Crítica. Este recurso legal le daría a las fuerzas represivas las facultades del estado de excepción constitucional, en condiciones de normalidad.

En dicho escenario de disputas y tensiones llegó la COVID-19 al país sur andino. El 3 de marzo se detectó el primer caso, y el 18 del mismo mes, a través del decreto n°104, se declaró el Estado de Excepción Constitucional por Catástrofe. A partir de las circunstancias generadas por la pandemia, el gobierno intentó relegitimar el uso de las fuerzas policiales. Las mismas que dejaron un saldo superior a 2000

heridos de bala y decenas de muertos durante el 2019, fueron puestas al frente de la prevención de la COVID-19. Hacia comienzos de junio eran más de 155.000 personas las personas detenidas por “delito a la salud pública” (Ministerio del Interior, 2020). En un país donde la tasa de desempleo en el primer trimestre del corriente año alcanzó 8,2%, la pobreza anual 2019 fue de 9,8% y se proyecta que llegará a 15,5% en el 2020, la curva de contagios fue mayor que la de países con peores condiciones socioeconómicas, como Argentina. Aún en este caso se ratifica la relación en la que desempleo y número de contagios se refuerzan de manera negativa, por lo menos hasta mediados de junio. Aunque el proceso de desconfinamiento inició en julio y los contagios diarios fueron menores para oscilar entre los mil y los dos mil hasta finales de agosto, el desempleo continuó creciendo de manera persistente.



Por su parte, tras el anuncio del primer caso de contagio de la COVID-19 en una ciudadana proveniente de Milán, Colombia declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica el 17 de marzo. Esta medida estuvo antecedida de dos resoluciones dictadas por el Ministerio de Salud y Protección Social entre el día 10 y el 12 del mismo mes (Ministerio de Salud y Protección Social, 2020), adoptando medidas para la prevención de contagios comunitarios, como el aislamiento preventivo y la cuarentena, además del control de contagios presentados en ciudadanos provenientes del exterior. De

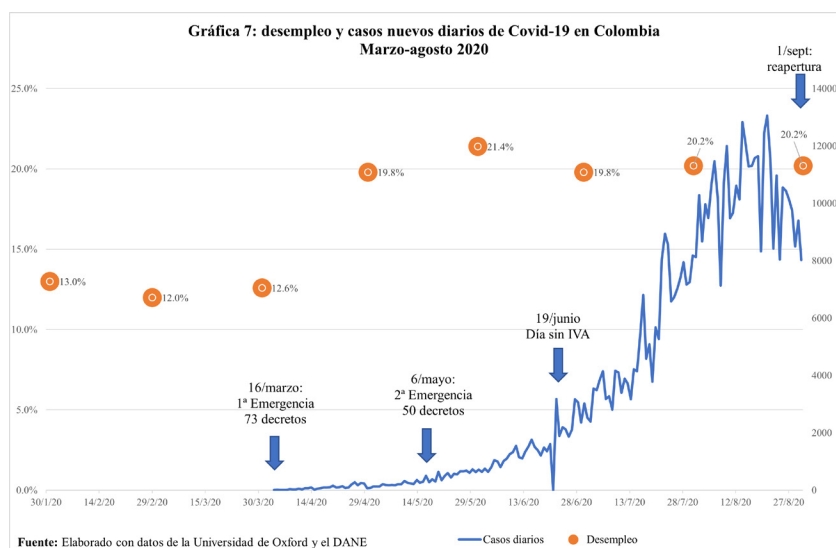
igual forma, en estas resoluciones se declara la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo, disponiendo del acompañamiento de la autoridad policial (Ministerio de Salud y Protección Social, 2020).

Una de las primeras medidas fue el cierre de fronteras, especialmente con Venezuela pese a no contar con casos provenientes de este país, por lo que más que una medida sanitaria fue otra jugada política internacional del presidente colombiano Iván Duque. Posteriormente, fueron cerradas las fronteras con Ecuador, Brasil y Perú ante el aumento de casos y el avance del contagio masivo en territorios como el Amazonas, departamento con importante presencia de población indígena que en mayo registró la tasa de infección más alta por número de habitantes del país (DW, 2020). Solamente para el resguardo fronterizo en el primer trimestre de la pandemia se dispuso un total de 29.000 efectivos militares, cifra que aumentó según la evolución de la enfermedad en los países vecinos y los departamentos de frontera, como ocurrió con Ecuador en abril.

Con la resolución del Ministerio de Salud y Protección Social del 10 de marzo inició la cuarentena y aislamiento social, la cual se renovó consecutivamente hasta el primero de septiembre y golpeó sobre todo a los sectores más empobrecidos y precarizados por el incremento del desempleo y las dificultades para ejercer labores propias de la economía informal. Según la CEPAL, en el 2019 Colombia reportó un índice de pobreza de 29%, proyectado a crecer 14 puntos porcentuales en el presente año. De igual forma, la pobreza extrema tendió a agudizarse y podría pasar del 10.3% registrado en 2019 al 14.3% el presente año.

Así, en abril, varias familias de los barrios del sur de Bogotá y algunas comunas del municipio de Soacha colgaron trapos rojos en las ventanas de sus hogares para manifestar que estaban pasando hambre, solicitar ayuda gubernamental y solidaridad de sus vecinos y vecinas. Este fenómeno se replicó en varios lugares del país con la misma situación, con las y los trabajadores informales como el grupo más afectado por la cuarentena, dado que en Colombia la proporción de ocupados en tal condición fue de 46.3% para el trimestre mayo-julio del presente año. En tales condiciones, la relación de refuerzo negativo contagio-desempleo fue una de las más claras entre los países estudiados y probablemente tendrá impactos muy negativos en este país, ya que la pandemia agravó la desocupación estructural de más de dos dígitos existente hace tres décadas y a la vez, la necesidad de conseguir sustento reforzó la dispersión de la enfermedad, lo que junto a absurdas medidas gubernamentales de promoción del comercio

como el “día sin IVA”, colocaron a este país andino en la lista de los cuatro más afectados por COVID-19 en Latinoamérica.



En medio de esta situación se presentaron protestas y bloqueos que tuvieron como respuesta la entrega de ayudas humanitarias, así como el despliegue policial y militar en un ejercicio de disciplina social. Hasta julio se registró un total de 421.964 mercados entregados en Bogotá (López C., 2020), mientras que a nivel nacional 1.109.820 familias recibieron diferentes tipos de ayudas (Dinero, 2020), las cuales no sólo fueron insuficientes, pues las protestas asociadas al hambre continuaron, sino que estuvieron enmarcadas por sendos escándalos de desviación de recursos.

Para garantizar la aplicación de la cuarentena y para ejercer control de la protesta fueron dispuestos más de 30.000 miembros del Ejército, Armada y Fuerza Aérea en la vigilancia de fronteras y el desarrollo de planes de seguridad en centros urbanos (Comando General Fuerzas Militares de Colombia, 2020). Así mismo se han dispuesto 28.000 policías para vigilancia y protección de hospitales, entidades bancarias y terminales de transporte y más de 29.000 efectivos para la vigilancia de supermercados y plazas de mercado (Saumeth, 2020). En mayo se habían impuesto más de 323.000 comparendos por incumplimiento de los toques de queda y las medidas de bioseguridad, así como por aglomeraciones (AS, 2020).

Con la delegación de la garantía de medidas de aislamiento en el órgano policial, aumentaron las violaciones de derechos humanos en un país en el que la guerra se hace interminable, entre otras, porque las fuerzas de seguridad estatales y civiles no están diseñadas para la paz (Cano, 2020). El primer gran hecho de represión se vivió en las cárceles, lugares en los que el Movimiento Nacional Carcelario convocó una jornada de protestas ante el 48% de hacinamiento que viven los centros penitenciarios, el posible aumento de los contagios y la falta de elementos para la prevención del contagio de Coronavirus. La violenta intervención del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, la Policía y el Ejército terminó con el saldo de 23 muertos y 83 heridos (Delgado H., 2020).

Mientras en plena cuarentena el asesinato de líderes y lideresas sociales se incrementó en un 42% respecto a 2019 y al menos 246 personas fueron asesinadas en 61 masacres que involucran a grupos paramilitares y narcotraficantes, el asesinato de Javier Ordoñez en Bogotá, víctima de violencia policial en los primeros días de septiembre, desató la ira, canalizó la frustración por el incierto panorama que está dejando la gestión de la pandemia y reavivó las movilizaciones de noviembre de 2019, suspendidas por la llegada del Coronavirus (Cano, 2020). La respuesta del gobierno nacional fue la tradicional acusación de infiltración subversiva en las marchas y mítines, mientras que la Policía fue aún más represiva y en dos días de intensa protesta dejó 13 personas muertas y 248 heridas, de las cuales 66 fueron impactadas por armas de fuego⁴.

En este caso, como en el de Perú, se evidencia que el tratamiento de la pandemia se hizo desde el carácter contrainsurgente del Estado, pues a quienes protestan se les dio tratamiento de enemigo interno con cruda represión, mientras se busca blindar a las fuerzas policiales, mediática y jurídicamente, para ejecutar violaciones de derechos humanos con total impunidad.

En Perú el primer caso de COVID 19 se anunció el 6 de marzo. Un joven que regresó de Europa fue el primer contagio registrado. Nueve días después, el 15 de marzo, el gobierno decretó el Estado de Emergencia Nacional en todo el territorio. A las semanas, el 28 de marzo, se promulgó la Ley de Protección Policial, por la cual se derogó el principio de proporcionalidad, y eximió de responsabilidad

4 Para profundizar sobre los sucesos ocurridos durante la jornada de protesta es posible consultar el recuento “La noche del 9S”, hecho por el medio informativo Cuestión Pública (2020).

penal a los oficiales que haciendo uso de su fuerza provocan lesiones o muertes (Noticias ONU, 2020). Dicha medida fue profundamente cuestionada por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, ya que solventa la impunidad policial y militar. En medio de la excepcionalidad generada por la pandemia, el gobierno avanzó con una medida que legaliza los abusos de las fuerzas de seguridad.

Mientras la razón de letalidad en Argentina es de 1,9, en Chile 2,7 y en Colombia 3,31, en Perú, la proporción de personas que mueren por COVID 19 entre los afectados es de 11,1. Lo cual demuestra la virulencia y gravedad de la enfermedad en el país. La flexibilización de la cuarentena y el deteriorado sistema de salud, producto de las políticas neoliberales de las últimas décadas, aparecen como las causas más evidentes. La falta de camas de internación y de balones de oxígeno medicinal, son expresión de esta situación (Millán Valencia, 2020). A esto debe sumarse, la delicada situación social. La pobreza alcanzó el 16,5 en 2019, y se proyecta que con el impacto del COVID 19 llegará a 25,8 en 2020 (CEPAL). En tanto, la tasa de desempleo en el segundo trimestre del presente año fue de 8,8. En este contexto, donde los sectores populares por falta de políticas públicas de protección y cuidado se vieron sumamente vulnerados, la transferencia de fondos por parte del Estado a grandes empresas fue ocho veces superior a la que recibieron los sectores de trabajadores (García Sojo & Calderón Castillo, 2020).

En Ecuador el primer caso se presentó el 14 de febrero en Guayaquil. Casi un mes después, el miércoles 11 de marzo, habiendo 20 casos registrados, el presidente, Lenin Moreno, declaró el Estado de Emergencia Sanitaria en el Sistema de Salud por COVID-19. Si bien, la declaratoria implicó medidas restrictivas en la movilidad y el transporte, y cierres fronterizos parciales, fue el 16 de marzo que se decretó el Estado de Excepción. Se declaró la cuarentena obligatoria y el toque de queda desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana. Había más de 200 casos confirmados, y la certeza de que existía transmisión comunitaria. Con el paso de las semanas la cantidad de contagios se multiplicó y el sistema de salud rápidamente quedó desbordado.

A comienzos de abril, Ecuador se convirtió en el país con mayor contagio per cápita en Suramérica, y el primero en número de muertes por millón de habitantes (4,31). Cadáveres en las calles, familias desahuciadas, una población sin insumos ni protección signaron un panorama devastador (Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica - CELAG, 2020). El sistema sanitario no estaba preparado. En los últimos años los recortes presupuestarios al sistema de salud público

fueron en aumento. Con la asunción de Lenin Moreno en mayo de 2017, la inversión pasó de 306 millones de dólares a 201 millones en 2018, y a 110 millones en 2019. Esta disminución del presupuesto de Salud cercana a un 70% fue agudizada por la constante subejecución (Ortega & Ramírez Gallegos, 2020). Las medidas de ajuste implicaron un menor gasto en infraestructura, en insumos, y despidos de personal médico. De esta manera, el modelo neoliberal patrocinado por el FMI, acatado por Lenin Moreno, impugnó los avances en materia sanitaria y social del gobierno anterior, y propició un desmantelamiento que puso en riesgo la vida de la población.

La imposibilidad de quedarse en casa, garantizando el confinamiento, fue la realidad de gran parte de la población. En diciembre del 2019 del total de los trabajadores, el 46,7% estaba en condición de informalidad (Zumba, 2020). La pobreza ese mismo año alcanzó el 25,7% y se proyecta que será el 32,7% en el 2020. Ante esto, las medidas de protección social implementadas por el gobierno fueron mínimas. El bono de protección social de 60 dólares alcanzó a una porción restringida del sector informal. La gran parte de las y los trabajadores subocupados y desocupados tuvo que acudir al espacio público para obtener el sustento familiar. Es así que los vendedores ambulantes fueron atacados por la policía, al momento de llevar sus labores a cabo. Por su parte, el Ministerio de Trabajo acudió al pedido de las empresas en materia de suspensión, reducción de jornada laboral y precarización. Aprovechando la incertidumbre social, los riesgos que conlleva una protesta masiva para las organizaciones sindicales y sociales, el gobierno avanzó con una reforma laboral. En consecuencia, el conjunto de las y los trabajadores se ha visto perjudicado por la disputa con el capital durante la pandemia en términos de contratación, aportes y condiciones laborales.

Lo cierto es que esta situación no es nueva. El gobierno de Lenin Moreno al asumir la presidencia implementó una agenda de austeridad fiscal, afectando los derechos laborales y sociales (Ortíz Crespo, 2020). Aprobó la Ley de Fomento Productivo, beneficiando a los grandes empresarios, y acordó un préstamo con el FMI. En contrapartida profundizó el ajuste, las privatizaciones y la flexibilización laboral. En ese contexto, a comienzos de octubre del 2019, el paro de transportistas, ante el aumento de los precios de combustible por la eliminación de subsidios, se convirtió en la punta de lanza de un gran levantamiento indígena y popular. El rechazo a las medidas del gobierno se masificó. Quito se transformó en el escenario principal de los enfrentamientos y protestas, espacio signado por la osadía popular

y la represión estatal. Las diferencias entre los sectores vinculados al Correísmo y el movimiento indígena referenciado con la CONAIE estuvieron presentes, sin embargo, el rechazo al Lenin Moreno y al FMI fue uno.

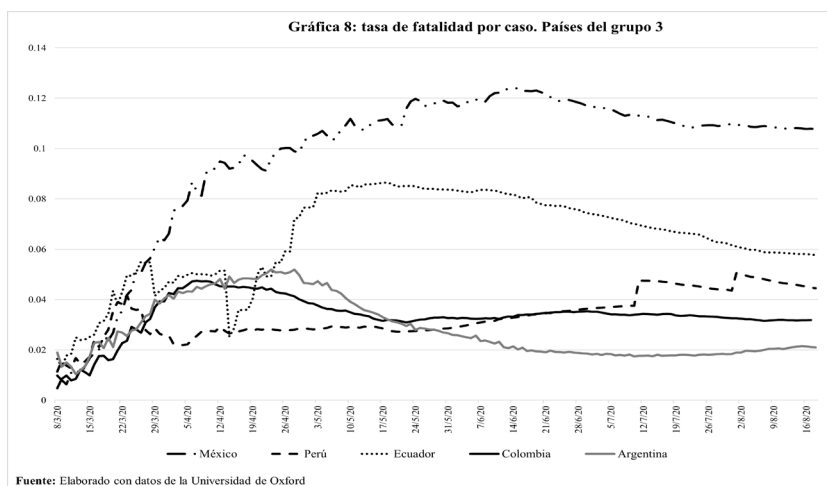
Finalmente, el masivo paro de once días y las movilizaciones multitudinarias lograron que el presidente derogue el Decreto 883, se eliminó el alza de los combustibles, pero no impidió que el gobierno continúe con el ajuste digitado por el FMI. Sí, dio lugar a una reconfiguración del movimiento plurinacional, limitando la orientación saqueadora del gobierno, y deteriorando sus bases de apoyo. El desgaste del gobierno, desde aquel momento a la fecha, fue en aumento. La desaprobación al gobierno nacional en Julio 2020 superó el 80%, siendo una de las más altas de la región, seguida por Chile. 71,7%. Sin duda, la pésima gestión de la pandemia acrecentó dicho malestar.

Con la propagación de la COVID-19 quedó de manifiesto las profundas desigualdades que vive el pueblo ecuatoriano. Según una encuesta de CELAG, el 70,6% de la población redujo parte de sus ingresos y el 6,7% directamente ha dejado de percibir ingresos (Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica - CELAG, 2020). En los últimos meses, profesionales y trabajadores de la salud se han manifestado, exigiendo las medidas de protección adecuadas. También hubo protestas educativas por recortes presupuestario, y cacerolazos en barrios y ciudades, al tiempo que el gobierno pagó 326 millones de dólares de deuda externa. Del mismo modo que en Chile, los policías y militares que en el 2019 reprimieron las protestas, durante la pandemia ocuparon las calles y carreteras, en nombre del cuidado. En el curso de los meses, ante las protestas pacíficas por el abandono a la población en término de salud, alimentos, educación y trabajo, por parte del Estado, la respuesta fue la represión (Nodal, 2020).

En simultáneo, diversos sectores sociales organizaron trueques y espacios de ayuda mutua. El movimiento campesino indígena concentró sus energías en el cuidado de las comunidades, a través de la producción de alimentos y la protección territorial de los contagios. Mientras, el escenario electoral 2021 fue ganando terreno público. El movimiento plurinacional indígena, protagonista de las luchas del 2019, no configuró una plataforma representativa, y en sintonía con el gobierno de Estados Unidos, crecieron los intentos prescriptivos hacia Rafael Correa por parte de la derecha. Con el transcurso de los meses, ante el desgaste de la figura de Lenin Moreno, se fueron modelando nuevas representaciones con el fin de renovar el proyecto neoliberal.

Por su parte, México se convirtió en uno de los cuatro países con

más casos reportados de COVID-19 en América Latina, con 600.000 contagios confirmados y más de 64.000 víctimas fatales al terminar agosto, lo que lo ubica con la mayor tasa de fatalidad por caso entre los países del grupo 3 (gráfica 8). El primer caso fue reconocido el 27 de febrero, aunque las medidas más fuertes apenas fueron implementadas el 30 de marzo con el inicio de la Jornada Nacional de Sana Distancia, en medio de fuertes cuestionamientos por la actitud personal del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien alentó a la gente a salir a restaurantes y se negó a cancelar las masivas concentraciones que caracterizan sus visitas a las diferentes regiones del país hasta poco días antes del inicio de una cuarentena no forzosa.



La pandemia arribó en el contexto de un gobierno que se reconoce a sí mismo como “antineoliberal”, carácter compartido con Argentina, el cual, como en Brasil, no declaró a nivel nacional medidas coercitivas tipo multas o toque de queda para reducir la movilidad y más bien apeló al buen juicio de las y los ciudadanos para que se quedaran en casa. El gobierno de López Obrador generó muchas esperanzas en 2018 cuando por primera vez en un siglo llegaba al poder un político de izquierda con una colectividad política diferente al Partido Revolucionario Institucional, PRI, y al Partido de Acción Nacional, PAN, únicos dos que han ocupado la silla presidencial desde los años treinta del siglo pasado.

Bajo tales circunstancias, se esperaba que la pandemia hubiese sido menos lesiva y que su gestión hubiese encarado directamente la

destitución de la lógica neoliberal como eje rector de lo estatal. Sin embargo, tales expectativas estuvieron lejos de cumplirse, pues la persistencia de la pobreza y la pobreza extrema, que en 2019 afectó al 49,1% y 11% respectivamente, determinaron un marco nada halagador para enfrentar la COVID-19.

De fondo se encuentran problemas como la recesión económica previa que dejó un saldo de -0,1% en el crecimiento del PIB durante 2019, la continua precarización de las condiciones laborales con el 56,1% de informalidad, y un salario mínimo real que en la actualidad representa el 38% del que existió en 1980 (Díaz Carreño, 2020), pese al incremento del 20% decretado a principios de 2020. Estos hechos contribuyeron a que México se convirtiera en el país con menor cumplimiento de las medidas de distanciamiento social en la región a finales de abril (Traeder, 2020), cuando el país alcanzó los 1.000 contagios diarios y comenzó el crecimiento acelerado.

El grave problema de salud pública que significan la obesidad, padecida por el 73% de la población mexicana, y la diabetes, primera causa de muerte entre las mujeres y la segunda en los hombres, ha hecho que el porcentaje de víctimas por COVI-19 de menores de 60 años haya sido más alto que en la mayoría de los países. Hasta septiembre el 48% de las muertes se ubicaron en ese rango de edad, cuando la media de Europa fue 5% y países como Argentina registraron un 25% de víctimas fatales.

En materia de ayudas económicas, México fue, hasta julio de 2020, el país que mayor porcentaje entregó directamente a las y los trabajadores con un 90%, no obstante, fue uno de los que dispuso menor cantidad de recursos para atender este frente de la pandemia, con recursos que alcanzaron el 2,8% del PIB (García Sojo & Calderón Castillo, 2020). Esto se enmarca en el importante paquete de asistencia económica dirigido a sectores de bajos ingresos que siempre ha caracterizado a la política social mexicana y el cual ha sido reforzado por el gobierno actual; la cual, no obstante, ha sido utilizada con fines de lealtad electoral y como gran espacio de corrupción en cabeza de dirigentes del PRI, el PAN y de la que no escapa el Movimiento Regeneración Nacional, MORENA, el partido del presidente Obrador, pese a que él mismo se ha comprometido de manera personal en la lucha contra la corrupción y existen nuevos instrumentos legales para contrarrestarla. Esta situación evidencia una de las tantas tensiones que atraviesan al partido de gobierno y sus aliados.

Bajo la bandera anticorrupción y el criterio de “austeridad republicana”, el gobierno nacional aplicó durante sus primeros 18 me-

ses sendos recortes presupuestales que dejaron magros recursos en carteras como salud o educación, y provocó la continua movilización del personal médico y de enfermería ante la falta de insumos para enfrentar la crisis por la COVID-19. En junio de 2020 fueron anunciados nuevos recortes del 75% en los gastos corrientes para el próximo año, lo que afectará tanto al Instituto Mexicano de Seguros Sociales como al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, las dos instituciones públicas más importantes del sector salud y de seguridad social (Raziel, 2020).

En contraste, el gran capital ha salido beneficiado en medio de la pandemia, particularmente el magnate Carlos Slim, con el que López Obrador ha tenido relación desde la época en la que fue jefe de gobierno de la Ciudad de México. Entre abril y junio la riqueza de Slim se incrementó en US\$1.650 millones, gracias a la rentabilidad en la bolsa de valores y en telecomunicaciones que reportó ganancias de más del 70% durante la pandemia. Otra fuente de ingresos fue el Estado, pues los contratos pagados con recursos públicos y obtenidos por varias de las empresas de este conglomerado pasaron de US\$97 millones en 2019 a poco más de US\$852 millones en 2020, un incremento de 778% (De la Rosa, 2020).

Lo anterior se conjugó con la continuación de megaproyectos como el Tren Maya, lesivo para la biodiversidad y los intereses de pueblos indígenas, o el creciente protagonismo económico de las Fuerzas Armadas antes y durante la pandemia, pues están al frente de la construcción del Nuevo Aeropuerto, recibieron recursos de la Secretaría de Hacienda para el manejo de hospitales COVID-19 y tendrán un crecimiento de 18% en su presupuesto para 2021 (Arturo, 2020). También resulta preocupante el acuerdo presidencial emitido en mayo de 2020 según el cual el Ejército y la Marina, subordinados al poder civil y por cinco años mientras se configura la Guardia Nacional, podrían asumir funciones de policía como participar en operativos para restablecer el orden, vigilar aeropuertos, zonas fronterizas, carreteras federales o parques nacionales, así como realizar detenciones o asegurar bienes asociados con delitos (Ángel & Pradilla, 2020).

Además de la militarización de la vida, el cuestionamiento central está en la inexistencia de controles claros desde lo civil en el contexto de dos fuerzas reconocidas históricamente por sendas violaciones de derechos humanos, como la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en 2014. Se trata de hechos que ponen en duda la ruptura real con el neoliberalismo y el autoritarismo, tal y como lo proclama el presidente López Obrador.

GRUPO 4: DOS EXCEPCIONES

En este escenario virulento, hallamos dos países adyacentes, que conforman una continuidad territorial colindante al Océano Atlántico, y que, sin embargo, han vivido realidades opuestas. Brasil, el país con el mayor número de habitantes y superficie continental de América Latina, tuvo el mayor número de contagios y muertes por Coronavirus. Mientras, Uruguay, país que comparte la frontera norte con Brasil, ha sido el que menos número de casos confirmados tuvo (Ríos, 2020). Esta situación peculiar nos conduce a analizar las políticas llevadas a cabo por los gobiernos, como así, las condiciones socio económicas de la población, con el fin de presentar un panorama preliminar para un futuro análisis detallado.

El primer país que anunció medidas de excepcionalidad ante el avance del COVID-19 fue Brasil, anticipando por varias semanas la aparición de un primer contagio en su territorio. Lo hizo según las orientaciones de la OMS y teniendo en cuenta la sospecha de dieciséis casos al 4 de febrero, fecha de la declaratoria de Emergencia de Salud Pública de Importancia Nacional. El 26 de febrero se anunció el primer caso y tras su confirmación, se desplegaron medidas de vigilancia epidemiológica. Con la declaración de estado de transmisión comunitaria el 20 de marzo en todo el territorio, el Estado brasileño desplegó el Centro de Operaciones Conjuntas para coordinar y planificar el trabajo de las Fuerzas Armadas. De esta forma, en abril inició la “Operación COVID-19” con la participación de 34.000 militares para labores de asistencia médica y logística (Valadares Caiafa, 2020).

Este despliegue militar se realizó en un contexto político caracterizado por el negacionismo presidencial y el incentivo al uso de medicamentos no probados para el tratamiento de los síntomas, incluso en el momento en que él mismo, su familia y sus funcionarios padecieron la enfermedad. Así contribuyó a la lenta adopción de las medidas necesarias, convirtiéndose en el segundo país más afectado a nivel mundial después de Estados Unidos. Dos meses después de anunciar el primer caso, Brasil cruzó la barrera de los 10.000 contagios diarios y en la tercera semana de julio llegó a reportar hasta 70.000 personas enfermas por día. El rápido crecimiento de la enfermedad también estuvo determinado por el errático desarrollo de la cuarentena en un contexto de desigualdad extrema y crisis política interna. Según cifras oficiales el desempleo en el segundo trimestre superó el 13%. Y la pobreza que en 2019 alcanzó el 19,2%, en el presente año se estima que llegará al 26,9% de la población, es decir a 57 millones de personas (Bárcena, 2020).

Mientras que Bolsonaro desestimó la enfermedad y desarrolló una campaña abierta contra las recomendaciones de la OMS con la convocatoria a varias movilizaciones a su favor y un amplio trabajo en redes sociales, los gobernadores de los 27 estados del país tomaron medidas, desafiaron al presidente y decretaron la de cuarentena obligatoria en las capitales el 25 de marzo. Las medidas restrictivas fueron de corta duración pues el 22 de abril ocho gobernadores, incluido Distrito Federal, declararon aperturas, mientras los estados más afectados, entre ellos Sao Paulo y Río de Janeiro, decidieron mantener el confinamiento hasta el 31 de mayo. Los planes de reapertura se reafirmaron en julio, el peor momento de la pandemia y a partir de esa fecha el número de contagios diarios se ha estancado alrededor de los 15.000 casos. En este contexto, varios funcionarios, entre ellos dos ministros de salud y cargos militares, renunciaron al gobierno. Abriéndose así una crisis de legitimidad, difícil de estimar su alcance.

Por su parte, el primer caso detectado en Uruguay fue el 13 de marzo tras el regreso de una ciudadana de un viaje de España e Italia. Ese mismo día hubo tres confirmados más en Montevideo y Salto. La situación parecía ser similar a la que comenzaban a transitar otros países del continente, pero no. El control epidemiológico desarrollado por el país oriental lo ha convertido en una excepcionalidad, en el marco de la catástrofe regional. El mismo día que se detectó el primer contagio el gobierno declaró el Estado de Emergencia Nacional Sanitaria. Lacalle Pou, quien asumió la presidencia el 1° de marzo como candidato del Partido Nacional, reunió un equipo asesor de especialistas y científicos. De inmediato implementaron medidas: restricción de vuelos, interrupción de clases, cierre de fronteras, y prohibición de eventos públicos. Sin embargo, nunca se decretó el confinamiento obligatorio.

Con una tasa de letalidad menor al 3%, Uruguay se convirtió en un caso insólito. No sólo estuvo entre los países con menor razón de letalidad del continente, sino que logró hacerlo sin decretar el aislamiento obligatorio (Datos Macro, 2020). Uno de los elementos que permiten explicar esta situación es la amplia infraestructura sanitaria existente. La cartera de salud ronda el 10% del PIB, siendo el segundo país que más invierte de la región, después de Cuba (Noticias Presidencia Uruguay, 2019). Cuenta con un consistente sistema de vigilancia epidemiológica, y un sistema nacional de cuidados referente en la región. A su vez, tiene uno de los sistemas de protección social más integrales de América Latina. Este acumulado histórico de derechos civiles y sociales, correspondiente a la cristalización de las luchas po-

pulares en las funciones estatales, resultó favorable. La articulación de dichas políticas permanentes, como son las asignaciones familiares, los seguros de enfermedad y desempleo garantizaron un escenario beneficioso. Lo cual no significa que la realidad de los sectores populares sea óptima, de hecho, la desocupación del primer trimestre del 2020 alcanzó 9,4%, 0,6 puntos más que el mismo trimestre del 2019 (8,8%). Pero sí da cuenta de que ciertos derechos básicos tienden a ser garantizados por el Estado.

También la baja densidad poblacional colaboró en el control de brotes. La distribución demográfica de los tres millones y medio de habitantes uruguayos, la ausencia de grandes focos de hacinamiento fue muy importante (Anarte, 2020). No así definitoria. Resulta pertinente considerar el éxito relativo a partir de la conjugación de múltiples variables virtuosas. En ese sentido, es clave destacar que en simultáneo a la declaración del Estado de Emergencia Nacional y la emisión de partidas presupuestarias extraordinarias, cuestiones que también se implementaron en otros países estudiados, se impulsaron campañas de sensibilización y cuidados que tuvieron una rápida apropiación social (Che & Pelin Berkmen, 2020). Por consiguiente, notamos que los buenos resultados que obtuvo Uruguay ante la pandemia corresponden a una multicausalidad que excede lo coyuntural. Se entrecruzan antecedentes sociales, paradigmas y políticas de larga duración, con medidas preventivas precisas. Singularidad que permitió reducir el contagio y la tasa de mortalidad por COVID-19, a la vez que moderó los niveles de deterioro socio económico.

CONCLUSIONES

Las respuestas de los Estados a la crítica situación de América Latina durante los primeros seis meses de la pandemia por COVID-19, si bien tuvieron matices, se desarrollaron en un espectro marcado por el creciente autoritarismo y la imposibilidad de resolver la profundización de una crisis humanitaria previamente existente, asociada a la desigualdad, la pobreza, la precarización laboral y a sistemas de salud deteriorados que han quedado como saldo en más de cuatro décadas de neoliberalismo a nivel continental.

En todos los países estudiados los sectores con mayores niveles de pobreza, desocupación e informalidad tuvieron menos chances de respetar el confinamiento promovido por los gobiernos, lo que generó una dinámica de refuerzo negativo mutuo entre desempleo y pandemia que crecieron conjuntamente amenazando con elevar la pobreza y la desigualdad. Los altos niveles de desempleo y subocupación,

producto de la sobre explotación de fuerza de trabajo en la región, hicieron imposible el confinamiento masivo pese a medidas económicas como ayudas alimentarias, adelantos de subsidios directos y, en algunos casos, transferencias monetarias directas a trabajadores-as informales y desocupados-as. Las necesidades básicas insatisfechas de la población pusieron en tensión el confinamiento obligatorio y millones de trabajadores y trabajadoras a lo largo y ancho del continente, al no recibir una respuesta efectiva por parte de los Estados, se vieron obligados-as a exponerse al virus y al hostigamiento policial, para conseguir sustento económico. No hubo políticas públicas integrales dirigidas a solventar esta situación, pero sí políticas de control y disciplinamiento, cuyo despliegue no tuvo la eficacia anunciada en la contención de la enfermedad.

Todos los gobiernos de los casos estudiados habilitaron atribuciones y herramientas a las fuerzas armadas y policiales más allá de lo permitido por los regímenes de democracia liberal, no sólo para dar respuesta a la pandemia sino para contener la movilización en ascenso del último quinquenio, así como relegitimarse y afrontar sus propios trances políticos. El resultado final fue un despliegue masivo del pie de fuerza, el incremento permanente en las violaciones de derechos humanos y la militarización del continente, tanto a nivel interno por las tareas de control y represión para el cumplimiento de la cuarentena, como en las fronteras.

Particularmente graves resultaron los confinamientos en centros especializados, pero sin garantías sanitarias ni de respeto de la libertad, las detenciones masivas y la brutalidad policial con la que fueron reprimidas las movilizaciones también crecientes durante la pandemia, muchas de ellas motivadas por el hambre. Dichas disposiciones, cuestionadas por organismos de derechos humanos y organizaciones sociales, podrían convertirse a posteriori en un aspecto orgánico de la vida “democrática” de los Estados latinoamericanos, garantizando la impunidad de las fuerzas represivas.

La pandemia por Coronavirus convirtió a América Latina en un territorio enlistado para la guerra y bajo toque de queda. En el recorrido realizado evidenciamos que excepto Uruguay -único país que logró mantener la pandemia a raya-, todos los demás apelaron al toque de queda con duraciones y alcances territoriales diferentes (tabla 5). De los catorce países abordados, cinco vivieron toques de queda dictados desde lo local; en caso como Brasil, uno de los que menos restricciones tuvo, fueron afectadas hasta diecinueve de las veintiséis capitales estatales.

Tabla 5 Toque de queda e indicadores de pandemia por COVID-19 en América Latina

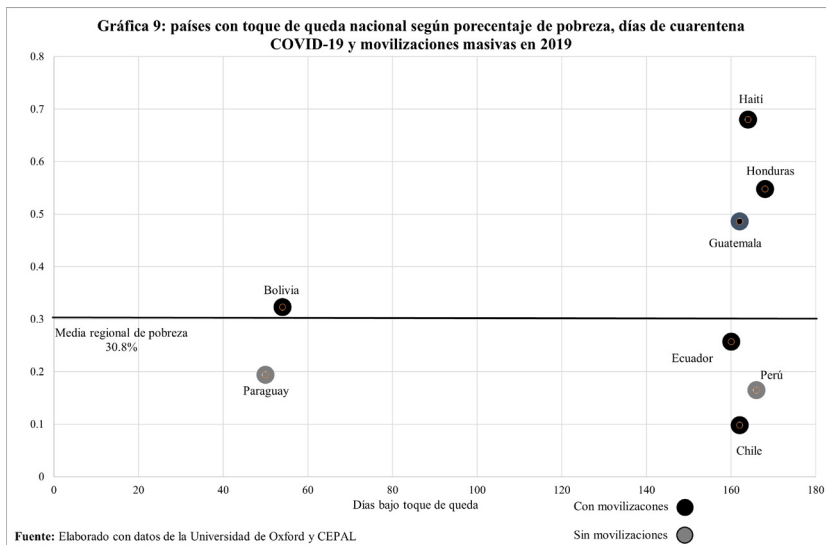
Ambito del toque de queda	País	Caso por millón de habitantes*	Muertes por millón de habitantes*
No tuvo	Uruguay	456.2	10.9
Local	El Salvador	3,966.7	91.7
	Argentina	8,877.5	120.1
	México	4,621.3	433.6
	Colombia	11,947.8	284.8
	Brasil	18,170.5	501.1
Nacional	Haití	719.9	17.2
	Paraguay	2,410.8	15.1
	Guatemala	4,125.6	130.7
	Honduras	6,075.4	156.3
	Ecuador	6,441.5	341.8
	Bolivia	9,934.7	332.7
	Perú	19,627.8	784.2
	Chile	21,446.4	540.9

Fuente: elaboración propia con datos de la Universidad de Oxford

***Datos a 31 de agosto de 2020**

Ahora bien, de los ocho países con toques de queda nacionales, seis se mantuvieron de manera permanente desde el inicio de la ex-

cepcionalidad política y hasta el final de los primeros seis meses de la pandemia. La gráfica 9 muestra tales los casos según el número de días y la pobreza registrada en 2019. Se observa que el porcentaje de población en situación de pobreza no tiene incidencia en la prolongación del toque de queda, aunque resulta evidente que Haití y Honduras, los países más pobres del continente, tuvieron también los toques de queda más prolongados. En cambio, la gráfica sugiere que la extensión de la restricción total de movimiento por toque de queda se vincula más a la existencia previa de movilizaciones, pues seis de estos países fueron escenarios de sendas protestas ante crisis de políticas internas en 2019. Adicionalmente, en todos los casos, menos en Bolivia y Paraguay, el toque de queda se mantuvo pese al avance en procesos de reapertura y desconfinamiento paulatino que ocurrieron a partir de mayo.



Se establece así un modelo general de afrontamiento de la pandemia para este grupo de países: cuarentena militarizada con toque de queda y altos niveles de represión que logró contener el contagio en un periodo inicial, para luego registrar un crecimiento sostenido tras una apertura obligada por las necesidades del capital, el creciente desempleo y la precarización en las condiciones de vida de la población. A la par, se evidencia la poca efectividad de las medidas represivas para contener la pandemia, pues en todos los casos el número de contagios creció aún con toques de queda nocturnos vigentes, cuya

funcionalidad fue más política que sanitaria.

Si bien otros países en el mundo han hecho uso del toque de queda para afrontar la pandemia, lo preocupante en el caso latinoamericano es su vínculo inextricable con la historia reciente de dictaduras y guerras internas, todas marcadas por la lógica del enemigo interno y de la lucha contrainsurgente. Como evidenciamos a lo largo del artículo, tales rasgos salieron a flote en las medidas de control policivo y militar, exacerbadas además por el contexto del nuevo ciclo de luchas populares.

A contracara de la represión, la gestión de la pandemia entregó sendas garantías al capital ante la crisis económica en avance, cuyo impacto, según la CEPAL, será superior a las de la Gran Depresión. Tal fenómeno debe ser comprendido en un escenario global de acumulación por desposesión cada vez más agresivo dado que el capital ha encontrado un límite preciso en las medidas de confinamiento decretadas. Ahora bien, la regeneración económica exigirá una masa laboral más flexibilizada y precarizada, es decir, una fuerza de trabajo barata y maleable, en pos de ser empleada sin necesidad de garantizar los derechos básicos conquistados por los pueblos durante décadas. El riesgo de las nuevas atribuciones asignadas a las fuerzas represivas condice con los intereses de las clases dominantes. Es posible que los paradigmas represivos y persecutorios hacia las clases subalternas, que comienzan a afirmarse en pandemia, sean un nuevo requisito del capital para desplegarse en el continente. Sin embargo, también se enfrenta a un continente de pueblos que no han dejado nunca de luchar contra el neoliberalismo, por los derechos de las personas y la naturaleza, por una vida digna.

BIBLIOGRAFÍA

ADN Paraguay. (29 de Junio de 2020). *Villamayor: Toque de queda no; restricción de actividades sociales, puede ser*. Obtenido de ADN Paraguay: <https://www.adndigital.com.py/villamayor-toque-de-queda-no-restriccion-de-actividades-sociales-puede-ser/>

Agencia EFE. (9 de Septiembre de 2020). *Guatemala ha recibido 5.162 migrantes deportados de EE.UU. durante la pandemia*. Obtenido de Agencia EFE: <https://www.efo.com/efe/america/sociedad/guatemala-ha-recibido-5-162-migrantes-deportados-de-ee-uu-durante-la-pandemia/20000013-4339121>

Agencia EFE. (16 de Marzo de 2020). *Paraguay restringe movimientos en "lo más parecido" a un toque de queda*. Obtenido de Yahoo Noticias: <https://es-us.noticias.yahoo.com/paraguay-restringe-movi->

mientos-parecido-toque-180335396.html

Alemán, M., & Sherman, C. (18 de Mayo de 2020). *Centros de contención de El Salvador son focos de contagio*. Obtenido de The San Diego Union-Tribune: <https://www.sandiegouniontribune.com/en-espanol/noticias/story/2020-05-18/centros-de-contencion-de-el-salvador-son-focos-de-contagio>

Alonso Bravo, D. (26 de Octubre de 2019). *La marcha más grande en la historia de Chile*. Obtenido de Página 12: <https://www.pagina12.com.ar/227481-la-marcha-mas-grande-en-la-historia-de-chile>

Anarte, E. (19 de Agosto de 2020). *La receta del éxito de Uruguay contra la pandemia de COVID-19*. Obtenido de DW: <https://www.dw.com/es/la-receta-del-%C3%A9xito-de-uruguay-contra-la-pandemia-de-covid-19/a-54627219>

Ángel, A., & Pradilla, A. (12 de Mayo de 2020). *AMLO legaliza intervención militar en 12 tareas policiales; ONG acusan falta de plazos y controles*. Obtenido de Animal Político: <https://www.animalpolitico.com/2020/05/amlo-legaliza-intervencion-militar-tareas-policiales/>

Arturo, Á. (9 de Septiembre de 2020). *El próximo año militares tendrán más recursos; cae presupuesto para víctimas y policía civil*. Obtenido de Animal Político: <https://www.animalpolitico.com/2020/09/presupuesto-guardia-nacional-militares-victimas-policia/>

AS. (11 de Mayo de 2020). *Cuarentena Colombia: ¿Cuántos comparendos se han puesto en el país?* Obtenido de AS : https://colombia.as.com/colombia/2020/05/12/actualidad/1589244478_847965.html

Asmann, P. (23 de Julio de 2020). *Alianza de pandillas G9 en Haití, ¿una bomba de tiempo?* Obtenido de InSight Crime: <https://es.insight-crime.org/noticias/analisis/pandillas-g9-haiti-bomba-tiempo/>

Bárcena, A. (15 de Julio de 2020). *Enfrentar los efectos cada vez mayores del COVID-19 para una reactivación con igualdad: nuevas proyecciones*. Obtenido de Comisión Económica para América Latina y el Caribe - CEPAL: https://www.cepal.org/sites/default/files/presentation/files/final_200714_version_revisada_ab-ppt_informe_covid_5_15_julio.pdf

Barría, C. (4 de Febrero de 2020). *El país con el desempleo más bajo de América Latina (y por qué es una paradoja)*. Obtenido de BBC News Mundo: <https://www.bbc.com/mundo/noticias-51318832>

BBC News Mundo. (4 de Septiembre de 2020). *Paraguay: el controvertido operativo de Paraguay contra la guerrilla que dejó dos niñas muertas*. Obtenido de BBC News Mundo: <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-54034964>

Cano, L. (21 de Abril de 2020). *Los abusos policiales en tiempos*

de cuarentena. Obtenido de Fundación Paz y Reconciliación: <https://pares.com.co/2020/04/21/los-abusos-policiales-en-tiempos-de-cuarentena/>

Cárdenas Salgado, G. J., Espinosa, L. A., José, L. N., & Serrano, C. (7 de Octubre de 2019). *Infografía Migración y Remesas en Centroamérica*. Obtenido de BBVA Research: <https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/infografia-migracion-y-remesas-en-centroamerica/#:~:text=En%202018%20Centroam%C3%A9rica%20recibi%C3%B3%20m%C3%A1s,%25%3B%20y%20Belice%2C%205.0%25>

Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica - CELAG. (18 de Septiembre de 2020). *Encuestas CELAG: América Latina en tiempos de Pandemia*. Obtenido de Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica - CELAG: <https://www.celag.org/encuestas-celag-america-latina-en-tiempos-de-pandemia/>

Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica - CELAG. (11 de Abril de 2020). *Geografía política del coronavirus en América Latina*. Obtenido de Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica - CELAG: <https://www.celag.org/geografia-politica-de-coronavirus-en-america-latina/>

Che, N., & Pelin Berkmen, S. (3 de Agosto de 2020). *El secreto del éxito de Uruguay contra el COVID-19*. Obtenido de Diálogo a Fondo: <https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=13865>

Chumil, K. (11 de Septiembre de 2020). *En casi seis meses más de 40 mil fueron capturados por infringir el toque de queda*. Obtenido de Prensa Libre: <https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/en-casi-seis-meses-mas-de-40-mil-fueron-capturados-por-infringir-el-toque-de-queda/>

Comando General Fuerzas Militares de Colombia. (13 de Abril de 2020). *Mindefensa realiza balance de acciones de la Fuerza Pública durante emergencia por Covid-19*. Obtenido de Comando General Fuerzas Militares de Colombia: <https://www.cgfm.mil.co/es/blog/mindefensa-realiza-balance-de-acciones-de-la-fuerza-publica-durante-emergencia-por-covid-19>

Comité de Familiares Detenidos Desaparecidos - COFADEH. (1 de Abril de 2020). *Informe 2 - Del Mitch al golpe y de la pandemia al autoritarismo contra los Derechos Humanos*. Obtenido de Rel UITA: http://rel-uita.org/pdfs/20200521_INFORME_HONDURAS_Covid19.pdf

Congreso Nacional de Honduras. (4 de Abril de 2020). *Decreto N° 32-2020*. Obtenido de Tribunal Superior de Cuentas: <https://www.tsc.gob.hn/covid19/index.php/descarga-decretos-pcm-s>

Coronado, E. (27 de Abril de 2020). *Presidente reveló que 17 de cada cien personas no cumple en su totalidad la cuarentena*. Obtenido de Prensa Libre: <https://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/giammattei-revelo-que-17-de-cada-cien-personas-en-cuarentena-no-cumple-en-su-totalidad/>

Datos Macro. (20 de Agosto de 2020). *Uruguay - COVID-19 - Crisis del coronavirus*. Obtenido de Datos Macro: <https://datosmacro.expansion.com/otros/coronavirus/uruguay>

De la Rosa, T. (27 de Agosto de 2020). *Carlos Slim, el empresario del presidente*. Obtenido de Eje Central: <https://www.ejecentral.com.mx/la-portada-carlos-slim-el-empresario-del-presidente/>

Delgado H., G. (7 de Abril de 2020). *Crisis carcelaria en el COVID-19: una bomba de tiempo*. Obtenido de Agencia de Información Laboral - AIL: <https://ail.ens.org.co/informe-especial/crisis-carcelaria-en-el-covid-19-una-bomba-de-tiempo/>

Diario La Huella. (17 de Enero de 2020). *Guatemala replica estrategia del Plan Control Territorial*. Obtenido de Diario La Huella: <https://diariolahuella.com/guatemala-replica-estrategia-del-plan-control-territorial/>

Diario UChile. (18 de Mayo de 2020). *Con represión incluida: vecinos de El Bosque protestan por la falta de alimentos en cuarentena*. Obtenido de Diario UChile: <https://radio.uchile.cl/2020/05/18/con-represion-incluida-vecinos-de-el-bosque-protestan-por-la-falta-de-alimentos-en-cuarentena/>

Díaz Carreño, M. Á. (Abril de 2020). *Inflación y salarios reales en México, 2015-2020*. Obtenido de Economía Actual - Centro de Investigación en Ciencias Económicas UAEMEX: http://economia.uaemex.mx/Publicaciones/e1302/Inflacion_y_salarios_reales_en_Mexico.pdf

Dinero. (25 de Mayo de 2020). *UNGRD completó un millón de ayudas entregadas durante la emergencia*. Obtenido de Dinero: <https://www.dinero.com/pais/articulo/cual-es-el-balance-de-las-ayudas-humanitarias-en-colombia-durante-coronavirus/286718>

Dinero HN. (19 de Septiembre de 2020). *Desempleo abierto se duplicará este año de 5.7 a 13% con más de 565.000 afectados: Trabajo*. Obtenido de Dinero HN: <http://dinero.hn/desempleo-abierto-se-duplicara-este-ano-de-57-a-13-con-mas-de-565-000-afectados-trabajo/>

DW. (14 de Mayo de 2020). *Colombia: crisis sanitaria en el Amazonas*. Obtenido de DW: <https://www.dw.com/es/colombia-crisis-sanitaria-en-el-amazonas/av-53430730>

DW. (21 de Marzo de 2020). *Con tres casos confirmados, El Salvador cava 118 tumbas para eventuales muertos por COVID-19*. Obtenido de

DW: <https://www.dw.com/es/con-tres-casos-confirmados-el-salvador-cava-118-tumbas-para-eventuales-muertos-por-covid-19/a-52867353>

DW. (19 de Mayo de 2020). *Corte Suprema de El Salvador suspende estado de emergencia prorrogado por Bukele*. Obtenido de DW: <https://www.dw.com/es/corte-suprema-de-el-salvador-suspende-estado-emergencia-prorrogado-por-bukele/a-53490506>

DW. (16 de Abril de 2020). *El Salvador: Bukele enfrentado, ahora, con la Corte Suprema de Justicia*. Obtenido de DW: <https://www.dw.com/es/el-salvador-bukele-enfrentado-ahora-con-la-corte-suprema-de-justicia/a-53156005>

DW. (3 de Abril de 2020). *El Salvador: denuncian restricciones a la prensa durante emergencia por coronavirus*. Obtenido de DW: <https://www.dw.com/es/el-salvador-denuncian-restricciones-a-la-prensa-durante-emergencia-por-coronavirus/a-53001593>

Efecto Cocuyo. (10 de Agosto de 2020). *Bolivia despliega militares para escoltar personal de salud ante protestas*. Obtenido de Efecto Cocuyo: <https://efectococuyo.com/coronavirus/bolivia-despliega-militares-para-escoltar-personal-de-salud-ante-protestas/>

El Día. (26 de Mayo de 2020). *Villa Azul, el asentamiento cercado por 300 policías, un caso que se podría extender*. Obtenido de El Día: <https://www.eldia.com/nota/2020-5-26-2-37-33-villa-azul-el-asentamiento-cercado-por-300-policias-un-caso-que-se-podria-extender-informacion-general>

El País. (15 de Febrero de 2019). *Haití suma más de una semana de protestas contra el Gobierno de Moise*. Obtenido de El País: https://elpais.com/internacional/2019/02/14/america/1550170003_145275.html

El Tiempo. (14 de Septiembre de 2020). *Policía del país asesora a Paraguay por secuestro de exvicepresidente*. Obtenido de El Tiempo: <https://www.eltiempo.com/justicia/delitos/secuestro-colombia-asesora-en-secuestro-de-exvicepresidente-oscar-denis-537691>

Europa Press. (27 de Mayo de 2020). *Bolivia supera los 7.000 casos de coronavirus tras registrar una cifra récord en un solo día*. Obtenido de Europa Press: <https://www.europapress.es/internacional/noticia-bolivia-supera-7000-casos-coronavirus-registrar-cifra-record-solo-dia-20200527133002.html>

Fest, S. (17 de Septiembre de 2020). *El enigmático secuestro de un ex vicepresidente exhibe uno de los costados oscuros de Paraguay*. Obtenido de El Mundo: <https://www.elmundo.es/internacional/2020/09/16/5f621b7921efa0ae018b47ec.html>

García Sojo, G., & Calderón Castillo, J. (1 de Julio de 2020). *Ayu-*

das estatales y Covid-19 en América Latina. Obtenido de Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica - CELAG: <https://www.celag.org/ayudas-estatales-y-covid-19-en-america-latina/>

Hernández, A. (17 de Julio de 2020). *Cuatro de diez salvadoreños estará en situación de pobreza*. Obtenido de El Economista: <https://www.eleconomista.net/actualidad/Cuatro-de-cada-10-salvadorenos-estara-en-situacion-de-pobreza-20200717-0002.html>

Infobae. (31 de Agosto de 2020). *Mauricio Macri se reunió con Emmanuel Macron y analizaron el impacto del coronavirus sobre las libertades individuales*. Obtenido de Infobae: <https://www.infobae.com/politica/2020/08/31/mauricio-macri-se-reunio-con-emmanuel-macron-y-analizaron-el-impacto-del-coronavirus-sobre-las-libertades-individuales/>

Infobae. (24 de Febrero de 2020). *Policías y militares de Haití se enfrentan a los tiros y convierten la capital en una zona de guerra: al menos dos soldados muertos*. Obtenido de Infobae: <https://www.infobae.com/america/america-latina/2020/02/24/policias-y-militares-de-haiti-se-enfrentan-a-los-tiros-y-convierten-la-capital-en-una-zona-de-guerra-al-menos-dos-soldados-muertos/>

Instituto Nacional de Estadística y Censos - INDEC. (Septiembre de 2020). *Mercado de trabajo. Tasas e indicadores socioeconómicos (EPH)*. Obtenido de Instituto Nacional de Estadística y Censos - INDEC: https://www.indec.gov.ar/uploads/informesdeprensa/mercado_trabajo_eph_2trim20929E519161.pdf

López, C. (23 de Julio de 2020). *Alcaldesa Claudia López anuncia detalles sobre la Renta Básica para Bogotá*. Obtenido de Twitter : https://twitter.com/ClaudiaLopez/status/1286342001026375683?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1286342001026375683%7Ctwgr%5Eshare_3&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.eltiempo.com%2Fbogota%2Fbogota-como-va-la-entrega-de-ayudas-en-la-cuarentena-po

López, E. (17 de Agosto de 2020). *Gobierno de Haití instrumentaliza la pandemia para reprimir a la población*. Obtenido de Avispa Midia: <https://avispa.org/gobierno-de-haiti-instrumentaliza-la-pandemia-para-reprimir-a-la-poblacion/>

Marroquín, L. A., & Tejada, R. (28 de Mayo de 2020). *Bukele amenaza con “reformular el Estado de verdad” luego de la pandemia*. Obtenido de El Salvador.com: <https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/nayib-bukele-amenaza-reformar-estado-el-salvador-luego-pandemia/718493/2020/>

Millán Valencia, A. (12 de Junio de 2020). *Coronavirus en Perú*

- *La escasez de oxígeno por el covid-19 que puso en alerta al gobierno.* Obtenido de BBC News Mundo: <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-53025355>

Ministerio del interior. (9 de Junio de 2020). *Carabineros ha detenido a 155 mil personas en periodo de Pandemia y más de 15 mil sólo en una semana.* Obtenido de Ministerio del Interior de Chile: <https://www.interior.gob.cl/noticias/2020/06/09/carabineros-ha-detenido-a-155-mil-personas-en-periodo-de-pandemia-y-mas-de-15-mil-solo-en-la-ultima-semana/>

Ministerio de Salud y Protección Social. (10 de Marzo de 2020). *Resolución N° 0000380 de 2020.* Obtenido de Ministerio de Salud y Protección Social: https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20380%20de%202020.pdf

Ministerio de Salud y Protección Social. (12 de Marzo de 2020). *Resolución N° 0000385 de 2020.* Obtenido de Ministerio de Salud y Protección Social: <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-385-de-2020.pdf>

Miranda, B. (20 de Junio de 2020). *Crisis en Bolivia: la “guerra declarada” que se vive en Chapare, el bastión de Evo Morales al que el gobierno acusa de “terrorismo” (y cómo lo defiende el expresidente).* Obtenido de BBC News Mundo: <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-53112041>

Nodal. (15 de Mayo de 2020). *Ecuador: represión y detenidos en protestas por los recortes y la emergencia sanitaria.* Obtenido de Nodal : <https://www.nodal.am/2020/05/ecuador-represion-y-detenidos-en-protestas-por-los-recortes-y-la-emergencia-sanitaria/>

Noticias ONU. (1 de Abril de 2020). *El Congreso de Perú debería revisar la nueva ley de protección policial porque abre espacios de impunidad.* Obtenido de Noticias ONU: <https://news.un.org/es/story/2020/04/1472172>

Noticias Presidencia Uruguay. (12 de Julio de 2019). *Inversión en salud representó 9.5% del producto interno bruto en 2018.* Obtenido de Noticias Presidencia Uruguay: <https://www.presidencia.gub.uy/comunicacion/comunicacionnoticias/salud-gasto-pib-rendicion-cuentas-2018>

Ortega, M. L., & Ramírez Gallegos, J. (7 de Abril de 2020). *Desentranando el desborde del coronavirus en Ecuador.* Obtenido de Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica - CELAG: <https://www.celag.org/desentranando-el-desborde-del-coronavirus-en-ecuador/>

Ortíz Crespo, S. (2 de Julio de 2020). *Covid-19 Ecuador: Shock neoliberal y cuarentena perpetua. Apuntes de la coyuntura correspon-*

dientes al primer semestre de 2020. Obtenido de Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales - CLACSO: <https://www.clacso.org/covid-19-ecuador-shock-neoliberal-y-cuarentena-perpetua/>

Prensa Latina. (2 de Agosto de 2020). *Reos en cuarentena por Covid-19 saturan sistema carcelario paraguayo*. Obtenido de Prensa Latina: <https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&i-d=386535&SEO=reos-en-cuarentena-por-covid-19-saturan-sistema-carcelario-paraguay>

Raziel, Z. (1 de Junio de 2020). *Recorte del 75% compromete pagos de servicios básicos del gobierno y arriesga inversiones en salud y ciencia*. Obtenido de Animal Político: <https://www.animalpolitico.com/2020/06/recorte-75-gasto-corriente-pago-servicios-gobierno/>

Ríos, A. M. (11 de Septiembre de 2020). *América Latina y el Caribe: número de casos de COVID-19 por país 2020*. Obtenido de Statista: <https://es.statista.com/estadisticas/1105121/numero-casos-covid-19-america-latina-caribe-pais/>

Sáenz, J., & Rodriguez, A. (3 de Julio de 2020). *Albergues en Paraguay: la trinchera contra el COVID-19*. Obtenido de AP News: <https://apnews.com/article/122c7cb9a893978aa508eb2bc38b20fd>

Saumeth, E. (4 de Julio de 2020). *Colombia reporta 5.700 miembros de sus Fuerzas Armadas contagiados con Covid-19*. Obtenido de Infodefensa: <https://www.infodefensa.com/latam/2020/07/04/noticia-colombia-reporta-miembros-fuerzas-armadas-contagiados-covid19.html>

Secretaría de Defensa Nacional de Honduras . (22 de Julio de 2020). *Refuerzan controles para evitar contagio y propagación del Covid-19*. Obtenido de Secretaría de Defensa Nacional de Honduras: <https://sedena.gob.hn/2020/07/22/refuerzan-controles-para-evitar-contagio-y-propagacion-del-covid-19/>

Secretaría de Defensa Nacional de Honduras. (30 de Julio de 2020). *Tercera fase de Operación Honduras Solidaria presenta un avance del 28% en el Distrito Central*. Obtenido de Secretaría de Defensa Nacional de Honduras: <https://sedena.gob.hn/2020/07/30/tercera-fase-de-operacion-honduras-solidaria-presenta-un-avance-del-32-en-el-distrito-central/>

Traeder, V. (28 de Abril de 2020). *De Argentina a México: ¿dónde se respeta más la cuarentena por coronavirus?* Obtenido de DW: <https://www.dw.com/es/de-argentina-a-m%C3%A9xico-d%C3%B3nde-se-respetam%C3%A1s-la-cuarentena-por-coronavirus/a-53274566>

Valadares Caiafa, R. (11 de Julio de 2020). *Operación Covid-19: la FAB da el equivalente a ocho vueltas al mundo con sus KC-390, C-105*

y C-130. Obtenido de Infodefensa: <https://www.infodefensa.com/latam/2020/07/11/noticia-meses-operacion-covid19-brasil.html>

Villagrán del Corral, G. (16 de Agosto de 2019). *Giammattei confirma que nada cambió en Guatemala*. Obtenido de Rebelión: <https://rebelion.org/giammattei-confirma-que-nada-cambio-en-guatemala/>

Zumba, L. (20 de Agosto de 2020). *Ecuador, a ciegas sobre su mercado informal*. Obtenido de Expreso: <https://www.expreso.ec/actualidad/economia/ecuador-ciegas-mercado-informal-88316.html>

EL ESTADO Y LA REACTIVACIÓN DEL CICLO DE IMPUGNACIÓN AL NEOLIBERALISMO EN AMÉRICA LATINA (2019-2020)

Hernán Ouviaña¹

“Pero antes de que la sociedad nueva se organice,
la quiebra de la sociedad actual precipitará a la humanidad
en una era oscura y caótica”
José Carlos Mariátegui

¿FIN DE CICLO O REIMPULSO? ¡SÍ, POR FAVOR!

En nuestro libro anterior editado como Grupo de Trabajo, planteamos a modo de hipótesis general la existencia de un largo Ciclo de Impugnación al Neoliberalismo en América Latina (CINAL), que si bien incluía como referencia ineludible y de enorme gravitación a la victoria electoral, el ascenso y la consolidación de los gobiernos denominados progresistas en la región (inaugurados con el triunfo de Hugo Chávez en la urnas en 1998), advertíamos que dicha fase de disputa y confrontación se iniciaba antes de este proceso, teniendo como punto de partida y grado cero a las rebeliones y luchas populares de carácter antineoliberal que los antecedieron, y que incluso en muchos casos dotaron de sentido a estos gobiernos y permitieron que pudiesen sostenerse en el tiempo (Ouviaña y Thwaites Rey, 2018).

Del Caracazo en 1989 a los estallidos y procesos destituyentes en Ecuador iniciados con el levantamiento del Inti Raymi en 1990, de la guerra del agua y del gas de 2000 y 2003 en Bolivia a la insurrección popular de 2001 en Argentina -por mencionar sólo los casos más emblemáticos-, en la mayoría de estos países crisis políticas y socioeconómicas inéditas se combinaron con una abrupta activación

1 Político, doctor en ciencias sociales y educador popular. Profesor de la Carrera de Ciencia Política e Investigador del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe de la Universidad de Buenos Aires.

de masas, a través de variados y originales repertorios de protesta, donde altos grados de espontaneidad dieron lugar, con el correr de los años, a novedosas estructuras organizativas y tramas de sociabilidad alternativa. Luego de una ardua y subterránea resistencia desde abajo, en gran parte de la región accedieron al gobierno fuerzas de centro-izquierda, coaliciones progresistas y líderes ajenos a las estructuras políticas tradicionales, que hicieron de la retórica antineoliberal un pivote fundamental de sus proyectos de transformación.

En lugar de delimitar dos momentos antagónicos cerrados y acotados en el tiempo (neoliberal y pos-neoliberal), consideramos que resulta más pertinente plantear la cuestión en términos de la disputa hegemónica que se desarrolló en esos años de norte a sur del continente y que aún continúa abierta. Así, nuestro enfoque parte de una perspectiva gramsciana e incorpora en la confrontación política, económica y sociocultural que todavía está en curso, no solo a los procesos de lucha que tuvieron impacto en el poder gubernamental, sino a todas las experiencias políticas de la región que se enmarcaron en disputas antineoliberales, anticoloniales, anticapitalistas y antipatriarcales, aunque sin un saldo electoral positivo (Thwaites Rey y Ouviaña, 2019).

Asimismo, asumimos una definición amplia y de mayor complejidad del neoliberalismo, no acotándolo meramente a un conjunto de políticas económicas ni tampoco a un menor grado de intervencionismo estatal vis a vis el mercado. Estas interpretaciones, creemos, oscurecen más de lo que clarifican. Optamos por retomar la tesis formulada por Christian Laval y Pierre Dardot (2013), para quienes el neoliberalismo es la *razón global del capitalismo contemporáneo*, por lo que requiere ser caracterizado como “construcción histórica y norma general de la vida”, mediante su poder de integración de todas las dimensiones de la existencia humana. No es, por tanto, solo destructor de reglas ni puro mercantilismo, sino también *productor* de un cierto “conformismo”, de determinadas maneras de vivir, subjetivar y reproducir un sentido de orden.

Hecha esta aclaración, es importante insistir en que el CINAL antecede a aquellos triunfos electorales, acompaña con sus temporalidades, agendas propias y hasta hondos desencuentros al contradictorio derrotero de estos gobiernos, e incluso perdura más allá de sus caídas o declives, producidos ya sea a través de las derrotas que sufren en las urnas o a raíz de procesos de desestabilización asentados en prácticas neogolpistas. La reacción derechista que sobreviene a partir de 2015, con el triunfo electoral de Mauricio Macri en Argentina, el golpe de Estado parlamentario-mediático-judicial contra Dilma Roussef, que

pavimentó el encarcelamiento de Lula y la victoria del neofascista Jair Bolsonaro en Brasil, el viraje neoliberal de Lenín Moreno en Ecuador, la derrota electoral del Frente Amplio en Uruguay y la contraofensiva imperialista en Venezuela, parecieron augurar una reversión completa del CINAL.

De todas maneras, aún cuando podamos aseverar que vivimos actualmente un eclipsamiento del progresismo como fenómeno de alcance y gravitación continental, y por lo tanto no resulta descabellado postular el cierre de lo que -durante casi dos décadas- fungió de una fase con relativa hegemonía de gobiernos de este tenor a escala regional (que convivió, por cierto, con expresiones de la más cruda persistencia y agudización del neoliberalismo, en particular en la geografía del Pacífico), sin embargo, ello no equivale a un fin de ciclo del CINAL conceptualizado en toda su integralidad, sino más bien a su reactivación sobre nuevas bases, tal como intentaremos demostrar a lo largo del presente capítulo. Al respecto, quizás sea pertinente apelar a la conocida broma en la cual el ácido humorista Groucho Marx retruca al clásico interrogante: “¿Té o café?”, expresando “¡Sí, por favor!”. La respuesta que subyace a este chiste, quizás permita sortear el entuerto al que nos somete el debate constante al interior de las izquierdas, en torno a los avatares y polémicas de si existe o no un cierre de este largo ciclo.

Entendemos que el rechazo frontal al neoliberalismo como expresión contemporánea de la contraofensiva capitalista e imperial, asentado en el antagonismo, la confrontación abierta y la acción directa en las calles, se ha reanudado con fuerza y enorme radicalidad en 2019, y hoy también parece recobrar ímpetu en diversos territorios de América Latina (a tal punto que las movilizaciones masivas y los repertorios de protesta se han replicado semanas atrás en Perú, y desde hace meses también se viven destellos de una insubordinación callejera similar en el corazón mismo de los Estados Unidos), en plena sintonía con las multitudinarias revueltas, los levantamientos populares y las huelgas de masas que despuntaron en la segunda mitad de 2019, sobre todo durante los ajetreados meses de octubre y noviembre.

EL 2019 Y SUS MOMENTOS CONSTITUTIVOS

Para el análisis y la caracterización del contexto que se abre tanto durante 2019 como en 2020, recuperamos un concepto propuesto por René Zavaleta, como es el de *momento constitutivo*. De acuerdo a su lectura, el mismo remite a un episodio epocal -entendido por cierto de manera procesual- en donde el conjunto de la población vive, como

“efecto de la concentración del tiempo histórico (...) una instancia de vaciamiento o disponibilidad universal y otra de interpelación o penetración hegemónica” (Zavaleta 1990b, p. 183). Con un claro lenguaje gramsciano, Zavaleta intenta dotar de centralidad a aquellos momentos o coyunturas históricas en las que se produce “la transformación ideológico-moral o sea la imposición del nuevo sentido histórico de la temporalidad”, esto es, “una suerte de vacancia o gratuidad ideológica y la consiguiente anuencia a un relevo de las creencias y las lealtades” (Zavaleta 1990a, p. 132).

Si bien no lo explicita, resulta evidente que está aludiendo a situaciones que, al decir de Gramsci, se identifican con las crisis orgánicas en el seno de un bloque histórico: aquellos contextos críticos de una sociedad donde la hegemonía, hasta ese entonces arraigada en las masas, se resquebraja y deja de oficiar como concepción predominante del mundo para ellas, desestabilizándose también las diferentes formas de autoridad predominantes, en particular la referida al orden público-estatal. Los momentos constitutivos remiten por lo tanto a crisis generales, en las que se plasman o bien se refundan las características y rasgos más destacados de una determinada sociedad por un tiempo relativamente prolongado, es decir, la configuración o genealogía profunda de un determinado bloque histórico, en su específica articulación entre Estado y sociedad (Ouviaña, 2016).

Partiendo de esta acepción, sostenemos que la rebelión iniciada los primeros días de octubre de 2019 en Ecuador, así como las que acontecieron semanas más tarde en otras realidades, pueden ser leídas en clave de *momentos constitutivos*, en la medida en que el levantamiento en el país andino irradió su potencialidad hacia diversas latitudes de América Latina e incluso del sur global, configurando un haz de insubordinación y cuestionamiento radical del orden dominante a escala regional. Tengamos en cuenta que menos de una semana después de culminada la insurrección popular en Quito, Santiago de Chile fue sacudida por una protesta inusitada, cuyos repertorios de acción, desacato y formas de beligerancia reenviaban a las vividas en el territorio ecuatoriano. Luego le sucederían las jornadas convulsionadas en Colombia, con una similar huelga política caracterizada por el desborde en las calles. Y en simultáneo a estos procesos, Haití se veía conmocionada por numerosas movilizaciones callejeras con un idéntico espíritu insumiso y de hartazgo generalizado. En todos estos casos, lo que irrumpieron no fueron tanto movimientos populares como *pueblos en movimiento*, donde el liderazgo colectivo resultó ser la regla. Analicemos más en detalle cada uno de ellos.

La historia reciente de Ecuador ha estado signada por sucesivos alzamientos y dinámicas de confrontación, cuyo primer hito puede situarse 30 años atrás, en el alzamiento indígena de 1990 conocido con el nombre de *Inti Raymi*. No obstante, a pesar de esta constelación de insurgencias -que tuvo alzas y reflujos, llegando a implicar la caída de gobiernos y una gran capacidad de veto por parte de los pueblos y nacionalidades de la sierra, costa y amazonía- los 11 días vividos entre el 1 y el 12 octubre de 2019, involucraron no solo a la CONAIE, que sin duda cumplió un papel clave como articuladora a nivel (pluri)nacional y en el conjunto del país de este levantamiento combinado con una huelga de masas, sino también a sectores heterogéneos de la clase trabajadora y a todo un crisol de sujetos e identidades urbano-populares que excedieron con creces al movimiento indígena, y que confluyeron al calor de este estallido sin precedentes.

Las manifestaciones, repertorios de acción y embriones de poder territorial que se fraguaron en las calles, incluyeron a estudiantes, feministas, movimientos barriales, gremios, partidos de izquierda, campesinado pobre, desocupados/as, ambientalistas, empleados/as estatales, trabajadores/as precarizados/as y migrantes, jornaleros, maestros/as, pequeños comerciantes, pobladores y, por supuesto, indígenas pertenecientes a las estructuras de la CONAIE. Pero también se destacaron, sobre todo en los días más álgidos del conflicto, numerosos grupos y un sinnúmero de personas no vinculadas a plataforma alguna, que dieron considerable dinamismo y osadía a los momentos de mayor antagonismo, creatividad y experimentación colectiva.

En el caso de Chile, el viernes 18 de octubre de 2019 (es decir, menos de una semana después de la rebelión ecuatoriana) miles de estudiantes secundarios de toda la capital realizaron una jornada masiva de evasión en el Metro de Santiago (“evadir, no pagar, otra forma de luchar” fue la consigna de auto-convocatoria en los principales puntos neurálgicos de la línea subterránea), ante una nueva intentona por despojar y privatizar lo común, en esta ocasión expresada en el alza de pasajes impuesto por el gobierno derechista de Sebastián Piñera. Lo que comenzó como un repudio y boicot activo contra el aumento de 30 pesos en el costo de este medio de transporte público, desencadenó de manera más profunda y transversal un desacato contra treinta años de neoliberalismo recargado, lo que hizo crujir el “exitoso” modelo chileno, ayer denominado por gobiernos de la Concertación como el “jaguar latinoamericano” y hasta días antes de la revuelta caracterizado por Piñera como el “oasis” de la región. Este hastío e irrupción plebeya, si bien tuvo contornos espontáneos, hundió

sus raíces en un largo e invisible proceso de erosión de la hegemonía neoliberal, protagonizado por una multiplicidad de comunidades, actores y movimientos populares, que van desde la resistencia mapuche contra el despojo y la militarización de sus territorios en Wallmapu, a los ciclos de lucha estudiantil de 2001, 2006 y 2011, pasando por las movilizaciones multitudinarias en torno al NO+AFP (fondos de pensión privatizados) y las masivas protestas feministas de 2018 y 2019. (Ouviaña y Renna, 2019)

Si a esta altura estaba clara la *irradiación* y resonancia de estas luchas más allá de sus fronteras de origen², la huelga política convocada en Colombia para el 21 de noviembre de ese mismo año no hizo sino reforzar aún más una perspectiva de anudamiento e inteligibilidad común, dándole a estos estallidos un carácter articulado y regional. Nuevamente hizo su aparición la *primera línea*, los escudos y máscaras anti-gas, pero también las consignas y los repertorios de acción directas desplegados anteriormente en Ecuador y Chile, entre los que se destacaron los cacerolazos nocturnos, y hasta canciones emblemáticas como “El baile de los que sobran”, de la banda musical Los Prisioneros, devenido un himno de las luchas antineoliberales en el sur global.

En el caso colombiano, este contagio se empalmó con una conjunción de malestares ligados al incumplimiento de los acuerdos de Paz firmados en La Habana entre la insurgencia de las FARC y el Estado, y a las profundas desigualdades generadas por la implementación de un “neoliberalismo de guerra”, que ha redundado en niveles extremos de precariedad, saqueo de bienes naturales y mercantilización de la vida, así como en constantes masacres y asesinatos de líderes sociales y referentes de derechos humanos, sobre todo en las zonas rurales donde el conflicto armado es más intenso. Aunque en rigor, fue el anuncio del gobierno de Iván Duque de un paquete de reforma tributaria, jubilatoria y laboral, el que sirvió de detonante inmediato para el inicio de este nuevo ciclo de luchas que hizo crujir la hegemonía del “régimen uribista”, con el paro nacional del 21 de noviembre de 2019, el cual desbordó a las centrales sindicales convocantes y desencadenó

2 Retomamos el concepto de *irradiación*, recreándolo, del marxista boliviano René Zavaleta (1986), para quien remite a la capacidad de una fuerza social o grupo subalterno, de incidir más allá de su entorno inmediato, con el propósito de aportar a una articulación hegemónica que trascienda su condición particular y sus exigencias específicas. En este caso, planteamos como hipótesis que las primeras rebeliones populares operaron en esta clave a nivel continental e incluso global.

un proceso de movilización popular en las calles, del que no se tiene antecedentes en las últimas décadas en el país.

Aunque no han sido tan visibles, cabe destacar además las rebeliones que circundaron durante 2019 a varias islas del Caribe, con un mismo hilo de indignación que las enhebró en las calles, y que incluso precedieron al haz de revueltas de octubre y noviembre en Sudamérica. En primer lugar la acontecida en Haití, donde las denuncias de fraude electoral y de corrupción por parte de la élite política gobernante, combinadas con una crisis profunda en términos socio-económicos, un incremento del precio de los combustibles y la catástrofe humanitaria post terremoto (exacerbada por la temprana intervención militar y la ocupación del territorio nacional por parte de la MINUSTAH, desde 2004 a 2017), así como los desvíos y la apropiación indebida de fondos provenientes de Petrocaribe, dieron lugar a un ciclo de protestas multitudinarias y a dinámicas semi-insurreccionales, que trajeron aparejada la renuncia de varios primeros ministros y funcionarios de alto rango, con un saldo de alrededor de 80 personas asesinadas por la represión estatal. Pero también merece mencionarse a Puerto Rico, territorio donde en el auge de la movilización popular -durante un paro nacional declarado el 22 de julio- llegó a contarse más de un millón de personas en las calles, y cuya lucha culminó con la dimisión del gobernador de la isla, Ricardo Rosselló, producto de la contundencia de las protestas.

Si contemplamos a todo este crisol de rebeliones desde un prisma que tome distancia del mero coyunturalismo y pondere la correlación de fuerzas a nivel continental, no hay duda alguna de que la *reactivación* del CINAL estuvo motivada por un nuevo ímpetu antagonista, que desde el hartazgo popular logró trastocar un cierto “conformismo” a nivel regional e involucrar -como rasgo de suma originalidad- un *relevo múltiple*. En primer lugar, el más evidente es el *generacional*, ya que las juventudes fueron las principales impulsoras de estos levantamientos (adolescentes de Liceos y secundaristas en el caso de Chile, juventudes indígenas y urbano-populares en Ecuador, estudiantes universitarios y jóvenes de barriadas humildes en Colombia, precarizados/as, habitantes de las periferias y colectivos contraculturales en Puerto Rico y Haití). A su vez, es importante destacar el relevo de *género*, ya que las mujeres (y disidencias) se destacaron en las primeas líneas, las tareas de autocuidado y reproducción en espacios públicos, refugios y barricadas, así como el sostenimiento de las tramas comunitarias y el “acuerpamiento” colectivo en las calles. Por último, el relevo es *étnico*, en la medida en que las revueltas han asumido un ca-

rácter anticolonial y antirracista, de reivindicación de las identidades indígenas, afros, palenqueras y cimarronas, en suma, plurinacionales, exigiendo en numerosas ocasiones un reordenamiento territorial que, de concretarse, dislocaría las fronteras arbitrarias y la juridicidad capitalista impuestas por los Estados colonial-republicanos.

De conjunto, este relevo múltiple se destaca por la emergencia de novedosos liderazgos, menos burocratizados, refractarios a toda política elitista y con altos niveles de combatividad y osadía, que van desde el expresado por las bases de la CONAIE, las comunidades mapuches en Wallmapu y misak en el Cauca colombiano, al desplegado por el movimiento feminista y LGBT o por el activismo estudiantil y artístico-cultural, teniendo a la recreación del internacionalismo como un rasgo distintivo y a la asamblea como forma transversal de autoorganización y sostén de los procesos de lucha, a partir de un vínculo más estrecho y orgánico entre medios y fines, que apuesta a la prefiguración “aquí y ahora” de los gérmenes de la sociedad futura.

Octubre y noviembre fungieron así de parteaguas a escala continental, inaugurando un período de envalentonamiento de los pueblos y clases subalternas frente al orden dominante. El hartazgo y la ruptura de la relación mando-obediencia se cobró revancha derribando monumentos, evadiendo molinetes, cuestionando fronteras, confrontando con la policía, disolviendo prejuicios y anudando reclamos, estampando consignas insumisas en muros e incendiando edificios emblemáticos, en paralelo a la gestación de instancias de autogobierno territorial, parlamentos populares, ámbitos de democracia comunitaria, mandatos de base y *primeras líneas* que hicieron de la audacia y el autocuidado colectivo estandartes de lucha.

UN HAZ DE REBELIONES CONTRA LA INSTITUCIONALIDAD ESTATAL DE VIEJO CUÑO

Si bien estas diferentes revueltas pueden ser definidas como de carácter espontáneo, es preciso no absolutizar esta lectura, e interpretarlas en tanto conjunción de proceso y acontecimiento, que a su vez supieron combinar radicalidad y masividad, para aunar en forma creativa tramas subterráneas, temporalidades de enorme intensidad y apuestas cotidianas de experimentación, que fueron horadando cada vez más la hegemonía neoliberal vigente en estos países, con una reactivación de la memoria histórica de los pueblos de mediana y larga duración, hasta decantar en un estallido tan multitudinario como inesperado, logrando reventar la burbuja del mito de una sociedad falsamente inclusiva y democrática.

Más allá de sus matices y particularidades, estas irrupciones plebeyas tuvieron como antesala y a la vez enlazaron diversas resistencias de una multiplicidad de sujetos/as insumisos/as: la lucha de las mujeres contra el sistema patriarcal y en defensa de la soberanía sobre los cuerpos/territorios, para hacer visible la violencia y la precariedad de la vida que las afecta de manera más aguda a ellas y a las disidencias; contra el extractivismo, la privatización de los bienes naturales, la contaminación socio-ambiental y la acumulación por despojo en campos y ciudades; la librada ancestralmente por los pueblos y nacionalidades indígenas en defensa del territorio, la autodeterminación y el fin de la militarización; las iniciativas y propuestas de vida digna basadas en la recuperación de derechos sociales que no cabe concebir en términos mercantiles, como la educación, la jubilación o la salud pública; la denuncia del terrorismo estatal, la brutalidad policial y la criminalización de la protesta; así como las variadas expresiones de poder popular, prefiguración y autogobierno desarrollada por movimientos urbano-populares, desde rincones de las periferias de la ciudad neoliberal, que cultivan maneras muy otras de reproducción de la vida en común (Ouvña y Renna, 2019).

En conjunto, todas estas luchas abonaron -de forma subterránea e intersticial- a la erosión del sentido común neoliberal, pero también patriarcal y neocolonial, que tuvo como contracara una pérdida del miedo, la desnaturalización de las relaciones de dominación y opresión, y un quiebre del “realismo” capitalista, que trocó en estado de ánimo disconforme e insumiso a nivel societal. De igual manera, el *¡Fin del lucro!* que ya había sido escuchado como principal grito de protesta y exigencia popular en 2011 en Chile, se actualizó durante octubre y noviembre de 2019 a partir de un clima de hartazgo generalizado que equivalió a un estruendoso *¡Ya Basta!*, similar al lanzado por el zapatismo desde la Selva Lacandona en los inicios del CINAL.

Estas revueltas, huelgas políticas de masas e insurrecciones habilitaron un “secreto compromiso de encuentro” entre las apuestas colectivas de lucha precedentes y una espontaneidad de masas que irrumpió en las calles, operando por multiplicación y a través de la irradiación, consiguiendo conectar el memorial de agravios históricos con el descontento actual cada vez mayor con respecto al orden capitalista. Esta reactivación del CINAL implicó por lo tanto la recuperación de las calles y la confrontación con políticas neoliberales, pero también contra lógicas de autoritarismo estatal, racismo y misoginia que se han recrudecido al calor de los intentos de aplicación de planes de ajustes y una precarización extrema de la vida. René Zavaleta solía

decir que las rebeliones y levantamientos, incluso aquellos acontecidos hace mucho tiempo atrás, continúan presentes, aunque no lo percibamos, “sobre todo en el inconsciente de las sociedades” (Zavaleta, 1986).

Se vivencia un cuestionamiento y crisis tanto de la institucionalidad estatal forjada en las últimas décadas, como una impugnación de los “componentes de larga duración” del Estado. En un texto escrito cuando aun formaba parte del grupo Comuna, Álvaro García Linera planteaba a modo de hipótesis que las luchas sociopolíticas desplegadas en Bolivia entre finales del siglo XX y comienzos del actual -a las que enmarcamos en un plano más amplio en el CINAL- no solo pusieron “en cuestión los componentes de corta duración del Estado (su carácter neoliberal), sino también varios de sus componentes de ‘larga duración’ de su cualidad republicana. Por lo tanto, estamos asistiendo a una doble crisis o el montaje de dos crisis” (García Linera, 2005, p. 19).

Consideramos que, con sus especificidades y rasgos distintivos, esta fisura, que supone un quiebre o fractura de las estructuras coloniales y demarcaciones propias del Estado republicano implantado de manera despótica, se ha vivido también en otras realidades de América Latina, cobrando gran intensidad durante las revueltas de 2019 y 2020 en ciertos territorios, donde además de debilitarse los pilares del orden estatal neoliberal, han crujido los fundamentos patriarcales, racistas, monoculturales y de la democracia liberal inscrita en la tradición moderna. Tal vez los ejemplos más emblemáticos y visibles sean las acciones directas con un alto grado de replicabilidad en diferentes puntos del continente (y hasta en otras latitudes del sur global), estéticas y performativas, de una común vocación restitutiva, que incluyeron desde el derribo de estatuas y monumentos que enaltecen a conquistadores, a la reivindicación de banderas y símbolos indígenas o alusivos a las disidencias sexuales, hasta gramáticas disruptivas propias de un lenguaje contencioso e iniciativas artísticas participativas donde -como en el caso del colectivo feminista LasTesis de Chile- se denuncia que el Estado es un “macho violador”.

Y si bien a lo largo del 2020 se vivió en variadas realidades de América Latina una situación ambivalente, signada por cierto “im-passe” forzado por el contexto de pandemia y confinamiento al que instaron los gobiernos -y la institucionalidad estatal- al conjunto de la población, éste sin embargo no logró contener del todo ni tampoco aplacar de manera plena el descontento y la ebullición experimentada meses antes de la declaración de la cuarentena. A pesar de la amplia-

ción y agudización de las funciones represivas del Estado, que incluyó desde la militarización de territorios hasta el minucioso control policial, y en muchos casos redundó en abusos, detenciones masivas, torturas, asesinatos y desapariciones forzadas de personas, en particular contra sectores populares que vieron dificultada la posibilidad de respetar la cuarentena (a raíz de sus condiciones de hacinamiento habitacional, de extrema precariedad laboral y de la vida misma), de todas formas se destacaron momentos de quiebre del encierro y recuperación activa del espacio público, sobre todo en Chile, Ecuador y Colombia, que instaron a romper el aislamiento y, sin descuidar los recaudos sanitarios, volver a ejercitar la protesta y el antagonismo de manera masiva.

Esto llevó a que el escenario latinoamericano se vea sacudido por un contexto de confrontación callejera inédito y de una intensidad casi tan alta como en el 2019, sobre todo en Colombia -con movilizaciones contra los asesinatos y la represión policial- y en Chile -al cumplirse un año del inicio de la rebelión y con motivo de la concreción del referéndum. Esta parcial reactivación del CINAL tuvo picos de agitación, combates con la reaparición de las *primeras líneas* y otras modalidades de autodefensa popular, en simultáneo al fortalecimiento de mecanismos novedosos de participación ciudadana que fungieron de ejemplificadores para el resto del continente, en particular en realidades que, como la chilena, se encuentran sumidas en el más crudo régimen neoliberal de similares contornos autoritarios. Por ello no resulta casual que justamente un año después del auge de la protesta en las calles en realidades como Ecuador, Chile y Colombia, se repliquen esos repertorios de acción, canticos y dinámicas de movilización en los principales puntos del Perú.

Este país andino vive desde hace varios años una crisis política de enormes proporciones, agudizada por los desmanejos en torno a la pandemia, que hizo de él uno de los territorios más afectados por el coronavirus a nivel continental y global. La continuidad y exacerbación neoliberal en las últimas décadas -con la acumulación por despojo como pivote fundamental- tuvo como contracara numerosas luchas populares, que se remontan a las movilizaciones del año 2000 contra el régimen fujimorista, y dentro de las que se destacan en la última década las resistencias indígenas y campesinas en rechazo a proyectos megamineros y extractivistas en regiones de la sierra y amazonia.

Los escándalos por corrupción y sobornos vinculados con esquemas de contratación de la obra pública (que involucran a todo el arco político), sumados a la continuidad de un Estado profundamente au-

toritario (cuya Constitución fue sancionada en 1993, tras el autogolpe de Alberto Fujimori y en un contexto signado por el terrorismo estatal y el auge neoliberal), decantaron en la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski y la asunción como presidente de Martín Vizcarra en marzo de 2018. El desprestigio y la deslegitimación cada vez mayor del conjunto de los partidos políticos, y en particular de la élite gubernamental, se agudizó este 2020 con una pésima gestión sanitaria y socio-económica de la pandemia, lo que combinado con otros malestares sirvió de pretexto para que el 9 de noviembre prospere un pedido de “vacancia” (renuncia) a Vizcarra por parte de la mayoría del Parlamento, hecho que fue leído por un sector importante de la población como un golpe de Estado generado desde las entrañas mismas del poder, con la evidente complicidad de la derecha.

Esto desencadenó un proceso de movilización popular con un fuerte protagonismo juvenil, que denunció en las calles de Lima y en otros puntos relevantes del país la crítica situación y, a pesar de sufrir una brutal represión que dejó un saldo de varios muertos, obligó a la renuncia de Manuel Merino (acusado por un porcentaje considerable de la ciudadanía de golpista), quien había asumido provisionalmente como presidente, durando tan sólo 5 días en el cargo. Al igual que en Chile y en menor medida Colombia, la demanda política de una Asamblea Constituyente emerge como una de las principales exigencias levantada por las y los manifestantes, en medio de una coyuntura destituyente y con persistentes protestas de carácter masivo, donde prima el vacío de poder y un endeble gobierno transitorio sin ningún tipo de consenso, cuyo mandato debe durar hasta las elecciones generales de abril de 2021.

A nivel continental, hablamos precisamente de *reactivación*, porque consideramos que el CINAL como tal no se ha cerrado, sino que, con vaivenes, destellos, ascensos y reflujos, se mantuvo abierto durante las últimas dos décadas y hoy cobra mayor ímpetu y radicalidad, revitalizándose en diversas latitudes de América Latina, a través de estos estallidos que pueden ser definidos como “núcleos de intensidad democrática”, ya que al decir de Zavaleta “producen vastos estados de disponibilidad general o cuestionamiento universal por medio de los cuales las masas se lanzan a profundos actos de relevo ideológico” (Zavaleta, 1990: 110)³. Subyace como anhelo en común una “recons-

3 Si bien no podemos profundizar en su análisis, es interesante mencionar que Zavaleta destaca -de manera precursora ya en los años ochenta- como posibles núcleos de intensidad democrática tanto al movimiento indígena como al feminismo. Aquí retoma, por cierto, al marxista italiano Antonio Gramsci, que habla de *núcleos de irradiación* en sus notas carcelarias.

trucción del destino”, que aún el quiebre radical con la reconfiguración del universo civilizatorio, recreando simbólica y materialmente el horizonte utópico de los pueblos latinoamericanos.

Ello no supone una ruptura ni un cierre definitivo del CINAL, pero sí un reimpulso o nueva fase, donde los procesos forjados *por fuera* de las estructuras estatales heredadas del neoliberalismo -y sostenidas por los gobiernos progresistas casi sin vocación de ruptura a lo largo del período de auge del CINAL-, adquieren creciente centralidad en la dinámica impugnatoria en tanto autodeterminación de masas. Planteamos como hipótesis complementaria que aquellos territorios signados por mayor cantidad de contradicciones de orden neoliberal, de un neoliberalismo de larga duración o un extractivismo belicoso -cuyos Estados ostentan cierto grado de *debilidad* por carecer de una hegemonía sólida en clave consensual o resultar ella sumamente precaria, pero a la vez resultan *fuertes* en cuanto a su faceta represiva o de maquinaria disciplinante, que se encuentra en guerra con un sector relevante de su propia población-, son hoy epicentro de la agudización de la lucha de clases y fungen de puntos de condensación de la relación de fuerzas a nivel regional, por lo que de conjunto inauguran un momento constitutivo en términos continentales, que parece reconfigurar, quebrar o bien trastocar la correlación de fuerzas existente. ¿Estamos ante el inicio de un proceso de confrontación anticapitalista de nuevo tipo? ¿O más bien se renuevan y actualizan las dinámicas, expectativas y aspiraciones propias de la fase progresista?

ENTRE LA CATARSIS Y LOS ESCENARIOS POSTPANDÉMICOS

Resulta difícil imaginar cuál será el mapa geopolítico regional y global en un contexto de pospandemia. Quizás la inestabilidad hegemónica sea en gran medida la regla, y tenga como contracara una relativa “indeterminación estratégica” a nivel sociopolítico. No obstante, tanto en este libro como en otros estudios e investigaciones se esbozan diferentes escenarios posibles, que tienen sin duda a lo estatal en tanto eje vertebrador y campo de fuerzas (asimétrico y relacional) en permanente disputa. Partimos de caracterizar a la coyuntura actual como un momento propicio para la producción y actualización del pensamiento crítico latinoamericano y del sur global, ya que nuestro continente no solamente ha sido y es epicentro de la pandemia, sino también uno de los territorios más emblemáticos donde se ensayan alternativas frente a esta crisis y se dirimen proyectos de resolución, ya sea en una clave regresiva como potencialmente liberadora.

Antonio Gramsci supo apelar a la noción de *catarsis* para dar cuenta de aquel momento en el que se logra transitar de lo sectorial o económico-corporativo hacia lo ético-político, abriendo una coyuntura crítica donde emerge como posibilidad la construcción de una nueva hegemonía como alternativa integral, de manera tal de irradiar a nivel general una concepción del mundo y un crisol de prácticas emancipatorias, que trasciende el entorno inmediato o la identidad específica que se tenga (Gramsci, 1986). La catarsis, por tanto, contempla siempre a la *crisis* como momento de dilucidación y ampliación del horizonte de visibilidad más allá de lo posible, por lo cual resulta al mismo tiempo expresión ambivalente e inestable de un proceso de cambio y desintegración social, al que creemos cabe incorporar también el entrecruzamiento de Estado, sociedad y naturaleza. Ello parece haber ocurrido precisamente durante 2019 y 2020 en diferentes lugares de América Latina, *por abajo* y *por arriba*, tanto producto de las rebeliones populares vividas en estos últimos dos años, como a causa de las intenciones de revanchismo de las clases dominantes, el imperialismo y las derechas, a lo que habría que sumar la trágica sobredeterminación de la pandemia, verdadero cataclismo del Capitaloceno en la historia reciente.

Por *abajo*, en países como Haití, Ecuador, Chile, Colombia y Perú, donde las rebeliones callejeras no han implicado luchas meramente sectoriales ni acotadas a consignas reivindicativas o de índole corporativo, sino que apuntaron a cuestionar las bases mismas del modelo neoliberal (e incluso, embrionariamente, del capitalismo, el heteropatriarcado y la colonialidad moderna), así como de un Estado refractario a las exigencias y necesidades popular-comunitarias. Esta insubordinación de masas excede incluso a los contornos de nuestro subcontinente, ya que en otros puntos del planeta también se viven apuestas similares de lucha mancomunada. De las huelgas generales lideradas en París por los *chalecos amarillos*, a las movilizaciones antirracistas del *Black Lives Matter* en los Estados Unidos, hay todo un haz de referencias globales donde poner el cuerpo de manera colectiva resulta central en la autoafirmación de la vida digna.

Pero también se percibe en ciertos escenarios convulsionados una situación catártica por *arriba*, que tuvo a Bolivia en 2019 como ejemplo emblemático, donde las clases dominantes y los sectores de ultraderecha envalentonados, lejos de replegarse como antaño en el territorio de la llamada “medialuna” renunciando a la disputa por la hegemonía a nivel nacional, decidieron ampliar su lucha, dar una disputa abierta e irradiar su concepción del mundo (asentada en la biblia,

la heteronormatividad patriarcal y el racismo más enfervorizado), logrando proyectar su revanchismo y violencia más allá de las geografías regionales donde supo afincar históricamente su poder, y hasta concitando ciertos grados de consenso popular. Este trágico ejemplo, más allá no haber prosperado en el tiempo (al menos de momento), no constituye un caso aislado. Podríamos conjeturar que el gobierno de Bolsonaro, si bien deslegitimado al comienzo de la pandemia por una serie de medidas y gestos que fue asumiendo, de todas maneras, goza aún de una aceptación considerable y ha resignificado su figura pública, incluso en algunas capas de las clases subalternas, lo que denota que estamos en presencia de un proyecto restauracionista de largo aliento, que al margen del personaje “Bolsonaro”, al parecer ha llegado para quedarse.

Esta lectura espacial de un arriba y abajo, como metáfora binaria, puede resultar sin embargo un tanto esquemática, ya que ensombrece lo que -desde una mirada más refinada y dialéctica- se evidencia de manera matizada y contradictoria en estos procesos en curso. Tal como ha sabido problematizar el propio Gramsci, movimientos reaccionarios y de tintes fascistas, han concitado en otros contextos históricos el apoyo activo de vastos sectores populares, en la medida en que el concepto de hegemonía involucra siempre el momento de internalización subjetiva del orden social, lo que incluye la asunción como propios, por parte de las clases y grupos subalternos, de un conjunto de valores, pautas de comportamiento, prejuicios e ideas que son difundidas en el marco de las instituciones de la sociedad civil, y se corresponden con los intereses de las clases dominantes.

Y es que tal como han advertido varias relecturas neogramscianas latinoamericanas, lo popular -y dentro de él, el sentido común afincado en la materialidad de la vida social- resulta todo lo contrario del facilismo maniqueo y dicotómico que enfrenta, desde el esencialismo y la pura externalidad, lo hegemónico y lo subalterno. Por ello es importante leer en toda su complejidad e hibridez el crecimiento y expansión de proyectos de derecha que, en palabras de Rafael Hoetmer, han podido surgir movilizandolos sentimientos de miedo, como también por la precarización e inseguridad reales, que enfrentan las poblaciones en América Latina:

los actores de las nuevas derechas ofrecen una serie de formas de amparo, aunque posiblemente más en los discursos que en la práctica. Ante el abandono de las izquierdas de las discusiones en torno de la seguridad pública, las nuevas derechas proponen mano dura y orden. Ante la precarización de la vida, las iglesias evangélicas ofrecen un sentido de comunidad y ciertas prácticas

de solidaridad y cuidado mutuo. Ante la falta de perspectiva, aparecen las economías ilegales e informales y la promesa del emprendedor como posibilidades de progreso concreto (Hoetmer, 2020, p. 30).

De ahí que el *primer escenario* posible sea el de un reforzamiento del estatismo autoritario, combinado con una intensificación del neofascismo y conservadurismo societal. Si ya antes de la pandemia se vislumbraba esta tendencia a partir de procesos políticos como el vivido en Brasil con el bolsonarismo, actualmente el contexto pandémico abona a que las clases dominantes y el imperialismo vean como viable el fortalecimiento de esta opción, que incluso puede llegar a articular un cierto “negacionismo” que reste relevancia al flagelo del Covid-19, haciendo referencia al contexto de excepcionalidad que éste impone a escala regional y mundial, para -bajo este pretexto- vulnerar determinados derechos, restringir libertades democráticas, robustecer valores tradicionales (de carácter patriarcal, misógino, nacionalista y/o meritocrático), militarizar territorios, ejercer la contrainsurgencia o incrementar la utilización del aparato coercitivo del Estado.

Tengamos en cuenta que la apelación a la coerción no ha dejado de ser la punta de lanza del discurso punitivista en auge a nivel continental, desde la construcción de un “enemigo interno” (con contornos específicos de acuerdo a cada realidad concreta) que legitime la escalada represiva vivida en gran parte de la región. La pandemia requirió, según esta gramática, entrar en “guerra” contra un “enemigo invisible” (la metáfora bélica, por cierto, ha sido transversal a los gobiernos latinoamericanos más allá de su tinte ideológico), pero también redoblar esfuerzos y amplificar las iniciativas destinadas al combate del narcotráfico y la inseguridad delictiva. Para ello, se busca interpelear al imaginario social autoritario y conectar con cierta necesidad de protección, respeto de la ley y deseo de restablecimiento del “orden”, que el sentido común dominante exige de parte del Estado.

La defensa enconada del accionar de las fuerzas represivas, incluso en situaciones de abierta flagrancia (detenciones y torturas, realización de desalojos sin orden judicial, apología abierta de casos de “gatillo fácil”) se complementa con el reforzamiento mediático de prejuicios y estigmas que tienden a asociar juventud pobre o población de barriadas humildes *con* delincuencia, protesta social o huelgas de masas *con* desestabilización e “ilegalidad” y pueblos indígenas *con* terrorismo, buscando así fortalecer una visión de mundo que avale -e incluso demande- una intensificación del poder estatal despótico.

Cabe por lo tanto preguntarse si no estamos en presencia de un fenómeno que se asemeja a lo que René Zavaleta denominó *hegemo-*

nía negativa, es decir, “una construcción autoritaria de las creencias”, asentada en este caso en una delicada combinación de apelación al miedo y a la autopreservación individual, con “tolerancia cero” y castigo ejemplificador de quienes azuzan el “caos”, cuestionan la propiedad privada o quebrantan la legalidad, que redundaría en una aceptación acrítica de la creciente militarización de la vida social, ya desplegada en casi todo el continente al calor -y bajo el argumento- de la pandemia.

Quizás la novedad esté dada por la mixtura de ciertos dispositivos de despotismo estatal que cobran mayor relevancia para controlar las poblaciones, gestionar la inseguridad y regular la circulación de los cuerpos, con un “emprendedurismo” de raigambre societal, que incita a participar activamente en la garantía misma de este orden cada vez más autoritario (construcción vecinal de “mapas del delito”, grupos de wasap de “alertas barriales”, defensa de valores tradicionales como los de la familia ante el avance de los feminismos), desde lo que Esteban Rodríguez (2014) caracteriza como *vigilantismo* o giro policia-lista, enfocado a estigmatizar y combatir al *otro* que no comparte, o parece amenazar, las formas de vida compatibles con este sistema de dominación múltiple tan desigual.

Asimismo, la pandemia y el confinamiento prolongado han reforzado el uso de las redes sociales, cámaras y plataformas virtuales como el Zoom, tornando centrales los dispositivos de vigilancia y control emparentados con el *panóptico digital*, el cual a diferencia de lo que Michael Foucault supo postular desde Bentham, funciona sin ninguna óptica perspectivista, ya que la vigilancia puede producirse desde todos los lados y en cualquier parte (comenzando por el propio espacio doméstico). Al decir de Byung-Chul Han, la peculiaridad de este tipo de panóptico “está sobre todo en que sus moradores mismos colaboran de manera activa en su construcción y en su conservación, en cuanto se exhiben ellos mismos (...) Cada uno entrega a cada uno a la visibilidad y al control, y esto hasta dentro de la esfera privada” (Han, 2018, p. 90).

Por otra parte, en el descontento de ciertos sectores de clase media-alta y burguesa, se evidencia un cierto nivel de lo que Zavaleta denominó “conciencia de clase reaccionaria”, expresada en cacerolazos convocados en las redes sociales y amplificados hasta el paroxismo por los medios hegemónicos, “banderazos”, por lo general coincidentes con fechas patrias, que refuerzan el sentido identitario “nacional” blanco y republicano construido desde el Estado colonial moderno, así como iniciativas callejeras de rechazo abierto a la cuarentena

como política pública sanitaria, todas ellas con un violento anclaje de clase, racista y hetero-patriarcal.

El *segundo escenario* posible es aquel que aspira a reeditar el ciclo de los gobiernos denominados “progresistas” en este nuevo contexto regional y planetario, teniendo como principales referencias la derrota en las urnas y el desplazamiento del poder de coaliciones conservadores, derechistas o abiertamente golpistas, como ha ocurrido en los casos de México, Argentina y más recientemente Bolivia. Las elecciones que se avecinan en 2021 en Ecuador (donde existe la probabilidad que triunfe un referente apoyado por Rafael Correa), Chile (que vivirá simultáneamente un proceso de reforma constitucional y elecciones municipales y de gobernadores regionales) y Perú (país en el que la crisis de los partidos tradicionales cala hondo y sectores de centro-izquierda cuentan con un caudal de votos considerable) son, aunque no las únicas, las más relevantes en este sentido.

Una cuestión en ocasiones no contemplada por quienes postulan esta salida, es la ausencia de condiciones estructurales u “objetivas” y -parcialmente- también subjetivas, para replicar o dar un nuevo impulso a proyectos de este tenor. Por un lado, debido a que el contexto global dista de asemejarse a aquel en el que se inscribieron y apoyaron los gobiernos surgidos en el CINAL, signado por un alto precio de los *commodities* y un transitorio “bonapartismo internacional”, que garantizó una reversión relativa del tradicional balance negativo en los términos de intercambio, fungiendo de base material de la recuperación de ciertos márgenes de acción autónoma de los Estados latinoamericanos (Thwaites Rey y Ouviaña, 2019).

Lo que en algún momento se concibió como fortaleza “neodesarrollista”, resultó ser en rigor un parcial y momentáneo contexto de bonanza, cuya contracara fue una precariedad estratégica que agudizó la inserción subordinada y la mayor dependencia con respecto al mercado mundial constituido y a los vaivenes del precio internacional de los bienes naturales, que a los efectos de garantizar una ampliación de la ciudadanía por la vía del consumo, multiplicó zonas de sacrificio, migraciones forzadas, fractura de ecosistemas, superexplotación de la fuerza de trabajo, desestructuración de lazos comunitarios y violencia sobre los cuerpos-territorios.

Por otro lado, estas políticas ya no gozan con tantos niveles de confianza ni consensos equivalentes a la coyuntura de auge del CINAL, a raíz del creciente descontento y malestar provocado por la secuelas económicas y socioambientales que trajo aparejado el extractivismo, hoy acrecentado por la mayor visibilidad y desprestigio

que ha cobrado el nexo causal entre, por un lado, la acumulación por despojo en base a la desarticulación de hábitats de cientos de especies silvestres, la alteración sustancial del clima y la imposición global de agronegocios y megafactorías, y por el otro, la proliferación de enfermedades y numerosas cepas patógenas que se irradian a escala planetaria, tal como ha ocurrido con el Covid-19 y otras enfermedades precedentes. La cría industrial de animales, en particular, a través de la cual millones de seres vivos son producidos como mercancía en un contexto de hacinamiento, uso indiscriminado de antibióticos y sufrimiento extremo, tiene como contracara necesaria no solo una evidente debacle ambiental de dimensiones geológicas, sino la multiplicación de zoonosis, por lo que es factible que a esta pandemia le sucedan en un futuro cercano otras de igual o mayor magnitud.

A su vez, una limitación adicional del progresismo que hoy se busca nuevamente reconstruir, es aquella emparentada con lo que Gramsci (1984) definió como “estadolatría”. Este enamoramiento del poder estatal, en el sentido estricto del aparato gubernamental, redundó en un recambio de élites y funcionarios durante el auge del CINAL vis a vis los partidos tradicionales y de viejo cuño, pero se asentó sin embargo sobre el no cuestionamiento de los pilares básicos de la democracia representativa liberal burguesa, y tuvo como preminencia lo que el marxista italiano caracterizó con el término de “pequeña política”. Combinadas con la tendencia a enaltecer “hiperliderazgos” individuales difíciles de relevar o sustituir en puestos claves del ejecutivo, que por cierto eclipsaron la constitución de sujetos políticos colectivos plausibles de perdurar en el tiempo más allá -y por fuera- de los altibajos electorales, estas características resultaron casi sin excepciones un punto débil en común de los progresismos.

Es decir, se tornó habitus el conjunto de prácticas y modos del quehacer político que se encapsulan en el día a día de la gestión institucional y el respeto de la juridicidad burguesa, asumiendo con resignación el orden dominante e intentando adecuarse a él más que enfrentarlo; aquel que lejos de trastocar las estructuras económico-sociales y aspirar a crear nuevas relaciones, las conserva y defiende, siendo la intriga entre facciones, el posibilismo y la disputa electoral un pivote central de la lucha, acotada a consolidarse al interior de un equilibrio de fuerzas ya constituido. Aunque no podemos adentrarnos aquí en sus luces y sombras, en el balance referido a la dialéctica entre “poder propio” y “poder apropiado”, estas experiencias desestimaron toda crítica integral al capitalismo y tendieron a privilegiar la subordinación a las reglas de juego del régimen democrático burgués,

haciendo un uso particular -sin ninguna vocación real de ruptura- de la institucionalidad estatal heredada del neoliberalismo (o sea, de porciones de poder capturadas de manera coyuntural y por la vía electoral), lo que redundó en una fragilidad extrema de los proyectos que pretendían edificar.

Frente a él, las revueltas de 2019 y 2020 delinean un *tercer escenario*, en tanto procesos de masas que se despliegan desde abajo y en abierta confrontación con respecto a los aparatos estatales en su dimensión represiva, burocrática y delegativa, incluyendo en esta dinámica de impugnación también al conjunto de la casta o élite política. A pesar de las alzas y reflujos vividos, estos levantamientos parecen sugerir una alternativa que, lejos de reeditar el ciclo progresista, privilegia una estrategia de construcción con mayor potencialidad anti-sistémica, en la medida en que amplían lo público más allá de lo estrictamente estatal, despuntan destellos de una nueva hegemonía y desmonopolizan la agenda sociopolítica a partir de nuevas formas de experimentación de la toma de decisiones colectiva y la reproducción de la vida en común.

Esta posible salida de la crisis remite a procesos de mayor radicalidad y ruptura con el orden neoliberal y también en abierta confrontación con las formas de dominación colonial, patriarcal y capitalista, lo que por supuesto incluye las dimensiones del armazón estatal en sus estructuras más conservadoras y opresivas (aquellas que favorecen desde una “selectividad estratégico-relacional” a los intereses capitalistas e involucran un sesgo ineludible de clase, raza y género), aunque sin desestimar la posibilidad de un proceso refundacional y de reinención del Estado, ampliando las facetas que implican una parcial cristalización de conquistas y beneficios para las clases subalternas y pueblos latinoamericanos.

Partimos de no concebir a la estatalidad como un bloque monolítico y sin fisuras, cual fortaleza enemiga que sería totalmente externa y ajena a los sectores oprimidos, pero al mismo tiempo creemos que es preciso no caer en un peligro simétrico como es el caracterizarla en una clave instrumental (vicio recurrente de los progresismos), en tanto instancia neutra que puede “utilizarse” sin más, para hacer avanzar un proyecto emancipatorio del tenor que expresan las luchas y resistencias contemporáneas en América Latina. Recuperar la dialéctica entre reforma y revolución, revitalizar la articulación de luchas dentro, contra y más allá del Estado, a partir de una delicada pero osada combinación de reivindicaciones desde abajo, confrontación y movilización callejera, en paralelo al sostenimiento de dinámicas

organizativas autogestionarias y de construcción de poder popular territorializado, que eviten el “encapsulamiento”, erosionen la hegemonía capitalista y patriarcal y no teman generar rupturas radicales ni desatender horizontes de posibles procesos constituyentes en sintonía con la plurinacionalidad, la soberanía alimentaria y el buen vivir; es un desafío que depara el actual escenario continental y global.

CONCLUSIONES FINALES (PARA UN NUEVO COMIENZO)

En medio de un panorama por demás incierto a nivel regional y mundial, el debate que subyace a este contexto inédito es, por lo tanto, en qué medida aquellas luchas callejeras, levantamientos populares y huelgas políticas de masas que se vivencian desde 2019, y se han reactivado parcialmente este 2020 en un crisol de territorios de América Latina y el Caribe, implican una crisis orgánica en los países en los que acontecen, y hasta qué punto estamos en presencia de un cambio de la relación de fuerzas a escala *continental*. Más allá de los claroscuros y contrastes en cada bloque histórico, no caben dudas de que parecen haberse reanudado las resistencias y luchas que dieron origen al CINAL a finales de los años '80 y principios de los '90, en este caso en realidades donde la mercantilización y precariedad extrema de la vida, han tenido como contracara Estados profundamente autoritarios, así como formas veladas y/o abiertas de violencia paraestatal (“ilegales”, aunque en connivencia con, y apuntaladas por, ciertas estructuras estatales linderas con la criminalidad) que ejercitan de manera cada vez más enconada el dominio y la coerción al ver erosionado el consenso y la hegemonía neoliberal que, hasta hace poco tiempo atrás, parecían incólumes.

Al mismo tiempo, en aquellos países donde se vivieron procesos de gobiernos con mayor o menos intento de distanciamiento/ruptura respecto del recetario neoliberal más crudo, el ciclo de auge de movilización y participación activa tuvo con el correr de los años su declive y reabsorción por mediaciones institucionales, al compás de la recomposición hegemónica o bien de una cierta cohabitación con el orden capitalista, a pesar de lo cual se lograron materializar en una serie de conquistas parciales, tanto sociales como políticas, bajo la modalidad de políticas públicas tendencialmente universales y la ampliación parcial de derechos, que hoy en día constituyen un piso fundamental en términos simbólico-materiales, muy distinto al momento de derrota defensiva de los años noventa. Además, los pueblos, comunidades y movimientos sociales acumularon experiencia y formatos organizativos en los que apoyarse para activar la rebeldía y la confrontación

ante medidas regresivas que en la actual coyuntura se intentan en su contra, lo que conforma un escenario bastante diferente al inaugurado a finales de los años ochenta en la antesala del CINAL (Ouviaña y Thwaites Rey, 2018).

Por ello no resulta aventurado afirmar que las intensas jornadas de simultáneo desgarramiento y universalidad vividas en 2019 y 2020, verdaderas “fiestas de la plebe” al decir de René Zavaleta, abrieron una hendidura privilegiada que amplió el horizonte de visibilidad de los pueblos y clases subalternas del sur global, haciendo posible un ejercicio catártico, de (auto)conocimiento colectivo de gran parte de lo que, anteriormente, se encontraba vedado. La politización de la vida cotidiana que impuso la pandemia y la expansión de nuevos imaginarios políticos que aspiran a *revolucionarlo todo*, contrasta con el realismo capitalista y un estado de excepción permanente que pretende apuntalarse como sentido de inevitabilidad y destino inexorable para la región. Pero esta crisis que sacude hoy a buena parte de América Latina y otros puntos del planeta, jamás debe leerse como garantía de triunfo, ni tampoco en una clave derrotista. Más bien cabe pensarla en tanto *escuela de conocimiento* e instante anómalo en la vida social, que como vimos puede deparar diferentes y hasta contrapuestos escenarios.

Quizás valga la pena recuperar de la cosmovisión andina la metáfora y figura del *Pachakuti*, que involucra una doble significación de suma actualidad: remite a un cambio de época de carácter integral, un giro, revuelta o dislocamiento espacio-temporal que puede implicar tanto catástrofe como renovación y discontinuidad, colapso o bien una inversión radical del orden existente. El contexto por el que transita América Latina nos habla acerca de esta doble posibilidad en ciernes. Por un lado, la amenaza certera del advenimiento de un mundo distópico, de contrarrevolución preventiva, militarización de territorios, proliferación de enfermedades, fascismo societal, degradación ecológica y extractivismo recargado; por el otro, la conciencia anticipatoria cifrada en la insurgencia popular, la politización de masas, el relevo múltiple y el buen vivir. Frente a esta disyuntiva, no cabe sino apelar una vez más a la desmesura, para avivar la llama de la rebeldía y ayudar a parir aquello que no termina de (re)nacer. Porque a pesar del llanto por quienes han caído en los estallidos de 2019 y 2020, esos fuegos todavía resplandecen en nuestras pupilas.

BIBLIOGRAFÍA

Federici, S. (2014). *La inacabada revolución feminista. Mujeres, reproducción social y luchas por lo común*, Bogotá: Ediciones Desde Abajo.

García Linera, A. (2005). “La lucha por el poder en Bolivia”, en García, A.; Tapia, L.; Vega, O. y Prada, R.: *Horizontes y límites del estado y el poder*, La Paz: La Muela del Diablo.

Gramsci, A. (1984). *Cuadernos de la Cárcel*, Tomo 3, México: Editorial Era.

Gramsci, A. (1986). *Cuadernos de la Cárcel*, Tomo 4, México: Editorial Era.

Han, B. Ch. (2018). *La sociedad de la transparencia*, Buenos Aires: Herder.

Hoetmer, R. (2020). “Anatomía del giro autoritario y la derechización”, en VV.AA. *Nuevas derechas autoritarias. Conversaciones sobre el ciclo político actual en América Latina*, Fundación Rosa Luxemburgo y Ediciones Abya Yala, Quito.

Iza, L.; Tapia, A. y Madrid, A. (2020). *Estallido: la rebelión de octubre en Ecuador*, Quito: Kapari, El Colectivo, Quimantú, Bajo Tierra, Zur y La Fogata.

Laval, Ch. y Dardot, P. (2013). *La nueva razón del mundo. Ensayo sobre la sociedad neoliberal*, Buenos Aires: Editorial Gedisa.

Ouviña, H. (2016). “René Zavaleta, frecuentador de Gramsci”, en Giller, D. y Ouviaña, H. (edit.) *René Zavaleta Mercado: pensamiento crítico y marxismo abigarrado*, Santiago de Chile: Quimantú/IEALC.

Ouviaña, H. (2019). *Rosa Luxemburgo y la reinención de la política. Una lectura desde América Latina*, Buenos Aires: El Colectivo, Quimantú y Fundación Rosa Luxemburgo.

Ouviaña, H. y Thwaites Rey, M. (edit.) (2018). *Estados en disputa. Auge y fractura del ciclo de impugnación al neoliberalismo en América Latina*, Buenos Aires: CLACSO/El Colectivo.

Ouviaña, H. y Renna, H. (2019). “El baile de lxs que sobran. Hipótesis y preguntas desde la rebelión popular en Chile”, en Portal Gramsci en América Latina, www.gramscilatinoamerica.wordpress.com, recuperado el 18 de octubre de 2020.

Rodríguez, E. (2014). *Temor y control. La gestión de la inseguridad como forma de gobierno*, Buenos Aires: Editorial Futuro Anterior.

Thwaites Rey, M. y Ouviaña, H. (2019). “Notas sobre la disputa hegemónica y el sentido común en el largo ciclo de impugnación al neoliberalismo en América Latina”, en VV.AA. *Gramsci: La teoría de la hegemonía y las transformaciones políticas recientes en América Latina*,

Asunción: Centro de Estudios Germinal.

VV.AA. (2020). *18 de octubre: Primer borrador. Reflexiones desde abajo para pensar nuestro mañana*, Santiago de Chile: Quimantú.

Vega Cantor, R. (2019). *El Capitaloceno. Crisis civilizatoria, imperialismo ecológico y límites naturales*, Bogotá: Editorial Teoría y Praxis.

Zavaleta, R. (1986). *Lo nacional-popular en Bolivia*, México: Siglo XXI.

Zavaleta, R. (1990a). “Algunos problemas ideológicos actuales del movimiento obrero (contestación y antropocentrismo en la formación de la ideología socialista)”, en *El Estado en América Latina*, La Paz: Los Amigos del Libro.

Zavaleta, R. (1990b). “El Estado en América Latina”, en *El Estado en América Latina*, La Paz: Los Amigos del Libro.

EN TIEMPOS DE PANDEMIA: LA CRISIS ACTUAL DEL ESTADO Y LA DISPUTA POR LA HEGEMONÍA CIVIL EN AMÉRICA LATINA

Lucio Oliver¹

ESTADO Y SOCIEDAD EN LA ACTUAL PANDEMIA

La crisis de salud social que el virus SARS Cov-2 ha desencadenado en el mundo desnudó una relación de distancia entre sociedad civil y Estado muy similar en los diversos países. En la pandemia los Estados han pasado a ser directores *burocráticos* cuasi exclusivos de la forma social de enfrentamiento al virus. A su vez han sido los transmisores de las políticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS),² con mayor o menor autonomía.

En la diseminación del coronavirus los Estados no han incluido a la sociedad en su conjunto como elemento activo y deliberativo para enfrentar la pandemia. Sólo han previsto la participación de sectores que por su trabajo especializado tienen capacidad de atender a los infectados y a los enfermos. Han permitido trabajar presencialmente a aquellos que contribuyen con una actividad esencial a la reproducción de la sociedad: trabajo de la construcción, producción y distribución de alimentos y materias primas, comercio y banca. Eso significa dejar a millones de habitantes (a nivel mundial a miles de millones) en condición de relativa inacción, pasividad y aislamiento.

Esta situación es reveladora de los patrones de la hegemonía estatal prevaleciente en las sociedades capitalistas modernas, las cua-

1 Doctor en Sociología. Docente investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

2 Existen países en que los gobiernos y algunos segmentos sociales han rechazado esas políticas para enarbolar el negacionismo ante la existencia del virus o recomendaciones sacadas de la manga sin fundamento para enfrentar la pandemia. Pero han sido los menos, no obstante que sean importantes: EUA, Brasil en América Latina. Pero como no se trata de políticas de salud “alternativas” para enfrentar la pandemia, conviene analizar más bien lo que se muestra en donde los Estados han buscado ser responsables para contener y enfrentar la infección y la enfermedad.

les se organizan a partir de la existencia de dirigentes y dirigidos. La distancia entre gobernantes y gobernados es la normalidad y por ello la sociedad es considerada pasiva e incapaz de auto-orientarse en las crisis, definir por sí misma su comportamiento y sin capacidad de abordar críticamente los problemas inmediatos, además de los otros esenciales que el Estado y las clases dominantes se cuidan de normalizar en aras de la gobernabilidad.

La crisis ha evidenciado la falta de un sistema de salud pública universal y de calidad que conlleve tener preparados para las eventualidades a trabajadores de salud, médicos, hospitales públicos, medicinas, instrumentos de apoyo y curación y sistemas alimentarios sanos. En esta crisis del virus se hizo evidente asimismo la connotación clasista e insuficiencia de los sistemas de salud privados. También se ha podido constatar que en América Latina son muy altos los niveles de precarización que impiden que los trabajadores informales permanezcan cuidándose en su casa, además de las condiciones inadecuadas de la vivienda de los mismos. Otros aspectos que la crisis mostró es el de las morbilidades acumuladas en las masas populares: el consumo corriente de alimentos inadecuados e insalubres, la falta de acceso a agua limpia de una gran parte de la población. A esto, debe sumarse el problema de las diversas violencias que actúan en la sociedad. Problemas que en la lectura social de los medios de comunicación están invisibilizados (Sousa Santos, 2009).

A su vez los gobernados han tendido a asumir una actitud de conformismo social ante la actividad o inactividad del Estado, matizada empero por el importante mayor acceso autónomo de la población urbana a la tecnología virtual y un uso creativo para contrarrestar el aislamiento en la crisis y en algunos casos para realizar el denominado tele trabajo.

Llama la atención el desperdicio de energías y capacidades colectivas sociales. ¿Cuántos elementos organizativos y directivos de la sociedad se desperdician porque no son una parte activa en la crisis? ¿Cuántas capacidades intelectuales -de elementos directivos vinculados a la sociedad quedan anuladas por esa política de los Estados? Esta situación hace evidente como está estructurada nuestra sociedad: unas élites políticas, económicas, burocráticas y culturales gobiernan y dirigen y la mayoría de sujetos de la sociedad se convierten en autómatas sumisos, aislados y obedientes en espera de indicaciones. El resultado permanente es la actualización de la crisis civilizatoria de inicios del pasado siglo, acerca de la cual Gramsci anotaba que se caracterizaba por haberse roto la articulación entre el espíritu

crítico, el espíritu científico y el espíritu industrial. Rota la ligación, la sociedad se sume en una crisis civilizatoria en la cual “las élites espirituales de Occidente sufren desequilibrio y la falta de armonía entre la conciencia crítica y la acción”, tal cual sucede hoy en la actual crisis:

Como sostén al obrar, como ayuda al vivir, el imperativo filosófico es gris y vacío tanto como el solidarismo científico. En este vacío el alma se ahoga... Casi ningún día anterior a nuestro tiempo es alegre (¿pero esta crisis no está ligada más bien a la caída del mito del progreso indefinido y al optimismo que de él dependía, o sea a una forma de religion, más que a la crisis del historicismo y de la conciencia crítica?) ... hombre del Occidente hic res tua agitur. (Gramsci, 1999, p. 146)

LA CRISIS SANITARIA Y LA PROFUNDA CRISIS ORGÁNICA DE HEGEMONÍA DEL ESTADO EN AMÉRICA LATINA

Con sumo cuidado y siempre atendiendo al análisis de las situaciones concretas, se puede sostener que *la crisis política* de las últimas décadas, generada por los ataques y modificaciones al Estado nacional por parte de las oligarquías que dirigen la actual globalización capitalista con concepciones privatistas, financieristas y neoliberales, se está transformando en una *crisis de hegemonía del Estado*.

La crisis política de las dos primeras décadas del siglo actual pasó de ser expresión de una ausencia de correspondencia entre los objetivos y fines de la sociedad con los de los Estados, cuyo objetivo primordial bajo el proyecto neoliberal fue hiper valorizar al gran capital transnacional. En la mayoría de los países del Occidente, sobre todo en los periféricos y dependientes, la sociedad civil vio debilitadas al extremo o incluso destruidas las mediaciones con la sociedad política dominante. De ahí la manifestación de continuos movimientos sociales y políticos de resistencia y lucha a finales del siglo XX y las primeras dos décadas del presente.

En el terreno de las ideologías, roto el entusiasmo de masas dado el fin del ciclo de gobiernos progresistas, la desilusión ha hecho avanzar concepciones de apoliticismo y reflexiones filosóficas existenciales sobre la muerte de la política, en cuanto desaparición de la incidencia de la voluntad activa de los individuos en el Estado

No existe la política, ha perdido toda su potencia; no existe el Estado como organización de la voluntad colectiva, no existe la democracia. Son todas palabras que han perdido su sentido. El Estado es el conjunto de la disciplina sanitaria obligatoria, de los automatismos tecno-financieros, y de la organización violenta de la represión contra

los movimientos del trabajo. El lugar del poder no es el Estado, una realidad moderna que se acabó con el fin de la modernidad. El lugar del poder es el capitalismo en su forma semiótica, psíquica, militar, financiera: las grandes empresas de dominio sobre la mente humana y la actividad social (Berardi, 2020, p.2)³

En otro terreno, la consecuencia de la imposición del proyecto de los “Estados nacionales de competencia” (Hirsch, 2001) en América Latina ha sido la elevación política ideológica de un proyecto de clase capitalista articulado a las actuales formas de acumulación del capital transnacional. En este proyecto están integrados y asociados los empresarios transnacionales y los nativos: han impulsado la transnacionalización y privatización de las políticas estatales de trabajo, educación, seguridad social.

El resultado ha sido una profundización de la dependencia del capitalismo regional y una mayor transferencia de valor a los países centrales a partir de la extensión de la sobreexplotación de la fuerza de trabajo, la diseminación del formato outsourcing en las contrataciones laborales en la industria, el comercio y los servicios, el dominio de las corporaciones financieras, el crecimiento exponencial del mercado informal de la fuerza de trabajo, el desempleo estructural y el deterioro ambiental (Fontes, 2010). La base ha sido el extractivismo depredador de la naturaleza, el agronegocio y la producción industrial y de servicios orientadas a la exportación.

En el polo contrario, cabe señalar que las luchas y conquistas sociales de la segunda mitad del siglo XX de las masas populares de América Latina⁴, se condensaron en algunos logros de los Estados nacional desarrollistas, en sindicatos y partidos populares y organizaciones autónomas comunitarias. Los Estados fueron el espejo más o menos deformado de la sociedad y su reflejo fue en general el despotismo burgués apenas aminorado por la existencia de algunos derechos formales de los trabajadores integrados en organizaciones corporativas sometidas al Estado. Prevaleció la condensación capitalista de los proyectos de unidad nacional, los milagros económicos pasajeros

3 Entrevista hecha por el diario Página/12 de Argentina. El reputado Bifo (Franco Berardi) es un filósofo italiano contemporáneo. Trabaja en Milán y vive normalmente en Bologna, Italia. Se eligió este autor porque sintetiza muy atinadamente los argumentos del antiestado y la antipolítica que circulan también en América Latina.

4 Por masas populares entendemos a todos aquellos que viven de su trabajo: obreros, burócratas, pequeños campesinos, pequeños productores, pequeños comerciantes, clases populares con trabajo informal, clases medias bajas, intelectuales asalariados y comunidades originarias del capitalismo actual.

y de corta duración que generaron algunos derechos de las grandes mayorías trabajadoras y campesinas. Todo esto con la diversidad de procesos y situaciones de los países latinoamericanos.

La crisis política de los Estados bajo la globalización significó para las sociedades reducidas en sus derechos y libertades encontrar en las formas de la democracia un espacio para defender sus derechos y logros, a lo que inmediatamente las clases dirigentes pusieron un dique de democracia restringida, gobernabilidad burocrática autoritaria e ideología liberal individualista. En esa situación la crítica social empezó a crecer en el proyecto nacional popular autónomo de las mayorías.

Bajo la crisis política, la fuerza creciente de los movimientos de resistencia se tradujo en impugnación de masas al neoliberalismo, que derivó en la elección de gobiernos progresistas socialdemocráticos de conciliación de clases y pacificación social (Ouvina y Thwaites, 2018). La administración progresista de los Estados tuvo momentos exitosos por los ingresos públicos provenientes de los impuestos generados por el extractivismo, el rentismo y la exportación de commodities. En algunos otros países las clases políticas neoliberales impidieron los triunfos electorales de las grandes mayorías, inclusive por fraudes o represión como en México, Perú o Colombia. En estos, se acumuló la fuerza de la resistencia en el movimiento popular y se abrió paso la putrefacción de los Estados. El capital financiero y las corporaciones transnacionales se apropiaron de la riqueza y las clases políticas se hicieron cómplices del crimen organizado y de los cárteles del narcotráfico. Los Estados demandaron una mayor intervención de la potencia regional imperialista de los Estados Unidos de América en conjunto con el apoyo subsecuente de la Unión Europea y se integraron a sus políticas hemisféricas de seguridad.

En el conjunto de países de la región latinoamericana, la elevación de la contraposición de proyectos y de la conflictividad política ha gestado lo que podríamos inicialmente y de manera todavía aproximada considerar un “empate catastrófico” entre la fuerza transnacionalizada y su proyecto de globalización neoliberal, hoy en grandes dificultades por el estancamiento económico prolongado y la crisis de autoridad, y la fuerza de las masas de trabajadores y campesinos y el proyecto popular, mismo que aún bajo las políticas de conciliación de los gobiernos progresistas tuvo algunos avances pero también mostró tropiezos en términos del empoderamiento popular.

El empate catastrófico se produce en el contexto de una crisis de hegemonía del Estado que profundizó los conflictos entre fuerzas

y proyectos, abriendo a nivel regional una situación regional de fenómenos morbosos por la cual se abren paso políticas de una ultraderecha que aboga por Estados de excepción con fascismo societal (Honduras, Brasil, Bolivia, Ecuador, Chile) o las de un progresismo que aboga por la recuperación del Estado nacional y sus instituciones bajo una movilización popular no del todo regulada que tiende a ser democrático radical en términos estatales (México, Argentina). Diversos países están en medio de esos extremos de empate pero la tendencia es la misma (Colombia, Paraguay, Perú, Uruguay, Panamá, Guatemala, El Salvador). Veamos si nos ilumina la consideración de Gramsci ante la crisis del Estado liberal europeo de inicios de los años treinta del siglo pasado:

En cierto punto de su vida histórica los grupos sociales se separan de sus partidos tradicionales, o sea que los partidos tradicionales en aquella determinada forma organizativa, con aquellos determinados hombres que los constituyen, los representan y los dirigen no son ya reconocidos como su expresión por su clase o fracción de clase... ¿Cómo se crean estas situaciones de oposición entre representantes y representados, que del terreno de los partidos (organizaciones de partido en sentido estricto, campo electoral-parlamentario, organización periodística) se refleja en todo el organismo estatal, reforzando la posición relativa del poder de la burocracia (civil y militar), de la alta finanza, de la Iglesia y en general de todos los organismos relativamente independientes de las fluctuaciones de la opinión pública? En cada país el proceso es distinto, si bien el contenido es el mismo. Y el contenido es la crisis de la hegemonía de la clase dirigente... Se habla de "crisis de autoridad" y esto precisamente es la crisis de hegemonía, o crisis del Estado en su conjunto. (Gramsci, 1999, p. 52).

La situación es peligrosa, justamente porque en las crisis de esta naturaleza se producen fenómenos morbosos (de imposición de fuerza por un lado y de impaciencia política o de apoliticismo desilusionante por el otro) que no logran superarlas:

Si la clase dominante ha perdido el consenso, o sea, si no es ya "dirigente", sino únicamente "dominante", detentadora de la pura fuerza coercitiva, esto significa precisamente que las grandes masas se han apartado de las ideologías tradicionales, no creen ya en lo que antes creían, etcétera. La crisis consiste precisamente en el hecho de que lo viejo muere y lo nuevo no puede nacer: en

este interregno se verifican los fenómenos morbosos más variados. (Gramsci, 1999, p.37)

Las iniciativas del pensamiento crítico respecto de las opciones de las masas populares en las crisis de esta naturaleza tienen que considerar la situación de fuerzas y realizar el análisis concreto del nivel existente de voluntad colectiva nacional popular, para impulsar una acción transformadora so pena de confundir, si no se hace, la pasión política con la relación de fuerzas:

Investigar exactamente cómo se forman las voluntades colectivas permanentes, y cómo es que tales voluntades se proponen fines inmediatos y mediatos concretos, o sea una línea de acción colectiva. Se trata de procesos de desarrollo más o menos largos, y raramente de explosiones “sintéticas” repentinas. También las “explosiones” sintéticas se verifican, pero, observando de cerca, se ve que entonces se trata de destruir más que de reconstruir; de remover obstáculos exteriores y mecánicos al desarrollo autóctono y espontáneo... Se trata de un proceso molecular, minuciosísimo, de análisis extremo, capilar... nace una voluntad colectiva de un cierto grado de homogeneidad, de ese cierto grado que es necesario y suficiente para determinar una acción coordinada y simultánea en el tiempo y en el espacio geográfico en el que el hecho histórico se verifica. (Gramsci, 1999, p. 314)

LA COYUNTURA DE LUCHA POR LA HEGEMONÍA

En el contexto de la crisis de hegemonía del Estado en América Latina, México y Argentina tienen ahora condiciones excepcionales que demandan enormes esfuerzos, capacidades y comprensión estratégica y política para avanzar. En tanto el primero experimentó una insurrección electoral popular para echar fuera del gobierno a las fuerzas antineoliberales en julio de 2018, Argentina logró en octubre de 2019 una reversión electoral de la derecha y el progresismo consiguió regresar al gobierno. En los dos países, los cambios de gobierno fueron acompañados con movilización de masas y en ambos fueron decisivos los movimientos sociales y políticos en calidad de sujetos activos.

Al considerar las perspectivas posibles de una confluencia innovadora y creativa de empoderamiento popular entre sociedad civil y sociedad política, en medio de la crisis del Estado y bajo la situación actual de pandemia es conveniente evaluar, con vista en la lucha hegemónica, el nivel, carácter y potencialidades reales de la voluntad colectiva popular existente para hacerla avanzar. El problema es lograr una capacidad autónoma popular y al mismo tiempo acompañar las

políticas de los presidentes progresistas cuyo programa seguirá siendo socialdemócrata. La dificultad es superar con autonomía el actual equilibrio catastrófico de fuerzas en esos países. La respuesta no está en las disquisiciones abstractas sino en lo que pueden generar las luchas concretas de posiciones. Es un momento adecuado para que los movimientos populares desplieguen su propia *guerra de posiciones* a través de la lucha por derechos y por profundizar la democracia en todos los ámbitos. Es una oportunidad histórica para ambos países y para sus masas populares.

Al comentar las dificultades de una lucha de este tipo Gramsci hizo la siguiente anotación:

Ésta me parece la cuestión de teoría política más importante... y la más difícil de resolver justamente... La guerra de posiciones exige enormes sacrificios a masas inmensas de población; por eso es necesaria una concentración inaudita de la hegemonía... en la política la “guerra de posiciones”, una vez ganada, es decisiva definitivamente. O sea, que en la política subsiste la guerra de movimientos mientras se trata de conquistar posiciones no decisivas y por lo tanto no son movilizados todos los recursos de la hegemonía y del Estado, pero cuando, por una u otra razón, estas posiciones han perdido su valor y sólo las que son decisivas tienen importancia, entonces se pasa a la guerra de asedio, compleja, difícil, en la que se exigen cualidades excepcionales de paciencia y de espíritu inventivo. (Gramsci, 1999, p. 106)

Está claro que al interior de estos dos nuevos gobiernos no hay del todo un proyecto nacional compartido y por el contrario hay una tensión de fuerzas, proyectos y personalidades. Por ello no es posible resolver adecuadamente la política hacia la economía capitalista dependiente, las políticas públicas de la burocracia estatal, la autonomía de las comunidades indígenas, la necesidad de una economía social, etc. También hay distintas posiciones respecto al medio ambiente y el proyecto educativo.

Para que el movimiento popular establezca su propia organización política de la hegemonía está precisando de la “catarsis”, esto es, de un proceso de encuentro de los movimientos sociales y políticos que lleve a crear una visión común estratégica de la lucha autónoma por la hegemonía en las condiciones de nuestra época y lugar (Oliver; 2017). Sólo así el cambio no se limitará a una recuperación de instituciones históricas y a una limpieza ética del Estado bajo el capitalismo dependiente subordinado a la globalización neoliberal en crisis. Por el contrario, se trata de lograr desde abajo y desde arriba que la de-

mocracia popular se profundice y el proyecto abra paso a un poder popular autónomo, consciente y participativo.

BIBLIOGRAFÍA

Berardi, F. (2020). “Asistiremos al colapso final del orden económico global”. Entrevista en diario Página/12, 24 de agosto de 2020. Disponible en <https://www.pagina12.com.ar/287069-franco-bifo-berardi-asistiremos-al-colapso-final-del-orden-e>

Fontes, V. (2010). *O Brasil e o capital-imperialismo. Teoría e história*. Brasil: Universidad de Rio de Janeiro.

Hirsch, J. (2001). *El Estado nacional de competencia*, México: UAM.

Gramsci, A. (1999). *Cuadernos de la Cárcel*, México: Editorial ERA.

Oliver, L. (2017). “Gramsci y la noción de catarsis histórica. Su actualidad para América Latina”, en Revista Internacional de Filosofía y Política, *Las torres de Lucca*, Universidad Complutense de Madrid, No. 11, julio a diciembre de 2017.

Ouviña H. y Thwaites M. (edit.). *Estados en disputa. Auge y fractura del ciclo de impugnación al neoliberalismo en América Latina*, Buenos Aires: CLACSO, IEALC y El Colectivo.

Sousa Santos, B. (2009). “La Sociología de las Ausencias y la Sociología de las Emergencias: para una ecología de saberes”, en *Renovar la teoría crítica y reinventar la emancipación social (encuentros en Buenos Aires)*, Buenos Aires: CLACSO.

NI CONDENA ESCATOLÓGICA NI VENGANZA PANTEÍSTA. EL ESTADO CAPITALISTA AL DESNUDO EN LOS TIEMPOS DEL CORONAVIRUS

José Francisco Puello-Socarrás¹

-¡Qué preciosos son los vestidos nuevos del Emperador! ¡Qué magnífica cola! ¡Qué hermoso es todo!

Nadie permitía que los demás se dieran cuenta de que nada veía, para no ser tenido por incapaz en su cargo o por estúpido. Ningún traje del Monarca había tenido tanto éxito como aquél.

-¡Pero si no lleva nada! -exclamó de pronto un niño.

-¡Dios bendito, escuchen la voz de la inocencia! -dijo su padre; y todo el mundo se fue repitiendo al oído lo que acababa de decir el pequeño.

-¡No lleva nada; es un chiquillo el que dice que no lleva nada!

-¡Pero si no lleva nada! -gritó, al fin, el pueblo entero.

Aquello inquietó al Emperador, pues barruntaba que el pueblo tenía razón; mas pensó: «Hay que aguantar hasta el fin». Y siguió más altivo que antes; y los ayudas de cámara continuaron sosteniendo la inexistente cola.

Hans Christian Andersen. *El traje nuevo del emperador* (1837)

VIGENCIA Y ACTUALIZACIÓN DE LA CRISIS: LA SOCIEDAD CAPITALISTA AL DESNUDO

Contrario a lo que se ha querido instalar en los *mass media* globales, el COVID-19 no es “causa” de alguna “crisis”. Se trata de un *choque* que profundiza la crisis capitalista, la cual es *estructural, de largo plazo* (retrospectiva y prospectivamente hablando), *multidimensional y global*.

¹ Escuela Superior de Administración Pública (ESAP – Colombia).

Así como el choque 2007-2008 tuvo una impronta financiera y no se trató de un problema exclusivo del sistema bancario o de las bolsas de valores, tampoco confinado en determinados “lugares” (los Estados Unidos y Europa), sino que se trataba de un fenómeno globalizado -aunque con impactos diferenciales-, la pandemia actual no se agota en los “desarreglos” de los sistemas de salud pública (sean de propiedad estatal o privados) ni solamente verifica la precariedad sanitaria mundial. La coyuntura viral sería como el niño del cuento de Hans Christian Andersen que grita en medio de la multitud alienada: ¡Pero si el rey está desnudo!

La pandemia hoy vigente devela -una vez más- el desabrigo y el estado hipercrítico de las trayectorias no coyunturales (históricas) en las dinámicas, las lógicas, pero especialmente las contradicciones provocadas por la fase neoliberal del actual sistema de (re)producción social. Por la magnitud espectacular del choque, el virus expone directamente el malestar global asociado a la crisis biológica (en los cuerpos humanos, individual y socialmente considerados) que, entre otros, Koumentakis (2009) ha venido alertando.

Por ello, la actual coyuntura acelera la Crisis *de* todas y cada una de las estructuras y los aspectos de la vida social. Recrudece las contradicciones de aquellas dimensiones singularmente consideradas (empezando -como decíamos- por la biológica y la ecológica y sionatural, pero también sus crisis conexas: alimentaria, energética, económica, política, etc.), potenciando exponencialmente su interdependencia crítica.

Al menos desde la década de 1970, el Capitalismo tardío viene paulatina, pero progresivamente socavando -cada vez con mayor intensidad y extensión- las posibilidades de la vida como un todo (sionaturales) en el planeta. La exasperación continua de cualquier tipo de límites -objetivos y, especialmente, subjetivos: la correlación de fuerzas en la lucha de clases- para la acumulación incesante del Capital bajo su versión más cavernícola: el neoliberalismo, no sólo ha permitido evidenciar que *esta* Crisis sea civilizacional. Hoy, el virus es un problema global emergente, pero la fractura metabólica de la Vida -digámoslo de esta manera- su enfermedad, se llama: capitalismo.

CRÓNICAS DE UNA PANDEMIA ANUNCIADA

Evitando siempre decir las cosas por su nombre y, seguramente, con el ánimo de reeditar en estos momentos el oxímoron del *capitalismo de régimen estable* (propuesta surgida en los años 1970s por el Club de Roma), al principio de esta década, varias alertas fueron realizadas

bajo diferentes enfoques. De allí que la narrativa que se ha elevado, especialmente a nivel político por parte de gobiernos e instituciones sistémicas para proteger en medio de la coyuntura los intereses del Capital, según la cual el choque viral es una especie de emergencia “imprevista” resulta fácilmente falsificable.

Desde principios de este milenio varias voces habían advertido que una pandemia de las proporciones que hoy atestiguamos era una latencia muy real.

Por ejemplo, en 2004 Klaus Stöhr, Coordinador de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la Gripe Aviar, subrayaba retrospectivamente:

Después de la pandemia, una de las cosas más difíciles será explicar al público por qué no estuvimos preparados, puesto que ha habido suficientes avisos [énfasis propio] (Stöhr citado por Coronel, 2020)

En 2008, el Consejo Nacional de Inteligencia de los EE.UU. (NIC, por su sigla en inglés), en su informe prospectivo: *Tendencias Globales 2025. Un Mundo en transformación*, sostenía:

(...) Potencial Emergencia de una pandemia mundial... La aparición de una nueva enfermedad respiratoria humana, altamente transmisible y virulenta, para la que no existen medidas adecuadas para contrarrestarla, podría iniciar una pandemia mundial
(...) Las prácticas ganaderas no reguladas podrían permitir que una enfermedad zoonótica como el H5N1 circulase entre las poblaciones de ganado, lo que aumentaría la posibilidad de que se produjese una mutación en una cepa con potencial pandémico.
(NIC, 2008, p. 75)

Por su parte, el año pasado (septiembre, 2019), la misma Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial a través de la Junta de Vigilancia Mundial de la Preparación (GPMB, por su sigla en inglés), en el documento: *Un mundo en peligro. Informe anual sobre preparación mundial para las emergencias sanitarias*, destacaba:

(...) nos enfrentamos a la amenaza muy real de una pandemia fulminante, sumamente mortífera, provocada por un patógeno respiratorio que podría matar de 50 a 80 millones de personas y liquidar el 5% de la economía mundial. Una pandemia mundial

de esa escala sería una catástrofe y desencadenaría caos, inestabilidad e inseguridad generalizadas. El mundo no está preparado[énfasis propio] (GPMB, 2019, p. 6).

Estos fenómenos de ninguna manera se explican por alguna espontaneidad “natural” o sobrenatural “imprevista”. No se trata ni de una condena escatológica ni de una venganza panteísta como se ha popularizado en ciertos círculos de discusión donde se propone que hoy nos enfrentamos a una especie de retaliación de la Naturaleza contra la humanidad, olvidando que los seres humanos pertenecemos a un metabolismo siconatural.

El choque viral y la profundización de la Crisis civilizacional es un producto y un resultado *histórico* que debe remitirse no solamente a la “acción humana” (hoy se habla del término *antropoceno*). Debe apuntar además hacia la formación social hoy vigente como “totalidad dialéctica” -sostenía Engels en *Dialéctica de la naturaleza*- que rige hace varios siglos: la Sociedad Capitalista, modo de producción y reproducción sociales donde -parafraseando a Marx- la acumulación incesante de Capital desnaturaliza y deshumaniza tanto la naturaleza como la humanidad misma. Una época que virtualmente se acelera y se exagera con la Era del Capitalismo neoliberal. A pesar de los pronósticos y las advertencias, la Sociedad Capitalista no estuvo “preparada”, simplemente porque ontológicamente no podría estarlo. El Capital muerto se sobrepone al Trabajo vivo y, en esa medida, esta contradicción -a menos que se la interpele de raíz- fluirá con relativa inercia como una premisa de su orden, organización y funcionamiento.

Aunque está ampliamente documentado, sobre todo: comprobado por las realidades emergentes y no sólo por las teorías (bastaría con aproximar las cifras estadísticas que resultan más que contundentes), las fantasías del Progreso del capitalismo histórico y las ficciones del Desarrollo del neoliberalismo contemporáneo (en cualquiera de sus versiones: sostenible, sustentable, “verde”, etc.; y dimensiones: teóricas, ideológicas, políticas) y que vienen comprometiendo a la humanidad entera son la auténtica catástrofe². Continuar haciendo las mismas cosas, una y otra vez, y esperar resultados distintos es lo que Rita Mae Brown le llamó “insanidad” (locura).

2 Etimológicamente: *κατὰ*, *kata*: hacia abajo; *στροφή*, *strophe*: voltear; literalmente: un “voltear hacia abajo” o, simplemente: *cambiar las cosas hacia lo peor*.

La colección selectiva de acontecimientos que antes consignamos lo sintetiza, entre otros, más recientemente Davis (2020) cuando plantea -en *Llega el monstruo. COVID-19, gripe aviar y las plagas del capitalismo*:

(...) La aparición del Sars-CoV-2 (...), que causa la COVID-19 (...) no fue del todo inesperada. En el año 2003, su hermano mayor, el SARS-CoV (...) había dado un buen susto al mundo, y otra iteración mortal, el MERS (síndrome respiratorio de Oriente Medio), apareció en Arabia Saudita en 2020 y ha matado a casi un millar de personas (...) La amenaza de un estallido de la gripe aviar y su propagación mundial sigue siendo inminente. [énfasis propio]

El choque viral actual (incluso, la latencia de nuevas situaciones críticas) revela entonces que el imperativo anticapitalista no lo es exclusivamente en el sentido ético y político de la Vida en sociedad, sino en su sentido más inmediato e inminente: el vital.

El capitalismo neoliberal de la catástrofe resulta irreformable y no se superará con cambios de “paradigma” económico o medidas políticas, por más audaces que ellos pretendan ser. No existe margen para un *capitalismo alternativo*. Las alternativas si son auténticas deben apuntar hacia Transformaciones: la sustitución de la matriz civilizacional y una nueva formación social.

¿CÓMO PODRÍA CONSEGUIR EL CAPITALISMO, RESPONSABLE DE ESTA CRISIS, SALIR IMPUNE DE LA MISMA?

En *Nunca dejes que una crisis te gane la partida* (2013), obra cuyo subtítulo es: “¿cómo ha conseguido el neoliberalismo, responsable de la crisis, salir indemne de la misma?”, Philip Mirowski observaba la coyuntura crítica en la producción capitalista global y que, inicialmente, se expresaba en la forma de un choque financiero con epicentro en los Estados Unidos y *Wall Street* entre los años 2007 y 2008, sentenciando:

La crisis económica que hemos padecido estos últimos años ha causado estragos entre las clases medias y bajas, y disparado los índices de desigualdad. No obstante, *no se ha hecho nada para evitar que en un futuro las causas que nos llevaron a la crisis puedan volver a repetirse...* Asimismo, los máximos responsables del desastre no sólo no han sido juzgados y condenados, sino que *siguen en sus cargos haciendo exactamente lo mismo que hacían antes de la crisis: enriquecerse a costa del resto de la sociedad*. Amparados bajo la doctrina neoliberal imperante

y cobijados por quienes los defienden, su respuesta es sólo una: abordar la crisis como si de un acto divino se tratara y seguir adelante, una máxima que ha paralizado todo intento de enmendar el desastre [énfasis propio].

El diagnóstico propuesto por Mirowski resulta ahora muy ilustrativo en medio del choque viral. Y no únicamente por la descripción sobre lo que ha venido sucediendo a nivel mundial durante la última década. Es quizás más provocativo por su pronóstico sobre lo que podría suceder hacia el futuro con la inminente profundización de la Crisis capitalista actual.

Varias predicciones que anticipan el mundo post-pandemia se han hecho ahora virales. Entre las más evocadas, una “inicua doctrina del shock” -como ya lo denunciaba hace varios años Mirowski, llamando la atención sobre su bloqueo y, con ello, el reforzamiento del *statu quo*; el ejemplo más paradigmático es, desde luego, la *Obamanía* en los Estados Unidos y las implicaciones domésticas e internacionales contenidas inicialmente en esa “esperanza”- y una supuesta nueva aurora superadora fruto de la resistencia ante el “capitalismo del desastre” (Klein). A *Green New Deal* entonces retoma fuerza en torno al también inicuo, y aún más inverosímil, supuesto retorno a la época keynesiana de mediados del siglo pasado. ¿Se olvida que los (mal)llamados Treinta años gloriosos del capitalismo más que un tiempo de normalidad y estabilización capitalistas fueron un período excepcional en la historia de este tipo de sociedad y que hoy por hoy pertenece al pasado?

Las exigencias actuales de la economía política actual, puntualmente: de la acumulación, hacen imposible no sólo pensar sino también restaurar un régimen estatal de “bienestar”. Esas perspectivas, seguramente formuladas *bona fide*, pero insistimos: ingenuas económicamente y engañosas políticamente, causan mayor estupor cuando son formuladas desde América Latina y el Caribe, lugar donde el régimen estatal construido en la posguerra significó, por contraste y comparación: malestar *manu militari* a partir de los regímenes estatales burocrático-autoritarios y tecno-militares los cuales abrieron paso, luego, a la larga noche neoliberal regional y globalmente hablando.

EL NEOLIBERALISMO (ORTODOXO) ESTÁ MUERTO ¿¡LARGA VIDA AL NEOLIBERALISMO (HETERODOXO)!?

En 2008, uno de los operadores intelectuales del capitalismo de esta época, el premio Nobel en Economía, Joseph Stiglitz decía:

(...) la crisis de Wall Street es para el fundamentalismo del mercado lo que la caída del muro de Berlín fue para el comunismo: le dice al mundo que este modo de organización económica resulta insostenible [énfasis propio] (El País, 20/9/2008).

La anterior frase mantiene un significado especial. Es un síntoma contundente sobre las tendencias ideológicas, discursivas, pero también las praxis respecto a las dos caras del neoliberalismo, el capitalismo hoy realmente existente. Nótese que Stiglitz se refiere estrictamente al *fundamentalismo* de mercado. Ciertamente, el recambio de siglos ha venido mostrando cambios, modificaciones y ajustes de todo tipo en la economía política mundial, pero muy contundentes *al interior* de la matriz de la Hegemonía neoliberal.

Uno de los tránsitos que resulta peculiarmente determinante es el giro desde la llamada Ortodoxia neoliberal, con frecuencia caracterizada (¿simplificada?) como “fundamentalista” de mercado, el *primer neoliberalismo* desplegado bajo los prototipos económico y político suscitados entre las décadas de 1970s y mediados de 1990s *vis a vis* las re-visiones neoliberales, un segundo momento de continuidad, un *nuevo neoliberalismo* (Puello-Socarrás, 2008). Esta fase heterodoxa pretende blindar la hegemonía de este proyecto político para el siglo XXI recurriendo a praxis renovadas que revelan la otra cara del neoliberalismo³.

Se trata entonces de una época de cambios *dentro* del neoliberalismo, pero no del cambio de época *desde el* neoliberalismo, a pesar de que se han confundido una y otra cosa.

En contraste con las primeras posiciones ortodoxas que enaltecieron el libertinaje de los mercados desregulados –“fundamentalistas” según Stiglitz-, para la heterodoxia neoliberal el mercado sigue siendo fundamental, es decir, sincera el hecho que sin un Estado *fuerte* no hay posibilidad para construir los Mercados *libres*. La “fortaleza” que reclama el neoliberalismo para los Estados y sus organizaciones institucionales debe interpretarse exclusivamente en la medida en

3 Evitamos la errática, aunque difundida “distinción” entre, por un lado, la ortodoxia económica (incorrectamente iguala lo neoclásico con neoliberalismo sin advertir que el primer término se refiere a un fenómeno teórico mientras que el último es un proyecto político) y, por el otro, la heterodoxia económica (azarosa, ambigua y simultáneamente reúne visiones teóricas y políticas antípodas como el keynesianismo y el marxismo) (ver Puello-Socarrás, 2015).

que sus acciones, medidas y políticas estén siempre *en función* de los mercados y sus necesidades, creando las condiciones económicas y recreando las garantías antisociales para que el Capital contemporáneo intente “volver” a dinamizar la cada vez alicaída acumulación capitalista asociado a la realidad objetiva de la caída tendencial de la tasa de ganancia. La heterodoxia neoliberal pues se resume en el viejo lema alemán: *tanto Estado como sea necesario tanto Mercado como sea posible*.

Por ello, en medio del contexto histórico actual, el Estado debe respaldar y complementar más activamente las dinámicas de los Mercados. Los espectaculares salvatajes activados por los Estados nación en 2007-2008 y ahora en 2020 dirigidos hacia Grandes empresas transnacionales y el sector financiero nacional (aunque siempre en conexión globalizada) y que contrastan con los paupérrimos “salvatajes para los pobres” resultan no sólo evidentes sino ilustrativos de esta condición. En vista que el patrón de acumulación capitalista contemporáneo basado en la desregulación ha (de)mostrado sus límites, especialmente para contrarrestar la implosión social y, con ello, poniendo en riesgo al sistema como un todo, la opción de la regulación estatal es *la* orientación plenamente avalada hoy por los neoliberales heterodoxos -justificada teóricamente por sus variadas expresiones ideológicas de Hayek a Röpke pasando por Mises o Alesina.

Desde luego, el Consenso neoliberal de la regulación insiste e insistirá en evitar que el Estado no “retorne” al dirigismo de la intervención estatal o abra paso hacia alguna especie de planificación centralizada.

Hay que insistir que la Sociedad Capitalista nunca ha funcionado *sin* Estado o solo *con* Mercado; ni siquiera en la supuesta época de la *autorregulación* de la Mano invisible y el capitalismo del *laissez-faire* que describieron Gournay o Adam Smith y por eso definieron las “funciones” del Estado. Más que un mero actor, el Estado es la expresión política del Capitalismo.

Sin embargo, en esta coyuntura de mediano plazo retrospectiva y prospectivamente hablando, la hegemonía neoliberal va cediendo en sus preferencias desde la acción estatal *des-regulativa* hacia una *regulación*.

EL ESTADO NEOLIBERAL HOY. HETERODOXIA EN ACCIÓN

El tránsito hacia la preeminencia de las nuevas visiones y el desplazamiento de la ortodoxia *dentro* del neoliberalismo ha venido operando desde finales de la última década del siglo pasado. El año 1998 puede

ser considerado como el hito por ser el período más próximo a los grandes choques financieros globales en Indonesia, Tailandia, Corea del Sur, Brasil y Rusia. Pero también es el momento cuando se hicieron oficiales las “críticas” frente al Consenso de Washington (del año 1989) ¡por el propio neoliberalismo! y sus operadores: Williamson, Burky & Perry, Stiglitz, Castañeda & Mangabeira Unger, entre otros.

En esa oportunidad, se trataba estrictamente de reformular los *programas de política* para la renovación del *proyecto neoliberal* hacia el siglo XXI. O, de otra manera: cambiaron las formas en las políticas y medidas estatales, incluso “rectificando” su impronta sesgadamente macroeconómica y “ampliándolas” hacia otras dimensiones: aspectos institucionales y cuestiones sociales, comillas mediante. En 2001, desde el corazón de la hegemonía neoliberal se anunciaba retóricamente: el *Disenso de Washington* (de autoría de Birdsall & De La Torre) publicado por el Fondo Carnegie para la Paz Internacional y el Diálogo Interamericano, el cual llevaba por subtítulo: Políticas económicas para la equidad social en Latinoamérica.

Después de todo esta trayectoria, los objetivos políticos estratégicos del neoliberalismo quedaron intactos; ciertamente reforzados a través de una errática legitimación que pretendía reconstruir el resquebrajado consenso neoliberal, aunque sin abandonar las formas de represión sistemáticas que acompañan esa construcción *ab origine*. Las llamadas Tercera vía Angloamericana con Clinton en los Estados Unidos y Blair en el Reino Unido, así como la Tercera vía Latinoamericana consumada por los gobiernos del neodesarrollismo “progresista” (puntualmente: el neoliberal-desarrollismo) no solamente fueron protagonistas sino responsables económicos y políticos de esta reconfiguración.

El punto de inflexión decisivo para la institucionalización relativamente definitiva del *nuevo neoliberalismo heterodoxo*, sin embargo, será la crisis de 2007/2008. Esta fase tendría eventualmente un impulso inédito hoy, en el año 2020 y en medio del choque viral del COVID-19.

En el año 2011, el entonces director del Fondo Monetario Internacional, D. Strauss-Kahn en una conferencia realizada ¡justamente en Washington, DC!., oficializaba la “muerte” de la ortodoxia neoliberal:

El Consenso de Washington pertenece al pasado... Al formular un marco macroeconómico nuevo para un mundo nuevo, el péndulo se desplazará —por lo menos un poco— del mercado hacia

el Estado, y de un entorno relativamente simple hacia uno relativamente más complejo... también debe dedicar[se] más atención a la cohesión social [énfasis propio]. (Strauss-Kahn, 2011)

Al mismo tiempo, se constituía el Nuevo Consenso Neoliberal en torno a valores emergentes: la Regulación; en vez de meras privatizaciones, la Desprivatización vía las alianzas público-privadas; la Internacionalización controlada (regulada), antes que indiscriminada.

La era del neoliberalismo desregulador á la Friedman claudicó; pero otra era, mucho más peligrosa, el neoliberalismo regulador á la Hayek hoy no sólo se impone, sino que se interpone. Un neoliberalismo con “más” Estado pretende salir indemne de la crisis. Y peor aún: impune ante el holocausto social que él mismo recrea.

¿MÁS CAPITALISMO Y, PEOR AÚN, ¿MÁS NEOLIBERALISMO!? LA SIN SALIDA HEGEMÓNICA PARA LA NUEVA "NORMALIDAD" POSTPANDEMICA. LIMINAR

En medio del choque viral el carácter del Estado capitalista en general y del neoliberal en particular, exhibe “caras radicalmente diferentes en los dos extremos de la jerarquía social: un rostro bello y atento hacia las clases media y alta, y un rostro temible y sombrío hacia la clase baja” (Wacquant, 2009: 437).

Se visibiliza con mayor ímpetu el tipo y la clase de acciones “inmediatas” e “inminentes” de los Estados a nivel global.

Por un lado, en términos sanitarios y de salud pública, las iniciativas estatales han sido tímidas, desarticuladas, dilatadas y selectivamente defensivas. Ante la flagrante incapacidad de reacción institucional, la respuesta de la absoluta mayoría de los gobiernos ha sido *el confinamiento de la inseguridad social*, es decir, centradas en la responsabilidad individual y, desde luego, descargando la irresponsabilidad estatal especialmente en las unidades familiares. La ausencia de garantías vitales mínimas para los sectores pobres y empobrecidos, numéricamente las mayorías sociales que se encuentran en la pauperización, es la regla. Por otro lado, y por contraste, otras medidas estatales han sido osadas, bastante bien articuladas y con sentido de urgencia. El brazo punitivo (policial y militar) del Estado ha brillado por su presencia y, ciertamente, es la cara más visible del Estado en tiempos de coronavirus. La mano “caritativa” (asistencial) generalmente ha venido de la *manu militari* (represiva) en distintos tipos de situaciones, acciones, etc., confirmando la fusión de las políticas sociales y las punitivas, una tendencia que no es inédita, sino el legado paradigmático del Estado neoliberal durante las cuatro últimas décadas.

La coyuntura también demuestra -una vez más- algo bien sabido por el saber académico (aunque todavía obtusamente difundido por sectores de la academia neoliberal): el rotundo fracaso de los estilos privatizados de gobierno: la *Gobernanza* (aún en sus distintas versiones: policéntrica, multinivel, sociocibernética, corporativa; o niveles: *micro*, *meso*, *meta*) y de organización institucional: la *Nueva Gestión Pública*). Los hechos recientes confirman que la llamada *Nueva Gobernanza Pública* tanto al nivel global como al nivel doméstico, al interior de los Estados nacionales ha resultado ser un fiasco, esta vez y por la impronta del choque coyuntural, de proporciones macabras. Ninguna de las supuestas C's (co-ordinación, co-operación, co-laboración, etc.) parece haber tomado forma real, incluso, rendido algún fruto, tal y como lo promociona la academia neoliberal en los libros.

Desafortunadamente y contra toda expectativa, la forma Estado del neoliberalismo antes que empezar a destituirse parece paulatinamente reforzarse.

Varios analistas han confundido los llamados emergentes para una mayor proactividad estatal con un supuesto giro, vuelta o regreso al régimen keynesiano; algunos más osados interpretan varios hechos como el germen hacia el socialismo y la vía hacia el comunismo del siglo XXI. Dejan de observar que la activación de las acciones institucionales en medio de la pandemia han sido más bien superficiales y deberían considerarse como regulaciones estatales, es decir, oportunistas y lejos de ser permanentes como para asimilarlas a *intervenciones estatales* o algún tipo de *planificación centralizada*. Resplandece así una *planeación descentralizada* desde el Estado que continúa reforzando las lógicas mercantiles y sus principales efectos.

Descartando el regreso keynesiano -por inverosimilitud material pues, en este momento de la economía política mundial, resulta en la práctica imposible- y sin que lo nuevo aún pueda nacer -por falta de verosimilitud subjetiva de la lucha de clases hoy; aunque potencialmente es latente- lo que se proyecta es la consolidación del Consenso de la regulación estatal neoliberal y sus instrumentos público-privados.

Varios eventos ilustran la actualidad de lo dicho anteriormente. Tanto Macron en Francia (respecto al sistema de salud), Salvini en Italia e Iván Duque en Colombia (referido a las aerolíneas Alitalia y Avianca, respectivamente) o, más recientemente, Trump en los Estados Unidos (sobre administrar federalmente al sector privado) son ejemplos paradigmáticos de que cuando se propone: “¡nacionalizaciones!”, se estaría diciendo -en el léxico neoliberal-: rescates de capi-

talistas (no de empresas en abstracto ni de trabajadores en concreto), generalmente bajo la modalidad neoliberal de la *desprivatización* y, con ello, de las alianzas público-privadas.

Otro hito que recientemente cunde y confunde son los llamados a una Renta Básica Universal; de hecho, fue otro de los flamantes anuncios de D. Trump en los Estados Unidos (u\$1000 per cápita adulto). Valdría la pena preguntarse si la medida por sí misma habilita pensar en una especie de “paradoja” -como plantea Zizek ante el anuncio del presidente estadounidense-, una ventana entreabierta y forzada por las circunstancias hacia algo distinto del neoliberalismo capitalista.

Una Renta Básica Universal (adoptada por única vez, al parecer; con lo cual en sentido estricto no se trata de una RBU, sino de un ingreso de emergencia, dos cuestiones conceptualmente distintas) fue tempranamente alistada en Hong Kong “con un pago único a todos sus ciudadanos de 10.000 dólares HK (alrededor de 1.140 euros) per cápita” (Standing, 2020) para hacerle frente a este choque. ¿Hong Kong tomó una medida “anti-capitalista”, “socialista”, incluso, “anti-neoliberal”? Tampoco puede olvidarse que el mismísimo F.A. Hayek, *pater putative neoliberalismus*, en situaciones análogas como la que hoy vivimos, también apoyaba un *ingreso básico universal*; idea que desarrolla en *Law, Legislation and Liberty* (1973-1979). Es más: desde mucho antes, en el Coloquio Walter Lippman (París, 26-30 agosto de 1938), considerado como “el nacimiento del neo-liberalismo”, el neoliberalismo en pleno discutía sobre “un mínimo vital para todos” (Sesión del domingo 28 de agosto: “Liberalismo y la Cuestión social”). Como una golondrina no hace verano, una “medida” (aislada, por demás) no habilita a pensar sobre cambios y transformaciones inminentes, las cuales no podrán materializarse desde los automatismos espontáneos.

BIBLIOGRAFÍA

Coronel, A. (2020). “Breaking Worse: la era del pollo neoliberal”. *SinPermiso*. URL <https://bit.ly/3m2zJk0>.

Davis, M. (2020). *Llega el monstruo. COVID-19, gripe aviar y las plagas del capitalismo*. Capitán Swing.

GPMB, Global Preparedness Monitoring Board [Junta de Vigilancia Mundial de la Preparación]. (2019). *Un mundo en peligro. Informe anual sobre preparación mundial para las emergencias sanitarias*. URL <https://bit.ly/3i6t4Tk>.

Koumentakis, P. (2009). “The Market Economy and The Biological Crisis”, en Best, S. (ed.). *Global capitalism and the demise of the left*. International Journal of Inclusive Democracy, Vol. 5, No. 1 (special

issue), pp. 53-75.

Mirowski, P. (2013). *Nunca dejes que una crisis te gane la partida. ¿Cómo ha conseguido el neoliberalismo, responsable de la crisis, salir indemne de la misma?* Barcelona: Planeta.

NIC [Consejo Nacional de Inteligencia de los EE.UU.]. (2008). *Global Trends 2025. A Transformed World*. Washington: US Government Printing Office Internet.

Puello-Socarrás, JF. (2018). “Nuevo Neo-Liberalismo y Administración Pública. Reinención gubernamental, Post-burocracia y Nueva Gestión Pública”. *Vademecum de la Administración Pública*. Bogotá.

Puello-Socarrás, JF. (2015). “DESARROLLO. Paleontología (política) de una idea (neoliberal)”. *Estudios Críticos del Desarrollo*. Vol. V, número 8, pp. 47-81.

Standing, G. 2020 (13/3). “Coronavirus, crisis económica y renta básica”. *Sinpermiso*. URL <http://www.sinpermiso.info/textos/coronavirus-crisis-economica-y-renta-basica>

Stiglitz, J. 2008. La crisis de Wall Street es para el mercado lo que la caída del muro de Berlín fue para el comunismo. Entrevista realizada por Nathan Gardels. *El País* (20/9). URL <https://bit.ly/2GBFt3H>.

Strauss-Kahn, D. (2011). “Desafíos mundiales, soluciones mundiales”. Discurso pronunciado en la Universidad George Washington, Director Gerente, Fondo Monetario Internacional. 4 de abril. URL <https://www.imf.org/es/News/Articles/2015/09/28/04/53/sp040411>.

Wacquant, L. (2009). *Castigar a los pobres. El gobierno neoliberal de la inseguridad social*. Barcelona: Gedisa.

ENTRE LA CRISIS Y UN NUEVO INICIO. LA LÓGICA DEL MUNDO PANDÉMICO Y LAS RECONFIGURACIONES DEL ESTADO NEOLIBERAL PERIFÉRICO EN AMÉRICA LATINA

Dario Clemente¹
Marina Wertheimer²

INTRODUCCIÓN

Según el autor boliviano René Zavaleta (Zavaleta, 1986, 1990b, 2015) las grandes crisis constituyen momentos propicios para estudiar sociedades abigarradas como las de Nuestramérica, al punto que es posible hacer de ellas un verdadero *método* de producción de conocimiento local (Antezana, 2009). Si aceptamos esta premisa, el 2020 representa un momento particularmente rico de análisis, pues en él confluyen diferentes crisis, las cuales se pueden caracterizar diferenciando entre una *lógica del mundo* y una *lógica del lugar*, retomando los términos propuesto por el propio Zavaleta (Ouvina, 2016).

En primera instancia, damos cuenta de la mencionada *lógica del mundo*, considerando que la inédita coyuntura pandémica que nos toca vivir es síntoma, antes que causa, de una verdadera *crisis orgánica* global, en el sentido pleno que le asigna Gramsci (1981). *Orgánica*, en tanto fenómeno de envergadura distinto a las crisis ocasionales que combina, de modo simultáneo y conectado, una crisis económica y otra de índole político (Portantiero, 1979) y en donde, en última instancia, la potencia de los acontecimientos resquebraja las relaciones de fuerza anteriores (Thwaites Rey, 2010). Así, la primera pandemia auténticamente global de nuestra historia –experiencia compartida por la cuasi totalidad de la humanidad– empalma, por un lado, con una crisis económica estructural y, por el otro, con una transición he-

1 Instituto de América Latina y el Caribe (IEALC), Universidad de Buenos Aires/ CONICET dadaclem@gmail.com

2 Instituto de Investigaciones Gino Germani (IIGG), Universidad de Buenos Aires/ CONICET

gemónica entre superpotencias. En lo fundamental, condensa las contradicciones de un modelo de “desarrollo” capitalista autodestructivo que detona una crisis ecosistémica a escala planetaria.

En segunda instancia caracterizamos la aludida *lógica del lugar* de la pandemia en la región, la cual se enmarca en una nueva fase del *Ciclo de Impugnación al Neoliberalismo en América Latina* (Ouviaña y Thwaites Rey, 2018). En los meses conclusivos de 2019 este ciclo volvió a adquirir una gran incandescencia en las calles de Ecuador, Colombia Chile y Bolivia y, en menor medida, en Perú, Uruguay y Argentina. La forma que asume la crisis pandémica actual en América Latina –así como las reconfiguraciones estatales hijas de la emergencia sanitaria– confluyen, creemos, con este ciclo de impugnación de larga data del Estado neoliberal periférico perpetuando un *empate* profundo entre el empuje popular desarticulado y las nuevas y viejas fuerzas de la reacción conservadora³.

En lo que sigue, atenderemos a estos dos niveles, manteniendo como eje central de nuestra argumentación la hipótesis de que –en un vuelco imprevisto de la historia– el virus pandémico está generando las condiciones propicias para que se produzca un momento de *vacancia hegemónica* y de *gratuidad ideológica* (Portantiero, 1973; Zavaleta, 1990a) global, vale decir, una ruptura radical y abrupta del orden de creencias dominante, en el cual interpelaciones hegemónicas diferentes y contrapuestas se encuentran disputando el futuro desarrollo del capitalismo y de nuestras sociedades. Sin embargo, atendiendo a la dimensión social de cualquier fenómeno histórico, planteamos la necesidad política de *construir* el actual como *momento constitutivo*⁴ de una realidad que debe, indefectiblemente, apartarse de lo que hasta ahora hemos conocido como “normalidad” y rechazar, a la vez, cualquier intento de lograr que “todo cambie para que nada cambie”, como ocurría en la célebre obra, *Il Gattopardo*. En el cruce entre la lógica pandémica del mundo y la actualización del Ciclo de Impugnación al Neoliberalismo en América Latina (en adelante, CINAL), sólo el esfuerzo conjunto de las y los de abajo puede lograr un “choque” positivo por medio del cual se puedan socavar las estructuras de po-

3 Sobre la reconfiguración de los estados latinoamericanos, las relaciones de fuerza y las luchas populares hacia fines de 2019 y comienzos de 2020 nos explayamos en Clemente (2020).

4 Según Zavaleta, es posible comprender la historia de una formación social a partir de “momentos constitutivos”: “Hay un momento en que las cosas comienzan a ser lo que son y es a eso a lo que llamamos el momento constitutivo ancestral o arcano o sea su causa remota (Zavaleta 1990a: 180).

der del Estado neoliberal y replantear los fundamentos del modelo de desarrollo capitalista, ensayando formas de superación de este que parecían impensables hasta ayer.

LA LÓGICA DEL NUEVO MUNDO NORMAL: PANDÉMICA, VIRÓSICA, GLOBAL

El estallido de la pandemia puede leerse como la precipitación de tres crisis globales, anteriores y concatenadas, aglutinadas en una inédita lógica del mundo *virial*, a saber: a) la agudización de la puja hegemónica entre EE. UU. y China; b) una crisis estructural de acumulación; y c) una profunda crisis ecosistémica.

a) En primer lugar, la pandemia se desarrolla en el marco de una transición hegemónica donde EE. UU. pierde gravitación en favor de China. Frente al avance de la pandemia, el tradicional y autoproclamado “guardián del mundo” parece haber abdicado en sus antiguas prerrogativas y responsabilidades de líder mundial, hundiendo el multilateralismo para avivar una retórica aislacionista y confrontativa con China. Esta última, a pesar de haber sido señalada como verdugo por haber esparcido el virus de modo supuestamente deliberado, parece haber salido fortalecida en su apuesta por un rol más protagónico en la determinación de los equilibrios mundiales. Así, por ejemplo, los envíos de donativos de material médico y de equipos de salud de China a varios países –ayuda que fue aceptada no solo por países periféricos sino también por aliados claves de EE. UU. en Europa– contrastan con la indiferencia estadounidense hacia el desarrollo de la pandemia en el mundo. La actual coyuntura pandémica parece imprimir, en este sentido, un poderoso viraje hacia la transición hegemónica entre EE. UU. y China.

b) Hacer foco en esta crisis de hegemonía en sentido geopolítico no debe hacernos perder de vista el marco de crisis económica estructural en la que ésta tiene lugar. El capitalismo, en su irrefrenable búsqueda de expansión a través de la producción de mercancías y ganancias, viene generando crisis cíclicas y cada vez más recurrentes, entre las cuales la más reciente es la de 2008. Estas crisis, lejos de encontrar una solución definitiva al problema de la sobreacumulación (Marx, 1969), se han aplazado temporalmente mediante lo que Harvey denomina *ajuste espacio-temporal* (Harvey, 2007, 2008, 2020). Esto quiere decir que en ninguna de las

crisis capitalistas que conocimos el capital logró *resolver* sus contradicciones, sino que solo ha logrado *escapar* a ellas, mediante la *intensificación* “de la actividad social, de los mercados y de las personas” (Harvey, 2007: 260) o desplazándolas geográficamente y creando nuevos espacios para la acumulación. Sin embargo, esta posibilidad de expansión aparentemente infinita del capital viene encontrado límites infranqueables (Antunes, 2020). Sostenemos, entonces, que la emergencia y difusión del COVID-19 es una manifestación más de la existencia de estos límites a las posibilidades de que el capitalismo se desarrolle indefinidamente.

c) Finalmente, el tercer y más fundamental aspecto de esta crisis es su carácter ecosistémico. Por un lado, remite a las particulares condiciones de su origen en China, vinculadas al complejo agroindustrial y a la pérdida de biodiversidad, que facilitan el contacto entre humanos y especies selváticas, y pueden producir saltos de especie (zoonosis) de los virus como el COVID-19. Por el otro, la extrema fluidez de las conexiones globales, facilitadas por la creciente intensidad del transporte aéreo entre un número cada vez mayor de regiones urbanizadas, hizo que, según estudios recientes, el virus llegara, sin ser detectado, a lugares tan distantes de Wuhan como Seattle, Sao Pablo y Milán, ya por noviembre-diciembre de 2019 (Diario *Página/12*, 2020). Esto hace de la actual la primera pandemia auténticamente global y una experiencia compartida por la cuasi totalidad de la humanidad, incluso más que las guerras mundiales del siglo pasado o la guerra fría.

Lejos de ser una especificidad oriental –propia de un gigante en ascenso económico y geopolítico– las condiciones de incubación de la pandemia son características comunes a varias regiones de la periferia: el modo de organización de la producción, la omnipresencia del complejo agroindustrial, la vida en megalópolis, dentro de las cuales, la crisis de la vivienda y, en particular, el hacinamiento, tienen un efecto acelerador de los contagios. Más aún: son el producto de un modelo de “desarrollo” capitalista autodestructivo que ha contaminado cada rincón del globo.

Desde hace décadas, distintos expertos vienen advirtiendo sobre los peligros potenciales del modo de producción dominante: deforestación, la destrucción de entornos naturales, el comercio de especies silvestres, la agricultura y la cría industrial y el monocultivo (Quam-

men, 2020; Svampa, 2018). Como resultado, según la mayoría de los especialistas, el paso de patógenos de una especie a otra redundó en la pandemia actual, la cual formaría parte, de este modo, de las llamadas epidemias *antropocénicas*, término que identifica el impacto de la acción humana sobre la tierra a partir de la revolución industrial, cuyo talante sería tal que habría acabado con el *Holoceno* y abierto una nueva fase geológica. Al mismo tiempo, esta fase se corresponde al nacimiento y al desarrollo del capitalismo como modo de producción, lo cual indica la necesidad de entender la dinámica de degradación ambiental de los últimos dos siglos como proceso social e histórico complejo. En este sentido, el concepto de *capitaloceno* (Moore, 2015) permite comprender que el principal responsable de la destrucción del mundo natural no es “la humanidad toda”, sino aquella fracción pudiente que controla los medios de producción⁵.

Ahora bien, los riesgos más profundos del capitaloceno irían mucho más allá del aumento exponencial de zoonosis en las últimas décadas: según algunos expertos, el gradual deshielo del *permafrost* en el Polo Ártico y en Siberia generado por el calentamiento global conllevaría la liberación de millones de virus actualmente congelados, de los cuales el cuerpo humano no tiene memoria ni protección⁶. Por ello, este escenario nos plantea una cuestión que es global y que no se limita a la emergencia sanitaria. En la deriva de un capitalismo tóxico en uno abiertamente viral, necesitamos entonces generar un cambio sistémico que permita superar el metabolismo intrínsecamente destructivo y letal del modo de producción dominante: “La pandemia del capital hace que la invención de un nuevo modo de vida sea el imperativo de nuestro tiempo” (Antunes, 2020: 20).

LA LÓGICA DEL LUGAR: LA CRISIS PROLONGADA DEL ESTADO NEOLIBERAL PERIFÉRICO EN AMÉRICA LATINA

Como ya mencionamos, en América Latina la irrupción de la nueva lógica pandémica del mundo se dio en el marco de una nueva fase del CINAL (Ouvina y Thwaites Rey 2018), comprendido como una

5 Desde una mirada anclada en la ecología política podemos comprender que los daños ambientales y sus consecuencias para las distintas comunidades no ocurren al margen de las relaciones de poder. Tanto el goce y usufructo de los bienes naturales, como la localización de las externalidades del proceso productivo, están distribuidas desigualmente a nivel social. Por ejemplo, los agentes más contaminantes en la historia son las corporaciones petroleras, gaseras y cementeras

6 En este sentido, el COVID-19 sería uno de estos patógenos de los cuales el cuerpo humano no tiene memoria ni protección.

crisis prolongada del Estado neoliberal periférico latinoamericano y su impugnación popular a partir de la década de 1990. A través de las insurrecciones y movilizaciones populares en Ecuador, Colombia y Chile, –así como de la crisis política en Perú, las elecciones presidenciales en Uruguay y Argentina y, especialmente, el golpe de Estado en Bolivia– en los últimos meses de 2019 el CINAL se ha confirmado como lógica preponderante en la región, ratificando la crisis del Estado neoliberal periférico y de varios intentos de reiterarlo, reformarlo o superarlo. Sobre todo –y a pesar de las notables diferencias entre casos nacionales– los últimos años han demostrado la existencia de una acumulación de fuerzas de los movimientos sociales latinoamericanos desde inicio de siglo, así como la persistencia de un descrédito generalizado hacia las recetas neoliberales en la región, conformando un piso de resistencia social que no ha permitido un despliegue completo del programa de las nuevas derechas. Así, cuando en febrero de 2020 se produjo la llegada del COVID-19 esta situación de la región vio profundizar las condiciones de un “empate” entre el empuje popular desarticulado y las nuevas y viejas fuerzas de la reacción conservadora, en proceso acelerado de soldadura y búsqueda de un arraigo estable. Una vez más, la coexistencia de fenómenos como la promesa de la caída del régimen neoliberal más antiguo en la región (Chile) y la consolidación del peligro neofascista en Brasil y Bolivia indican, retomando a Gramsci, que “el viejo mundo se muere. El nuevo tarda en aparecer. Y en ese claroscuro surgen los monstruos” (1981).

De este modo, al preguntarnos por las reconfiguraciones que la pandemia está produciendo en el Estado neoliberal periférico latinoamericano, así como sobre las perspectivas de las luchas políticas, identificamos tres ejes sobresalientes que parecen contradecir la apresurada caracterización de la configuración de un “Estado social de emergencia”.

¿EL ESTADO NOS CUIDA O NOS REPRIME? DE ESTADOS MATERNALES Y GRANDES HERMANOS

El conjunto de medidas emprendidas en varios países latinoamericanos en la primera mitad de 2020 –orientado a generar cierto “alivio” en la población y a fortalecer sistemas de salud desgazados por décadas de neoliberalismo– pareció configurar una especie de “Estado social de emergencia” improvisado y fuertemente limitado en su alcance. Asimismo, el establecimiento precoz del aislamiento social obligatorio en gran parte de la región, inspirado por el colapso sanitario que se estaba dando en Europa, estuvo acompañado por una

inclinación generalizada del humor social en favor de “lo público” por sobre “lo privado”, lo cual posibilitó el ingreso en la agenda de cuestiones como el control estatal del sistema privado de salud, la creación de impuestos progresivos, entre otros. Si bien este nuevo activismo estatal animó un debate sobre el advenimiento de un “Estado que cuida” o un “Estado maternal”, en países como Chile y Brasil el escenario fue diferente, pues desde el inicio sus mandatarios subestimaron y hasta ridiculizaron la pandemia, privilegiando el mantenimiento de la actividad económica.

Pero la agudización de la emergencia sanitaria en la región significó también “el retorno” de un Estado interventor de tipo regresivo en materia de control social. Así, el “Estado que reprime, controla, mata” se hizo presente bajo varias formas, desde el establecimiento del toque de queda en varios países hasta el aplazamiento de comicios en Chile y Bolivia, pasando por el intento de profundizar las contrarreformas laborales en Brasil. En particular, el rol preponderante que la gestión de las medidas de aislamiento y cuarentena ha otorgado a las fuerzas de seguridad en todos los países latinoamericanos ha redundado en el aumento de abusos policiales, produciendo, por ejemplo, violaciones de derechos humanos en Paraguay, nuevos episodios de desaparición forzada en Argentina⁷ y masacres narco policiales en México⁸.

En este sentido, desde la llegada del Coronavirus a América Latina, parecen haberse extremado los rasgos clasistas y coloniales del Estado neoliberal periférico latinoamericano que dan cuenta de la profundización de lo que se ha dado en llamar *necropolítica*, en la que el Estado decide quién vive pero, sobre todo, quién muere (Mbembe, 2020). Entre la población “descartable”, encontramos a las y los ancianos, así como a grupos de riesgo en general. Pero no se limita a ellos, sino que se extiende –de modo transversal a toda la región– a las comunidades indígenas y a los presos. En el primer caso, a la insuficiente provisión de servicios médicos por parte del Estado se ha sumado en algunos casos un “boicot” activo de las fuerzas de seguridad contra las medidas de aislamiento voluntario emprendidas por mu-

7 El joven de 23 años Facundo Astudillo Castro fue detenido por la policía de la Provincia de Buenos Aires por haber violado la cuarentena obligatoria. Su cuerpo sin vida fue hallado solo el 15 de agosto de 2020, la familia denuncia un plan de desaparición y encubrimiento que involucraría nueve agentes policiales.

8 Entre otras, en San Mateo del Mar, Oaxaca, a fines de junio de 2020, donde quince miembros de la comunidad indígena Ikoos fueron torturados y quemados vivos. Según denuncia la comunidad, los responsables habrían sido miembros del crimen organizado avalados por el intendente local.

chas comunidades indígenas en regiones de México, Honduras, Chile, Guatemala, Perú, Panamá, Colombia y Bolivia para evitar la entrada masiva del virus. En el segundo, la situación de sobrepoblación de las cárceles y el manejo deficitario de la emergencia sanitaria por parte de las autoridades ha inducido revueltas en las prisiones de Chile, Brasil, Venezuela, Argentina, Colombia, Perú y Uruguay, las cuales han sido violentamente reprimidas, con un saldo, al 10 de abril, de un total de 43 muertos. No está demás remarcar el hecho de que la mayoría de la población carcelaria suele ser negra, de bajos ingresos o proveniente de las periferias.

¿EL ESTADO NOS CUIDA? EXTRACTIVISMO Y DESIGUALDAD REDOBLADA

Otra contradicción mayor en la retórica del “Estado que nos cuida” ha sido la apuesta redoblada al extractivismo predominante en la región. En efecto, las actividades primarias extractivas –tales como megami minería a cielo abierto o el monocultivo de soja, entre otras– son de los pocos sectores de la economía que no se detuvieron durante los períodos de cuarentena⁹. Sin embargo, quizá el ejemplo más ilustrativo de esta contradicción sea el acuerdo que se encuentran negociando los gobiernos de Argentina y China para aumentar la producción de carne de cerdo destinada al país asiático en un 400 por ciento¹⁰. Azotada por una gripe porcina que la ha llevado a sacrificar millones de animales, desde hace algunos años China está externalizando su producción intensiva de cerdo en países del llamado tercer mundo. Argentina, urgida por conseguir dólares que la ayuden a superar su enésima crisis financiera, habría de embarcarse en la reproducción de un tipo de industria que promete –además del ingreso de divisas– la propagación de patógenos y nuevas enfermedades infecciosas en su territorio. Baste decir que Brasil, uno de los principales países productores de ganado en corrales de engorde (*feedlots*) registró en julio pasado una nueva variante de la influenza A H1N2 –gripe porcina– capaz de transmitirse a los humanos y, por ello, con capacidad de devenir en epidemia¹¹.

9 Por ejemplo, el Observatorio de Conflictos Minerales en América Latina (OCMAL) señala con preocupación que la actividad minera ha sido considerada, por distintos países, como “actividad esencial”. Para más información, ver: <https://www.ocmal.org/covid-19-y-su-impacto-en-la-mineria-global/>

10 En 2019, Argentina tuvo una exportación total de carne de cerdo de 230 mil toneladas, mientras que, según la información que trascendió, el acuerdo con China prevé llegar a exportar 9 millones de toneladas, lo cual representaría un incremento descomunal.

11 Para más información, ver: <https://www.agrolatam.com/nota/41214-esta->

Así, la reproducción de un modelo extractivista como única vía posible de inserción mundial para el estado neoliberal periférico latinoamericano –además de atentar contra la sustentabilidad ambiental– profundiza los patrones de población y urbanización predominantes en la región, manteniendo el signo expulsivo del campo a la ciudad que agudiza las problemáticas de desigualdad en el acceso al hábitat y hacinamiento en las periferias de las ciudades. Ha sido particularmente en estas áreas periféricas y pobres donde el virus se reprodujo más, debido a condiciones de hacinamiento y bajos niveles de acceso a servicios básicos y de saneamiento, como agua potable y cloacas.

¿EL ESTADO NOS CUIDA? ¡NOSOTRAS NOS CUIDAMOS!

Estas son, en extrema síntesis, sólo algunas de las contradicciones inherentes a la reconfiguración de los Estados latinoamericanos en tiempos de pandemia global, las cuales nos hablan de la imposibilidad de afirmar la llegada de un nuevo “Estado social de emergencia”, o bien de un “Estado que nos cuida”, en un sentido integral, que implique no solo el aspecto sanitario, sino el abandono de ese sendero problemático de “desarrollo” que nos condujo a este presente con rasgos postapocalípticos. Esta afirmación adquiere más fuerza si consideramos que, a la necropolítica “desde arriba”, se ha sumado, en los últimos meses, un fuerte movimiento de las fuerzas conservadoras y reaccionarias, que viene fomentando manifestaciones “anti-cuarentena”, aprovechando la exasperación social por el mantenimiento de las medidas de aislamiento social obligatorio y sus consecuencias económicas, por un lado, y la casi total desactivación de la movilización de la izquierda y los movimientos sociales, por el otro. Esta estrategia, que se ha ganado en toda la región el nombre de *bolsonarización* –en referencia al discurso y las prácticas de crispación e intolerancia del presidente brasileño Jair Bolsonaro y a su base política– buscar llevar a sectores de la población al terreno de un golpismo de nuevo tipo y desestabilizar gobiernos de signo progresista a través de los medios de comunicación, el poder judicial y, crecientemente, las calles. La actitud de los gobiernos de la región hacia este fenómeno ha sido, en el mejor de los casos, titubeante: es un hecho conocido que, en ningún caso, las manifestaciones “anti-cuarentena” se han enfrentado al mismo nivel de represión estatal que conocen las protestas de raíz popular.

dos-unidos-australia-y-brasil-redujeron-la-ocupacion-de-los-feedlot/ y <https://www.who.int/csr/don/09-jul-2020-influenza-a-brazil/es/>

Así pues, frente a un Estado que nos descuida y ante la peligrosa emergencia de un apoyo ciudadano a salidas autoritarias, adquiere aún más sentido el llamado al cuidado colectivo y comunitario que se popularizó en Chile en los primeros días de cuarentena, cuando el mismo Estado que militarizaba las calles con los carabineros ensayaba un giro discursivo sanitarista y de cuidado de la población: “El Estado no nos cuida, ¡nosotras nos cuidamos!”. Así, superando una versión restringida de la pandemia como mera cuestión sanitaria, en la coyuntura que nos toca vivir la defensa de la vida implica no solo cuidar de los espacios de vida comunitarios contra cualquier necropolítica y primacía de la lógica de la ganancia sobre la salud, sino tomar una posición integral en contra del capitalismo depredador. La crisis del estado neoliberal periférico en América Latina –y su profundización durante la pandemia– nos pone nuevamente frente al desafío de disputar las intervenciones y sentidos del Estado, y transformar el empuje popular desarticulado en luchas orientadas a la transformación de lo existente.

CONCLUSIÓN

El 30 de mayo de 2020, el mismo día en que los Estados Unidos registraban 1.747.000 contagios oficiales y más de 102.000 muertes acumuladas, la compañía aeronáutica SpaceX realizó el lanzamiento del cohete Falcon 9 con dos astronautas de la NASA, marcando un hito en la historia de la industria aeroespacial comercial. Según el billonario propietario de SpaceX, Elon Musk –quien había condenado las medidas de aislamiento social en EE. UU. como “fascistas”–, dentro de 2030 será posible iniciar la colonización de Marte, gracias a misiones de este tipo. Tal vez no se pueda aspirar a una metáfora más apropiada para representar la creciente inhabitabilidad de la tierra que el deseo de sus dueños de lanzarse a poblar otros planetas. Para el resto de nosotras y nosotros, abandonar el campo de batalla en el cual han transformado nuestra “casa común” no es una opción, es donde vivimos.

Observada desde la periferia latinoamericana, la situación nos habla de una crisis orgánica global en la que se entrelazan, precipitadas, una transición hegemónica entre potencias y el agotamiento acelerado de las posibilidades de un desarrollo capitalista indefinido. La transformación de una epidemia aislada en China en una pandemia global visibiliza y agudiza estas crisis. Más aún: señala la insustentabilidad de un modelo de desarrollo destructivo que pasó de tóxico a viral.

Esta situación actualiza, por otra parte, la crisis del Estado neoliberal periférico, cuya reconfiguración en el contexto de pandemia empalma con la candente reanudación del Ciclo de Impugnación al Neoliberalismo que se dio en los últimos meses de 2019 en las calles de varios países de la región. Los claroscuros de un mundo que todavía no muere son vertiginosos: el “Estado que nos cuida” por medio de políticas sanitarias, de aislamiento y de alivio social convive con el “Estado que reprime, controla, mata”, por acción u omisión, extremando sus rasgos clasistas y coloniales en una nueva necropolítica viral. Pero también redoblando la apuesta en un modelo de “desarrollo” extractivista, que, en plena pandemia, llega hasta a vincular nuestros países a la realización de nuevas tareas vinculadas a zoonosis como el Coronavirus en la cría intensiva de animales, que redundan en la profundización de las desigualdades en el campo y en la ciudad. Un Estado, finalmente, que deja el campo libre a los sectores reaccionarios *bolsonarizados*, que aprovechan la exasperación con la cuarentena y con sus consecuencias económicas para forzar salidas autoritarias y antipopulares a la crisis.

Tomadas en conjunto, estas crisis proyectan un escenario que es, también, un desafío. El de propiciar, a través del esfuerzo consciente de las y los de abajo, la concreción de un verdadero “momento constitutivo” que aproveche el vuelco imprevisto de la historia representado por el virus pandémico para generar una superación del orden material e ideal que nos trajo hasta aquí, un momento en que las cosas comiencen a ser de forma radicalmente diferente. El de unir al reconocimiento de la vacancia hegemónica que se está produciendo en todos los niveles con una praxis transformadora, que tenga su eje en ensayar formas de superación del modelo de desarrollo capitalista tejidas alrededor de una nueva lógica del cuidado en sentido integral, una interpelación hegemónica que rechace de igual manera la vieja “normalidad” y un futuro donde “todo cambie para que nada cambie”. La tarea no es menor, pero, es más necesaria que nunca.

BIBLIOGRAFÍA

Antezana J., L. H. (2009). “La crisis como método en René Zavaleta Mercado”. *Ecuador Debate*, (77), 107–124.

Antunes, R. (2020). *Coronavirus. O Trabalho Sob Fogo Cruzado*. Brasil: Boitempo.

Clemente, D. (2020). “Todo cambia, nada cambia. El nuevo ‘em-pate hegemónico’ argentino en el laberinto latinoamericano”. *Cader-nos do CEAS: Revista Crítica de Humanidades*, (250).

Gramsci Antonio. (1981). *Cuadernos de la cárcel* (V. Gerratana, ed.). México: Era.

Harvey, D. (2007). “La geografía de la acumulación social capitalista: reconstrucción de la teoría marxiana”. En D. Harvey (Ed.), *Espacios del capital*. Madrid: Akal.

Harvey, D. (2008). “El neoliberalismo como destrucción creativa”. *Apuntes del CENES*, 27(45).

Harvey, D. (2020). “Política anticapitalista en tiempos de coronavirus”. En P. Amadeo (Ed.), *Sopa de Wuhan* (pp. 79–96). ASPO.

Mbembe, A. (2020). *Necropolítica*. London: Macmillan.

Moore, J. W. (2015). *El capitalismo en la trama de la vida. Ecología y acumulación de capital*. Madrid: Traficantes de sueños.

Ouviña, H. y Thwaites Rey, M. (Ed.) (2018). *Estados en disputa: auge y fractura del ciclo de impugnación al neoliberalismo en América Latina*. Buenos Aires: El Colectivo.

Ouviña, H. (2016). “René Zavaleta, frecuentador de Gramsci”, en Giller, D. y Ouviña, H. (Ed.), *René Zavaleta Mercado. Pensamiento crítico y marxismo abigarrado*. Santiago de Chile: Editorial Quimantú.

Portantiero, J. C. (1973). “Clases dominantes y crisis política en la Argentina actual”, *Revista Pasado y Presente*, IV(1), Córdoba.

Portantiero, J. C. (1979). “Gramsci y el análisis de coyuntura (algunas notas)”, *Revista Mexicana de Sociología*, 41(1), 59. <https://doi.org/10.2307/3540110>

Quammen, D. (2020). *Spillover: Animal Infections and the Next Human Pandemic*. New York: Norton & Company.

Svampa, M. (2018). “Imágenes del fin. Narrativas de la crisis socioecológica en el Antropoceno”, *Nueva Sociedad*, (278), 151–164.

Zavaleta Mercado, R. (1986). “El Estado en América Latina”, *Áreas: revista internacional de ciencias sociales*, 7.

Zavaleta Mercado, R. (1990a). “El Estado en América Latina”, en *El Estado de América Latina*. La Paz: Los Amigos del Libro.

Zavaleta Mercado, R. (1990b). “Problemas de la determinación dependiente y la forma primordial”, en *El Estado en América Latina*. La Paz: Los Amigos del Libro.

Zavaleta Mercado, R. (2015). *La autodeterminación de las masas. (antología)* (L. Tapia, ed.). Mexico: CLACSO y Siglos del Hombre.

MEDIOS Y RECURSOS WEB CONSULTADOS

AgroLatam (2020, junio 5) Estados Unidos, Australia y Brasil redujeron la ocupación de los feedlot. *AgroLatam*. Recuperado de: <https://www.agrolatam.com/nota/41214-estados-unidos-australia-y-brasil>

silredujeron-la-ocupacion-de-los-feedlot/

Diario *Página/12*. (2020, julio 3). El coronavirus podría haber circulado en Brasil desde noviembre. *Diario Página 12*. Recuperado de <https://www.pagina12.com.ar/276366-el-coronavirus-podria-haber-circulado-en-brasil-desde-noviem>

Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (2020, septiembre 9) Covid-19 y su impacto en la minería global. *OCMAL*. Recuperado de: <https://www.ocmal.org/covid-19-y-su-impacto-en-la-mineria-global/>

Organización Mundial de la Salud (2020, julio 9) Virus de la gripe A H1N2v – Brasil. *OMS*. Recuperado de <https://www.who.int/csr/don/09-jul-2020-influenza-a-brazil/es/>

EL COVID-19 Y UN NUEVO PROTAGONISMO ESTATAL

Javier Moreira Slepoy¹

EL COVID-19 COMO MOMENTO CONSTITUTIVO

La crisis sanitaria producida por el COVID-19 a nivel global, ha desencadenado un conjunto de procesos sociales, económicos y políticos cuyas consecuencias estamos aún lejos de poder avizorar. Se puede decir que el COVID-19 ha devenido en un hecho político de primer orden en tanto ha hecho visibles los fundamentos profundos del capitalismo en su fase neoliberal, imperante a escala planetaria desde hace más de cuarenta años.

En este sentido, la pandemia que duramente atravesamos, no puede entenderse sino es a partir de su contextualización histórica en el marco de la dinámica actual del capitalismo, con sus conflictos y resistencias sociales. Sólo a título de ejemplo las medidas de aislamiento fueron tomadas en medio de un ciclo de protestas como las realizadas contra Sebastián Piñera en Chile, Lenin Moreno en Ecuador, Iván Duque en Colombia o el *Mouvement des gilets jaunes* contra el gobierno de Macron en Francia, entre otros. El futuro de estas y otras luchas sociales son un interrogante, pero sin lugar a duda, el marasmo económico y las respuestas estatales en el marco de la pandemia marcarán un nuevo horizonte para ellas. Por otro lado, la pandemia se presenta como una oportunidad para poner en tensión la lógica neoliberal basada en la neutralización de cualquier idea, política pública o rumbo colectivo que no se ciña a su mandamiento central de la lógica de la ganancia llevada a todos los espacios y relaciones sociales.

Los datos económicos son contundentes. Según el informe “Perspectivas Económicas Mundiales del Banco Mundial” (2020) la economía global va a atravesar la peor recesión desde la Segunda

1 Politólogo y magíster en Administración Pública. Investigador del Instituto de Investigación y Formación en Administración Pública de la Facultad de Ciencias Sociales, director y docente de la Carrera en Ciencia Política de la Universidad Nacional de Córdoba. Docente e investigador del Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Villa María. javier.moreira@unc.edu.ar

Guerra Mundial, en tanto la interrupción económica que causaron las medidas de aislamiento han producido la contracción del 5,2 % de la economía mundial. Esta es la primera vez desde el año 1870 que todas las economías nacionales van a experimentar una disminución del producto *per cápita*, lo que va a arrastrar a una cantidad inusitada de personas a situaciones de desempleo, pobreza e indigencia.

En el otro extremo, la bolsa de Wall Street bate sus propios récords experimentando aumentos extraordinarios, poniendo de manifiesto el divorcio total entre la economía real y la economía financiera y prefigurando una nueva burbuja cuyos efectos sobre las poblaciones será de magnitudes inimaginables. Por otro lado, la pandemia ha fortalecido lo que el economista canadiense Nick Srnicek (2018) denomina “capitalismo de plataformas”, promoviendo una *uberización de la economía*, centrada en la tecnología digital (extracción y la gestión de datos) y la total precarización de la fuerza de trabajo. Como sabemos, la cuestión de las tecnologías y la Cuarta Revolución Industrial (4RI) no sólo es un aspecto que atañe al campo de la economía, en tanto los algoritmos han penetrado la política y las lógicas estatales abriendo dilemas e interrogantes sobre sus consecuencias para la democracia.

La historia demuestra que acontecimientos de esta magnitud producen hechos políticamente significativos. La aparición del COVID-19 proyecta un escenario de crisis que, en términos de Claus Offe (1994), no será esporádico sino más bien gramatical y cuyas consecuencias y causas políticas son hoy un interrogante. En este sentido, no nos resultan satisfactorias las lecturas apresuradas que señalan destinos ineluctables, ni aquellas que sólo ven indeterminación. Las primeras que desde ya advierten un futuro distópico o bien, transformaciones radicales anticapitalistas; y las segundas que dejan el terreno abierto a todo tipo de posibilidades políticas. Entendemos que la ambivalencia del COVID-19 se enmarca en ciertas tendencias y procesos estructurales, cierta composición de las relaciones de fuerza y ciertas configuraciones subjetivas.

A grandes rasgos, la crisis augura dos escenarios generales posibles: (i) o bien se producen una profundización de la gobernanza neoliberal tal como ocurrió con la crisis de las hipotecas subprime en el 2008 (Peck, 2012) con rasgos más violentos y autoritarios; o (ii), la crisis es un momento privilegiado para la reconstitución de lo público y colectivo, sea en torno a la proliferación de experiencias asociativas y comunidades autónomas y/o a instancia de la reconstrucción de cierta autonomía y capacidad reguladora de los Estados en beneficios de los intereses colectivos. Y entre estas alternativas, una

diversidad de situaciones posibles abigarradas, combinadas y ciertamente contradictorias.

Retomando a Rene Zavaleta Mercado (2009) la crisis del COVID-19 puede ser entendida como un momento constitutivo de la relación entre los Estados y las sociedades que se monta, claro está, sobre procesos previos, pero que tiene la potencialidad de abrir escenarios novedosos. Los momentos constitutivos en manera alguna están predeterminados u ordenados por cierta legalidad histórica, aunque sí son periodos excepcionales para reinventar escenarios que habiliten nuevas construcciones políticas, nuevas prácticas e instituciones, como así también nuevos horizontes ideológicos capaces de dar respuestas concretas a los desafíos del presente. Será en el marco de esta crisis -y de sus consecuencias a futuro- donde la dimensión del poder y la capacidad política de organización de los sectores populares será puesta a prueba.

EL ESTADO (Y LA SOCIEDAD) EN LA POS-PANDEMIA: UN DEBATE AÚN EN CIERNES

En el marco de la pandemia, los Estados Nacionales han ocupado el centro de la escena política en tanto se constituyeron como las instancias privilegiadas para la protección de la vida, el bienestar de la población y el sostenimiento de la actividad económica que sin intervención se hubiese desplomado a niveles catastróficos. Las tecnocracias supranacionales articuladas a los flujos y estructuras del poder global quedaron suspendidas atinando cuanto mucho a replantear su rol en un escenario que no se vislumbra propicio para la agenda globalizadora y sus agentes promotores.

Como señalamos más arriba, si bien es razonable esperar transformaciones en las estructuras nacionales y globales, no se tiene claridad respecto de sus sentidos, alcances e intensidades. Ante tal incertidumbre, las decisiones gubernamentales son formas más o menos plausibles y efectivas de gestión de la crisis mediada por diversas tradiciones institucionales y tendencias ideológicas. Hasta aquí entonces, el tembladeral del COVID-19 nos deja una lección y un interrogante: la lección tiene que ver con la centralidad que todavía ostentan los Estados Nacionales; el interrogante, con los objetivos y orientaciones que la estatalidad pospandemia asumirá en el contexto de una crisis económica y social profunda que de momento no ha devenido en crisis política.

Sobre tales interrogantes quisiéramos detenernos y revisar sinté-

ticamente algunos de los análisis y argumentos que han sido esgrimidos desde diversas tradiciones teóricas sobre el futuro del Estado, la política y la democracia y, por ende, sobre los desafíos que se abren para los sectores populares. Hemos visto como en las primeras observaciones, sin dudas signadas por el asombro, se presentaban por igual escenarios apocalípticos o posibles rupturas radicales con el orden imperante. Con el tiempo, la reflexión se fue estilizando y en lugar de respuestas certeras emergieron preguntas necesarias en torno a las tendencias y contra-tendencias que, de manera abigarrada, son posibles advertir de cara al futuro.

Un primer escenario que se abre es aquel que podemos llamar como *Estado Mínimo–Necropolítico* cuya referencia empírica se corresponde con las respuestas ofrecidas por los gobiernos de tendencia ultraconservadora como el de Donald Trump, Jair Bolsonaro y, al menos en un primer momento, por Boris Johnson en Inglaterra. También la que corresponde a diversas y novedosas expresiones políticas de líderes outsiders antisistemas con demandas de extrema derecha surgidas generalmente al calor del descontento social y en las redes sociales. En términos generales, las respuestas de estos gobiernos han sido el menosprecio de la situación sanitaria y la defensa irrestricta de la reproducción económica elevada como principio indiscutido de lo social. Tales experiencias, mal caracterizadas desde nuestro punto de vista como populismos de derecha, conjugan como se ha sido advertido, un neo-nacionalismo racista con una suerte de capitalismo popular.

Desde diversos análisis y artículos de opinión se ha asociado estos gobiernos al concepto de Necropolítica (o Tanatopolítica) propuesto por Achille Mbembe (2006) como modelo político del capitalismo del siglo XXI centrado en la violencia y en la potestad de algunos (dada su posición de clase, raza o género) para decidir sobre la vida y la muerte de otros individuos atendiendo a algún tipo de racionalidad o interés económico superior. Recientemente el vicegobernador de Texas, Dan Patrick, hacía explícita esta lógica sacrificial del neoliberalismo necropolítico señalando en una entrevista televisiva que, tanto él como las demás personas mayores de Estados Unidos, estaban dispuestas a morir para sostener el ritmo económico de su país.

En este modelo no hay un dilema alguno ni una contradicción entre la economía y el bienestar de la población. La reproducción del capital prima sin condiciones y la necropolítica emerge en forma de omisiones flagrantes (como negar derechos elementales ligados a la vida como la salud, la vivienda y la alimentación) y también bajo la

forma de un discurso irracional, cargado de connotaciones religiosas y profundamente anticientífico al que denuncian como autoritario, ineficaz, inservible y propio de las élites burocráticas transnacionales.

La necropolítica -que supone un *Laissez Faire* de la pandemia- es más que un modelo de Estado o una forma de gobierno que se impone jerárquicamente desde el Estado. La necropolítica es un modelo de poder en cierto sentido a-estatal (por ello mínimo) que se monta con el consenso activo de amplias franjas sociales que se vuelven en contra del Estado y su interferencia sobre la radical potestad de autodeterminación, tal como se ha podido ver en las diversas marchas *anticuarentenas* que, con argumentos similares, han protagonizado sectores de derecha en diversas ciudades del mundo.

Una segunda familia de interpretaciones hace referencia a la configuración de un *Estado Tecnopolicial* que abona también a un ultracapitalismo sostenido sobre un Estado fortalecido por la incorporación de diversos recursos tecnológicos, los cuales agudizan y perfeccionan las formas disciplinarias y la policiación del orden social. En este sentido, de acuerdo con las contribuciones de teóricos de la talla de Giorgio Agamben, Roberto Esposito y también del coreano Byung Chul-Han, el paso del COVID-19 nos dejará un modelo biopolítico de administración y regulación intensa de la vida y los cuerpos. Nada nuevo bajo el sol, sencillamente la pandemia vendría a acelerar sin más, tendencias y procesos previos a la de su aparición.

A diferencia de la senda anticientífica que asume el Estado Mínimo-Necropolítico, el Estado Tecnopolicial aparejaría la medicalización de la política, la subordinación del debate público y el desplazamiento de la disputa ideológica por el saber científico con consecuencias potencialmente nefastas para la democracia. Bajo tales análisis, el COVID-19 es un hito central en la consolidación de una tendencia previamente inscripta en el orden político contemporáneo de desplazamiento del rol de los poderes legislativos y la suspensión de derechos ciudadanos a manos de disposiciones de emergencia (que se hacen permanentes), configurando un Estado de Excepción tal como lo propone Agamben.

La presencia de policías y ejércitos en las calles, las políticas de aislamiento preventivo, los diversos controles, mapeos, registros de circulación y permisos especiales son la expresión más clara de esta tendencia que, cabe decir, fue progresivamente desmontada al compás de la evolución de la pandemia y la activa resistencia de algunos medios de comunicación y sectores sociales ultra-conservadores. En Países como China, Taiwán, Corea, Japón -quizás los más afectivos en

el control de la crisis- la incorporación de tecnologías y la inteligencia de datos (Big Data) aplicadas a la prevención y seguimiento de contagios fue paradigmática y la referencia empírica actual del futuro de los Estados.

En este sentido, desde estas perspectivas, el contrapunto paradójico quedaría planteado entre una forma libertaria y una forma tecnopolicial de construir un orden político dentro del capitalismo neoliberal del siglo XXI, según la manera en que se resuelva la lucha hegemónica entre Washington –libertaria y proteccionista– y Beijing –disciplinaria y con aspiraciones globales. La disputa por la hegemonía global es clara y mientras Estados Unidos se repliega sobre sus fronteras, se aísla y profundiza sus políticas hostiles, China ofrece su cooperación para gestionar la crisis. Como señala Rodrigo Karmy Bolton (2020), China se ha apropiado de la noción de “humanidad” que ha sido la idea rectora que ha articulado la vocación imperial estadounidense.

En definitiva, desde los prismas de autores neofocaultianos, la tendencia disciplinaria es la lógica profunda de la estatalidad pos-pandemia y la emergencia de liderazgos populistas estrafalarios y demás outsiders de derecha, son sólo una manifestación secundaria de la irracionalidad que apareja el capitalismo global. Apelando a las categorías de Michael Mann (2006), hay una controversia entre una mirada que pone el acento en los mecanismos despóticos y otra, que lo hace en los mecanismos infraestructurales de construcción del orden político pos-pandémico.

Frente a este panorama dominado por la excepción y la tecnovigilancia, autores enrolados (también) en el pos-estructuralismo como Franco Berardi o Paul Preciado proponen como respuesta una politización desde la proximidad (física o virtual) capaz de regenerar espacios de solidaridad colectiva autónomos de los aparatos del control. En términos concretos, tales propuestas desestiman cualquier tipo de lucha que tenga como referencia la estatalidad, en tanto hay cierto acuerdo sobre su inoperancia en el contexto actual dominado sin mediaciones por la lógica del capital. O más bien, el Estado ya no es en ningún caso la sede de la organización de una voluntad colectiva democrática quedando reducido a fungir como dispositivo de organización de la represión y la información sobre las personas.

No es el objetivo de estas líneas discutir con estas propuestas, simplemente señalar que desde una perspectiva situada en la realidad latinoamericana y atendiendo a la crisis que se vislumbra en el horizonte, el rol del Estado será central en las condiciones de vida

que deban afrontar las mayorías populares. La salud, la educación, la vivienda, los alimentos y el acceso a otros bienes y servicios podrán ser en algunos casos autogestionados por comunidades autónomas, pero es difícil pensar que tales respuestas puedan dar cuenta de las necesidades de millones de personas que viven en grandes ciudades en condiciones muy precarias. En este sentido, entendemos que la cuestión estatal es un aspecto insoslayable para los sectores populares hasta que la imaginación política y la correlación de fuerza nos permita pensar y concretar un espacio colectivo alternativo.

Mientras tanto, el Estado seguirá siendo un “campo de lucha” insoslayable que, sin dudas, debe ser problematizado y puesto en tensión por los trabajadores, los subalternos y las organizaciones populares. En este sentido, entendemos que el Estado, aún con todas las transformaciones que impone el capitalismo global, es una instancia productiva cuyas orientaciones ideológicas, capacidades e intervenciones afectan -para bien y para mal- a las sociedades. Como hemos visto, mientras que algunos Estados se han propuesto proteger la vida y la salud, otros han privilegiado lo económico subestimando la gravedad de la pandemia.

Los Estados actuales ya no se corresponden al imaginario mercadocéntrico del primer neoliberalismo. El capital ha tomado debida nota que ni el mercado, ni los medios, ni las corporaciones pueden garantizar la reproducción económica por sí mismos y mucho menos un orden político, aún el más injusto. Aún considerando todas las limitaciones y contradicciones, el Ciclo de Impugnación al Neoliberalismo en América Latina (CINAL) caracterizado por Ouviaña y Thwaites Rey (2019), ha re-balanceado la correlación de fuerzas y no creemos posible que los sectores populares acepten pacíficamente un nuevo ciclo de desposesión y ajuste estructural. Si ello ocurriera, a la mentada crisis económica sobrevendría, indefectiblemente, una crisis política de inmensas proporciones.

La pregunta que debemos hacernos es cómo y bajo qué parámetros es posible pensar una salida más allá del capitalismo predador en un momento en el que el futuro de la humanidad no está garantizado. La pandemia nos ha revelado la potencialidad de las redes de solidaridad y autocuidado. La praxis y la imaginación colectiva se han puestos de manifiesto de múltiples formas, pero también hemos visto el surgimiento de una derecha radicalizada que interpela políticamente desde el odio.

La pandemia ha puesto de manifiesto de forma clara una nueva

cartografía política que desborda las instituciones, los liderazgos, los partidos y aun los movimientos y plantea a los Estado demandas irreconciliables que dan cuenta de las contradicciones del presente: agudizar la represión o garantizar derechos; salvar las grandes empresas o promover las diversas formas de economía popular; afinar las tecnologías de control o promover los cuidados comunitarios; reconstruir lo público o constituirse en ariete para una nueva fase de su captura.

Lo que finalmente resulte es imposible saberlo, los procesos que sobrevendrán en el futuro no son evidentes en el corto plazo. Si sabemos que el escenario inmediatamente posterior al control de la pandemia augura momentos muy difíciles para los trabajadores y sectores populares en virtud de la magnitud de la crisis económica. Bajo este contexto se debe prestar atención a las estrategias que cada país se da en esta dificultosa salida puesto que, como señala Álvaro García Linera, los Estados oscilarán entre un sendero de mayor democratización y fortalecimiento de lo público -estatal y comunal- y un sendero de represión, desdemocratización y profundización de la patrimonialización de los bienes públicos.

En este sentido, si este nuevo protagonismo estatal va a aparejar la reconstitución de los mecanismos de dominación – explotación y el relanzamiento de una globalización de corporaciones o, por el contrario, va a significar la exploración de nuevas instituciones y forma de gobiernos que se articulen “por abajo” con la diversidad de formas de autoorganización social y un nuevo patrón de gobernanza global, dependerá de la movilización de los actores, la construcción de nuevas coaliciones, la renovación de liderazgos y la apertura a nuevos horizontes políticos que no pueden estar sino vinculadas a la praxis de los sujetos y la materialidad de las fuerzas del presente.

LA INSTITUCIONALIDAD ESTATAL Y LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA PANDEMIA. ALGUNAS LECCIONES PROVISORIAS

Antes de terminar, no quisiéramos dejar de hacer algunas observaciones sobre las tendencias que se observan en la dimensión institucional del Estado, como así también en los repertorios de políticas públicas que los gobierno han adoptado en el marco de la pandemia. Siguiendo a Thwaites Rey (1999) una aproximación al fenómeno estatal debe necesariamente dar cuenta de su encarnación concreta que es la forma en que los Estado se presentan y actúan ante la sociedad. No está de más recordar que, como señalara Poulantzas (1991), todas las con-

tradiciones, tendencias y contra-tendencias se expresan tanto en la institucionalidad como en las políticas.

Respecto a la cuestión de las intervenciones estatales puede decirse que hemos visto cómo los gobiernos han implementado políticas que en un contexto pre COVID-19 hubiesen parecido disparatadas. En tal sentido puede decirse que los mismo parecen haber ganado cierta autonomía respecto de los poderes corporativos ampliando el menú de intervenciones sancionadas como posibles por la hegemonía ideológica de las *buenas prácticas*, sancionadas por los *establishments* nacionales y la *intelligentsia* global encarnada en los organismos multilaterales de crédito. No obstante, sería temerario señalar que tales políticas fuera del canon porten una gramática superadora del neoliberalismo actual.

Si bien no es una novedad, la pandemia ha tenido como efecto poner en la agenda de los medios, la sociedad y los gobiernos los profundos problemas que ha producido el neoliberalismo en todos los países en las últimas cuatro décadas. Cuestiones como la extrema precariedad en el mundo del trabajo, la problemática habitacional, el endeudamiento de las familias, la desinversión y mercantilización de la infraestructura pública (la salud, educación, etc.), las políticas de austeridad fiscal y ajuste, la violencia policial, las desigualdades de género, la problemática ambiental, las pulsiones autoritarias y racistas que atraviesan nuestras sociedades, etc.

En consecuencia, buena parte de los gobiernos ha implementado diversas políticas tales como transferencias monetarias a trabajadores precarios y estables de empresas afectadas, diversas formas de apoyo a quienes no tienen casa propia y que deben alquilar, congelamiento de tarifas de servicios públicos, controles de precios de alimentos y bienes de primera necesidad. También en diversos países se ha empezado a discutir la implementación de ingresos universales, la nacionalización de empresas y un rol más activo del Estado en el conjunto de la economía. Naturalmente, el riesgo y las sospechas sobre que tales iniciativas entrañen un salvataje del capitalismo y un nuevo despojo a las sociedades y no la superación del neoliberalismo predador, están más que justificados.

No obstante, tenemos la impresión, que no podemos sostener con datos contundentes y estudios sistemáticos, que las respuestas públicas a la pandemia en los países europeos han aparejado mayores desplazamientos del canon hegemónico que en la región latinoamericana atravesada por el giro a la derecha y la captura del aparato estatal por élites y grupos de poder que han llevado adelante una guerra contra

las mayorías populares. En este sentido, entendemos que el caso argentino marca una excepción a esta tendencia en tanto se llevaron adelante diversas políticas de protección y cuidado de la economía y la salud de la población.²

Para concluir, proponemos una conjetura sencilla que señala que en aquellos países donde los servicios públicos y la institucionalidad bienestarista fue desmontada con menor agresividad relativa, la respuesta a la crisis sanitaria, social y económica fue sensiblemente más efectiva que en aquellos países en donde los criterios empresariales impregnaron más profusamente la institucionalidad estatal y las subjetividades ciudadanas.

El COVID-19 ha promovido un nuevo protagonismo estatal que pone de manifiesto las imposturas del modelo empresarial que impone el neoliberalismo para la gestión de los asuntos colectivos. No obstante, resulta un error dar por sentado que la pospandemia nos deparará sin más un Estado comprometido con lo público y lo colectivo. Tal cosa sólo será posible en tanto los trabajadores, los sectores populares y los subalternos tengan la capacidad de ocupar el Estado construyendo interfases y dispositivos de articulación con el densos entramados de solidaridades y comunidades autogestionadas que desde hace décadas vienen resistiendo el despojo, luchando y reinventando un horizonte igualitario y democrático.

BIBLIOGRAFÍA

Banco Mundial (2020). *Perspectivas Económicas Mundiales. Junio 2020*. Informe recuperado de <https://www.bancomundial.org/es/publication/global-economic-prospects>

García Linera, A. (2020). “El Estado ante el coronavirus. El péndulo de la ‘comunidad ilusoria’”, *Revista Sociedad*, N°40. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. Recuperado de <https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/revistasociedad/article/view/5609>

Karmy Bolton, R. (2020). “La mutación china. O sobre la desweberianización del capitali²”, *Bordes. Revista de Política, Derecho y Sociedad*. Recuperado de <http://revistabordes.unpaz.edu.ar/la-mutacion-china/>

Mann, M. (2006). “El poder autónomo del Estado: sus orígenes,

2 Como por ejemplo las Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) que alcanzó a 2.000.000 de trabajadores y 240.000 empresas y el Ingreso Familiar de Emergencias que asistió 9.000.000 de trabajadores precarios y sobre la cual se está discutiendo la posible implementación de una Renta Básica Universal.

mecanismos y resultados”, Relaciones Internacionales [online], (5) (Madrid, España: Grupo de Estudios de Relaciones Internacionales - Universidad Autónoma de Madrid). Recuperado de <https://revistas.uam.es/index.php/relacionesinternacionales/article/view/4863/5332> [acceso 11/02/2020]

Mbembe, A. (2011). *Necropolítica*. Madrid: Meslusina.

Offe, C. (1994). *Contradicciones en el Estado de bienestar*. Madrid: Alianza Editorial.

Ouviña, H. y Thwaites Rey, M. (comps) (2018). *Estados en disputa. Auge y fractura del Ciclo de Impugnación al neoliberalismo en América Latina*. Buenos Aires. CLACSO - IEALC- TNI.

Peck, J. (2012). “Neoliberalismo y crisis actual”, Revista Documentos y aportes en administración pública. Año 12, N°9: Universidad Nacional del Litoral

Poulantzas, N (1991). *Estado, poder y socialismo*. México: Siglo XXI Editores.

Srnicek, N. (2018). *Capitalismo de plataformas*. Buenos Aires: Caja Negra.

Thwaites Rey, M. (2008). “¿Qué Estado tras el experimento neoliberal?”, en Revista del CLAD Reforma y Democracia. No. 41. (Jun. 2008). Caracas.

Zavaleta Mercado, R. (2009). “El Estado en América Latina”, en *La autodeterminación de las masas*. Bogotá: CLACSO - Siglo del Hombre Editores.

CAPITALISMO Y PANDEMIA: TENDENCIAS, CARACTERÍSTICAS E IMPACTOS. ENTRE LA RECOMPOSICIÓN DEL CAPITAL Y LA RECONFIGURACIÓN DE LOS PROYECTOS POPULARES

Jymy Forero Hidalgo¹

INTRODUCCIÓN

Superada transitoriamente la crisis financiera iniciada en 2008, el optimismo por una rápida recuperación económica y un crecimiento sostenido pronto se nubló. A partir de 2015 la economía mundial volvió a presentar muestras de desaceleración, incluso algunas economías del norte global presentaron signos de recesión que indicaba que varios factores estructurales -presentes en el origen de la crisis precedente- continuaban sin resolverse. Las crisis de 2008 y la ocurrida doce años después, aunque diferentes, son la continuación de una crisis sistémica producto de la sobreacumulación de capitales que expresa una tendencia a la disminución real de la tasa de ganancia del capital desde mediados de los años setenta en su ciclo contemporáneo.

En el intento de recomponer la tasa de ganancia, el capitalismo ha hecho uso de tres estrategias: *el neoliberalismo* como forma de desregulación financiera y arremetida contra el movimiento obrero y sus conquistas, *la globalización* que supuso una expansión del mercado capitalista a todas las zonas del planeta, y *la financiarización*, como vía de escape del capital excedente buscando la rentabilidad especulativa (Renán Vega, 2009, p. 62-65). Estas estrategias llevaron a un cambio en la matriz de acumulación donde el capital financiero especulativo se convirtió en dominante, a la vez que abrieron un nuevo espacio geográfico y económico de explotación capitalista que David Harvey

1 Doctorando en Historia Universidad Pompeu Fabra (Barcelona), docente universitario e investigador social independiente. agora67jym@hotmail.com

(2004) ha denominado *acumulación por desposesión*. Pese a los índices extraordinarios de acumulación y concentración de riqueza, las tasas de ganancia no han logrado llegar a los niveles obtenidos en los famosos años dorados del capitalismo de las décadas del 50 y 60.

Factores como la expansión del capital ficticio, el desplome del precio de las materias primas, el alza en las tasas de interés o el aumento de la deuda pública de los Estados se entrecruzan nuevamente junto a otros factores como las guerras comerciales, las disputas geopolíticas o el aumento en la emisión de CO₂, para organizar un cuadro explicativo del comportamiento de la actual crisis capitalista que representa una caída drástica de las condiciones vida de la gente, propiciando un ambiente favorable para levantamientos y estallidos sociales. Crisis que algunos autores han caracterizado como *civilizatoria* (Lang, 2012; Lander, 2013), *sistémica y pandémica* (Méndez, 2020), *financiera global* (Razeto, 2008), *estructural del capitalismo* (Gambina, 2009); *multidimensional o megacrisis*² (Morin, 2020), a pesar que los apologistas del capitalismo neoliberal del FMI o del Foro de Davos han pretendido minimizar bajo los eufemismos de "contracción económica" o "estancamiento del comercio".

La pandemia del Covid-19 iniciada en diciembre de 2019 y extendida a escala global durante el 2020, es un proceso distinto pero convergente con la crisis. En la actualidad, no se puede asumir la una sin gestionar la otra, es decir, no es posible paliar la crisis ni estabilizar la economía sin afrontar la situación sanitaria para revertir los efectos negativos que impactan la tasa de ganancia. La pandemia no es el origen sino la exacerbación y profundización de una crisis en ciernes que en la actualidad resulta ser multidimensional, esto es, un engranaje de crisis concatenadas que se extiende desde lo existencial hasta lo político pasando por lo financiero, bursátil, ambiental, alimentario, sanitario, social, cultural y que afecta de manera asimétrica a millones en el planeta.

En el caso de América Latina y el Caribe, el politólogo brasileiro Miguel Lago (2020) señalaba en el mes de marzo que ésta región podría convertirse en la mayor víctima del Covid a nivel mundial, cinco meses después, dicho pronóstico se convirtió en una realidad insos-

2 Aunque aún no hay consenso en la caracterización de la crisis ni qué tan cerca o lejos estamos de la decadencia y descomposición del capitalismo, el común denominador es considerar que no se trata de una disfunción en el sistema capitalista sino que es su propia lógica de reproducción y sus contradicciones internas las que la originan cada cierto tiempo, exacerbada por la intensidad y extensión de la lucha de clases.

layable debido a las condiciones estructurales de sus economías, de sus sistemas sanitarios públicos y de las decisiones políticas³, llegando a ser el epicentro de la pandemia con más de 6.330.000 de casos confirmados y 250.000 muertes en los primeros seis meses. Según el “Coronavirus Resource Center” de la Universidad Johns Hopkins, en ese mismo periodo los casos confirmados de contagio a nivel mundial superaron los 24 millones con cerca de un millón de muertos por Covid⁴. Cinco países latinoamericanos -Brasil, México, Perú, Colombia y Chile en su orden- destacaron entre los diez más afectados y con mayor número de muertes por millón de habitantes⁵. Aunque la situación crítica de pobreza y desigualdad estaba presente en la región antes del Covid-19, ésta se ha profundizado con su llegada.

Luego de cuatro décadas de un modelo neoliberal devastador y depredador tanto de los derechos de los pueblos como de la naturaleza -y pese al ciclo de impugnación al neoliberalismo en la región-, la crisis actual, agravada por la pandemia, ha puesto de manifiesto dos elementos sustantivos: a) las lógicas de reproducción del capitalismo y sus limitaciones para ofrecer respuestas satisfactorias a las demandas económicas, políticas, sociales, ambientales y culturales de la humanidad, y; b) las posibles salidas políticas de acuerdo con las relaciones de fuerza, ya sea desde una perspectiva que dé continuidad al modelo neoliberal, ya una vía pos-neoliberal con márgenes diferenciados entre mercado y sector público, o ya una vertiente alternativa y/o anticapitalista. Aunque asistimos a un agotamiento del proyecto neoliberal, no necesariamente significa el fin de dicho proyecto.

Con todo, la actual situación abre un espacio para reacomodos políticos locales, nacionales, regionales y mundiales, que posibilitan, a su vez, una disputa y reconfiguración en el ámbito de la geopolítica. Es un momento de intentos de recomposición de los procesos de acumulación de capital en medio de un cuestionamiento profundo del modelo civilizatorio, de las falacias de la retórica demoburguesa y de la ampliación de las desigualdades. Es también una oportunidad para los sectores populares y sus proyectos de sociedad alternativa. En suma, es un momento histórico que cambia la vida de muchos en el planeta; estamos ante un *movimiento estremecedor* donde pocas co-

3 Ver Ángel Bermúdez (2020).

4 El número de casos diagnosticados apenas refleja una parte de la cifra real de infecciones y las comparaciones entre países deben tomarse con cautela, ya que las políticas de tests difieren entre países. Última actualización: agosto 29-2020.

5 Brasil era segundo en contagios y muertes, México séptimo y tercero respectivamente, Perú sexto y noveno, Colombia octavo y Chile noveno.

sas se mantendrán como antes, donde como diría Marx, *todo lo sólido se desvanece en el aire*.

El presente texto propone discutir en perspectiva crítica cuáles son las principales características, tendencias e impactos de la recomposición del capital así como los desafíos populares a nivel global y en particular en América Latina en la actual época de gestión de la pandemia del covid-19.

CARACTERÍSTICAS

Los contornos y dimensiones de la crisis hasta ahora están en proceso de configuración, con márgenes mayores de incertidumbres que de certezas, sin embargo se pueden esbozar ciertos elementos globales que la pandemia ha vehiculado:

1. Crisis multidimensional. Se trata de una situación de quiebres e inestabilidades en la reproducción del sistema capitalista mundial de múltiples dimensiones, proporciones y consecuencias que comprometen no sólo la economía sino la existencia misma de las distintas formas de vida incluida la especie humana. Destacan las siguientes dimensiones:

- *Crisis ambiental, sanitaria y alimentaria:* el capitalismo y su relación depredadora sobre la naturaleza son responsables de los irreversibles cambios climáticos, la destrucción de las fuentes de vida y, por supuesto, de las nuevas pandemias que sacuden al mundo en las últimas décadas (Navarro, 2020). El modelo extractivista de energías fósiles, agroindustria y ganadería capitalista altera ecosistemas y expanden virus desconocidos por el genoma humano. Los efectos del cambio climático repercuten en la salud y están comprometidos con el aumento de enfermedades respiratorias, cardiovasculares, desnutrición, entre otras (Modep, 2020, p. 5)⁶.

A lo anterior se suma la destrucción y desmantelamiento de los sistemas públicos sanitarios impulsado por el capitalismo neoliberal, que en la mayoría de Estados develó la incapacidad de atender la crisis sanitaria producto de la pandemia. Es una crisis sanitaria que deja en una situación crítica la sanidad de los pueblos agravada por el aumento de la po-

6 En esta dirección el calentamiento global es responsable de la destrucción de las zonas polares liberando carbón y virus congelados que están trayendo graves consecuencias para la humanidad. Modep (2020, p. 5).

breza, la migración masiva y los conflictos generados por las guerras de agresión en diferentes partes del mundo. De igual modo, la crisis ambiental está relacionada con la crisis alimentaria, es decir, con la pérdida de soberanía, diversidad y seguridad alimentaria en las diferentes naciones que han venido enfrentando crecientes hambrunas⁷.

• *Crisis económica, financiera y bursátil*: después de un crecimiento sostenido de casi 11 años y una sobrevaloración del mercado bursátil que llegó a sobrepasar el 300%, entre febrero y marzo de 2020 se presenció una pérdida de valor aproximado del 30% de todo el mercado mundial de valores. Este es un problema sustantivo de la actual crisis: la superproducción de capital que se da en el sector financiero especulativo es al menos 130 veces mayor que el capital productivo invertido a nivel mundial, lo que genera burbujas que se inflan y se estallan en cualquier momento. En apenas dos semanas, la pandemia de Covid19 contribuyó a paralizar la tercera parte de la economía mundial y provocó la mayor perturbación económica desde la Gran Depresión. Los cierres de fronteras y fábricas interrumpieron los flujos de las cadenas de producción globales y afectaron la provisión de bienes básicos en gran parte del mundo. Organismos internacionales posteriormente calcularon tal parálisis de la producción entre un 70% y 80% a nivel mundial.

Según estimaciones realizadas en el mes de junio el producto mundial crecerá un -4.9% este año y en las economías imperialistas un -8.0% (Fondo Monetario Internacional FMI, 2020a, 2020b; Foro Económico Mundial WEF; 2020d). En el caso de América Latina y el Caribe se habla ya de una nueva *década perdida*, es decir que la caída en la actividad económica hará que al cierre de 2020, el nivel del PIB per cápita sea similar al observado en 2010. Se proyecta un crecimiento promedio en la región del PIB del -9,4% con economías como la peruana, la mexicana, la brasileña y la argentina

7 Producto de la pandemia, de la destrucción de los sistemas agroalimentarios y del control monopolista de los mercados de abastecimiento y de seguridad alimentaria, el Programa Mundial de Alimentos proyecta que 265 millones de personas podrían sufrir de hambre en 2020, casi el doble de los 135 millones de 2019 (El Universo, 2020).

que podrían superar los dos dígitos en 2020 y sólo un país vería crecer su economía de forma positiva: Guyana⁸.

•*Crisis social, cultural y política*⁹: con la globalización neoliberal imperialista se estableció el predominio de un pensamiento único que rechaza los principios democráticos, elimina la diversidad social, desvirtúa las luchas por la igualdad, impulsa formas autoritarias de gobierno y promueve relaciones sociales de tipo consumista, individualista, conformista, pragmática, racista y patriarcal. Con la pandemia estas características se han profundizado, lo que ha significado recorte de libertades y derechos democráticos; militarización y paramilitarización de ciudades y territorios en diversos lugares del mundo; incremento del miedo y la angustia colectiva para desmovilizar a la gente y que descargue su rabia y frustración en sectores más vulnerables como los migrantes, pobres e indigentes.

2. Afectación asimétrica. Los impactos de la crisis y las medidas ante la epidemia afectan de manera desigual a las clases sociales y sectores económicos. El avance del Covid-19 exhibe todas las características de una pandemia de clase, género y raza. En gran parte del mundo el confinamiento ha significado para la mayoría desempleo, hambre y agobio, más aún para quienes sobreviven de la informalidad y de empleos precarios, exponiéndose a entornos contaminados y sistemas de transportes abarrotados mientras que los privilegiados pueden guardar cuarentenas en casas con internet de alta velocidad, neveras llenas y espacios confortables. Muchos sectores económicos han limitado su funcionamiento o han dejado de hacerlo registrando grandes pérdidas¹⁰, otros en cambio, pese a las medidas, han continuado funcionando y obteniendo grandes rentabilidades¹¹. Aunque es cierto que sectores del gran capital han sido golpeados, la economía

8 De conjunto, estas proyecciones implican una pérdida acumulada para la economía mundial a lo largo de dos años (2020–21) de más de USD 12 billones como consecuencia de la crisis (Cepal, 2020).

9 Morin (2020, 8-9) incluye además otros tipos de crisis: planetaria, nacional, de la vida civil, intelectual y existencial.

10 Una parte del sector servicios ha sido de las más afectadas entre las que destaca la economía del turismo, restaurantes, cultura, deportes, teatro, cinematografía, así como el sector industrial de bienes de capital (autos, electrodomésticos, etc.).

11 Entre los que se encuentran la industria alimentaria, el sector energético, los servicios de transporte, las telecomunicaciones, los medicamentos vitales y equipos hospitalarios.

popular y familiar es la más afectada por su magnitud e incierta recuperación.

Esto significa que como en toda crisis, hay ganadores y perdedores. Durante el primer semestre de 2020 presenciábamos un aumento de consumo de televisión en 40%, del uso de internet en 300% y de compras online. La acumulación y recomposición del capital se ha dado en torno a grandes empresas de sectores del comercio electrónico (Amazon, Alibaba), de las plataformas tecnológicas (Zoom), las telecomunicaciones (Claro, Movistar, Citrix), la inteligencia artificial (Nvidia), las farmacéuticas (Curevac, Novavax, Pfizer, BioNtech, Merk, Sinopharm, CanSino, AstraZeneca, Moderna Inc), insumos sanitarios (Syz Am), importadores y exportadores de alimentos (Deliveroo, Genus), además de las fusiones y compras de empresas que han ocurrido para favorecer a los grandes monopolios.

TENDENCIAS Y EFECTOS

En un mundo que funciona de manera interconectada han sido 187 países los afectados por el Covid-19 según la Universidad Johns Hopkins, alrededor de 5.5 mil millones de personas confinadas, y en algunos casos, como sucedió en varios países de América Latina, el confinamiento superó los seis meses, dejando importantes afectaciones de distinta índole. Se identifican al menos 7 tendencias con sus consecuentes impactos.

1). Tendencia a la profundización de la crisis y destrucción de fuerzas productivas para superarla. Marx y Engels (1971) afirmaban que la burguesía capitalista en cada crisis “recurre tanto a la destrucción de fuerzas productivas como a la conquista de nuevos mercados y a la explotación más intensa de los antiguos”, tesis que con los actuales acontecimientos se actualiza. Desde el inicio de la pandemia hemos presenciado un proceso creciente de destrucción de capital acumulado a escala mundial representado en quiebra de empresas, cierre de fábricas, caída de salarios, despido de trabajadores, parálisis de proyectos e impulso a guerras regionales. Proceso que, como en crisis anteriores, se traduce en mayor explotación de los y las trabajadoras, resultado de la desregulación laboral y el aumento en la extracción de plusvalía. Este impacto es diferenciado respecto del lugar que ocupa cada nación en la división internacional del trabajo. Para Europa y EEUU es enorme pero para América Latina y las naciones dependientes es devastador.

En América Latina y el Caribe sólo entre febrero y agosto se per-

dieron 26.4 millones de empleos y podría llegar a 44.1 millones de desempleados en la región (BID, 2020), lo que representa un aumento cercano a 18 millones con respecto a los 26.1 millones del año pasado¹² (CEPAL, 2020). La gran mayoría de trabajadores afectados son informales y de bajos ingresos que se desempeñan en el sector servicios, siendo el grupo más afectado el de jóvenes menores de 25 años.

Las estimaciones más prudentes hablan de cerca de 150 millones de empleos perdidos en el mundo hacia fin de año (CEPAL, 2020), lo que probablemente se quedará corto si África continúa entrando de manera ascendente al torrente de la crisis, así que un estimado más realista hace ascender a más de 200 millones los nuevos desempleados (Méndez, 2020, p. 43). Realidad que, unida a la que ya existía antes del Covid19, haría subir el desempleo neto en el mundo a cifras cercanas a los 800 millones antes de terminar este año. El problema consiste en que el desempleo neto es el núcleo de la “pobreza”, que también sigue creciendo y que afecta alrededor de 3.000 millones de seres humanos. Sin saber qué tan prolongada sea la pandemia, aún desconocemos la plenitud de la fuerza destructiva.

2) *Rescate al capitalismo financiero y respaldo monetario.* Se observa la profundización de un modelo ya probado en 2008-2009 para el salvamento del gran capital en tiempos de crisis, que combina la inversión pública y el libre juego del mercado¹³. Fueron los Estados los que absorbieron las enormes pérdidas producidas a partir de la crisis de las "subprime", es decir, la gente del común cargó con la crisis. Ahora, se propone un enfoque similar, para lo cual se han inyectado 10 billones de dólares desde las bancas centrales para afrontar la pandemia y para reactivar la economía¹⁴. No obstante la inyección de capital, también se impulsan una serie de medidas que implican nuevas reformas laboral y pensional, privatizaciones, recortes de inversión

12 Se espera que la tasa de desocupación regional llegue al 13.5% al cierre del año, esto es, un incremento de 5.4 puntos respecto del 8.1% registrado en 2019. Estas cifras son significativamente mayores que las observadas durante la crisis financiera mundial, cuando la tasa de desocupación se incrementó del 6.7% en 2008 al 7.3% en 2009". (Cepal, 2020).

13 El gran capital corporativo aprovechó los millones de dólares que la Reserva Federal de Estados Unidos les entregó sin intereses y lo dedicaron nuevamente a la especulación y a inflar los precios de la bolsa, resultándoles mucho más rentable que la inversión en la producción real (Méndez, 2020, 45). Ver también Fondo Monetario Internacional 2020b.

14 Cerca del 90% del apoyo fiscal mundial ha recaído en los países del G20 (FMI, 2020a, 2020b; WEF, 2020c).

social, cargas tributarias, cuyo enfoque presupone "que la crisis la paguen los pueblos". La tendencia a favorecer al gran capital, los bancos y los negocios por parte de los Estados invirtiendo recursos públicos se ha plasmado durante la pandemia en toda una serie de decretos ley, planes, programas, medidas de emergencia.

El financiamiento de estas medidas proviene, entre otras, del endeudamiento, el uso de reservas y la reorganización de prioridades en los presupuestos nacionales, para lo cual la Reserva Federal y el Fondo Monetario Internacional están prestos a financiar. Toda una serie de políticas fiscales, monetarias y financieras de tipo nacional y global que salvaguarda la estabilidad del capitalismo. Sin embargo, este modelo tiene sus limitaciones justamente debido a la gran deuda de varios Estados adquiridas en el periodo 2008-2013.

Lo crucial de la gestión de la crisis actual más que reactivar la economía está en reformar el capitalismo, o en palabras del Foro Económico Mundial (WEF), "reiniciar el capitalismo", lo que puede tomar vías y efectos políticos diferenciados en cada lugar, según el tipo de contradicciones económico-sociales, la correlación política de fuerzas, la intensidad y permanencia de las luchas sociales y de clase. En esta perspectiva, el Foro Económico Mundial (2020a) sintetiza tres vías o estrategias utilizadas para frenar la pandemia y reactivar la económica: (a) *aplastamiento y contención*¹⁵, cuyo objetivo ha sido restaurar la economía dentro de una sociedad amurallada, para lo cual se centran en aplicar controles fronterizos estrictos; (b) *aplanamiento y lucha*¹⁶, cuyo objetivo es reabrir de manera localizada por fases sin que se presente crisis sanitaria buscando "equilibrar la salud y la economía", cuestión que no ha sido satisfactoria. En el caso latinoamericano ha primado mantener abierta la economía con medidas de afrontamiento que implican escaso fortalecimiento de la red hospitalaria, deficiencias en la realización de pruebas masivas y en cercos epidemiológicos; (c) *sostenimiento y apoyo*¹⁷, para controlar la

15 Se trata de aquellos gobiernos como Corea del Sur, China, Nueva Zelanda, Taiwán, Costa Rica e Israel que actuaron rápidamente para contener la propagación del coronavirus y en gran medida han eliminado la transmisión del contagio.

16 Se refiere a la mayoría de países de Europa y América que fueron incapaces de contener el brote inicial, y frente al crecimiento exponencial aplicaron medidas de distanciamiento social y confinamientos para prevenir una "crisis sanitaria". El caso alemán sería excepcional por contar con una infraestructura robusta (Foro Económico Mundial, 2020a).

17 Es la experiencia sueca de restricciones selectivas y voluntarias en su mayoría para proteger a los más vulnerables y mantener abierta la economía y la sociedad. El modelo no ha desbordado el sistema de salud y la población lo apoya.

transmisión del Covid-19 y desarrollar la inmunidad colectiva. Estas vías de "reinicio del capitalismo" en su conjunto asumen un control geopolítico y requieren una nueva integración mundial (WEF, 2020b).

Otra perspectiva es la de Cuba que consideran que hay dos modelos en pugna para gestionar la pandemia; el modelo neoliberal y el modelo desde la movilización popular con medidas estrictas que tiene en cuenta factores culturales y hacen uso de su experiencia de movilización social aprendidas durante el periodo revolucionario.

3) *Tendencia a una mayor concentración de la riqueza.* Este proceso no se ha caracterizado por el predominio de la redistribución de la riqueza, la reducción de las desigualdades ni la democratización de las sociedades, todo lo contrario, ha sido un momento de mayor aumento de la iniquidad y de las brechas sociales. La máxima ha sido reactivar la economía "sacrificando la cantidad de gente que sea en el altar del mercado, antes que arriesgar la sepultura de sus ganancias". Según proyecciones el índice Gini en América Latina aumentará en la mayoría de países entre un 3% y un 8%, y el número de personas en situación de pobreza se incrementará en 45,4 millones, con lo que el total pasaría de 185,5 millones en 2019 a 230,9 millones en 2020, cifra que representa el 37,3% de la población consolidándose como la región más desigual del mundo (Cepal, 2020).

4) *Tendencia al autoritarismo y la militarización.* Las situaciones de crisis -y esta no es la excepción- favorecen el ascenso de posiciones autoritarias, de extrema derecha, xenófobas, chauvinistas, donde una parte de la sociedad las acepta bajo el supuesto que representan una alternativa. Desde los gobiernos no se abrió -salvo en muy contados casos- un debate amplio, participativo y democrático, apoyado en la ciencia, con el conjunto de la sociedad para comprender y asumir las acciones de gestión de la pandemia. Se ha gobernado en la mayoría de casos bajo las figuras de "decretos de emergencia", "decretos de alarma" o "decretos de excepción" que proponen limitar libertades y derechos, pero en la práctica terminaron eliminándolos temporalmente convirtiéndose en auténticos Estados de excepción propios de tiempos de guerra.

Medidas como toques de queda, ley seca, restricción de la movilidad, multas económicas, prisión, confinamiento territorial, prohibición de las concentraciones y manifestaciones en la calle, aunque están hoy en controversia sobre su eficiencia, oportunidad y alcance en la contención de la pandemia, cuentan con unanimidad sobre su

eficacia para favorecer reacomodos políticos de los regímenes impopulares y para defender el *status quo* tal como lo sugiere D'Eramo (2020, p. 29-30) y Agamben (2020). En América Latina la ausencia de debate encubrió posturas negacionistas junto con otras arrogantes y metafísicas, y no en pocos casos, se legitimó la represión y el abuso de poder operado desde las Fuerzas Militares, de Policía y de paramilitares.

5) *Tendencia al fortalecimiento del patriarcado*. La crisis exacerbada por la pandemia también ha reanimado las relaciones patriarcales. En particular se observa en la región un recrudecimiento de los estereotipos y roles de género relacionados con el cuidado y las labores domésticas, un incremento de la violencia sexual y otras formas de violencias hacia las mujeres, un mayor desconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, una falta de atención médica oportuna, entre otras formas de opresión (Red Rojo y Violeta, 2020).

6) *Tendencia al control social y de población, masificación de una tecnología de poder que oscila entre la biopolítica* (el control de la vida) *y la tanatopolítica* (la administración de la muerte). Las pandemias en el pasado han sido una herramienta para sofisticar las tecnologías de control y profundizar las formas de dominación como ocurrió con la viruela en la implantación del orden colonial de los siglos XVI y XVII (Aguilar, 2020, p. 15). También han significado la posibilidad de inventar un ordenamiento nuevo como lo fue el surgimiento de la biopolítica a partir del siglo XVIII (Foucault, 2006).

Asistimos a una sofisticación del disciplinamiento social cuyo efecto profundo es la fragmentación del tejido popular a la vez que tiende a desmovilizar y apaciguar la protesta social, es decir, atomiza a los dominados. Para esto se promueve el cambio de hábitos de consumo y se modifican las formas de relacionamiento social, se instaura la política del miedo: miedo a contagiarse o ser contagiado, a morir, a los demás, a lo desconocido, a la transgresión y miedo al futuro. “En nombre de la seguridad aceptamos medidas que restringen la libertad” escribe Agamben (2020, p. 19), se promueve el ciudadano ‘policía de balcón’ que rechaza y estigmatiza a quien se asume crítico de las medidas autoritarias en tiempos de pandemia porque en la valoración moral atrapada por el miedo vale más la ‘certeza’ que emana de la restricción de las libertades que la ‘incertidumbre’ de padecer el virus, lo cual lleva a justificar y/o realizar comportamientos violentos, into-

lerantes o excluyentes hacía vecinos o ciudadanos de otras regiones, ciudades o países.

7) *Agudización de las contracciones de clase y profundización de la lucha popular.* Las contradicciones capital-trabajo, clases dominantes-pueblos y modelo de acumulación-naturaleza transitan por un momento crucial que le plantea al campo revolucionario enormes retos para trascender de la resistencia a la ofensiva política. En América Latina asistimos a un ciclo de ascenso de las luchas populares en la última década que aún no logra consolidarse en una propuesta alternativa de poder popular pero que se proyecta con múltiples posibilidades. Los próximos semestres serán críticos debido a un ambiente de malestar social generalizado, nuevas oleadas de la pandemia y unas economías colapsadas.

Traducir los acumulados y experiencias de lucha en hegemonía popular que permita una nueva correlación de fuerzas sin concesiones con la derecha de abandonar la construcción del propio proyecto alternativo implica superar las limitaciones en la actual reconfiguración de fuerzas populares y disputar conquistas que están a la orden del día en torno a:

- i) ejercicio de la autonomía y soberanía popular;
- ii) fin de la criminalización de la protesta y el genocidio de líderes populares;
- iii) renta básica, fortalecimiento de los sistemas públicos de salud e impuesto ecológico a las empresas;
- iv) democratización de las sociedades, reforma agraria y urbana.

De este modo, no sólo estamos ante un momento político que permita logros tácticos o reformas, sino que abre un espacio fecundo a la lucha revolucionaria. La máxima *solo el pueblo salva al pueblo* es de gran vigencia para lo cual resulta imprescindible asumir las medidas necesarias de autocuidado, protección, romper el control social impuesto, fortalecer los procesos organizativos, las redes de solidaridad, de apoyo y lucha contra el hambre, ocupar las calles y retomar la movilización así como proyectar y desarrollar procesos de economía propia que permita avanzar en formas de poder popular. Una tarea adicional de alcance estratégico del movimiento revolucionario para enfrentar el proceso de despojo y acumulación capitalista será la articulación programática de las luchas en la perspectiva de un bloque de poder popular y revolucionario de carácter internacionalista.

Viene bien para concluir, una reflexión inspiradora de Edgar Morin a propósito del actual momento:

la crisis en una sociedad suscita dos procesos contradictorios. El primero estimula la imaginación y la creatividad en la investigación de soluciones nuevas. El segundo es, o bien la búsqueda del retorno a una estabilidad del pasado, o bien la adhesión a una salvación providencial así como la denuncia o la inmolación de un culpable (Morin, 2020, p. 7).

En consecuencia, estamos ante tres escenarios de disputa para afrontar la crisis y la pandemia: 1. el conservador, que retoma parcialmente viejas fórmulas liberales sobre el papel del Estado y lo combina con el modelo de acumulación neoliberal con el objetivo de neutralizar la inconformidad popular; 2. el socialdemócrata, de corte reformista que abandona parcialmente las recetas neoliberales y promueve un capitalismo ‘moderno o nacionalista’ donde los Estados toman protagonismo en materia económica y de servicios de bienestar social; 3. el revolucionario, lleno de imaginación y creatividad, que asume una nueva forma de hacer política y canaliza la creciente inconformidad popular para consolidar el ciclo de ascenso de luchas populares presente en varias regiones de América Latina y el mundo en perspectiva revolucionaria y socialista. (Méndez, 2020)

BIBLIOGRAFÍA

Fuentes primarias

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (2020). *Observatorio Laboral covid-19*. Actualizado en agosto 20. Recuperado de <https://observatoriolaboral-bid.herokuapp.com/>

Bermúdez, A. (17 junio 2020). Coronavirus en América Latina: 5 factores que contribuyeron a convertir la región en el epicentro de la pandemia en el mundo. *BBC News Mundo*. Recuperado de <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-53074005>

BID: Latinoamérica ha perdido 24 millones de trabajos por la covid-19. (agosto 18 de 2020). *Revista Dinero*. <https://www.dinero.com/internacional/articulo/coronavirus-bid-calcula-que-latinoamerica-perdio-24-millones-de-empleos/296082>

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2020). *Informe especial: Enfrentar los efectos cada vez mayores del covid-19 para una reactivación con igualdad: nuevas proyecciones*. Quinto informe, julio 15. Recuperado de <https://repositorio.cepal.org/bitstream/>

handle/11362/45782/1/S2000471_es.pdf

Coronavirus Resource Center. (2020). Universidad Johns Hopkins. Baltimore, EE.UU. Recuperado de <https://coronavirus.jhu.edu/map.html>

Coronavirus: 265 millones de personas podrían sufrir hambre en 2020, alerta la ONU. (abril 21 de 2020). *El Universo*. <https://www.eluniverso.com/noticias/2020/04/21/nota/7819368/coronavirus-265-millones-personas-podrian-sufrir-hambre-2020-alerta>

El coronavirus dejará 11,5 millones de nuevos desempleados en América Latina en 2020 (21 de mayo de 2020). *El Comercio*. Recuperado de <https://www.elcomercio.com/actualidad/coronavirus-crisis-desempleo-america-latina.html>

Fondo Monetario Internacional (2020a). *Perspectivas y análisis de economía y finanzas. Rastreado los 9 billones de dólares de apoyo fiscal global para combatir COVID-19*. Recuperado de <https://blogs.imf.org/2020/05/20/tracking-the-9-trillion-global-fiscal-support-to-fight-covid-19/>

Fondo Monetario Internacional. (2020b, junio). *Actualización del informe sobre la estabilidad financiera mundial*. Rec www.imf.org/~media/Files/Publications/GFSR/2020/Update/June/Spanish/GFSRSPA2020006.ashx?la=es

Foro Económico Mundial (2020a, julio). *Tres vías para el reinicio*. <https://es.weforum.org/agenda/2020/07/tres-vias-para-el-reinicio/>

Foro Económico Mundial (2020b, julio). *COVID-19 nos ofrece una gran oportunidad para reformar el capitalismo*. Recuperado de <https://es.weforum.org/agenda/2020/07/covid-19-nos-ofrece-una-gran-oportunidad-para-reformar-el-capitalismo/>

Foro Económico Mundial (2020c, julio). *El legado de la COVID-19: así debemos enfrentarnos al gran reinicio*. Recuperado de <https://es.weforum.org/agenda/2020/07/el-legado-de-la-covid-19-asi-debemos-enfrentarnos-al-gran-reinicio/>

Lago, M. (marzo 19 de 2020). América Latina puede convertirse en la mayor víctima del COVID-19. *The New York Times*. Recuperado de <https://www.nytimes.com/es/2020/03/19/espanol/opinion/coronavirus-america-latina-gobiernos.html>

Mapa del coronavirus: expansión en cifras del Covid-19 en el mundo. (Agosto 15 de 2020). *El Mundo*. Recuperado de www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/2020/03/02/5e5cd4ebfc6c83632e8b4644.html
Movimiento por la Defensa de los Derechos del Pueblo (Modep). (2020). *Los desafíos del pueblo ante las crisis generadas por el capitalismo en tiempos de la Covid-19*. Documento de discusión. Colombia.

Navarro, V. (marzo 17 de 2020). Las consecuencias del neoliberalismo en la pandemia actual. *El Clarín de Chile*. Recuperado de <https://www.elclarin.cl/2020/03/17/las-consecuencias-del-neoliberalismo-en-la-pandemia-actual/>

Red Rojo y Violeta. (2020). *Las mujeres enfrentamos el patriarcado capitalista neoliberal en medio de la pandemia*. Colombia.

Standing, G. (marzo 12 de 2020). “Coronavirus, crisis económica y renta básica”. *El país*. Recuperado de https://elpais.com/elpais/2020/03/11/opinion/1583929510_196303.html

Obras citadas

Agamben, G. (2020, febrero 26). “La invención de una epidemia”. Quodlibet.it. Recuperado de <https://www.quodlibet.it/giorgio-agamben-l-invenzione-di-un-epidemia>

Aguilar, Yásnaya (2020). “Jëen pä’am o la enfermedad del fuego”. En *Capitalismo y pandemia*. (pp. 15-20). Editorial FilosofíaLibre.

D’Eramo, M. (2020). “La epidemia del filósofo”. *New Left Review*, 122, 28-33, mayo – junio.

Foucault, M. (2006). *Seguridad, Territorio, Población*. Buenos Aires: Fondo de CE.

Gambina, J. (2009). “Crisis capitalista y políticas anticrisis: el debate regional”. En *Crisis capitalista. Economía, política y movimiento*. Bogotá: Espacio crítico ediciones.

Harvey, David. (2004). *El nuevo Imperialismo*. Madrid: Akal.

Lander, E. (2013). “Con el tiempo contado. Crisis civilizatoria, límites del planeta, asaltos a la democracia y pueblos en resistencia”. En *Alternativas al capitalismo del siglo XXI*. Cali: Fundación Rosa Luxemburg.

Lang, M. (2012). “Crisis civilizatoria y desafíos para las izquierdas”. En: *Más allá del desarrollo*. Cali: Fundación Rosa Luxemburg.

Marx, C, y Engels, F. (1971). *Manifiesto del Partido Comunista*. Pekín: Ediciones en Lenguas Extranjeras.

Méndez, R. (2020). “Crisis y coronavirus”. *Revista Cepa*, No. 30, 42-46.

Morin, E. (2020). “El festival de las incertidumbres”. *Tracts de Crise Gallimard*, 54, 1-12.

Razeto, L. (2008). “Un análisis alternativo de la actual crisis económica global y sus vías de superación”. *Polis Revista Latinoamericana*, 21, 1-16.

Vega Cantor, R. (2009). “Crisis de la civilización capitalista: mucho más que una breve coyuntura económica”. En *Crisis capitalista. Economía, política y movimiento*. Bogotá: Espacio crítico ediciones.

PANDEMIA Y ESTADO DE PADECIMIENTO EN LOS ANDES. ECUADOR-PERÚ: MIRADAS CRUZADAS

Franklin Ramírez Gallegos¹,
Daniel Vizuite Sandoval²,
Alfonso Bermejo³

Desde 2016 el mapa político latinoamericano vio quebrar la prolongada hegemonía progresista abierta desde fines del pasado siglo. La derrota del kirchnerismo argentino y el *impeachment* al gobierno PTista en el Brasil marcaron la reinstalación de la derecha en el poder. En la región andina, el golpe en Bolivia (2019) y el giro de Lenín Moreno (2017) en Ecuador dejaron en aislamiento político a Venezuela. El ocaso sub-regional del progresismo se daba en medio del estable predominio de las derechas en Colombia y Perú, las dos principales economías andinas.

Dicho cambio político coincidía con el declive del superciclo de precios de *commodities*. Aquello redujo la capacidad fiscal de los países e impactó en su política social y en las condiciones para encarar la vulnerabilidad externa. América Latina volvía a instalarse en la crisis: desaceleración de la actividad económica entre 2014 y 2019; caídas del PIB per cápita, la inversión, el consumo per cápita y las exportaciones; deterioro de la calidad del empleo y crecimiento del desempleo (CEPAL, 2019:12).

En medio del giro político y el estancamiento económico, latinoamérica recibía en marzo de 2020 las primeras noticias sobre el nuevo

1 Sociólogo y Profesor-Investigador del Departamento de Estudios Políticos de FLACSO-Ecuador.

2 Ingeniero en biotecnología y analista de políticas de ciencia, tecnología e innovación.

3 Economista y experto en evaluación de proyectos de cooperación al desarrollo y política pública.

coronavirus. Cien días después, la propagación del COVID-19 sumía a la región en una conmoción que trastocó por completo las previsiones económicas y alteró las prioridades de acción pública para el corto y mediano plazo. Para fines de mayo, la OMS declaraba a América del Sur como nuevo epicentro de la pandemia. Además de Brasil y México, dos países andinos, Ecuador y Perú, han figurado entre aquellos más afectados por la pandemia a nivel global.

El Financial Times (2020) analizó el exceso de mortalidad provocada por el virus al comparar el número de muertos durante la pandemia con los promedios históricos nacionales de mortalidad. Tal ejercicio arrojó dos hallazgos: a) el exceso de mortalidad supera con creces las cifras notificadas, por los gobiernos, de muertes asociadas con el Covid-19; y, b) el número de muertes en algunos países es más del 50% superior al habitual. Para junio 2020, Ecuador (+122%) y Perú (+144%) se ubicaban entre tales países. La singularidad de los casos ecuatoriano y peruano se ratifica al poner la lupa en las grandes aglomeraciones urbanas. En abril, la catástrofe sanitaria en Guayaquil, la segunda ciudad más grande del Ecuador, había hecho portada a nivel internacional. Dicha ciudad y Lima aparecen, en efecto, con impresionantes tasas de muertes en exceso.

EXCESO DE MORTALIDAD POR COVID-19 (CIUDADES)

Ciudad	Número de muertes en exceso durante la pandemia	Crecimiento respecto a años anteriores
Lima-Perú	17.500	+289%
Guayas-Ecuador	14.200	+276%
New York-USA	25.600	+251%
Madrid-España	16.200	+157%
Manaus-Brasil	3.200	+152%

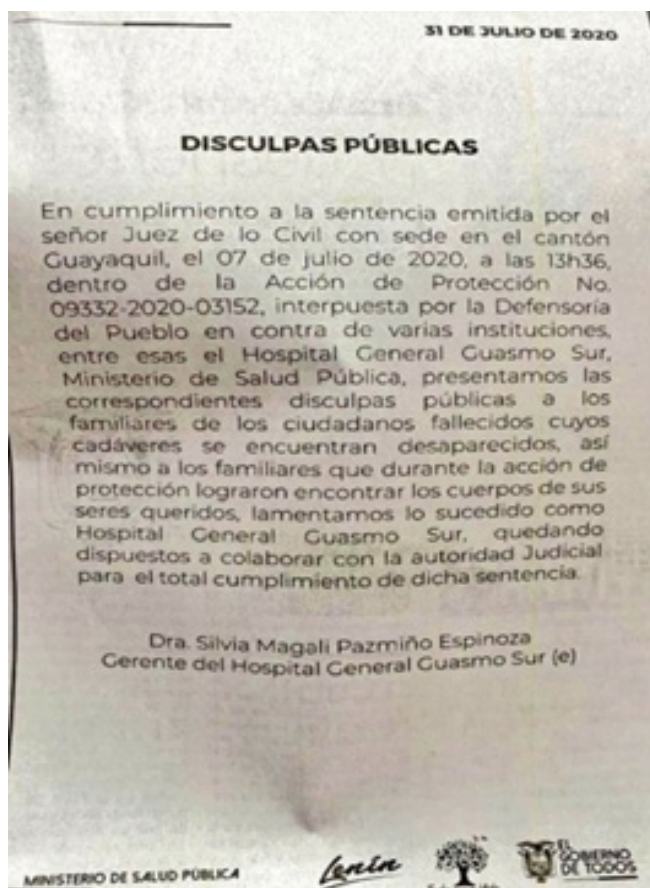
Fuente: Financial Times (2020). Datos actualizados al 23/06/2020

Este texto se adentra en el estudio comparado de los modos en que Ecuador y Perú han afrontado la crisis sanitaria abierta por la

acelerada expansión del COVID-19 entre su población. La lectura pone énfasis en el papel de los estados-nacionales en la gestión de la pandemia en sus territorios a la luz de las previas trayectorias de acción estatal en relación con la promoción del crecimiento, la regulación de los mercados y la provisión de los servicios públicos comprometidos, sobre todo, con el derecho a la salud. Más allá del lugar de ambos países en la cima global de la tragedia del COVID-19, la comparación resulta sugerente pues los casos seleccionados desplegaron no solo un tipo de intervención estatal diferenciado durante la coyuntura crítica *-grosso modo*: activismo estatal peruano vs. inercia pública ecuatoriana, sino que los ciclos estatales previos también siguieron trayectorias divergentes: el largo sendero neoliberal peruano (arranca a inicios de los 90) contrasta con el reciente retorno ecuatoriano (2018) al arco de países pro-mercado luego de una década de neodesarrollismo (2007-2017). A pesar de dichas divergencias, el balance en términos de contagios y pérdidas de vidas lucen similares.

Así, en sociedades organizadas en torno a políticas pro-mercado y con débiles capacidades para regular la economía, redistribuir la riqueza y garantizar derechos, ni siquiera una relativamente poderosa intervención del Estado (Perú) pudo contener los efectos de la pandemia. Décadas de degradación de lo público y de mercados laborales excluyentes e informales no se reparan en el corto plazo por más que se impulse cierto activismo del aparato público para proteger a la ciudadanía. Cuando dicha iniciativa simplemente no aparece (Ecuador), y toma más bien la forma de medidas de confinamiento y estados de excepción para asegurar reformas pro-empresariales que no habían podido ser implementadas previamente, se atisba la pertinencia de hablar de necropolítica. La pérdida de capacidades estatales, provocada por el imperativo de la austeridad, bloquea cualquier huella virtuosa de las intervenciones públicas. El caso de Guayaquil condensa dicho escenario: una ciudad administrada por décadas sin inversión en servicios públicos, con frágil infraestructura de salud, elevadas tasas de informalidad, hacinamiento, falta de agua potable y alta desigualdad (Tomasi, 2020) -en medio de la desidia del gobierno nacional- dejó un escalofriante número de víctimas, de cuerpos confundidos, de cadáveres amontonados en la morgue.

Disculpas públicas del gobierno ecuatoriano por cadáveres desaparecidos



Fuente: El Expreso, 31 de julio 2020

En lo que sigue se traza un contrapunto entre Perú y Ecuador respecto al peso de las trayectorias estatales en los alcances de su intervención frente al virus. Se presta particular atención a la macro-economía de la crisis, la protección social y la política laboral.

ECONOMÍA DE CRISIS

Para inicios de 2020 el estancamiento regional era nítido. Aún así, frente a la magnitud de la crisis sanitaria, diversos países re-conectaron las máquinas keynesianas para dinamizar las economías y proteger ciertos derechos. El anuncio peruano de que inyectaría un plan de estímulo de más de US\$25.000 millones evidenciaba que, incluso en un país de histórica prudencia fiscal, el Estado volvía al primer plano.

La fortaleza del “milagro económico” peruano –tasas de crecimiento promedio de 4,9% durante el siglo XXI- se exhibía de modo robusto. Bajos niveles de endeudamiento, inflación controlada, cuentas fiscales equilibradas y elevadas reservas, permitieron al país lanzar el más ambicioso programa contra-cíclico de la región. Rápidamente, sin embargo, pudieron constatar los límites que tres décadas de políticas pro-mercado colocaban a cualquier estrategia de contención de la pandemia en el corto plazo. Además de los bajos niveles de inversión social (Gráfico 1), el virus sacó a flote las desigualdades regionales en la configuración del sistema de salud⁴ y la imposibilidad de proteger a una población dependiente de los ingresos diarios que le procura la economía informal. Una prolongada trayectoria de debilitamiento (privatización) de las capacidades estatales no puede ser revertida a pesar de los ingentes esfuerzos fiscales para encarar la crisis: el Perú contra sí mismo. Allí se dibuja la trágica paradoja de los más aplicados alumnos de la austeridad: las enormes reservas monetarias pensadas para tiempos difíciles son producto de la misma disciplina fiscal que ha precarizado a tal punto los servicios públicos que ni siquiera un “gran rescate” puede resarcirlos cuando la sociedad lo precisa.

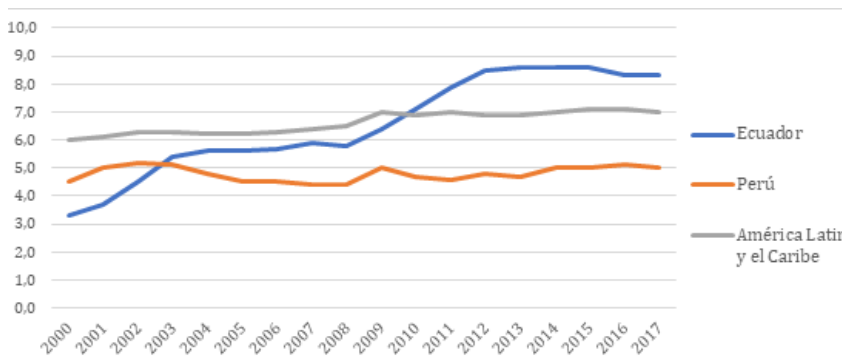
Si Perú anunció el 11,1% del PIB para encarar los efectos del COVID-19, en Ecuador dicha cifra no llegó al 0,5% (Pineda, 2020). El gobierno privilegió la continuidad del programa de ajuste estructural por sobre cualquier esfuerzo fiscal acorde a la magnitud de la crisis. El presidente Moreno firmó, en 2018, un acuerdo con el FMI para acceder a un programa de financiamiento que exige draconianas medidas de austeridad y flexibilización laboral. El objetivo mayor de las élites ha sido desmontar el Estado post-neoliberal configurado durante el correísmo. El desmonte del estado redistributivo solo se interrumpió por la revuelta de Octubre 2019 -contra el retiro de subsidios a los combustibles- reprimida a sangre y fuego por el régimen. Ni la catástrofe sanitaria de Guayaquil alteró, luego, el ajuste. Al contrario, la

4 Ver al respecto <https://ojo-publico.com/1729/coronavirus-en-regiones-la-fragilidad-del-peru-en-tiempos-de-pandemia>

pandemia dio oportunidad política para que la coalición gobernante reactive su iniciativa reformista aprovechando el confinamiento y la desmovilización social. La ortodoxia fiscalista profundizó el desastre sanitario. La escasa contención estatal ha proveniendo, paradójicamente, de las mejoras relativas en el sector salud y del crecimiento de la inversión pública en el ‘ciclo populista’.

La evolución de ambas trayectorias estatales puede ser visualizada a partir del financiamiento de los sistemas sanitarios. Según el Banco Mundial, el gasto en salud como porcentaje del PIB permaneció prácticamente inalterado en Perú entre 2000 y 2017, siempre por debajo de la media regional. En Ecuador la variación es nítida antes y después de 2009. A partir de allí se observa un crecimiento sostenido de dicho gasto, incluso por encima del promedio latinoamericano. En los últimos tres años, por el contrario, dicho gasto ha decrecido de modo sistemático: entre 2017 y 2018 el recorte fue de 34% y para 2019 de 36%. Aún más, Báez (2020) encuentra que durante los meses más acuciantes de la pandemia (abril-junio) se redujo el gasto en comparación al monto devengado en los mismos meses de 2019. En esos meses, el gobierno efectuó un oneroso pre-pago a los tenedores de deuda externa.

GASTO CORRIENTE EN SALUD COMO PORCENTAJE DEL PIB



Fuente: Banco Mundial (2020)

Más allá de sus configuraciones estatales, los países debieron tomar decisiones determinantes en medio del apremio de sus sistemas de salud. Una cuestión crucial fue la disponibilidad de camas y de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). Antes de la pandemia Perú y Ecuador tenían prácticamente el mismo número de UCI disponibles

(Tabla 3). Para inicios de julio, el gobierno peruano consiguió cuadruplicar el número de dichas camas por cien mil habitantes (de 09,9 a 4,1 / 100.000 habitantes), siendo uno de los impulsos más relevantes de la región. En Ecuador el esfuerzo fue mucho menos consistente: ni siquiera pudo duplicar el número de camas disponibles. El contrapunto entre los dos países andinos y dos casos (Argentina y Chile) del Cono Sur revela, en cualquier caso, la enorme fragilidad histórica de los sistemas de salud en los Andes.

NÚMERO DE CAMAS UCI ANTES Y DURANTE LA PANDEMIA

País	Camas UCI antes de la pandemia	Camas UCI al 26 de junio 2020	Camas UCI por 100.000 habitantes antes de la pandemia	Camas UCI por 100.000 habitantes al 26 de junio 2020
Ecuador	259	480	1,5	2,7
Parú	276	1.331	0,9	4,1
Argentina	8.444	15.500	19	25,8
Chile	1.229	1.865	7	10,6

Fuente: Delfino (2020) - PROGRAMA LUPA (con cifras oficiales).
Elaboración: Propia

PROTECCIÓN SOCIAL Y PRECARIZACIÓN LABORAL

Más o menos conscientes de que las medidas de cuarentena obligatoria tendrían un impacto negativo en la economía, ambos gobiernos impulsaron políticas con el fin de brindar algún tipo de contención socio-económica a la ciudadanía. Además de tratar de fortalecer el sistema de salud, los recursos públicos destinados para hacer frente a la crisis han procurado, sobre todo, proteger el ingreso de los hogares y mantener liquidez en las empresas para no afectar la cadena de pagos.

La primera medida aprobada por el presidente Martín Vizcarra fue la entrega del bono “Yo me quedo en casa”, que otorga USD

108,57⁵ a las familias más vulnerables. Un mes después del anuncio, el bono había llegado a 81,5% de las familias beneficiarias. Dadas las sucesivas prórrogas del estado de emergencia, este subsidio fue extendido, otorgándose un complemento por la misma cantidad, es decir, duplicando el monto inicial. En procura de asegurar la eficiencia del gasto -aún en tiempos de pandemia- el gobierno peruano decidió focalizarlo y crear tres bonos adicionales (“Universal”, “Rural” y “Trabajador Independiente”), cada uno por USD 217,14, lo que dificultó la identificación de beneficiarios por limitaciones en las bases de datos. De acuerdo con cifras oficiales, el total de hogares beneficiados por tales compensaciones es de 6,8 millones -75% del total de familias peruanas. En un país con 72% de empleo informal (Defensoría del Pueblo, 2020), escaso nivel de ahorro -para 2019 solo 12,1% de peruanxs tiene capacidad de ahorro- y bancarización de apenas 43% (World Bank Group, 2017), la demora en la entrega de los bonos aportó al alto número de contagios (Pighi Bel, 2020).

Ecuador, mientras tanto, prohibió suspender los servicios básicos y los desahucios por falta de pago y otorgó durante dos meses el “Bono de Protección Familiar por la Emergencia Sanitaria”. Con una meta de 950 mil familias, se trata de una transferencia de USD 120 a quienes perciban menos de USD 400/mes y no reciban ningún otro tipo de beneficio del Estado. No existe información consolidada del efectivo número de beneficiarios contenidos por tal medida. La ausencia de datos oficiales y su manejo discrecional es un rasgo central del manejo gubernamental de la crisis. En cualquier caso, con informalidad de 60%, la magra ayuda estatal apenas contuvo la necesidad de la población por reocupar plazas y calles para acceder al sustento diario. La imposibilidad de guardar cuarentena coloca en una situación de doble vulnerabilidad, económica y de salud, a millones de personas. La expansión del virus en Guayaquil, más temprana y acelerada que en la capital (Quito), está asociada, como en Lima, con la centralidad de la informalidad en la economía de los sectores populares (Lucero, 2020).

Si las transferencias monetarias procuraron aliviar la presión económica de los hogares mientras la cuarentena estricta se mantenía, diversas reformas salariales y laborales fueron a contramano de tales esfuerzos. La pandemia fue, en efecto, la ocasión para acelerar la precarización laboral. En Ecuador, la Asamblea Nacional aprobó la denominada Ley Humanitaria que flexibiliza largamente las condicio-

5 El tipo de cambio Dólar-Sol es de 3,5.

nes de contratación, de salarios y la negociación de conflictos. Dicha normativa permite al empleador suscribir un nuevo tipo de contratos, denominados “especiales emergentes”, que no es más que un eufemismo para referirse a la flexibilización de las modalidades contractuales vigentes en términos de despidos, horas remuneradas, horas extras, vacaciones y controversias, siempre, a favor del patrono. Así, la emergencia sanitaria fue utilizada por el gobierno para, bajo el discurso de “cuidar el empleo”, asentar los procesos de flexibilización ya en curso. La emergencia permitió una aprobación exprés de la normativa en el marco de los poderes del ejecutivo para legislar. Aún así, la conquista de los votos en la Asamblea prosperó, entre otros mecanismos, gracias al reparto de cuotas de poder institucional, entre ellas hospitales, a las redes políticas de los y las legisladores. Los escándalos de corrupción -el estado de emergencia permite agilizar la contratación pública y relajar controles- desatados en medio de la pandemia han dejado detenidos a varios asambleístas y políticos afines al gobierno (España, 2020).

En Perú, mediante Decreto de Urgencia, el gobierno aprobó la “Suspensión Perfecta de Labores” (SPL) que permite a la empresa cesar a los trabajadores mientras dure el estado de emergencia, sin que estos tengan derecho a remuneración. Asimismo, el Ministerio de Salud modificó los factores que deben presentar los trabajadores para ser considerados grupos de riesgo: tercera edad, enfermedades cardiovasculares y enfermedades renales, aprobado mediante Resolución Ministerial⁶. La presión de los grupos económicos determinó, así, que el gobierno incluyera nuevamente este mecanismo, dejando a la clase trabajadora en situación de dependencia de los subsidios o forzándola a recurrir a la informalidad para su subsistencia. El peso de dicha dinámica laboral ha sido determinante para la aceleración de los contagios. A fin de contrabalancear tales medidas, y de evitar el cierre de las pequeñas y medianas empresas, el gobierno lanzó un programa que financia 35% de los salarios de los trabajadores que ganen hasta USD 428,57. Vistas las previsiones socio-económicas, que presagian severos aumentos de pobreza y desigualdad, los esfuerzos para minimizar el impacto de la crisis en los trabajadores lucen insuficientes.

CUIDAR EL MERCADO

En relación con el apoyo a empresas del sector privado, en Perú se crearon dos programas: “FAE-Mype” y “Reactiva Perú”, ambos con-

⁶ Resolución Ministerial N° 038-2020-MINSA, del 13-05-2020.

sistentes en fondos de garantías para préstamos destinados al pago de trabajadores y deuda con proveedores. En el caso de “FAE-Mype”, el fondo es de USD 228,57 millones, con garantías de entre 90% y 98%. De acuerdo con el Banco de Desarrollo del Perú (COFIDE), entidad responsable del programa, al 3 de julio se habían otorgado créditos por USD 502,14 millones (44%) a 157 mil beneficiarios. En cuanto al programa “Reactiva Perú”, el monto disponible es de 17,1 mil millones, con garantías entre 80% y 98%. La información oficial señala que se han otorgado garantías por USD 8,1 mil millones (48%) a 114.850 beneficiarios. Las tasas dependen de la subasta realizada siendo, en todos los casos, menores a 4.5%. El programa “Reactiva Perú” ha sido cuestionado pues el 71% de los créditos otorgados tendrían como principales destinatarios a los grandes grupos de poder económico⁷. Además, empresas investigadas por corrupción estaban accediendo a las ayudas⁸. Las condiciones del programa han sido modificadas para corregir este tipo de situaciones. En cualquier caso, en medio de la pandemia se ratificó la histórica capacidad de la élite peruana para “capturar agenda pública” (Durand, 2016).

Ecuador puso en marcha el programa “Reactívale Ecuador”. Consiste en otorgar, a través del Banco del Pacífico (banca pública), créditos a pequeñas y medianas empresas, por montos que van desde los USD 500 hasta los USD 500.000, a tasas fijas de 5%. El crédito otorgado está garantizado en un 80% por el Fondo Nacional de Garantías. El Ministerio de Finanzas ha informado que se han otorgado créditos a 1049 empresas, por un monto de USD 48,9 millones, lo que representa 9,8% del monto disponible para el programa (USD 500 millones). Dentro del mismo rubro, pero a través de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, se otorgan créditos desde USD 20.000 hasta USD 200 mil al sector de la economía popular y solidaria. Una regulación distintiva del programa “Reactívale Ecuador” es que las empresas que solicitan crédito están obligadas a “mantener al menos el mismo número de trabajadores contratados a la fecha de solicitud”. En Perú, por el contrario, algunas empresas que se acogieron a despidos y suspensión de labores (SPL), accedieron de todos modos al programa crediticio.

El cierre de la economía peruana produjo una caída del PIB, en abril, cercana al 40,5%. Por ello, ya para mayo, se inició el Plan de

7 Ver: <https://ojo-publico.com/1901/reactiva-peru-bancos-beneficiaron-grandes-companias>

8 Ver: <https://ojo-publico.com/1900/bancos-prestaron-empresas-vinculadas-la-va-jato-y-panama-papers>

Reanudación de Actividades que, en su primera etapa, comprendía a los sectores exportadores e intensivos en mano de obra como minería, industria, construcción y turismo. La cuarentena fue levantada el 1 de julio a nivel nacional, aunque se mantenía en siete regiones. En Ecuador, el desconfinamiento se inició en junio. Las presiones de las cámaras empresariales apresuraron la reapertura a pesar de la opacidad de las cifras oficiales y de que los contagios nunca se detuvieron. Si el confinamiento fue un dictado de los gobiernos nacionales, para el des-escalamiento se apeló a una confusa gobernanza con los gobiernos locales. Se responsabilizó a éstos para que decidan si “sus” territorios se mantienen en color rojo (medidas restrictivas fuertes), amarillo (semi-apertura) o verde, aunque el COE nacional tiene, la última palabra en los criterios de cada color.

La temprana reactivación de las economías, en todo caso, no arroja buenas señales para las perspectivas de crecimiento y bienestar de ambos países. El Banco Mundial (2020) prevé, para Perú, una contracción del crecimiento de 12%, mientras que la CEPAL (2020: 11-12) estima un aumento de la pobreza de 9,3 p.p. y de la indigencia de 3,9 p.p. Por su parte, para Ecuador, las estimaciones son de 7,4%, 7 p.p. y 5,1 p.p., respectivamente. A la luz de tales perspectivas, la política económica andina en tiempos de COVID-19 aparece como altamente insuficiente para mitigar los efectos más devastadores de la pandemia en términos de salud, protección social y dinamismo económico. No así en relación con el incremento del poder del gran empresariado sobre el mundo del trabajo.

CIERRE

La activación estatal en medio de la crisis provocada por el nuevo coronavirus no alcanzó a operar como incentivo suficiente para asegurar el auto-cuidado (permanecer en casa) y evitar el temprano desborde de las instituciones de salud pública largamente penalizadas por décadas de ortodoxia fiscal (Perú) y por la severidad del reciente ajuste estructural (Ecuador). Las trayectorias de acción estatal limitan la efectividad de las opciones públicas de los gobiernos en la coyuntura. En el marco de la hegemonía neoliberal, dos cuestiones son claves al respecto: la fragilidad de las capacidades estatales para garantizar derechos y la centralidad de la economía informal como mecanismo para reducir costos laborales y ganar en competitividad nacional. Ambos problemas operaron a contramano del compromiso de los estados con la protección de la vida de sus poblaciones.

La elite gobernante peruana pareció, en la coyuntura examinada,

más dispuesta a honrar dicho compromiso que su par ecuatoriana. El Presidente Vizcarra y su gabinete activaron cursos de acción pública imprevistos por la senda ortodoxa del país (estímulo fiscal y políticas contra-cíclicas) y con cierta disposición tecnocrática más o menos cercana a las recomendaciones de la OMS (Delgado, 2020). Décadas de escueta inversión pública en el sector social, de infraestructura pública precaria (en particular en las regiones y territorios periféricos) y de mercados laborales informalizados han vuelto globalmente inútiles, no obstante, los tímidos esfuerzos gubernativos. Éstos últimos, en efecto, jamás se apartaron del canon de políticas regionales (transferencias monetarias y poco más) y no contemplaron medidas redistributivas agresivas como tributos a las grandes fortunas o el ingreso básico universal. En Ecuador, aún peor, el gobierno penalizó directamente a las grandes mayorías al profundizar los recortes al gasto público, la precarización laboral y el servicio a la deuda en plena pandemia. El *lobby* empresarial forzó al gobierno a optar por la actividad del mercado contra la salud de las mayorías. Así, Moreno hizo de la crisis la ocasión para retomar iniciativa legislativa y aprobar normas rechazadas meses antes por la población. A mediados de 2020 se liberalizaron los precios de los combustibles.

La “doctrina del shock” (Naomi Klein) es definida como la utilización política de las crisis a fin de impulsar, a gran escala, medidas que profundizan la desigualdad, enriquecen a las elites y debilitan al resto. Ecuador, en la coyuntura COVID-19, ha operado como laboratorio trágico de dicha doctrina mientras se experimenta con los umbrales de padecimiento social y los modos en que dicho sufrimiento se estabiliza en respuestas individualizadas a la crisis. El hundimiento del Estado social ha sido regularmente entendido, en el neoliberalismo, como mecanismo de despolitización y des-colectivización de la vida social.

BIBLIOGRAFÍA

Báez, Jonhatan (2020). “La inversión en salud se redujo un 36% en 2019”, en Ecuador Today, Acceso el 31 de julio 2020. Disponible en: <https://ecuador-today.media/2020/03/31/la-inversion-en-salud-se-redujo-un-36-en-2019/>

Bárcena, Alicia (Ed.). (2017). *El regreso de la crisis en América Latina: Algunas experiencias nacionales*. México: Fondo de Cultura Económica.

CEPAL 2019. *Panorama Social de América Latina 2019*. Santiago de Chile: CEPAL.

(2020). *Informe Especial COVID-19 No 1*. Santiago de Chile: CEPAL. https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45337/6/S2000264_es.pdf

Delfino, Emilia (2020). “Argentina lidera un ranking de camas críticas pero sigue la amenaza del colapso”. Acceso 13 de julio 2020. <https://www.perfil.com/noticias/actualidad/argentina-lidera-un-ranking-de-camas-criticas-pero-sigue-la-amenaza-de-colapso.phtml>

Delgado, Déborah (2020). *La COVID-19 en el Perú: una pequeña tecnocracia enfrentándose a las consecuencias de la desigualdad*, en *Análisis Carolina*, 26, Madrid: Fundación Carolina.

Defensoría del Pueblo de Perú (2020). “Estado de Emergencia Sanitaria: El problema de la informalidad laboral en una economía confinada”. Acceso 27 de julio 2020. Disponible en: <https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2020/04/Serie-de-Informes-Especiales-N%C2%B0-02-2020-DP-Problema-de-la-informalidad-laboral-en-una-economia-confinada.pdf>

Durand, Francisco (2016). *Cuando el poder extractivo captura el Estado: lobbies, puertas giratorias y paquetazo ambiental en Perú*. Lima: Oxfam-Perú.

España, Sara (2020). “Una oleada de casos de corrupción golpea al Ecuador en medio de la pandemia”, en *El País* (4-06-2020). <https://elpais.com/sociedad/2020-06-05/una-oleada-de-casos-de-corrupcion-golpea-ecuador-en-medio-de-la-pandemia.html>

Lucero, Karen (2020). “El subempleo explica por qué al guayaquileño le cuesta más la cuarentena”, en *Gestión Digital* (22-03-2020), Acceso 31 julio 2020. <https://www.revistagestion.ec/economia-y-finanzas-analisis/el-subempleo-explica-por-que-al-guayaquileno-le-cuesta-mas-la>

Ministerio de Salud de Perú (2018). “Repositorio único de información en salud”. Acceso 12 de julio. https://www.minsa.gob.pe/reunis/recursos_salud/index_camas_hospitalarias.asp (2020).

“Sala situacional”. Acceso el 10 de julio. https://covid19.minsa.gob.pe/sala_situacional.asp

Observatorio Global de Salud (2020). *Indicadores por país*. Acceso el 10 de julio. <https://apps.who.int/gho/data/node.imr>

Pighi Bel, Pierina (2020). “Cuarentena en Perú: 5 factores que explican por qué las medidas de confinamiento no impiden que sea el segundo país de América Latina con más casos de COVID-19”. *BBC News Mundo*, 22 de mayo. Acceso el 11 de julio. <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-52748764>

Pineda, Emilio (2020). “Política y gestión fiscal durante la pandemia y la post-pandemia en América Latina y el Caribe”, *Blog Recaudando Bienestar de la División de Gestión Fiscal del BID*, <https://blogs.iadb.org/gestion-fiscal/es/politica-y-gestion-fiscal-durante-la-pandemia-y-la-post-pandemia-en-america-latina-y-el-caribe/>

Tomasi, Arduino (2020). “¿Guayas indisciplinado?”, en <https://www.arduinotomasi.com/post/guayaquil-indisciplinado>, Acceso 5 de junio 2020.

World Bank Group, 2017. “The Global Findex Database 2017”, Acceso el 23 de julio 2020, <https://globalfindex.worldbank.org/>.

World Bank Group (2020). *Global Economic Prospect (June 2020). Flagship Report*, Washington: The World Bank.

COLECCIÓN GRUPOS DE TRABAJO

Con claroscuros y matices diferenciados, América Latina sigue siendo un espacio abigarrado de experiencias y posibilidades en disputa, en el que no parece haber lugar para la rendición. Lo que vendrá tras esta crisis sanitaria, económica y social será el resultado, seguramente, de las contradicciones que se despliegan cada día, en cada lucha, en cada rebeldía, en cada decisión de resistir, en cada voluntad de avanzar y no dejarse vencer en un mundo en el que el destino anti-capitalista parece, cada vez más, el único posible y necesario de construir.

Del prólogo de Mabel Thwaites Rey

MUCHOSMUNDOS
ediciones

